

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES



**DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**



América Latina en la era neoliberal:

Trabajo, Demandas Sociales y Luchas Políticas

T E S I S

Que para Obtener el Grado de:

Doctor en Estudios Latinoamericanos

P r e s e n t a

JOSÉ MIGUEL CANDIA

DIRECTORA: DRA. ANA HELENA TREVIÑO

Ciudad Universitaria, México, D.F. 2006





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

Reconocimientos	2
Introducción	4
Capítulo I	
-Trabajo: crisis del empleo y nuevas formas de inserción productiva	19
-Notas	39
Capítulo II	
-Crisis del Trabajo ¿derrota obrera o revolución tecnológica?	43
-Notas	61
Capítulo III	
-Nuevos Movimientos Sociales: Núcleos antisistémicos o formas encubiertas de integración social	63
-Ecos de un debate inconcluso. Las coordenadas de un nuevo paradigma	79
-Notas	83

Capítulo IV

-Argentina Desamparada: debacle económica, insurgencia social y crisis de representación política	95
-De la industrialización protegida a la apertura económica: cambio estructural y protesta social	102
-Fin de época: el movimiento obrero bajo el gobierno de Menem	105
-¿Desocupados? ¿Lumpenes? ¿Marginales? La emergencia del movimiento piquetero	115
-Los Pasos Previos: Fogoneros, puebladas y piquetes. Cutral-Có, Plaza Huinca y General Mosconi	122
-Junio de 1996 y abril de 1997: puebladas y piquetes en Cutral- Có y Plaza Huinca	134
-General Mosconi y Tartagal. Crisis regional y nuevas experiencias de lucha popular en el norte salteño	140
-Trabajadores desocupados y movimientos vecinales: la protesta social en el Gran Buenos Aires	150
-La profundización de la crisis social y económica: debates y fracturas en el interior del movimiento piquetero	163
-Las Asambleas Piqueteras: consensos y fracturas en el movimiento de los desocupados	168
-Democracia y protesta social: de la fábrica a las calles	186
-Notas	193

Capítulo V

-De Vuelta al Trabajo: el Movimiento de Empresas Recuperadas	222
-Zanón: de empresa modelo al vaciamiento patronal	229
-El caso Sasetru: iniciativa obrera y apoyo vecinal	232
-La experiencia de Brukman Confecciones: la hora de las mujeres piqueteras	245
-Organización Autogestiva o Control Obrero de la Producción: El debate en el movimiento de empresas recuperadas	261
-Notas	266

Capítulo VI

-Vivir en el Límite. El Movimiento Piquetero entre la resistencia social y la recomposición del mundo del trabajo	274
-El Movimiento Piquetero en la encrucijada: del auge de las protestas callejeras a las nuevas formas de interlocución con el Estado	278
-El Movimiento Piquetero y el gobierno de Kirchner: entre la negociación y la cooptación política	283
-La disyuntiva política de los movimientos de trabajadores desocupados	285
-Notas	301

Anexo I	310
Anexo II	311
Anexo III	314
Bibliografía	319

Reconocimientos

El trabajo intelectual es, en toda circunstancia, una labor colectiva. Existe siempre una cierta corresponsabilidad, aún en aquellos casos en los cuales la titularidad del texto y la paternidad de la tarea, es asumida íntegramente por una sola persona. Con frecuencia, aparecen detonantes de la realidad social que explican la curiosidad que se despierta en el observador por el estudio de determinados acontecimientos o procesos políticos y sociales. Pero lo que sigue a ese primer acto de identificación, es un intercambio permanente y fecundo de ideas, argumentos y refutaciones, hipótesis y sustentaciones que se modifican a medida en que se profundiza el tratamiento de cada tema o el vértigo de la realidad cotidiana, ofrece elementos novedosos que confirman o desmienten algunos presupuestos teóricos e ideas preconcebidas.

Para la elaboración de esta tesis se consideraron buena parte de los argumentos que se expusieron y analizaron en el Seminario del Doctorado en Estudios Latinoamericanos que coordinó el Dr. Eduardo Ruíz Contardo. El marco institucional que ofreció el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hizo posible que lo que fue presentado como un documento preliminar – en el cual se sugerían algunas líneas generales de investigación – se transformara con el tiempo y el permanente aporte de los compañeros del Seminario, en un guión articulado para llevar a cabo el trabajo de tesis que ahora se concluye.

Fue en ese espacio de estudio y reflexión donde nacieron ideas sustantivas que permitieron orientar las hipótesis centrales del trabajo propuesto. Otros amigos, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, facilitaron el acceso a hemerotecas, archivos personales y fichas bibliográficas específicas sobre el movimiento de trabajadores desocupados y acerca

del proceso que llevó a la recuperación de numerosas empresas cerradas por sus dueños o en situación de quiebra. Por medio de gestiones, facilitadas por estos mismos profesores, se logró entrevistar a representantes de organizaciones piqueteras y visitar las instalaciones de algunas empresas que operan bajo la administración de sus propios trabajadores.

La doctora Ana Helena Treviño, Tutora de esta tesis, asumió la fatigosa tarea de revisar borrador por borrador, ponderar argumentos y afirmaciones, desechar interpretaciones secundarias, poner énfasis en los razonamientos duros del estudio y sugerir autores y lecturas imprescindibles para el desarrollo y sustentación de la tesis. Supo, además, persuadirme en la continuación de una tarea que corría el riesgo de perderse entre archivos y papeles viejos o quedar en el olvido, cuando algunos acontecimientos políticos coyunturales, o la lectura inoportuna de una novela, me alejaban de las labores de reflexión y análisis que requiere un estudio de esta naturaleza.

A todos mi agradecimiento y, para su tranquilidad, reitero la responsabilidad absoluta que asumo con respecto a lo que se dice – o se deja de decir – así como de cada una de las afirmaciones y juicios teóricos o políticos que se expresan a lo largo de cada uno de los capítulos, notas y anexos que integran este trabajo.

México, D.F., septiembre de 2006

Introducción

“¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado, en los días de mayo, traicionan la utopía? ¿Escribo de causas o escribo de efectos? ¿Escribo de efectos y no describo las causas? ¿Escribo de causas y no describo los efectos?
Escribo la historia de una carencia, no la carencia de una historia”.

Andrés Rivera
La Revolución es un Sueño Eterno

“Todo lo que se creía muerto estaba vivo: han regresado las tribus con sus ídolos, los nacionalismos y las religiones, a llenar los grandes vacíos dejados por las ideologías en pugna durante la guerra fría.
Pero aunque una de ellas, el comunismo, celebra resignada sus propias exequias, la otra, el capitalismo, conmemora su triunfo y se propone así misma como solución universal, identificada con la razón misma del desarrollo económico global y, aún, con la inevitable dimensión política de la democracia”.

Carlos Fuentes
La Situación Mundial y la Democracia:
Los Problemas del Nuevo Orden Mundial

Algunas de las preguntas y afirmaciones que aparecen en los dos epígrafes con los que se da inicio a este trabajo sintetizan, de manera dramática, los ejes temáticos en torno a los cuales procuran encontrar algún asidero la política y la teoría social contemporánea. Como si una voluntad ajena a la racionalidad de los hombres hubiese armado un laberinto endemoniado de desajustes institucionales, retos políticos y demandas sociales los países latinoamericanos han tenido que afrontar, en poco más de veinte años, la derrota de los proyectos populares de los setentas, la inclemencia social que supuso la implantación de políticas económicas de ajuste, el desmantelamiento de ciertos dispositivos estatales que habían servido de protección a

los grupos más vulnerables de la sociedad y el deslizamiento – ideológico y político – de antiguas fuerzas nacionalistas populares hacia posiciones afines al modelo de reestructuración capitalista. Al mismo tiempo se debilitaron antiguos anclajes sociales, se desdibujó la presencia movilizadora de viejos actores políticos y emergieron nuevos protagonistas – hasta ayer subestimados o apenas reconocidos a la hora de los escrutinios electorales – que ocuparon la escena pública y llenaron, con sus demandas, los espacios que las anteriores formas de representación política y social fueron resignando ante el empuje de las nuevas estrategias de desarrollo económico. Al mismo tiempo, el repliegue de las instituciones públicas de ciertos espacios que parecían ámbitos naturales de la acción estatal y cuyo propósito era dar cobijo a aquellos segmentos de la sociedad que no accedían a los sistemas de protección social por tener una débil inserción en las actividades productivas del sector moderno de la economía, contribuyó a debilitar, aún más, las formas tradicionales de organización política y gremial. Partidos, sindicatos y cámaras corporativas habían sido los canales a través de los cuales expresaban y negociaban sus demandas, los trabajadores urbanos, los jornaleros y pequeños productores del campo, los empresarios vinculados al mercado interno y vastas capas de sectores medios incorporados a las actividades comerciales y de servicios.

El contexto internacional potenció algunas de las tendencias que se mencionan y agudizó la crisis de representatividad de las organizaciones sociales. La constitución de fuertes espacios económicos regionales, la velocidad de las innovaciones tecnológicas incorporadas a la producción, la vulnerabilidad de los mercados financieros, así como la relocalización de las plantas filiales de las corporaciones transnacionales, modificaron la geografía productiva de amplias regiones del continente. La difusión de esquemas flexibles de organización de la mano de obra, fue otro de los factores condicionantes, que terminaron por derrumbar los postulados programáticos y las

medidas instrumentales que dieron sustento a las tres décadas de crecimiento que vivió la región a partir de la segunda postguerra.

Si en pocos años el eje del debate político se trasladó de la “matriz teórica revolucionaria” al espacio de la reflexión “democrática – institucional” no fue por un súbito cambio de las preocupaciones académico-intelectuales, sino por el desborde de una realidad social que parecía no encajar en los marcos conceptuales a partir de los cuales se había pensado y definido tanto el carácter de las sociedades latinoamericanas como la naturaleza de sus contradicciones y luchas políticas.

Después del desconcierto - y del balbuceo inicial con el cual se ensayaron algunas respuestas preliminares - fueron tomando cuerpo, desde mediados de los setentas, un conjunto particularmente relevante, de formulaciones teóricas desde las cuales se procuró dar cuenta del acontecer que gobernantes, observadores y estudiosos veían pasar a su lado. Ya a mediados de los sesentas el desarrollo tecnológico y los acuerdos de las superpotencias para limitar la producción de armamento nuclear fue entendido como la señal que marcaba el fin de las ideologías. La traducción nacional de este enfoque era poco menos que el fin de los antagonismos de clase y la caducidad de las propuestas revolucionarias. Años después, la debacle de los llamados “socialismos reales”, fortaleció esta línea de razonamiento y reflató antiguas teorías funcionalistas sobre la temática de la gobernabilidad y acerca del papel regulador que deben jugar las instituciones en la vida social. Ambas visiones, con una raíz teórica similar, coincidieron en afirmar que había concluido un ciclo histórico, inaugurado por la revolución soviética de 1917 y cuyo motor estuvo instalado en la profundización de los conflictos de clase y en las propuestas destinadas a impulsar la transformación revolucionaria de la sociedad.

La desintegración de la Unión Soviética y el colapso de las economías centralmente planificadas alentaron la formulación de especulaciones teóricas más audaces. Poco después de la caída del muro de Berlín, un ideólogo norteamericano de origen japonés, sorprendió al mundo académico al proclamar “el fin de la historia” y el triunfo definitivo de las economías capitalistas y de la democracia parlamentaria. Aunque los soportes teóricos sobre los cuales procura fundamentarse esta corriente son más débiles que aquellos enfoques que centran su análisis en la operación de las instituciones y en la construcción de consensos sociales destinados a ahuyentar las fracturas revolucionarias, el concepto de “fin de la historia” alcanzó una gran popularidad como visión testimonial de esta época más que como un referente teórico para el análisis. Habría que añadir, además, que expresa un estado de ánimo en el cual se refleja el desconcierto que aún priva en amplias franjas del pensamiento social y en las corrientes críticas de la sociología.

Con una perspectiva *finalista* relativamente similar – aunque con pretensiones menos proféticas – otras corrientes de las ciencias sociales señalan que el verdadero cambio de época está marcado por la inexorable desaparición del trabajo humano. Esta concepción, con fuerte presencia en la sociología laboral europea, sostiene que partidos políticos, organizaciones sociales y dependencias públicas deben centrar su esfuerzo en generar las condiciones que permitan superar la “sociedad del trabajo” y no insistir en la pretensión inútil de volver realidad demandas y consignas que corresponden a una etapa del desarrollo industrial que ya fue superada. Reiterar los programas sindicales que hasta hace pocos años exigían el pleno empleo y oportunidades igualitarias de trabajo para todos, es como volver atrás el reloj de la historia. La humanidad estaría en presencia de una verdadera “transformación civilizatoria” frente a la cual han caducado las certezas con las cuales las sociedades

habían respondido a los desafíos del presente y formulado los elementos que les permitían construir su futuro.

Las nuevas escuelas del pensamiento social que se han mencionado constituyen un abanico de enfoques interpretativos que no tienen ni la misma consistencia teórica ni el mismo rigor metodológico. En todas ellas se descubre un marcado pero insuficiente afán explicativo, acerca de una realidad que no respetó los cauces que parecían responder a un derrotero histórico prefijado. En este error cayó cierta filosofía de la historia que había previsto como ineludible el paso por diversas etapas del desarrollo social hasta alcanzar el reino de la libertad y la instauración de la sociedad comunista. De manera parecida se equivocaron quienes suscribieron la idea del derrumbe que durante décadas alimentó la lectura economicista del marxismo. La primera guerra mundial, la crisis de 1929, el ascenso del fascismo y la segunda guerra fueron interpretados como los estertores finales del ciclo de acumulación y crecimiento capitalista. En vano se esperó que las contradicciones interimperialistas agotaran la misión histórica de la sociedad burguesa y abrieran paso a la implantación de un mundo socialista.

En la mayoría de las concepciones e intentos de interpretación que han sido referidos en párrafos anteriores y en otros enfoques que retomando formulaciones de antigua data procuran también identificar el hilo conductor de las “sociedades globalizadas”, subyace una visión “uni-causal” del acontecer histórico. En algunos casos la revolución científico-tecnológica es la piedra de toque que abre las puertas a la comprensión de las mutaciones y problemas que hoy nos agobian. Para otros autores es la crisis del Estado-Nación y el debilitamiento de los proyectos de desarrollo fundados en recursos propios lo que marca, realmente, el verdadero punto de ruptura entre las ilusiones de crecimiento y prosperidad que gobernantes e intelectuales alentaron hasta hace

algunos años y la búsqueda, casi desesperada, con la que ahora cada país procura encontrar un espacio en el mercado mundial.

Otros enfoques han optado por una visión de carácter más ideológica. En estos casos se pone el acento en el agotamiento de las “teorías totalizadoras” de los procesos históricos y, al mismo tiempo, se insiste en la incapacidad de los “macro-discursos” para dar cuenta de la enorme diversidad de conflictos y “micro-universos” que conforman las sociedades de este inicio de un nuevo milenio. Estas vertientes de las ciencias sociales apuntan – a veces sin explicitarlo – a refutar la visión marxista del devenir de las sociedades humanas y, en particular, procuran advertir acerca de los riesgos de pretender fundar un marco conceptual que ambicione alcanzar la solidez teórica suficiente para hacer inteligible el acontecer económico, los conflictos de la vida social, el funcionamiento de las instituciones, los fenómenos culturales y la naturaleza y el desarrollo de las luchas políticas.

Es posible identificar una galería, más o menos amplia, de presupuestos que se nos ofrecen como núcleos articuladores de los nuevos discursos. Entre otros principios rectores pueden referirse, según los autores que se consulten, los siguientes postulados: el derrumbe definitivo de las ideologías; la crisis de la organización científica del trabajo basada en los principios ford-tayloristas; la revolución tecnológica que cambia no sólo las estrategias empresariales sino también la vida cotidiana de los hombres; el debilitamiento y crisis de representatividad de las organizaciones sociales tradicionales junto a la inviabilidad histórica de las grandes utopías revolucionarias. Estos son algunos de los argumentos que, entre otras afirmaciones, se repiten hasta el cansancio en la literatura social de nuestros días. Todas ellas se inscriben en una concepción que las abarca y que, al mismo tiempo, les da sentido: el referente teórico común es admitir que estamos en presencia del fin del ciclo histórico que, con cierto

convencionalismo, fue identificado como *modernidad*. De esta forma, se estaría viviendo la clausura de una etapa de la historia definida por un conjunto de rasgos sobresalientes como la existencia de una racionalidad rectora que surgió de la tradición filosófica occidental y que, por su carácter universal, se entendió válida para explicar el desarrollo de las sociedades humanas, por diversas y desiguales que fueran sus condiciones materiales o sus perspectivas culturales; una idea genérica de progreso estrechamente asociada a la implantación de la industria manufacturera y a la constitución de dos sectores sociales urbanos fundamentales: empresarios capitalistas y trabajadores asalariados; la ciencia, entendida como uno de los puntales fundamentales de la sociedad moderna, estaba dominada, al menos en los enunciados, por una lógica de avance lineal que aseguraba, al mismo tiempo, el desarrollo de las fuerzas productivas y el bienestar material de la población.

El ingreso a la modernidad suponía, también, la promulgación de un marco jurídico que normara los diversos ámbitos de la actividad humana – el público y el privado; el económico y el político – así como la constitución de un dispositivo institucional frente al cual los actores sociales podían – de acuerdo a reglas preestablecidas – plantear y dirimir sus diferencias o pugnar por la instrumentación de determinadas políticas de interés general. Las organizaciones patronales de carácter gremial, los sindicatos obreros y los partidos políticos fueron conformándose como las instancias “naturales” de expresión de los principales sujetos sociales. El encuadre jurídico-normativo, expresamente sancionado para regular el funcionamiento de estos agrupamientos, además de asignarles legitimidad, les otorgaba el monopolio de la representación social ante el Estado y frente al resto de los grupos y sectores de la población. De alguna manera, las condiciones económicas y culturales que marcaron el surgimiento y desarrollo de la modernidad representaron el fin de la *tribu* y la *ilegitimidad* de las demandas que transitaran por canales no reconocidos por autoridades y gobernantes.

Se fortaleció la capacidad del Estado moderno como instancia expresamente facultada para castigar la anomia individual – la promulgación del código penal institucionalizó la represión policial y la cárcel – y reprimir la rebelión social cuando las movilizaciones colectivas pretendían resolver sus reclamos por cauces no contemplados en el contexto jurídico.

América Latina debió afrontar la crisis del pensamiento social y de las estrategias de crecimiento basadas en la expansión del mercado interno sin haber concluido plenamente el proceso de *modernidad de sus propias sociedades*. El debate que envuelve a los “grandes relatos” y pone en duda la validez de los mismos, así como la impugnación de las estrategias de desarrollo de inspiración estatista que subestiman el papel del mercado llegó, casi al mismo tiempo, en que buena parte del continente peleaba por la instauración de regímenes democráticos, por el respeto a los derechos humanos, por el apoyo material a los grupos sociales más pobres y por el pleno reconocimiento de los derechos de las minorías.

En pocos años las sociedades latinoamericanas debieron afrontar las secuelas de los programas económicos de ajuste y de reforma del Estado y la modernización autoritaria de la planta productiva junto al aluvión de transformaciones que en el campo de la cultura, generaron la descomunal expansión de los medios electrónicos de comunicación, así como los paradigmas de las nuevas corrientes de la sociología y la ciencia política. Aunque el debate teórico tuvo una inspiración principalmente externa - que en gran medida se potenció por el derrumbe del bloque soviético – no tardó demasiado en instalarse en el centro de la discusión que se vivía en las escuelas latinoamericanas de ciencias sociales. Ejes temáticos que eran casi lugares comunes para la sociología crítica, en particular para la de inspiración marxista, quedaron de pronto en medio del fuego cruzado de las nuevas propuestas “relativistas” y de los argumentos que comenzaron a esgrimir los cuestionadores de los “grandes relatos”.

Las ciencias sociales no desaparecían pero se sembraba sobre ellas una amplia cortina de sospechas que ponía en entredicho cuestiones medulares. Algunos de los temas contemplados en esta agenda son la constitución de los sujetos sociales y la capacidad potencial, de alguno de ellos, para ser portador de una misión histórica redentora; la relación Estado-sociedad y la articulación de las demandas de clases y grupos de distinta procedencia; la formación de una subjetividad colectiva – conciencia de clase y sentido de pertenencia – que, de acuerdo al esquema clásico, pudiera actuar como detonante de procesos revolucionarios al coincidir con una situación económica de recesión, pobreza o desempleo; el papel de las agrupaciones propiamente políticas y en particular el rol de vanguardia de aquellas fuerzas partidarias que por ideología y postulados programáticos estaban llamadas a expresar los intereses de las clases subalternas, derrocar a la sociedad capitalista y terminar con la explotación.

La discusión acerca de los enfoques que han puesto el acento en acotar la validez – y de esta forma también la utilidad explicativa de algunos de los temas que se apuntaron en párrafos anteriores - se enmarca, para el caso latinoamericano, en un período de transformaciones que reconoce ciertos aspectos comunes en los países de la región. En el desarrollo de este trabajo se abordarán aquellos núcleos temáticos que constituyen los pivotes sobre los cuales se procura sustentar la hipótesis central que anima al conjunto de la investigación: las sociedades latinoamericanas están participando como *agrupamientos sociales periféricos* de los grandes centros del capitalismo mundial, en un proceso que abarca diversas dimensiones y que, a nuestro juicio, se motoriza a partir de un conjunto complejo de fenómenos. Para los propósitos de este análisis se considerarán como variables de particular relevancia las consecuencias que el proceso de reestructuración económica de las formaciones sociales latinoamericanas ha tenido sobre el mundo del trabajo y en otros espacios de la vida colectiva que sin estar vinculados, de manera directa, a la cuestión laboral

guardan relación con ella y sostienen mutuos condicionamientos. Este es el caso de las agremiaciones corporativas de diverso tipo, de los partidos y fuerzas políticas que expresan, de diferentes maneras, las expectativas e intereses de las clases subalternas y de todas aquellas manifestaciones que desde el espacio territorial o desde el medio institucional procuran elaborar respuestas y ser canales de tránsito para los reclamos de millones de excluidos. Estos procesos se identifican y se analizan en los capítulos subsecuentes, sin que por ello se excluyan otros acontecimientos sociales que no será posible abordar en este estudio.

La hipótesis central, a partir de la cual se sustenta la investigación, sostiene que el proceso de reestructuración capitalista generó en las sociedades latinoamericanas un efecto combinado de transformaciones de naturaleza estructural y al mismo tiempo – aunque con características y expresiones propias – un fenómeno novedoso de cambios de orden político – cultural. Por un lado, el impacto de las innovaciones tecnológicas y la incorporación de esquemas flexibles de organización del trabajo contribuyeron a deteriorar los dos postulados básicos del anterior sistema de contratación: la estabilidad en el empleo y la prestación de servicios a jornada completa. El debilitamiento de la relación tradicional entre capital y trabajo fue acompañado por el crecimiento desmesurado del autoempleo y de las más variadas formas de la precariedad ocupacional. Ambos fenómenos contribuyeron a modificar elementos centrales de la cultura popular cuyo perfil y densidad estaba determinada, en buena medida, por la calidad de trabajador asalariado de los sujetos sociales que conforman lo que de manera un tanto laxa se define como “campo popular”. En paralelo, fueron alterándose muchos de los referentes y comportamientos políticos que definían a cierto tipo de conglomerados sociales heterogéneos. Estas confluencias que generaron procesos de vastas movilizaciones de obreros y campesinos fueron identificadas – desde una perspectiva política – como movimientos “nacionalistas – populares”. La

sociología académica, por su parte, prefirió agrupar a estas expresiones político-sociales bajo la denominación común de “populismos”.

El agotamiento de las estrategias de industrialización protegida en América Latina coincidió con un vasto proceso de relocalización de los recursos productivos a escala planetaria y con la conformación de fuertes mercados regionales. El desplazamiento de las plantas manufactureras produjo, en algunas zonas, la destrucción de capacidades económicas locales y en otras la aparición de polos industriales que se nutrieron de una nueva generación de trabajadores, escasamente vinculados a la cultura sindical populista o a la historia de las centrales obreras marxistas y más dispuestos a aceptar relaciones contractuales flexibles.

La difusión del trabajo no convencional – ausencia de contratación formal, o firma de convenios por tiempo determinado, el pago a destajo, así como la carencia de prestaciones sociales y la desprotección sindical – tiene una expresión importante en el crecimiento del trabajo domiciliario y en la expansión de los pequeños talleres y empresas familiares. Este fenómeno ha sido definido, por algunos autores, como la “sociedad fábrica” en la cual la gran empresa, heredera de las técnicas ford-tayloristas de producción, ya no constituye el espacio paradigmático de la concentración de la actividad laboral. Los procesos de trabajo, sostienen, han dejado los muros de la fábrica para extenderse al conjunto de la sociedad.

La caída relativa del empleo convencional, el crecimiento del trabajo por cuenta propia y de la economía informal y los nuevos criterios de organización de la producción han contribuido a reducir la base social de los sindicatos y a debilitar los soportes institucionales sobre los cuales se estructuraron las políticas desarrollistas y los movimientos nacionalistas-populares que cobraron fuerza a partir de la segunda postguerra.

El núcleo duro del razonamiento que se expone en este estudio está constituido, precisamente, por el reconocimiento de los cambios radicales que se han operado en el mundo del trabajo y en las estructuras ocupacionales. Esta primera afirmación constituye un punto de partida para analizar, en capítulos posteriores, las manifestaciones políticas y reivindicativas de actores sociales que han sido afectados por las transformaciones del aparato productivo.

Sobre este principio, de carácter general, es conveniente efectuar algunas precisiones. Cabe señalar, que al referirnos a las transformaciones en el mundo del trabajo éstas son concebidas como fenómenos portadores de una significación que excede lo puramente laboral. Entendemos que la desregulación de los mecanismos que vinculan a empresas y trabajadores y la incorporación de tecnologías innovadoras generan un doble efecto, por un lado provocan la multiplicación de empleos inestables y desprotegidos y desplazan a importantes contingentes de la mano de obra ocupada en las plantas que inician su proceso de modernización. Por otra parte, se registra una caída relativa de la demanda de fuerza laboral y del empleo asalariado. De esta forma a los desplazados se suman los grupos de trabajadores que presionan por ingresar al mercado y que difícilmente podrán incorporarse a un empleo productivo. En uno y otro caso ciertos aspectos sustanciales que modelan los referentes simbólicos de la "cultura popular" y el sentido grupal de pertenencia se forjarán en espacios externos al ámbito laboral. Los colonos que habitan un mismo barrio, el grupo de jóvenes unidos por preferencias, modas y gustos similares, los vendedores callejeros que pelean por un espacio en la vía pública, las mujeres que reclaman respeto y trato igualitario, las comunidades indígenas que exigen el reconocimiento de usos y costumbres, forman parte de segmentos importantes de población cuya protesta no arranca, en sentido estricto, del ámbito laboral sino de los asentamientos territoriales que ocupan –

colonias populares, barrios marginales, comunidades rurales – o de las desventajas que se originan por el dato fáctico de pertenecer a una determinada identidad de género, de edad o étnico – cultural.

Formulado de otra manera, la investigación procurará dar cuenta del comportamiento de algunos sectores de la sociedad civil que son expresión de un proceso de marcada segmentación del campo popular y cuya constatación empírica es el surgimiento de los llamados nuevos movimientos sociales así como las diversas manifestaciones de la protesta popular con ejes articulantes que no responden, puntualmente, a petitorios salariales o a conflictos específicamente enmarcados en el espacio laboral.

Este proceso de luchas sociales orientado en muchos casos hacia demandas sectoriales muy acotadas – vivienda; servicios básicos; respeto y no discriminación; apertura de fuentes de trabajo; igualdad de trato y de oportunidades; etc. – es demostrativo, en parte, del deterioro de las antiguas formas de representación social. La emergencia de nuevos actores sociales es un indicador relevante de la presencia de grupos populares que están dispuestos a recorrer el camino, siempre accidentado, de la confrontación o negociación con el Estado valiéndose de nuevas estructuras organizativas, relativamente autónomas de las antiguas instancias de representación social y por lo general parcialmente ajenas a las estructuras partidarias tradicionales. Aunque es pertinente señalar, sobre este último aspecto, que es posible identificar la existencia de vasos comunicantes con agrupaciones políticas de centro-izquierda, como ocurre en Brasil con el Partido de los Trabajadores (PT), en México con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o en Argentina con un movimiento de marcado perfil populista como es el peronismo.

Para abordar el análisis de los acontecimientos que se mencionan se efectuará una valoración crítica de las principales corrientes teóricas que han procurado conceptualizar los nuevos procesos sociales y descubrir en ellos a los portadores de un proyecto de organización social basado en la justicia y en la solidaridad. En particular nos referimos a los dos paradigmas con mayor nivel de elaboración: el enfoque acerca de la movilización de recursos y la propuesta que aborda el estudio de los movimientos sociales entendidos como un proceso de construcción de identidades.

Para algunas corrientes de la sociología europea y estadounidense – en particular para las primeras – la dispersión del escenario social y la segmentación de los movimientos de protesta se explica por un dato que es, al mismo tiempo, un desafío para hoy y una tendencia irreversible en el largo plazo: la referencia común es la desaparición del trabajo, al menos bajo las formas de empleos remunerados de acuerdo a los mecanismos de regulación que se fijan mediante criterios contractuales como los que conocemos en la actualidad.

Sobre esta vertiente del debate sociológico se formularán algunas consideraciones críticas con el propósito de demostrar que las modificaciones en las estructuras ocupacionales - como resultado de las innovaciones tecnológicas y de las formas flexibles de organizar la fuerza laboral - explican la aparición de ciertos fenómenos políticos y sociales pero resultan poco fundadas cuando profetizan la robotización de todas las actividades productivas y la secundarización del mundo del trabajo entendido como un espacio propio del cerebro y de la voluntad de los hombres.

Por último, con el objeto de ilustrar la posición teórica desde la cual se abordan los conflictos de la realidad latinoamericana de los últimos veinte años se harán ciertas referencias puntuales a algunos casos nacionales, procurando identificar aquellos

rasgos que son signos de época, como la centralidad que adquiere el activismo de sectores de población escasamente considerados por la literatura social hasta hace poco más de veinte años. El caso de las mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos, las minorías religiosas o sexuales, los trabajadores desempleados y sectores marginales que se sienten escasamente representados por las fuerzas políticas convencionales, constituyen ejemplos que ilustran la emergencia de acciones colectivas que marcan el acontecer de la vida cotidiana en nuestros días. No obstante, cabe señalar, que se tomará como referencia central el movimiento de los trabajadores desocupados en Argentina. Mientras que en el resto de los procesos sociales que se describan, con el propósito de ilustrar fenómenos específicos, no se tratará de agotar el estudio de todas las variables involucradas ni analizar, de manera detenida, cada uno de los acontecimientos registrados.

Capítulo I

Trabajo: crisis del empleo formal y nuevas formas de inserción productiva

Trabajo: crisis del empleo formal y nuevas formas de inserción productiva

La discusión sobre las principales características de la actividad laboral en nuestros días reconoce, por lo menos, dos grandes perspectivas de análisis: un enfoque señala, como vector explicativo del proceso de transformaciones que vive la humanidad, la tendencia que lleva a la inexorable extinción del trabajo. Por el contrario, la otra línea de análisis sostiene que pese a las evidencias empíricas disponibles no existen argumentos suficientemente sólidos como para afirmar que se avanza hacia la disolución de la sociedad del trabajo.

La primera de las concepciones mencionadas entiende que en pocas décadas más las actividades humanas directamente comprometidas con la transformación de la materia y la prestación de ciertos servicios básicos, serán piezas de museo. El universo habrá ingresado a un nuevo tiempo histórico, un ciclo civilizatorio dominado por el desarrollo descomunal del conocimiento informático y el predominio de la robótica en las tareas propiamente productivas. Habrá llegado, entonces, el momento de administrar la generación y distribución de bienes y servicios y el opacamiento de otras actividades que, como la política, se encuentran vinculadas al interés que una sociedad demuestra por definir proyectos, concertar voluntades y luchar por la construcción de un futuro que exprese el interés de las mayorías.

En estricto sentido la preocupación por el futuro del trabajo humano no es nueva. El rasgo distintivo de estos tiempos es la centralidad que ocupa esta línea temática en las instituciones académicas y la polarización con la cual se formulan las hipótesis centrales de las teorías que concurren en este debate. Es posible señalar, con propósitos ilustrativos, algunos de los principales momentos por los que atravesó el tratamiento de este tema. A mediados de la década de los cincuenta hubo una oleada

de optimismo que se extendió más allá de los espacios universitarios. Las primeras etapas de la automatización de los procesos productivos y la institucionalización de las relaciones obrero-patronales llevaron a pensar que se estaba en presencia de una *nueva clase obrera* ^{1/}. La extensión de las prestaciones del “Estado Benefactor” se encargarían de neutralizar las propuestas más radicales de la izquierda marxista y las posibilidades de impulsar, sin mayores sobresaltos, el crecimiento de las economías capitalistas se mostraban como un camino cercano y abonado de certezas.

No obstante, algunos años después, a mitad de los sesentas, la mayoría de los países industrializados vivieron un período de gran conflictividad social con fuerte protagonismo obrero y sindical ^{2/}. Las visiones optimistas fueron reemplazadas por nuevas tesis que hablaban de la descalificación del trabajo, de una mayor enajenación obrera y de la necesidad de ensayar nuevas fórmulas administrativas que hicieran posible la instrumentación de esquemas de cogestión entre sindicatos y gerencias. A partir de los ochentas los cambios en las percepciones de la cuestión laboral serían aún más profundos. El debate se centró sobre tres ejes principales: se difundió la idea del agotamiento de la estrategia desarrollista de industrialización sustentada en los principios de la teoría keynesiana; se inicia un proceso caracterizado por la reestructuración de los procesos productivos y del mercado laboral; el correlato ideológico-político de los cambios estructurales señalados fue la decadencia de los programas obreros, en particular los de inspiración socialdemócrata y comunista en Europa y de signo populista-distribucionista en América Latina.

Estas transformaciones en el universo del trabajo y otras que también afectaron las relaciones entre empresarios, Estado y sindicatos, marcaron de manera notoria, a partir de la década de los ochenta, las valoraciones académicas acerca de la gravitación del trabajo en la sociedad. Al ponerse en tela de juicio la importancia de la actividad laboral

como eje articulador de la vida social se cuestionaban las teorías que habían estado vigentes hasta fines de los setentas, acerca de la centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales y del papel que la condición laboral había jugado como punto de referencia para la construcción de identidades colectivas ^{3/}. En paralelo, las preocupaciones sobre el futuro del trabajo mudan de espacio y se trasladan a las temáticas que son propias de la sociología laboral. El análisis de las relaciones industriales y de las diversas formas de organización de la producción suplen a los anteriores estudios que interpretaban al movimiento obrero como fuerza social o expresión corporativa en una relación de subordinación o confrontación con el Estado. Un conjunto de investigaciones específicas trasladó el eje de sus preocupaciones al análisis de las formas y efectos de los cambios tecnológicos en las relaciones laborales, de los sistemas de relaciones industriales y sobre los encadenamientos productivos y los nuevos sistemas de organización del trabajo a partir de la crisis del paradigma ford-taylorista ^{4/}.

En la mayor parte de la producción académica de los ochenta se observa una notable disminución del tratamiento de la cuestión obrera - entendida como posible sujeto político – pero no del tema del trabajo como actividad transformadora de la materia y fuente generadora de riqueza ^{5/}. En este clima de discusión y redefinición de prioridades surgieron un conjunto de teorías entre las que cabe destacar el regulacionismo, el enfoque neoshumpeteriano y la denominada especialización flexible ^{6/}.

No obstante, si por un momento se hacen a un lado los fundamentos propiamente teóricos, es posible agrupar las posiciones de quienes abordan el estudio de la temática laboral en *optimistas* que perciben en el cambio tecnológico y en los nuevos modelos de producción una alternativa cierta para arrancar del trabajo humano su

carácter rutinario y enajenado y volverlo creativo, autocontrolado y generador de nuevas identidades ^{7/}. Con una visión menos alentadora, los *pesimistas* resaltan los efectos negativos que tienen sobre los trabajadores ciertos fenómenos como la mayor segmentación del mercado laboral, la propagación de formas ocupacionales no convencionales y la extensión del empleo precario. En paralelo, se identifican a las nuevas corrientes de la administración del trabajo, como expresiones de estrategias más sofisticadas orientadas a asegurar el control empresarial sobre la fuerza laboral ^{8/}.

Casi al mismo tiempo en el cual la sociología del trabajo planteaba su “retorno” a la empresa y al estudio de los procesos productivos, se gestó un conjunto de reflexiones que con énfasis variado, llegó a una conclusión común: la investigación debía centrarse en el reconocimiento de un dato fundante según el cual la humanidad había ingresado en un proceso histórico de ruptura con las formaciones sociales anteriores y que este nuevo rumbo marcaba el *fin de la sociedad del trabajo* ^{9/}. Algunas de las concepciones que aceptan este principio de carácter general se sustentan en marcos teóricos con pretensiones explicativas de largo alcance. Por este camino suelen coincidir con ciertas postulaciones de las corrientes filosóficas *postmodernas* como es la noción del fin de las ideologías, la desarticulación de la vida social, la crisis de la política y la inviabilidad de los programas revolucionarios así como la aceptación de que la economía capitalista constituye el último estadio del desarrollo humano. Dentro de esta corriente hay otros enfoques, de tono más ensayístico, que logran una buena descripción de las dificultades que encuentra un sujeto buscador de empleo para acceder a un trabajo estable. En este sentido constituyen valiosos textos testimoniales sobre el desempleo y la subocupación creciente y, en particular, acerca de la imposibilidad de intentar revertir una tendencia histórica frente a la cual ya no existirían caminos alternativos después del fracaso del socialismo y de la creciente segmentación de la clase trabajadora.

Al margen de los autores que se consulten esta idea rectora sobre el fin de la sociedad del trabajo se estructura a partir de un conjunto de argumentos comunes a todos ellos. Es posible identificar, por lo menos, cuatro tesis principales:

a. El deterioro del empleo y de las condiciones generales de trabajo son la consecuencia de la derrota que sufrió el movimiento obrero en los años ochenta. Entre otras derivaciones el fracaso de los sindicatos en esta lucha facilitó el tránsito del “Estado Benefactor” al “Estado neoliberal”, propició la reestructuración productiva y el repliegue de la participación obrera en el interior de las empresas en un contexto marcado por el desplazamiento de los conflictos obrero-patronales y por la centralidad que adquiere la disputa por los mercados ^{10/}. Otros factores concurren en el debilitamiento político de los sindicatos, en particular, la apertura económica y los programas de reestructuración productiva que generaron condiciones propicias para la relocalización de las filiales de las empresas transnacionales hacia las regiones con ventajas comparativas (mano de obra barata; subsidios y bajos impuestos; estímulos especiales para las exportaciones; etc.). La extensión de la subcontratación, el redimensionamiento o la disolución de organismos y empresas públicas que provocaron la caída del empleo vinculado al Estado y la desregulación de los mercados laborales, fueron otras de las variables que contribuyeron a reducir los márgenes de maniobra del movimiento sindical.

b. Desde fines de los setentas la industria ha perdido espacio dentro del conjunto de las actividades productivas con respecto a los servicios ^{11/}. En paralelo el crecimiento relativo de los trabajadores calificados – técnicos; profesionales; burócratas de cuello blanco – junto a la expansión de formas ocupacionales atípicas, de empleos precarios y

del aumento de los espacios que ocupa la economía informal y el trabajo en micronegocios han potenciado las tendencias que llevan a una profundización de la heterogeneidad del mercado laboral. Esta mayor dispersión de la fuerza de trabajo habría tenido fuertes repercusiones en la determinación de las normas y valores que definen la cultura y el comportamiento obrero. De esta manera, al fragmentarse aquellas identidades populares que se habían forjado durante décadas, a partir de la práctica laboral y de la lucha sindical, se torna más lejana la posibilidad de que vuelvan a surgir grandes movimientos colectivos y constituir, desde esa base social, organizaciones con ideologías y proyectos de cambio social favorables a los trabajadores.

c. Si el trabajo ha perdido relevancia en las sociedades de fin de siglo debe entenderse que el papel de la actividad laboral en la generación de valor es menos significativa ^{12/}. La riqueza social surgiría, ahora, de los movimientos que responden a un vasto sector financiero globalizado que no se expresa en sujetos o empresas con nombre y apellido sino en el anonimato de organismos como grandes casas financieras, agentes responsables del movimiento de las acciones en los principales mercados del mundo y en los nuevos fondos de pensiones. Estas referencias ilustran la operación de un mundo del dinero que resulta casi inasible y en el que es difícil reconocer o personalizar sujetos a quienes demandar.

d. Desde una perspectiva sociológica el fin del trabajo está asimilado a la pérdida de centralidad de la actividad laboral en el conjunto de relaciones sociales, de manera especial, como pivote entorno al cual se conforman las identidades colectivas. Al perder el papel relevante en la constitución de subjetividades los individuos quedan en una situación que algunos autores definen como “fragmentación de los mundos de

vida” ^{13/}. Los *espacios extralaborales* se han transformado en lugares de socialización más importantes para los trabajadores que los mismos ámbitos productivos. Este sería uno de los rasgos determinantes de la sociedad postmoderna, la fragmentación de la vida social, de la cultura, de las identidades, la ausencia de proyectos y discursos alternativos y de sujetos sociales que puedan llevarlos a cabo.

La discusión sobre las condiciones actuales del mercado laboral y en particular el debate acerca de la no centralidad del mundo del trabajo en relación a otros espacios de la vida social se ha ido entrapando, de manera gradual, en los argumentos, diferentes, pero a nuestro juicio igualmente erróneos, de dos posiciones extremas. Uno de estos enfoques afirma que la humanidad está viviendo un proceso cuyo hilo conductor es el ingreso en la sociedad del no trabajo. La disminución del empleo convencional y la reducción de las ocupaciones asalariadas representan las manifestaciones visibles de una tendencia subterránea que está destinada a ser dominante en las próximas décadas. El referente conceptual proviene de algunas corrientes de la sociología laboral europea y estadounidense. Esta fundamentación teórica parte del análisis de ciertos indicadores relevantes acerca de la situación del mercado de trabajo en los países de alto desarrollo industrial. La terciarización de las economías y la externalización – *outsourcing* -de los procesos productivos son las referencias más reiteradas en este tipo de argumentaciones. La desindustrialización y el incremento de los servicios serían responsables de la reducción cuantitativa de la clase obrera y de la caída relativa del trabajo asalariado.

La otra línea de análisis sostiene que aún admitiendo la validez empírica de fenómenos como la incorporación de nuevas tecnologías, la crisis de los principios ford-tayloristas

de administración del trabajo y la desregulación de los mecanismos de contratación, no hay elementos suficientes para pensar en la secundarización del mundo laboral. Desde esta perspectiva es en el espacio productivo donde se establecen las prácticas colectivas que dan sentido al conjunto de las relaciones sociales. Este mismo ámbito sería también el que actúa como fuente determinante para la formación de los referentes simbólicos populares y como espacio en el cual los individuos adquieren sentido de pertenencia en relación a un grupo social, étnico o cultural particular y se diferencian del resto de los integrantes de la sociedad.

Para esta segunda línea de fundamentación teórica no existen argumentaciones de peso a partir de las cuales pueda afirmarse que se está en presencia de una declinación definitiva del trabajo asalariado. De esta manera, también se invalida la tesis según la cual los sindicatos y los partidos cuya clientela tradicional son los obreros vinculados al desarrollo de la industria habrían ingresado en una pendiente de debilitamiento de sus bases sociales y de erosión política irreversible de su capacidad de representación.

Los dos enfoques expuestos derivan hacia conclusiones unilaterales. En un caso, el análisis se sesga a partir de la interpretación potencializada de ciertos indicadores originados en la realidad laboral de las economías industrializadas. Desde la otra perspectiva se disuelven las expresiones sociopolíticas que obedecen a las transformaciones operadas en el mundo del trabajo, enfatizando sólo aquellos fenómenos que marcan continuidades. Por nuestra parte –y tal como se presenta al final de este capítulo- entendemos que el trabajo sigue siendo un factor marcadamente constitutivo de la conciencia social y de las acciones colectivas, pero que se despliega

en un contexto de mayor vinculación con elementos de naturaleza cultural, con fenómenos de carácter nacional o regional y con expresiones étnicas y religiosas.

Es oportuno consignar algunos datos sobre la situación laboral internacional antes de exponer la posición que aquí se sustenta, sobre el caso latinoamericano, con respecto a los temas mencionados en los párrafos precedentes. Con el propósito de ilustrar el comportamiento del empleo en la región no se hará referencia a variables o situaciones específicas que responden a fenómenos particulares de alguno de los países del área. Los indicadores que se consideran expresan tendencias de largo plazo más allá de los comportamientos sectoriales de la economía, de factores estacionales o de manifestaciones puntuales que involucran a alguna región geográfica en particular ^{14/}.

Una primera observación que debe consignarse es el incremento del empleo en el llamado sector informal de la economía que continuó siendo dominante durante 1998. La ocupación en el sector moderno se estancó en el año mencionado mientras que la generación de empleos en las microempresas creció en 4.5%. De esta manera, los datos referidos confirman una tendencia sostenida que demuestra la participación creciente de la ocupación en pequeñas unidades productivas y en micronegocios familiares. La participación del sector informal en el empleo total continuó aumentando de 57.7% en 1997 a 58.7% en 1998. Es importante señalar que bajo una misma categoría – la de empleo informal o sector no estructurado de acuerdo a la definición que acuñó la OIT – se están agrupando personas que desarrollan actividades como trabajadores por cuenta propia, sujetos que laboran sin remuneraciones y que pueden identificarse como “trabajo familiar no retribuido” y un tercer grupo de gente que recibe un salario como empleado de microunidades productivas. Este vasto sector que abarca

casi el 60% de la población activa ocupada desarrolla sus actividades laborales en un nicho de la economía donde las prestaciones, los apoyos de la seguridad social y la sindicalización de los trabajadores son casi nulas.

Al final de este capítulo se anexan dos cuadros, en el primero de ellos se desagrega la importancia del empleo “no agrícola” en la economía informal y en el sector estructurado para un grupo seleccionado de trece países de la región. Las referencias muestran la gravitación, cada vez más relevante, de las actividades productivas “no estructuradas” en el período 1990-1996, así como el crecimiento de los microestablecimientos. Este último indicador es por demás significativo ya que en este tipo de pequeñas y micro empresas se agrupa buena parte del empleo precario y se registra la ausencia de cobertura social, el mayor peso del trabajo familiar no remunerado y la desprotección jurídica de la mano de obra.

En el otro cuadro, con referencias estadísticas más recientes, puede apreciarse la escasa recuperación del empleo formal y la persistencia –con excepción del caso mexicano- de altas tasas de desempleo abierto. La pérdida de dinamismo de las economías latinoamericanas a fines de la década de los noventa y en los primeros años del siglo XXI explican, en parte, este comportamiento de los mercados laborales de la región. El crecimiento económico se redujo en 2001 a un 0.6% en promedio, con lo cual se interrumpió bruscamente la breve recuperación iniciada a mediados de 1999 y que trajo consigo un crecimiento de casi el 4% en el año 2000. Sin embargo, es importante señalar, que el fenómeno realmente significativo es el crecimiento de la subocupación, del trabajo por cuenta propia y del empleo precario. Son estos tres

indicadores los que marcan una tendencia recurrente y de largo plazo que se extiende más allá de los avatares propios del ciclo económico.

Hay algunos indicadores sobre la precariedad del empleo en México que son reveladores de la profundidad y magnitud del panorama que se comenta. Estudios recientes mencionan que más del 70 por ciento de las nuevas opciones de trabajo que se generaron entre 1991 y 1997 han sido empleos no asalariados o vacantes que se abrieron en establecimientos que ocupan hasta cinco trabajadores. Durante 1997 casi el 65 por ciento de la población activa recibía, como máximo, dos salarios mínimos o sólo obtenía una recompensa en especies y el 57 por ciento de quienes percibían un salario no tenía protección de ninguna forma de seguridad social.

Los datos que se refieren son ilustrativos de una realidad laboral generalizada en los capitalismos periféricos: el empleo asalariado convencional no es la modalidad dominante. La mayoría de quienes trabajan lo hacen por su cuenta en calidad de pequeños productores del campo, personas ocupadas en micronegocios de la ciudad, tareas domiciliarias pagadas a destajo o viven de los ingresos de actividades ocasionales que suelen ser intermitentes o responden a comportamientos estacionales. El empleo asalariado normal está al alcance de una franja relativamente minoritaria de la población ocupada o de quienes presionan en el mercado laboral por obtener un trabajo de esa naturaleza.

Estas características de los mercados de trabajo en los capitalismos latinoamericanos hacen que algunos indicadores de la situación ocupacional, como las tasas de desempleo abierto, sean poco ilustrativas de la realidad laboral. La marcada expansión del empleo ocasional, del trabajo por cuenta propia y la inexistencia o limitada

cobertura de las prestaciones por desempleo y de los servicios que ofrecen los sistemas de seguridad social, explican la presencia de un vasto y heterogéneo mundo de trabajadores subocupados y de empleados temporales.

De acuerdo al comportamiento de las variables ocupacionales que se consignaron en párrafos precedentes, puede afirmarse que la configuración de los mercados laborales en las sociedades latinoamericanas ha sufrido cambios significativos y que éstos dan lugar a una nueva estructura del empleo.

Lo más notorio que se deduce de los datos citados – además del crecimiento de la informalidad - es el aumento generalizado de la proporción del empleo correspondiente al sector de los servicios que se expandió entre 2 y 15 puntos porcentuales en la mayoría de los países de la región. Como consecuencia del citado aumento, el sector servicios ocupa actualmente de un 40 a un 60 por ciento del empleo total en todos los países latinoamericanos.

Esta referencia estadística tiene derivaciones de orden cualitativo muy importantes. Debido a la marcada heterogeneidad de las actividades que forman el sector servicios en el que quedan incluidas tareas y establecimientos de escasa productividad y actividades en empresas modernas de alta productividad, la fuerza de trabajo incorporada a este sector vive situaciones extremas. Es posible identificar a grupos de población que perciben ingresos muy bajos y que desempeñan labores de sobrevivencia, casi marginales para el resto de la economía. La otra cara de la moneda ofrece la imagen de empleados de grandes establecimientos con remuneraciones elevadas y acceso a los sistemas de seguridad social.

En las sociedades latinoamericanas las actividades de servicios que conforman el amplio espacio de la economía informal absorben una gran proporción del empleo urbano. En el decenio de los noventa progresó la proporción de trabajadores incorporados a este sector llegando, como ya se mencionó, casi al 60 por ciento.

El estancamiento o la disminución del empleo industrial y el crecimiento de la fuerza laboral en el área de servicios son factores que han contribuido a reducir la base social de los sindicatos y acotar el accionar político de los mismos. Conviene reiterar que, aún sin presentar un comportamiento homogéneo y con variantes significativas de un país a otro, el porcentaje de población asalariada ha disminuido con respecto al total de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. De igual forma, también ha caído el volumen de trabajadores que desempeñan sus labores amparados por convenios colectivos al expandirse la desregulación de los mercados y difundirse la aplicación de criterios flexibles de organización de la producción.

Los factores antes señalados modifican radicalmente el contexto previo caracterizado por el crecimiento del empleo formal y la promulgación de cuerpos legales tutelares. Ambos elementos hicieron posible la conformación de grandes sindicatos por rama de actividad y la consolidación de fuertes centrales obreras.

Sobre este aspecto de la realidad social es preciso señalar que no se pretende establecer relaciones de carácter “uni-causal” en el complejo proceso de construcción de subjetividades, acciones colectivas e identidades. Cierta determinismo vulgar – de origen estructuralista – cayó en el error de atribuir a la posición que los sujetos ocupan

en el mercado laboral la capacidad de perfilar –linealmente- valores, normas y actitudes. Desde esta perspectiva, no llega a apreciarse que las relaciones entre estructuras y subjetividades forman un conjunto heterogéneo de variables que interactúan en un proceso dinámico de condicionamientos mutuos. Sobre esta afirmación cabe una salvedad que haga explícita la posición que se sostiene en este trabajo. La crítica a los determinantes estructurales ha generado, como contrapartida, la difusión de una posición ecléctica en la que se yuxtaponen variables de diversa significación y relevancia. Desde este enfoque, se diluyen aquellos factores de la realidad social que tienen un poder constitutivo con respecto a otros que actúan como “identidades leves”. No es nuestra intención suscribir una concepción de esta naturaleza que termina por disolver la realidad en una nube de elementos interactuantes, difíciles de identificar y con una misma jerarquía constitutiva sobre el universo cultural, político o ideológico que elaboran o asumen los actores sociales.

Conviene incorporar aquí otro señalamiento que contribuye a definir la posición que inspira este trabajo. Entendemos que se corren riesgos similares a los mencionados en párrafos anteriores, cuando desde otras posiciones teóricas se afirma que existe un hilo rojo que le da continuidad a la historia del movimiento obrero y de las clases subalternas. Si fuese cierto que la heterogeneidad de los sectores trabajadores de la sociedad es un rasgo que además de ser constitutivo – es decir reconocible desde los orígenes de la revolución industrial hasta nuestros días – ha operado a lo largo de la historia *sin cambios cualitativos sustanciales*, no habría necesidad de reformular antiguos paradigmas o buscar marcos conceptuales novedosos para analizar el comportamiento de los sectores populares y de los movimientos de protesta social.

A diferencia de las dos corrientes interpretativas que se describieron en páginas precedentes la perspectiva desde la cual se abordará en esta investigación el estudio de algunos fenómenos sociales puede resumirse en ciertas hipótesis y ejes teóricos que queremos formular tomando en cuenta el siguiente contexto:

- El proceso de reestructuración capitalista a escala planetaria que opera en el marco de fuertes innovaciones tecnológicas, mayor integración de las economías nacionales al mercado mundial y repliegue del Estado marca un punto de inflexión y de modificaciones cualitativas que afectan al universo social, a las instituciones y fuerzas políticas y, de manera particular, al mundo del trabajo.
- La disminución del empleo asalariado junto a la difusión de formas no convencionales de trabajo han contribuido a incrementar la heterogeneidad del mundo social, a debilitar antiguos lazos comunitarios y a volver difusas identidades que fueron construyéndose bajo el empuje de la industrialización y el fortalecimiento de valores, normas y actitudes que se gestan a partir de la implantación de la vida urbana.
- La crisis de las políticas de inspiración keynesianas que alimentaron las alianzas socialdemócratas o populistas establecen un momento de ruptura y el inicio de un profundo proceso de reagrupamiento de sectores sociales. Esta nueva etapa está signada por la declinación de antiguos sujetos y por el mayor protagonismo de actores a los que se les asignaba un papel secundario en relación a la centralidad política del proletariado industrial.

- Las expresiones gremiales y políticas que habían actuado como canales de transmisión de una parte considerable de las demandas sociales, sufren una crisis de representatividad y ven menguada su capacidad de movilización. Los sindicatos y partidos de base popular han perdido capacidad de respuesta ante la ofensiva modernizadora del capital. Sobre este repliegue de los agrupamientos tradicionales se levantan nuevas formas organizativas de lo “popular” que junto a los reclamos propiamente laborales, incluyen demandas específicas de sectores también excluidos o marginados por razones culturales o de identidades y valores que son rechazados por los grupos de población que participan de los bienes y servicios que ofrece la modernidad.

En relación a las hipótesis desde las cuales se abordará este estudio es necesario consignar los siguientes puntos de partida:

- Las ideologías contestatarias, las formulaciones macro-teóricas desde las cuales se pretendía explicar la realidad social, así como el atractivo y la difusión de los “grandes relatos” que procuraban expresar los intereses de los pobres de la tierra, han quedado en entredicho desde el momento en que, el derrumbe de los llamados “socialismos reales”, puso en tela de juicio a algunos de los soportes sobre los que se sustenta la concepción marxista de la historia.
- Las articulaciones parciales, que vinculan a los agentes sociales y dan sentido a las acciones colectivas, adquieren una significación mayor y sustituyen a la anterior noción de un “todo articulado”, concepto a partir del cual se fueron construyendo buena parte de las ciencias sociales. El concepto de articulación parcial no

disminuye la relevancia de la actividad laboral pero es un principio conceptual que facilita la identificación de otras variables que pueden actuar como elementos de inclusión o de exclusión entre diversos grupos sociales (religión; usos y costumbres; tradiciones culturales; pertenencias regionales o nacionalidad).

- La formación de identidades y subjetividades colectivas empieza a reconocer en los espacios extralaborales y en las experiencias “moleculares” de la vida cotidiana a elementos constitutivos cada vez más determinantes de ciertos comportamientos y actitudes. También estos factores son motivo de agrupamientos y de reconocimientos y apoyos mutuos o de exclusiones y beligerancia para diversos grupos sociales.

América Latina

El empleo no agrícola en la economía no estructurada y estructurada en una selección de países (porcentajes de la fuerza de trabajo)

		Economía no estructurada				Economía estructurada
		Total	Trabajo por cuenta propia	Servicio doméstico	Microempresas	Total
Argentina	1990	47.5	24.7	7.9	14.9	52.5
	1996	53.6	27.1	7.8	18.7	46.4
Bolivia	1990	56.9	37.7	6.4	12.8	43.1
	1996	63.1	39.8	5.5	19.9	36.9
Brasil	1990	52.0	21.0	7.7	23.3	48.0
	1996	59.3	25.8	9.5	26.0	40.7
Chile	1990	49.9	23.6	8.1	18.3	50.1
	1996	51.9	22.7	6.8	21.4	48.1
Colombia	1990	55.2	23.5	5.4	26.3	44.8
	1996	57.2	25.9	3.8	27.5	42.8
Costa Rica	1990	42.3	18.1	5.8	18.4	57.7
	1996	47.2	17.9	5.2	24.6	52.6
Ecuador	1990	51.2	32.5	5.6	13.0	48.8
	1996	52.9	32.8	5.9	16.2	46.2
México	1990	55.5	30.4	5.6	19.5	44.6
	1996	60.2	32.5	5.4	22.3	39.8
Panamá	1990	40.5	20.4	7.2	12.8	59.5
	1996	43.6	20.7	7.0	13.9	57.3
Paraguay	1990	61.4	21.2	10.7	29.4	38.6
	1996	67.9	26.9	10.0	32.0	31.1
Perú	1990	51.8	35.3	5.1	11.4	48.2
	1996	58.0	37.4	4.2	16.3	42.1
Uruguay	1990	36.3	19.3	6.0	11.0	63.7
	1996	38.9	21.3	6.3	11.3	60.1
Venezuela	1990	38.8	22.1	4.1	12.6	61.2
	1996	47.7	28.1	2.4	17.2	52.3

Fuente: OIT, Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998-1999, Ginebra, 1998.

**Indicadores del Mercado de Trabajo en Países
de América Latina 1990-2002**

Países	Tasa de Desempleo				Tasa Anual de Crecimiento del Empleo	
	1990	1995	2000	2001	1990-2000	1995-2002
América Latina	5.7	7.5	9.5	9.4	1.8	1.6
Argentina	7.5	17.5	15.1	17.4	2.3	0.1
Bolivia	7.2	3.6	7.4	8.5	4.2	2.7
Brasil	4.3	4.6	7.1	6.2	-0.5	0.9
Chile	7.4	6.6	9.2	9.1	1.8	0.9
Colombia	10.5	8.8	17.0	16.2	3.6	3.0
Costa Rica	5.4	5.2	5.2	6.1	3.4	2.6
Ecuador	6.1	7.7	14.1	10.4	3.8	2.4
El Salvador	10.0	7.0	6.5	7.0	1.9	2.2
Guatemala	N/D	N/D	N/D	N/D	-1.6	-2.7
Honduras	6.9	6.6	N/D	6.3	5.3	4.6
México	2.8	6.2	2.2	2.4	3.4	2.1
Nicaragua	7.6	16.9	9.8	11.3	3.5	3.2
Panamá	20.0	16.4	15.3	16.6	3.2	0.9
Paraguay	6.6	5.3	10.0	N/D	3.3	0.3
Perú	8.3	7.9	7.0	9.2	3.3	2.4
Uruguay	9.2	10.8	13.6	15.3	0.7	-0.1
Venezuela	11.0	10.3	13.9	13.5	3.8	2.9

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la OIT, *Tendencias Mundiales del Empleo*, Ginebra, 2003.

NOTAS

- ^{1/} Mallet, Sergio, *La Nueva Clase Obrera*, Tecnos, Madrid, 1972.
- ^{2/} Braverman, Harry, *Trabajo y Capital Monopolista*, Nuestro Tiempo, México, 1974.
- ^{3/} Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press, 1984
- ^{4/} Hyman, Robert y W. Streeck, (editores), *New Technology and Industrial Relations*, Oxford Basic Blackwell, 1988.
- ^{5/} Katz, H. C. y Charles Sabel, "Industrial Relations and Industrial Adjustment in the Car Industry", *Industrial Relations* 24-2, 1985.
- ^{6/} Como exponentes de la corriente regulacionista pueden mencionarse los siguientes autores:
- Boyer, Robert, *La Flexibilización del Trabajo en Europa*, Madrid, Ministerio del Trabajo, 1989.
- Aglietta, Michel, *Regulación y Crisis del Capitalismo*, México, Siglo XXI Editores, 1982.
- Lipietz, Alain, "Acumulación, Crisis y Salidas a la Crisis: Algunas Reflexiones Metodológicas en torno a la Noción de Regulación", en *Estudios Sociológicos*, Vol. 4, Núm. 11, El Colegio de México, mayo-agosto, 1986.
- Amir, Samin, *Postfordismo*, Oxford : Blackwell, 1994.
- Para una revisión de las teorías neoshumpeterianas ver:

Pérez, Carlos y Carlos Ominami, (compiladores), *La Tercera Revolución Tecnológica*, Buenos Aires, Paidós, 1987.

Entre otros representantes del llamado enfoque de la especialización flexible es posible citar a:

Sabel, Charles, "Historical Alternatives to Mass Production", Cambridge U. Press, *Past and Present Núm. 108*, 1985.

^{7/} Handy, Charles, *El Futuro del Trabajo Humano*, Buenos Aires, Editorial Ariel, 1987.

^{8/} Hardt, Michael y A. Negri, *Labor of Dionysus*, Minnessota, University of Minnessota Press, 1994.

^{9/} Gorz, André, *Adiós al Proletariado*, Barcelona, El Viejo Topo, 1982.

— *Misérias del Presente. Riqueza de lo Posible*, Buenos Aires, Paidós, 1998.

Offe, Claus, *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, México, Conaculta – Alianza Editorial, 1990.

^{10/} Jurgens, U., "Shaping the Future of Work", Londres, *British Journal of Industrial Relations Núm. 33, Vol. 4*, diciembre, 1995.

^{11/} Castells, Manuel y Yuko Aoyama, "Hacia la Sociedad de la Información. Estructura del Empleo en los Países del G-7 de 1920 a 1990", Ginebra, OIT, *Revista Internacional del Trabajo, Núm. 1, Vol. 113*, 1994. Cabe señalar que los autores destacan el carácter heterogéneo del proceso de expansión de las actividades de servicios en los distintos países, así como la implantación desigual de las

economías basadas en núcleos productivos que se apoyan en una “gran densidad de información y conocimientos”.

^{12/} Méda, Dominique, “El Valor Trabajo Visto en Perspectiva”, Ginebra, OIT, *Revista Internacional del Trabajo*, Núm. 6, Vol. 115, 1996.

Castell, Robert, “Trabajo y Utilidad para el Mundo”, Ginebra, OIT, *Revista Internacional del Trabajo*, Núm. 6, Vol. 115, 1996.

^{13/} Offe, Claus, *Disorganised Capitalism*, Cambridge: Polity Press, 1985.

^{14/} Los datos que se citan en el texto fueron tomados de los reportes de la OIT. Se eligieron aquellas referencias que se consideran más ilustrativas de la situación actual del empleo y de algunas tendencias que demuestran cierta continuidad en el comportamiento de los mercados de trabajo de la región. Las fuentes consultadas son las siguientes:

OIT, *El Empleo en el Mundo 1996/97. Las Políticas Nacionales en la Era de la Mundialización*, Ginebra, 1996.

— OIT *Informa Núm. 4. América Latina y el Caribe*, Ginebra, diciembre de 1997.

— OIT *Informa Núm. 5. América Latina y el Caribe*, Ginebra, primera edición de 1998.

— OIT, *Tendencias Mundiales del Empleo*, Ginebra, 2003.

Lindenboim, Javier (compilador), *El Desafío del Empleo a Finales del Siglo XX*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Cuadernos del CEPED Núm. 2, 1999. De este material provienen algunas de las valoraciones que se incluyen en este capítulo sobre el comportamiento del empleo en Latinoamérica. Se revisó, de manera

particular, la ponencia de Víctor Tokman, “Panorama del Empleo en América Latina” y las conferencias de Silvia Montoya y Claudio Lozano: “Mercado de Trabajo y Política Económica. Perspectivas.”

C a p í t u l o I I

Crisis del Trabajo: ¿derrota obrera o revolución tecnológica?

Crisis del Trabajo: ¿derrota obrera o revolución tecnológica?

Las últimas dos décadas del siglo coincidieron con un vasto proceso de reestructuración capitalista a escala planetaria. Este fenómeno – una de cuyas expresiones más relevantes es el resquebrajamiento de las fronteras nacionales y la globalización de los mercados – puso a andar, en el territorio de la teoría y de la política, múltiples lecturas, y un conjunto heterogéneo de interpretaciones de este ciclo de transformaciones que abarca todos los poros de la vida social ^{1/}. Algunas expresiones significativas de la sociología europea enfatizan el papel determinante que jugaron ciertas variables de orden político como el repliegue y la derrota del movimiento sindical durante la segunda mitad de la década de los setenta y la pérdida de la centralidad obrera en los años ochenta. El agotamiento de la capacidad de respuesta de las estructuras sindicales tradicionales y la nebulosa ideológica en la que quedaron envueltos los antiguos “partidos de masas” – socialdemócratas; comunistas o populistas – al producirse la debacle de la Europa del Este facilitaron la implantación de la nueva estrategia de reordenamiento económico. Al mismo tiempo, la ofensiva capitalista potenció el impacto disolvente de elementos que se encontraban labrados en el núcleo de las fuerzas sociales contestarias y aceleró el proceso de mutación ideológica de expresiones políticas que acreditaban una larga trayectoria en las filas del marxismo y del nacionalismo popular. Ni el fuerte arraigo social en sectores obreros y capas medias bajas de la población – que esos partidos o movimientos supieron ganar durante muchas décadas de luchas – ni el hecho, igualmente relevante, de haber sido una de las principales instancias a partir de las cuales se procesaban y formulaban las demandas populares, impidieron que en algunos casos se aceptaran pasivamente los nuevos criterios de política económica y en otros, se acatara lo resuelto mediante

negociaciones en las que se resignaron los reclamos gremiales y los principios doctrinarios.

El colapso, mas o menos generalizado, de las fuerzas populares es un dato insoslayable de la realidad social. No obstante, no puede explicarse la derrota política a partir de argumentos que remiten al mismo factor causal – es decir la política – y que por consiguiente se vuelven tautológicos. La crisis del bloque soviético y el trastabillar de las principales corrientes del marxismo académico contribuyen a explicar el abatimiento de la izquierda y el debilitamiento de las estructuras sindicales y de masas vinculadas a ella, pero resultan insuficientes para dar cuenta del conjunto de variables intervinientes en un fenómeno que ofrece múltiples aristas.

Uno de los puntos débiles del enfoque *politicista* de la crisis es que no incorpora en el análisis el papel de las condiciones materiales que hicieron posible la exitosa ofensiva del capital. El agotamiento del modelo de industrialización que había prevalecido hasta mediados de los años setenta y el desarrollo vertiginoso de las innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción, pusieron en jaque las antiguas estrategias de negociación obrero-patronal y debilitaron el programa de reivindicaciones que les permitió a los sindicatos obtener importantes prestaciones y un nivel de salarios reales que llevaba cierta ventaja – o al menos acompañaba – el costo de los bienes y servicios que integran la canasta básica. La forma estatal que hizo posible esos treinta años de bonanza fue el llamado “Estado de Bienestar” ^{2/}. Esta figura se consolidó a partir de la segunda postguerra sobre los soportes de un bloque histórico que tuvo tres puntos principales de apoyo: las instituciones públicas, el sector empresarial y el respaldo de las grandes centrales obreras.

La viabilidad del proceso de acumulación capitalista, en esta etapa, fue el resultado de la convergencia de diversas fuerzas sociales que hicieron posible la operación “virtuosa” de un conjunto de variables que interactuaban dentro de una ecuación que aseguró, al mismo tiempo, el crecimiento de la economía y una distribución relativamente equitativa de la riqueza. Este conglomerado de sectores políticos y sociales encontró su límite a mediados de los setenta. Algunos referentes de orden económico facilitan la identificación de esa etapa y posibilitan su periodización. Aunque el propósito de este trabajo no es el análisis de acontecimientos estrictamente económicos, es oportuno ilustrar el período al que nos referimos recordando la crisis del petróleo de 1973, el abandono del patrón oro por parte de los Estados Unidos en 1974 y el fuerte impulso que dieron los países industrializados a la producción de “nuevos materiales” y sustancias de origen artificial con lo que logró aminorarse la dependencia que estas economías tenían en relación a las materias primas de origen natural.

Durante este período se acentúa el cambio de estrategias empresariales y se acelera tanto la incorporación de nuevas tecnologías como la adopción de sistemas flexibles de organización del trabajo. Las grandes empresas profundizan la externalización de los procesos productivos y se generalizan los principios de subcontratación de establecimientos de menor dimensión. Sobre estas empresas recae la responsabilidad de llevar a cabo parte del proceso de elaboración de ciertos bienes o servicios que antes se producían en la planta central de la casa matriz.

La ofensiva política de las empresas sobre las estructuras sindicales – o la guerra del capital contra el trabajo – como la definieron algunos autores, fue factible en un contexto en el cual ya estaban maduros los elementos que posibilitaron el cambio de las estrategias de desarrollo “capitalista nacional” a las políticas integradoras de los mercados y globalizadoras del mundo comercial y financiero.

De manera similar el redimensionamiento de los organismos y dependencias del sector público, así como la disolución o privatización de las empresas estatales, adquirió particular virulencia cuando los *holdings* constituidos por capitales locales y extranjeros estaban en condiciones de asumir en manos propias aquellas partes del patrimonio o áreas de la economía que habían sido coto vedados para el interés privado.

En poco tiempo la discusión sobre el papel del Estado ocupó un lugar tan preponderante como la implantación de las nuevas políticas económicas^{3/}. En términos generales, como se ha mencionado con frecuencia, el tema osciló, bruscamente, de la *estadolatría* a la satanización de la gestión pública. Hasta hace poco más de dos décadas el enfoque dominante sostenía que era factible conservar un Estado que planificara buena parte de las actividades productivas y que a través de un amplio instrumental burocrático fijara metas, estableciera prioridades y vigilara el cumplimiento de los planes y programas que estaban bajo su responsabilidad.

Esta visión de la cuestión estatal mostró graves insuficiencias cuando la crisis fiscal y la brusca caída de los recursos públicos fue dificultando el cumplimiento de funciones tan diversas como explotar y administrar las actividades mineras y los ferrocarriles, por un lado, y al mismo tiempo organizar y llevar adelante la educación y la salud de la

población. El carácter centralizado de la gestión contribuyó, en muchos casos, a agravar problemas administrativos, subestimar el papel de la sociedad y de las iniciativas ciudadanas y a generar rigideces en la instrumentación de las políticas públicas.

Pero esta concepción del Estado no tardaría en generar su contrario. El péndulo giró en la dirección opuesta y las estructuras y dependencias públicas fueron percibidas como un obstáculo para la operación del mercado al que se le adjudicaba ahora la facultad de orientar el destino de los recursos y pautar el comportamiento de la vida social. La paulatina demolición de los dispositivos estatales fue el paso siguiente cuando se pensó que el tema central era la cuestión del *tamaño* de las instituciones. Se decidió entonces suprimir gran parte de sus funciones y se realizaron continuos y, con frecuencia, masivos recortes de instrumentos o espacios que habían sido competencia del Estado como prestador de servicios de interés colectivo ^{4/}.

Si el Estado desarrollista propició la generación de un referente público para el conjunto de los sectores sociales que algunas corrientes de la sociología política definieron como “matriz Estado-céntrica”, ^{5/} el nuevo modelo de “Estado mínimo” delegó en el mercado la determinación del curso de los acontecimientos sociales y la capacidad de resolver los conflictos entre ciudadanos o de aquellas expresiones colectivas movilizadas por intereses dispares.

Ambas dimensiones del análisis – las transformaciones que ocurren en la esfera productiva y en el universo empresarial y la desarticulación de las anteriores formas estatales – constituyen el núcleo de la teoría que afirma el cierre de un ciclo histórico y

el inicio de un nuevo momento civilizatorio cuyo principal rasgo distintivo es la imposibilidad material de generar opciones de trabajo para los millones de personas que procuran incorporarse todos los años al mercado laboral. El retorno a las políticas de “pleno empleo” sería un espejismo ^{6/}. La industrialización, tal como fue conocida hasta hace poco más de 20 años, resultaría irreplicable. Ya no habría desarrollo de países o de grandes regiones sino de selectos enclaves receptores de grandes volúmenes de recursos financieros y de tecnologías modernas. El capitalismo quedaría amurallado en “Estados ciudades” o en privilegiadas “villas privadas” disociadas del resto de la nación.

La humanidad estaría en vísperas de una mutación cultural equivalente a la conmoción que provocó el inicio de la revolución industrial. La calidad de ciudadano ya no se identificaría – como hace 200 años – con el desempeño de un empleo estable, que se encontraría cada vez más distante del hombre común. El fin de la sociedad del trabajo marcaría un momento de ruptura en el cual la plenitud de los derechos económicos, sociales y políticos sería un privilegio asociado a la situación que podrá vivir una minoría de personas que conservarían empleos estables y de tiempo completo.

Esta misma línea de razonamiento llevó a pensar, a los autores que se identifican con ella, que el ingreso en la sociedad del “no trabajo” sería un proceso sin retorno. Como en un fenómeno de física nuclear, al activarse las sustancias detonantes, el inmediato encadenamiento de acontecimientos catastróficos no reconoce soluciones intermedias. El trabajo mensurable, cuantificable, con atributos para ser valorado y manejado como una mercancía transable en el mercado sería hoy la expresión de una práctica social en decadencia, refugiada en los bolsones más tradicionales de la economía y, en

muchos casos, vinculada a la generación de bienes poco sofisticados y de consumo masivo.

Algunas tendencias recientes de la economía mundial han dado argumentos relativamente sólidos al enfoque teórico que se está comentando. En efecto, la externalización de los procesos productivos promueve una mayor segmentación de los mercados de trabajo. La mano de obra de las empresas que operan bajo condiciones de subcontratación debe soportar inestabilidad en el empleo, pérdida de prestaciones y desprotección social, flexibilidad en los horarios y decisiones arbitrarias en relación a la asignación de puestos y funciones. La fuerza de trabajo queda así fracturada en dos categorías principales, por un lado un contingente integrado por asalariados que laboran en condiciones de estabilidad y a tiempo completo, aptos para la movilidad interna y la polivalencia profesional. Alrededor de este núcleo de operarios de “elite” – paradigma del obrero postfordista – se mueve una amplia masa de trabajadores “periféricos” donde predominan todas las formas del empleo precario y de la subocupación, los bajos salarios, la carencia de cobertura asistencial y la desprotección sindical. De esta manera, el capitalismo de fin de siglo habría logrado restablecer condiciones laborales y sociales similares a las que prevalecían al cierre del siglo XIX. La multiplicación de obreros que prestan servicios por tiempo determinado, a destajo, ocupando el espacio doméstico para desarrollar sus tareas o mediante contratos por obra, constituyen una amplia masa de trabajadores que han hecho de la inestabilidad existencial y de la precariedad laboral un modo de vida.

Los teóricos del “fin del trabajo” han realizado un aporte sustancial en relación al impacto de las nuevas tecnologías, al futuro de la sociedad y de algún modo, acerca

de lo que puede esperarle, en las próximas décadas, a la propia especie humana. El punto más vulnerable de este enfoque – que ha ganado una merecida jerarquía en el mundo académico y de la investigación social – es que repite, con mejor instrumental, el “ritual de los espejos” que tan caro pagaron los filósofos positivistas del siglo XIX y las interpretaciones vulgares del marxismo. Se pensó entonces que la imagen reflejada en el cristal no era más que la prefiguración de lo que serían las sociedades atrasadas un siglo después obligadas a caminar por el sendero que abrieron las potencias industrializadas de la época. Se cristalizó, de esta forma, una visión lineal de los procesos sociales, con un origen reconocido y con un final anunciado.

Si – visto como alegoría – las ciencias sociales, para merecer ese estatus, deben ser “fuente”, es decir creación y proyección, el juego de buscar en el espejo el camino que la humanidad habrá de recorrer conduce a un laberinto de especulaciones teóricas que ofrece una sola salida: la historia ya está escrita y las sociedades periféricas caminan por una ruta que hace cien años las encandiló con una industrialización que, para nuestra mala fortuna, llegó deforme y tardía y que ahora ofrece ocio y evasión consumista para unos pocos y pobreza a millones de excluidos que ven cerrarse el ciclo del trabajo productivo.

Tal vez sea éste el aporte más significativo de la corriente de la sociología laboral cuyas reflexiones parten de un núcleo central que es el agotamiento del trabajo tal como lo habíamos concebido hasta hace pocos años. La extensión de la pobreza y la pauperización de amplias capas de trabajadores que tenían en el empleo asalariado una alternativa más o menos segura para alcanzar una vida digna y acceder a los canales de movilidad social son referencias por demás significativas de la realidad

cotidiana de nuestros países. Pero este fenómeno no responde, como afirmarían los autores que se inscriben en la teoría que estamos describiendo, en la finalización de la “sociedad del trabajo”. Para explicar el incremento del desempleo, de la precariedad ocupacional y de la pobreza es necesario acudir al estudio de las características del desarrollo capitalista en nuestros países y de manera particular, reconocer y sopesar los perfiles que le dan un sentido propio a cada formación social.

América Latina ha vivido de manera particularmente dramática, la ruptura de un ciclo relativamente prolongado de crecimiento económico, expansión del empleo y ampliación de los canales de movilidad social. La constitución de las fuerzas políticas y el surgimiento de las expresiones corporativas de los diversos grupos sociales estuvo estrechamente relacionado a este vasto proceso de *asalarización* de la población, a la modernización del campo y a la conformación de un sector empresarial vinculado a las necesidades del mercado interno y a la demanda de bienes y servicios de consumo masivo.

Este ciclo de bonanza – que concilió crecimiento económico con mejoras en el nivel de vida de amplios sectores de la población – dio paso, a fines de los setentas, a la instalación y coexistencia de un juego perverso de variables. La nueva estrategia de desarrollo combinó bajas tasas de inflación y crecimiento moderado del producto con el desempleo y empobrecimiento de amplios contingentes de trabajadores. En párrafos anteriores apuntábamos la manera en que se habían acentuado la segmentación del mercado de trabajo y la caída relativa del empleo formal en el conjunto de la estructura ocupacional así como el notorio incremento de las diversas formas del empleo precario,

de las tareas que se desarrollan en el sector informal de la economía, del trabajo domiciliario y de las llamadas modalidades flexibles de contratación.

Esta situación general de deterioro de las condiciones laborales contribuyen a expandir la pobreza y dificultar la lucha contra la desigualdad social ⁷¹. Sobre estos dos fenómenos es importante consignar que no pueden ser atribuidos exclusivamente a la política económica neoliberal implantada en los últimos veinte años. Las medidas de ajuste y los programas de reestructuración del aparato productivo fueron impuestos a plenitud cuando la resistencia que podía oponer la antigua estrategia desarrollista de “crecimiento hacia adentro” había encontrado un techo en sus posibilidades de expansión. Pero el cambio de políticas y de las disposiciones instrumentales con la que éstas se aplican no se restringe a modificar variables meramente económicas. Por el contrario, se trata de un proceso *macro* que excede la fórmula simplista de reorientar la asignación de prioridades en materia de inversiones, de nuevos criterios en la adjudicación de créditos o del diseño y aplicación de políticas impositivas más restrictivas.

La nueva orientación “hacia fuera” de las economías latinoamericanas requirieron la liquidación de aquellos sectores de la planta productiva que resultaban menos funcionales al modelo exportador. La modificación de las políticas arancelarias aceleró la apertura comercial y potenció ciertas tendencias disgregadoras que permanecían ocultas bajo el manto de la tutela estatal y del proteccionismo aduanero.

Cuando la reforma del Estado redujo las dimensiones del paraguas institucional mediante el cual el sector público había protegido a aquellos sectores de la sociedad

cuyo crecimiento estuvo vinculado, en buena medida, a la expansión de las dependencias y organismos del Estado, la reconfiguración de los mercados laborales tuvo efectos múltiples que golpearon sobre varios flancos de la realidad social. La restricción de los márgenes de legitimidad de la acción sindical así como la disminución de su auditorio natural – el trabajador asalariado con ocupación estable – fueron factores que se conjugaron para potenciar el debilitamiento político de las organizaciones obreras y disminuir su capacidad de reclutamiento. También el esquema tripartito – Estado, sindicatos, empresas – mediante el cual se regulaban las relaciones obrero-patronales y se normaba la solución de los conflictos sociales, cedió su lugar a un sistema que se sustenta en una coalición cuyos dos elementos principales son el “Estado neoliberal” y los sectores más concentrados del capital financiero e industrial.

El conjunto de fenómenos que se señalan son la expresión, más visible, de un proceso de transformaciones *epocales* en las relaciones de poder entre capital y trabajo y de cambios profundos en los referentes simbólicos y culturales de amplios segmentos de la población. En el plano estructural se acentúan algunas manifestaciones ocupacionales que apuntábamos al inicio de este capítulo. La escasa elasticidad de los capitalismos latinoamericanos para generar empleos de calidad a un ritmo equivalente al que aumenta la oferta de mano de obra refuerzan los vínculos causales entre la posición que los individuos alcanzan en el mercado de trabajo y las condiciones de pobreza en que viven ^{8/}.

En la mayoría de los países de la región en los que se aplicaron políticas económicas de inspiración neoliberal se registró un incremento de la precariedad ocupacional y de

las formas de trabajo no convencionales (ausencia de contratos colectivos; mecanismos encubiertos de subcontratación; empleo domiciliario y pago a destajo; carencia de seguridad social; etc.). Sin embargo, las tasas de desempleo abierto han presentado un comportamiento menos uniforme. En los países donde los mercados de trabajo vinculados a la industria y los servicios estaban más estructurados y los sistemas de protección a la mano de obra desocupada habían alcanzado cierto nivel de consolidación los registros de desempleo abierto suelen ser elevados. Los casos de Argentina, Uruguay y Chile resultan ilustrativos en esta materia, en los tres países el desempleo abierto oscila entre el 10 y el 18 por ciento, después de haber tenido tasas históricas que excepcionalmente llegaban a dos dígitos. Cabe puntualizar que en Latinoamérica no se dispuso nunca de un sistema de cobertura destinado a proteger al ciudadano desempleado que tuviese los recursos y la solidez con la cual se levantó el entramado institucional que se articuló en los países industrializados ^{9/}. Del conjunto de naciones que integran la región sólo ocho países han instrumentado sistemas que guardan cierta semejanza con los seguros de desempleo que se otorgan en las economías desarrolladas. Sobre este aspecto es necesario apuntar que se trata de una cobertura “no universal” y que tanto las formas de financiamiento, como el monto del ingreso otorgado y el tiempo de duración son sumamente variables ^{10/}. En algunos casos el trabajador cesante recibe el pago durante 26 semanas y la percepción equivale a un rango comprendido entre el 40 – 60% del salario como ocurre en Barbados o se registran situación más atípicas como la de México donde a través de recursos que provienen de aportes obrero-patronales lo que se paga es una pensión – no un seguro – para trabajadores mayores de 60 años. Además de los dos países citados, este tipo de cobertura existen, con diferencias y particularidades propias, en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Junto al debate sobre el presente y el futuro del trabajo en nuestros países hay otro tema de la agenda social que atraviesa la teoría y la política cada vez que se formulan programas de atención a los grupos más desprotegidos de la población. La pobreza y la marginación ocupan un lugar tan relevante en la literatura social como las cuestiones ocupacionales y, en general, los autores coinciden en afirmar que existe una estrecha relación entre la calidad del empleo y el nivel de los ingresos con las condiciones de vida de los trabajadores ^{11/}.

Es posible identificar cuatro hipótesis explicativas desde las cuales se ha procurado hacer comprensible una relación causal que parece caer por su propio peso – sin necesidad de elaboraciones teóricas demasiado sofisticadas – pero que resulta menos lineal de lo que puede suponerse al momento de formularlas y, sobre todo, al analizar el comportamiento de dos variables sustanciales como son la evolución del producto y el desempeño de los indicadores ocupacionales.

Las hipótesis referidas – de las cuales aquí se considerarán sólo algunos aspectos – son las siguientes: a. Existe un desfase entre el desempeño del producto y la generación de nuevas oportunidades de trabajo. La creación de empleos queda rezagada aún en los períodos en que el crecimiento del producto interno bruto registra tasas alentadoras. Para reducir esta brecha habría que profundizar las reformas laborales que están pendientes o han quedado a mitad de camino (desregulación de los mercados de trabajo; mayor movilidad sectorial o regional de la mano de obra; simplificación de los mecanismos de contratación y despido del personal; etc.); b. El desempleo y la subocupación se explican a partir del retraso educativo y de la insuficiente calificación de la población en edad de trabajar. La escasa generación de

vacantes, así como la persistencia de amplios bolsones de pobreza y marginación, son el resultado de la presencia de vastos contingentes de sujetos en edad activa que carecen de los conocimientos y habilidades básicas para incorporarse a un trabajo productivo; c. Para esta tercera hipótesis el desempleo y la pobreza se explican por el carácter perverso de las innovaciones tecnológicas. Dentro de esta línea de razonamiento se acepta – con diversos matices y preocupaciones según el ángulo de enfoque que adoptan los autores – que el progreso tecnológico conduce, de manera irremediable, al fin del trabajo. Desde la perspectiva de los capitalismos latinoamericanos es necesario puntualizar que este factor no puede ser identificado como el principal responsable de la escasa generación de puestos de trabajo o del incremento de los nichos de pobreza. El aparato productivo de los países de la región sigue mostrando heterogeneidades profundas en las que coexisten sectores tradicionales con equipos y criterios organizativos tradicionales frente a industrias de vanguardia que aparecen como verdaderos trasplantes de las casas matrices instaladas en las economías centrales (automotrices; petroquímica; electrónica; siderurgia; etc.); d. Esta cuarta hipótesis sostiene que no habrá despegue económico y superación de la pobreza y del desempleo mientras no se completa la obra desregulatoria de los mercados laborales y se reduzcan los costos directos e indirectos asociados a la incorporación y el despido de la mano de obra. Según este enfoque la responsabilidad recae en una legislación vetusta, heredada de la etapa del nacionalismo popular y de la industrialización protegida. Para estimular las inversiones y facilitar la movilidad de la fuerza de trabajo deben quitarse los obstáculos que representan las anteriores leyes y reglamentos tutelares. El antiguo sistema de pago de primas por antigüedad, indemnizaciones por despido, aportes patronales por concepto de seguridad social y pago de pensiones y jubilaciones, entre otros conceptos, desestimulan a los inversionistas y le restan transparencia al funcionamiento del mercado ya que distorsionan lo que debiera ser la libre movilidad de los factores.

Con respecto a la modificación de la legislación laboral es importante consignar que pese a la ofensiva sostenida en esta materia, para 1996, la promulgación de un nuevo marco jurídico, desregulatorio de las relaciones laborales, sólo se había alcanzado en seis países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú ^{12/}. No obstante, es preciso apuntar que la flexibilización de los mercados de trabajo se ha implantado por la vía de los hechos y que los nuevos preceptos contractuales se aplican sin que se reformulen las legislaciones y disposiciones reglamentarias que fueron promulgadas en la etapa en que se consolidaron las estrategias que hacían del proteccionismo la principal herramienta del crecimiento ^{13/}.

Las reflexiones anteriores permiten formular el tema de la pobreza desde una perspectiva más precisa. ¿Se trata de un fenómeno *sistémico* o sólo es la expresión visible de una insuficiencia transitoria en la perspectiva alentadora de un modelo de reestructuración productiva destinado a generar bienestar y progreso?.

Desde el inicio conviene señalar que del sólo repaso de lo que ha sido la experiencia de modernización de los capitalismos latinoamericanos desde fines de los setentas hasta la fecha, es posible afirmar que se está en presencia de un fenómeno que tiene una dimensión integral ^{14/}. Si, como pensamos, se trata de un componente sistémico del modelo no puede aceptarse la idea de que el incremento de la pobreza, del desempleo y de la marginación social constituyen expresiones negativas – y un tanto accidentales – de ciertas variables macroeconómicas que escaparon de control. Algunos enfoques han interpretado este fenómeno fuera de contexto y esto les ha permitido concebir el tema social como la “pata débil” del modelo, la “tarea pendiente”

de los programas de ajuste o la “deuda social”, como prefirió llamarlo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ^{15/}.

El fuerte énfasis exportador del nuevo modelo modificó la importancia y función que habían jugado algunas variables económicas durante la etapa populista de industrialización. Bajo los preceptos de esa estrategia el salario tuvo una doble significación, por un lado constituía un instrumento de reproducción de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo era un mecanismo de realización de la plusvalía mediante el estímulo del consumo de bienes y servicios de demanda masiva. La implantación del modelo de apertura comercial acotó el papel del nivel de los salarios reales. Si bien los ingresos de la población asalariada siguen siendo un elemento fundamental para realizar la producción que se orienta hacia el mercado interno, el nivel de los salarios es visto ahora con signos de alerta porque la preocupación de las empresas se focaliza en la *reducción de los costos laborales*, directos e indirectos, como un requisito estratégico para ingresar en mercados más inestables y competitivos.

Este capitalismo de fin de siglo, hijo de la reestructuración productiva y de la globalización de los mercados, requiere la disponibilidad de una masa de fuerza laboral que viva en condiciones de subocupación y con ingresos raquíticos. La contratación por tiempo determinado y a jornada parcial, el trabajo domiciliario y la externalización de ciertas fases de los procesos productivos son *políticas de largo alcance* y no atajos con los cuales las gerencias procuran sacar ventaja a sus competidores. De esta manera, es correcto afirmar que hay factores estructurales – sobre los cuales se volverá en los capítulos siguientes - vinculados a la acumulación del capital, que explican la lógica que amarra un fenómeno como el de la precariedad ocupacional – y en general a las

cuestiones relacionadas al empleo – con el crecimiento de la pobreza y la disgregación de las antiguas identidades sociales.

NOTAS

^{1/} Campillo, Marcia y Enrique de la Garza, “¿Hacia Dónde va el Trabajo Humano?”, Caracas, *Nueva Sociedad* Núm. 157, septiembre-octubre 1998.

Borzeix, Anni, “La Sociología del Trabajo y el Lenguaje”, México, ALSTRA, *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, Año 2, Núm. 4. 1996.

^{2/} Vilas, Carlos, (comp.), *La Democratización Fundamental. El Populismo en América Latina*, México, Conaculta, 1995.

^{3/} Kliksberg, Bernardo, “Repensando el Estado para el Desarrollo Social: Más allá de Dogmas y Convencionalismos”, en *Gestión y Política Pública*, Vol. VII, Núm. 2, México, CIDE, 1998.

^{4/} Laurell, Cristina, (coordinadora), *Estado y Políticas Sociales en el Neoliberalismo*, México, Fundación F. Ebert, 1993.

^{5/} Cavarozzi, Marcelo, “América Latina Contemporánea: Erosión del Estado y Devaluación de la Política”, en Manuel Canto y Pedro Moreno, (comp.), *Reforma del Estado y Políticas Sociales*, México, UAM-Xochimilco, 1994.

^{6/} Rifkin, Jeremy, *El Fin del Trabajo*, México, Paidós, 1996.

Más enfático aún que el propio Rifkin, el investigador francés André Gorz, reitera y profundiza algunas de las hipótesis que desarrolló a fines de los setentas. En su último libro *Misérias del Presente, Riqueza de lo Posible*, (Buenos Aires, Paidós, 1998), da por muerta la sociedad del trabajo y propone “salir de la sociedad salarial”.

En un tono más descriptivo, pero dentro de esta misma concepción, puede verse: Forrester, Viviane, *El Horror Económico*, México, F.C.E., 1997.

^{7/} Peñalva, Susana y Alejandro Rofman (compiladores), *Desempleo Estructural, Pobreza y Precariedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.

- ^{8/} Salama, Pierre, "Pobreza, Empleo e Inflación en América Latina", Caracas, *Nueva Sociedad* Núm. 156, julio-agosto 1998.
- ^{9/} Cardarelli, Graciela y Mónica Rosenfeld, *Las Participaciones de la Pobreza. Programas y Proyectos Sociales*, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- ^{10/} Laurell, Cristina y Luisa Mussot, "El Empleo y los Nuevos Modelos de Relaciones Laborales y del Seguro Social", en Daniel Cieza (comp.), *La Encrucijada del Desempleo ante el Tercer Milenio*, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 1999.
- ^{11/} Vilas, Carlos, "Deterioro Laboral y Exclusión Social: La Otra Cara del Crecimiento", en Daniel Cieza (comp.), *op. cit.*
- ^{12/} Laurell, C. y L. Mussot, *op. cit.*
- ^{13/} Candia, José Miguel, "América Latina hacia el Siglo XXI: Globalización Económica y Reforma Laboral", en *Estudios Latinoamericanos*, Año VI, Núm. 11, México, CELA-UNAM, enero-junio 1999.
- ^{14/} Vilas, Carlos, "Deterioro Laboral y ..." *op. cit.*
- Portella de Castro, Silvia y Achim Wachendorfer (coordinadores) *Sindicalismo y Globalización. La Dolorosa Inserción en un Mundo Incierto*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1998.
- ^{15/} *Ajuste y Deuda Social. Un Enfoque Estructural*, Santiago de Chile, OIT-PREALC, 1988.

Con una concepción "cepalina" este texto presenta un diagnóstico y propuestas de solución al problema de la pobreza y del desempleo que refuerzan la idea, según la cual, el principal desafío es resolver esta "asignatura pendiente" en la agenda de los programas de apertura de las economías de la región.

C a p í t u l o I I I

Nuevos Movimientos Sociales: Núcleos Antisistémicos o Formas Encubiertas de Integración Social

Nuevos Movimientos Sociales: núcleos antisistémicos o formas encubiertas de integración social

No por casualidad el tema cobró auge cuando declinaron, en el mundo académico y en el espacio de la política, un conjunto de principios que le habían dado congruencia al universo de certezas sobre las cuales se levantó y ganó legitimidad el pensamiento crítico. Ciertos postulados, recurrentes en las ciencias sociales, quedaron en medio del fuego cruzado de impugnaciones que nacían, en parte, de un fenómeno político que alteró los parámetros a partir de los cuales se analizaba el mundo de los hombres y de los Estados: el colapso del “socialismo real” en la Europa del Este. Pero, no puede ignorarse, que ese torrente de opiniones cuestionadoras había sido alimentado por un debate que antecedió al derrumbe del bloque soviético y que tuvo en el terreno de la teoría sus manifestaciones más significativas. Durante los años setenta la discusión ya había alcanzado a conceptos que eran verdaderos puntales para las corrientes marxistas de las ciencias sociales. Entre otras cuestiones teóricas, el debate incluyó la reinterpretación de la categoría clase social, que en la literatura clásica explicó al proletariado como fuente generadora de riqueza y sujeto portador de un proyecto destinado a emancipar a toda la sociedad y liberarla de la explotación y la desigualdad; la idea del colapso, más o menos anunciado, del capitalismo por la vía del estallido de sus propias contradicciones o por la acción consciente de la vanguardia política de la clase obrera y, en general, se redefinieron la mayoría de los fenómenos vinculados a los procesos que envuelven la compleja relación entre estructura material y constitución del ser social, entre economía y política, entre trabajo y conciencia de clase.

La polémica fue particularmente virulenta en el marxismo occidental. El estancamiento o el declive y pérdida de representación social de los antiguos partidos comunistas, propició la aparición de corrientes *heterodoxas*, que sin renegar de la matriz ideológica

que crearon los fundadores del socialismo moderno, cuestionaron algunos temas clave como la construcción y el papel del partido de vanguardia, la relación entre la organización política portadora del mandato revolucionario y el resto de los sectores sociales y en especial iniciaron un amplio proceso de análisis acerca de la relevancia y función de aquellas instancias de organización social, que sin adoptar la “forma partido”, expresaban los intereses de vastos sectores populares. El entrecruzamiento de demandas que suelen expresar estos agrupamientos amplió el abanico de la discusión. Ya no podía restringirse el tratamiento de lo “popular” a la cuestión salarial, los problemas sindicales, la construcción del partido obrero o las estrategias de asalto al poder. Desde las clases subalternas nacía un mandato que reclamaba por el deterioro, pérdida o ausencia de recursos mediante los cuales se atienden las necesidades básicas de la vida cotidiana. Aunque las demandas específicamente orientadas a los aspectos laborales no desaparecían se entremezclaban ahora con requerimientos puntuales que escapaban a la fábrica como núcleo central de conflicto. Las peticiones dirigidas a cuestiones como vivienda, transporte, salud, agua potable y luz eléctrica, junto a otras que apuntaban a derribar prejuicios culturales – igualdad de oportunidades; no discriminación por sexo, religión o grupo étnico, etc. – aparecían en un primer plano de la protesta social y comenzaban a ocupar espacios públicos que tradicionalmente habían pertenecido a las agrupaciones políticas o sindicales que expresaban los intereses de los sectores asalariados de la población.

El examen de las anteriores concepciones acerca de la vinculación entre partido y sociedad llevó a revisar también los principios leninistas de construcción y funcionamiento del partido de vanguardia. Del viejo tronco del marxismo europeo se desprendieron dos corrientes principales a partir de las cuales se procuró explicar tanto el fracaso del socialismo tradicional como los desafíos de la nueva realidad social. Un segmento importante de la intelectualidad de izquierda y del activismo obrero de origen

marxista se propuso recuperar la historia del movimiento de los trabajadores de principios de siglo y con ello rescatar, al menos parcialmente, algunas de las experiencias más significativas en el campo de la formación de organizaciones obreras autónomas ^{1/}. De esta forma, desde mediados de los sesentas y durante buena parte de los setentas, resurgió el interés por el estudio y el impulso de prácticas “consejistas” entendiendo que los consejos de fábricas eran instancias superiores a cualquier otra forma de organización obrera.

Por este camino se promovió el retorno a la fábrica, al análisis de la problemática del trabajo y al estudio de las formas de gestión de la producción. El corolario de este proceso de investigaciones teóricas y de experiencias prácticas, que efectuó esta corriente de la izquierda marxista, se conoció como el “consejismo obrero”. Los consejos de fábrica, organizados por sección, eran la expresión directa del interés y la voluntad de los trabajadores y constituían la verdadera “célula democrática de la sociedad”. De esta forma, era posible prescindir del sindicato como manifestación de los intereses inmediatos del proletariado y del partido, como portador del proyecto histórico de la clase obrera. Con ésto se procuraba recuperar, al mismo tiempo, el espíritu democrático y autogestivo de los “soviets” de los primeros años de la revolución rusa. El desinterés que esta franja de la izquierda demostró por los procesos electorales y, en general, por toda forma de lucha que trascendiera el espacio de la fábrica, hizo que se la conociera como una expresión del socialismo “extra-parlamentario”.

En su versión más extrema, las corrientes marxistas que abrazaron este enfoque – y que alcanzaron un buen nivel de desarrollo en los grandes centros fabriles del norte de Italia – se nuclearon en torno a un conjunto de ideas básicas cuyos postulados centrales eran los siguientes:

- El establecimiento del socialismo sólo podrá alcanzarse mediante la auto-organización del proletariado en consejos obreros de fábrica.
- Los movimientos de lucha que ponen en marcha los consejos son contrarios a cualquier forma de mediación que lleve a la toma de decisiones al margen de la voluntad directa de los trabajadores y, por esta vía, también debían ser ajenos a los partidos y sindicatos.
- Además de negar a los partidos, por considerarlos instrumentos de dominación o de manipulación de la voluntad de los trabajadores, se repudió también la lucha política en las “instituciones burguesas”, particularmente en el poder legislativo.
- Con respecto a los sindicatos, los consejistas los definieron como organismo propios de la sociedad capitalista, cuya única utilidad es perpetuar la dominación burguesa.
- La degeneración de la revolución soviética y la burocratización de los regímenes de las llamadas “democracias populares” en la Europa del Este eran una confirmación de que la solución “tipo bolchevique” no lleva al socialismo sino a nuevas formas de dominación.

Del desencanto y la crítica al marxismo oficial, de inspiración soviética, y en particular, de la necesidad impostergable de encontrar explicación a fenómenos sociales relativamente inéditos que confrontaban la teoría y la práctica desde la cual se había procurado hacer comprensibles las luchas populares, surgió otra escuela de pensadores, analistas y activistas políticos. Esta corriente de la izquierda volcó su mirada no al centro de trabajo, ni al estudio detallado de los procesos productivos – como motor de las movilizaciones populares y núcleo formador de conciencias – sino al conjunto de la sociedad civil como el espacio en el cual los grupos y sectores sociales despliegan sus demandas, dirimen sus conflictos y luchan por el logro de una resolución favorable a sus peticiones ^{2/}. Es un espacio abierto a la lucha por la

hegemonía, entendiendo por ésto no un fenómeno de imposición de determinada dirección partidaria, sino el proceso mediante el cual una fuerza social construye consensos, hace explícitas sus demandas y reconoce e impulsa las que levantan otros grupos populares o sectores excluidos de la sociedad. Mediante este andar, accidentado y desafiante, se procura potenciar las protestas y aglutinar el heterogéneo mundo de las clases y grupos subalternos.

En la constitución y desarrollo de las nuevas acciones colectivas pueden identificarse al menos tres matices, de fuerte consistencia, que lo diferencian de la concepción clásica de los conflictos sociales. Un primer elemento que debe consignarse es que los reclamos específicamente laborales no necesariamente son el detonante ni el eje articulador de las luchas populares. Un segundo componente es que, con frecuencia, los factores que motivan el arranque de las acciones colectivas y favorecen la resolución del conflicto en determinada dirección están asociados a demandas sectoriales que se vinculan a las condiciones generales de vida de la población como la salud, educación, el suministro de ciertos servicios básicos o bien a reclamos que provienen de grupos sociales que son excluidos por cuestiones de género, pertenencia étnica o religión. Por último, en la mayoría de los casos los sectores que impulsan los procesos de movilización no lo hacen en la perspectiva de una estrategia que debe culminar con el asalto al Estado sino en el reconocimiento de la legitimidad de las peticiones que originaron el conflicto y en la justa atención de las mismas por parte de las autoridades. La afirmación anterior describe una tendencia que parece dominante en este tipo de acciones colectivas, no obstante el hecho de no proponer – al menos de manera explícita - la destrucción, o el control de las instituciones públicas, no excluye que en el desarrollo de los conflictos se registren episodios de violencia o situaciones de suma o resta de aliados y simpatizantes. Este proceso, dinámico y cambiante, responde a la forma en que se modifique la correlación de fuerzas y de acuerdo a como

se lleven a cabo las negociaciones en las que se admite el *toma y daca* con las autoridades hacia las cuales se han dirigido los petitorios.

Las tres características citadas constituyen una aproximación a un fenómeno complejo como es la emergencia de nuevos actores sociales y de acciones colectivas que escapan al planteamiento clásico de los conflictos obrero-patronales o a la dinámica propia de los procesos electorales en los que compiten agrupaciones políticas formalmente constituidas. Tanto partidarios como detractores de estos nuevos acontecimientos sociales han reconocido la potencial importancia teórica y política de los mismos, ésto ha estimulado la elaboración de una gran cantidad de ensayos y estudios que van de las referencias puramente históricas y descriptivas a las investigaciones realizadas con un sustento conceptual más sólido y mediante técnicas de estudios participativos. La producción bibliográfica que comenzó a generarse en Europa durante los setentas se enfocó, de manera particular, sobre el surgimiento y desarrollo de los movimientos pacifistas, ambientalistas, juveniles, feministas y más tarde acerca de los grupos que se constituían para defender los derechos de los migrantes y de las minorías sexuales. ^{3/}

La experiencia latinoamericana se orientó, desde el inicio, hacia el estudio de las acciones colectivas que surgieron como resultado de carencias materiales más apremiantes. La falta de vivienda y de servicios básicos en los barrios urbanos marginales; el reclamo por un espacio físico donde desarrollar una actividad laboral, en el caso de los trabajadores informales que ocupan áreas de uso común; el problema de tenencia de la tierra en las comunidades de campesinos pobres; la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo; la marginación y el olvido de los grupos indígenas ^{4/}.

A mediados de los ochenta, se agregó una nueva temática que cobró especial relevancia en algunos países de la región. Se trataba de un reclamo que surgía como consecuencia de las secuelas que dejó la aplicación de las formas más brutales del terrorismo de Estado por parte de los regímenes dictatoriales que habían gobernado buena parte de los países del área. Los movimientos en defensa de los derechos humanos fueron el canal de expresión de quienes sufrieron, de manera directa, los efectos del accionar represivo, pero al mismo tiempo, se transformaron en espacios de protesta contra la cancelación de los derechos políticos y sindicales y contra la supresión de las libertades individuales.

Hay un rasgo común en los movimientos sociales que, con propósitos ilustrativos, se mencionaron en los párrafos precedentes. En ningún caso se trata de organizaciones expresamente constituidas con el propósito de gestar un asalto revolucionario a las instituciones, sino de formular propuestas reivindicativas que sean atendidas favorablemente por los gobiernos. La coincidencia – en tiempo y lugar – de este tipo de luchas sectoriales con otros conflictos de naturaleza más estrictamente política puede dar lugar a procesos de desestabilización social que aparezcan como una amenaza para el orden institucional vigente. Pero lo que realmente define a estas nuevas acciones colectivas es la primera de las características que mencionamos, es decir, su calidad de ámbitos de autoidentificación y de canalización de la protesta de ciertos grupos subalternos o sectores excluidos de la sociedad y no su condición de organizaciones concebidas para luchar por el control del Estado. No obstante, es oportuno consignarlo, existen valiosas experiencias de *autogestión* – y en este sentido de inspiración *antiestatal* – en las que pobladores urbanos marginales, campesinos pobres o trabajadores por cuenta propia, se nuclean con el fin de poner en marcha proyectos productivos, obtener recursos materiales para satisfacer necesidades primarias o lograr ciertos servicios imprescindibles para la vida cotidiana.

En este punto es conveniente insistir sobre algunas cuestiones a las que se ha hecho referencia a lo largo del capítulo. Aunque las organizaciones a las que se identifican como nuevos movimientos sociales adoptan una gran variedad de formas y criterios para agruparse, así como para manifestarse ante la opinión pública, es posible reconocer que existe en estos grupos un aspecto *cualitativamente nuevo* de la actividad que los ciudadanos despliegan cuando demandan al Estado, cuestionan de manera particular a ciertas dependencias del gobierno o bien confrontan a otros sectores sociales. Es desde esta perspectiva que el concepto adquiere estatus teórico, legitimidad analítica y utilidad práctica. Sin embargo, también es oportuno señalarlo, entendemos que esta concepción no inhibe otras categorías como clase social, ni cancela la validez de conceptos como el de explotación o dominación. El dato relevante es que se trata de un instrumento analítico que abre un camino novedoso para explicar la práctica social de grandes segmentos de la población que ocupan espacios cada vez más importantes de la escena pública y que no se encuadran plenamente en las formas organizativas tradicionales como los sindicatos o partidos políticos.

Con respecto a esta última afirmación es necesario hacer un apunte complementario. El dato, empíricamente verificable, del carácter “no partidario” de los nuevos movimientos sociales no es un valor absoluto. Con frecuencia se detectan empatías y acercamientos en el despliegue de las tareas organizativas y de movilización entre agrupamientos políticos formalmente constituidos, o predicadores laicos de la Iglesia Católica, con la base social que da sustento a las acciones colectivas de nuevo tipo. Es suficiente ilustrar lo que decimos con algunos pocos ejemplos. En México resulta notoria la presencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en barrios y colonias populares. El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil ha logrado un fuerte reconocimiento en las favelas que rodean a los centros urbanos más importantes del

país y las comunidades cristianas de base en Chile impulsaron la organización de los colonos de las zonas más pobres del perímetro conocido como el Gran Santiago.

El estudio de lo “nuevo” encierra varios riesgos que es conveniente identificar desde ahora. Existe una amplia corriente del pensamiento social que sigue pagando tributo a la teoría funcionalista del equilibrio y de la racionalidad fundante del conjunto de una sociedad ^{5/}. Al ser entendida ésta como un “sistema de acción” se afirma que es posible subdividirlo en cuatro componentes principales: a. Sistema cultural, formado por creencias y elementos del sentido común, por la religión, el idioma y los valores que se asocian a la tradición nacional; b. Sistema social, integrado por el proceso mediante el cual los actores llevan a cabo la socialización tomando como referencia el conjunto de valores compartidos y aceptados que integran el sistema cultural. Este proceso ayuda a conservar el control social y mantener la estabilidad y la cohesión de cualquier comunidad por simple o muy desarrollada que sea; c. Sistema de la personalidad, este tercer concepto se vincula a la identidad individual de los sujetos que comparten un marco de referencias culturales similares y d. Organismo de conducta que es entendido como una conexión entre la expresión biológica de los seres humanos y el medio físico en el cual se desenvuelven.

Buena parte del andamiaje conceptual de la visión funcionalista de la sociedad se estructuró, a partir del enfoque positivista que se desarrolló durante el siglo XIX. Sostiene la idea de utilizar un acercamiento macrosociológico a los problemas humanos y percibe a las relaciones sociales como elementos funcionales. De esta manera, jerarquiza dos aspectos fundamentales: el mantenimiento del equilibrio y la conservación del orden social y afirma que el papel de las instituciones es regular el surgimiento y desarrollo de las protestas sociales que actúan como diques de resistencia a los procesos de modernización. Una concepción dicotómica entre lo

“tradicional y lo moderno” lleva a que los análisis funcionalistas se circunscriban, preferentemente, en la formulación de respuestas que permitan afrontar y resolver acontecimientos sociales que puedan resultar “disfuncionales” y generar rupturas sistémicas.

Las referencias anteriores, planteadas, de algún modo, a manera de deslinde teórico, nos permiten exponer, más explícitamente, el marco conceptual desde el cual se abordará en este trabajo el fenómeno de los nuevos movimientos sociales. Es preciso señalar, como punto de partida, que se reconoce, en ese tipo de expresiones populares, a dos componentes centrales. Por un lado, la presencia dominante de cierto activismo social que registra una débil o ambigua articulación con el aparato productivo. El otro elemento relevante es que la movilización de actores cuya constitución se define por referentes territoriales, (barrios marginales, colonias populares, campesinos pobres, etc.); relaciones de género; identificaciones étnicas o agrupamientos generacionales, registran, de todas maneras, una procedencia socioeconómica definida ^{6/} El caso latinoamericano resulta ilustrativo en este sentido. En la mayoría de los movimientos estudiados y acerca de los cuales existe una literatura relativamente abundante, predomina una base social popular de ciudadanos pobres y desposeídos. Aún en aquellos temas convocantes que no reconocen un origen socioeconómico preciso – ecologistas; derechos humanos; cuestiones de género; fenómenos juveniles o demandas culturales – se observa la presencia de grupos sociales que, de todos modos, guardan vinculación con un escenario de exclusión institucional y de discriminación del complejo sistema de decisiones a través del cual se toman e instrumentan las resoluciones políticas que, de un modo u otro, afectarán su vida.

El estudio de los nuevos movimientos sociales corre otros riesgos acerca de los cuales es conveniente advertir su presencia y poner distancia para evitar el sesgo de las

investigaciones. Existe una tendencia, con un estatus teórico reconocido, que se guía por una lectura unilateral de este tipo de fenómenos. La activación de nuevos actores sociales es interpretada como la constitución de acciones colectivas en las cuales la articulación con el mundo del trabajo y, en general, con las relaciones de producción no es un dato significativo. Desde esta perspectiva se tiende a “desclasar” la base social de los nuevos movimientos populares y procuran potenciarse los determinantes de orden cultural y simbólico, las pertenencias regionales, la relación con las instituciones y la necesidad de ciertos segmentos de la población de construir y expresarse mediante una identidad propia ^{7/}.

La otra cara de la moneda proviene de un enfoque de la realidad social que subsume todos los conflictos – de cualquier naturaleza o procedencia - a la relación capital – trabajo y afirma que sólo puede explicarse el comportamiento de un actor social específico si se pondera – como un factor determinantes - el papel que juega dicho actor en las relaciones de producción vigentes. Cierta *esencialismo de clase*, heredero de algunas tradiciones de la literatura marxista clásica, le impide identificar y apreciar, en toda su dimensión, la constitución de la subjetividad y la manera en que este elemento influye en las prácticas colectivas de los diversos sectores de la población ^{8/}.

Desde esta óptica los movimientos sociales interesan, casi exclusivamente, por la profundidad y eficacia revolucionaria de sus acciones y demandas. El éxito de sus movilizaciones y la posibilidad de contribuir a procesos de transformación social está sujeto a la capacidad que demuestren para vincularse al movimiento obrero y al proyecto socialista del proletariado ^{9/}. Algunos autores llegaron a aceptar que la multiplicación de los movimientos de protesta tenía un papel y una gravitación insustituible en la conformación de un frente revolucionario con una base social policlasista. Sin embargo, reiteraron el imperativo de subordinar a esas organizaciones

sociales al partido de vanguardia de la clase obrera. De esta forma, en muchos de los estudios que elaboró la sociología latinoamericana la idea rectora que articulaba conceptualmente estas interpretaciones era que los movimientos campesinos y urbano–populares debían entenderse como un producto del antagonismo de clase y de la profundización de la crisis capitalista. Esas mismas investigaciones explicaban que la imposibilidad de resolver con éxito los reclamos obedecía a la ausencia de un enlace orgánico de estas expresiones sociales con las organizaciones de vanguardia que representan los intereses históricos del sector más estructurado de la clase obrera.

Con respecto a la definición que aquí sostenemos acerca del surgimiento y del papel de los nuevos movimientos sociales es necesario explicitar las dudas que nos generan las elaboraciones teóricas que hacen algunos autores, mediante la cual procuran diferenciar, al interior de la acción colectiva, los fenómenos que pueden calificarse como *acción conflictual* de otros episodios que es posible identificar como *movimiento social*. Esta corriente del pensamiento sociológico – cuya producción se ha dirigido expresamente a analizar la dinámica que rige el comportamiento de los nuevos actores y las causas que explican la aparición de los mismos – afirma que la *acción conflictual* se despliega dentro de los límites del sistema y que un *movimiento social*, para que tenga el carácter de tal, debe ser una acción colectiva que tienda superar esos límites ^{10/}.

Acerca de este tipo de lecturas es necesario dejar constancia de dos observaciones centrales. El enfoque referido tiene el acierto de jerarquizar y poner a salvo la idea de movimiento social al diferenciarlo de cualquier otra situación o emergencia de conflictividad que se registre, ya que de no hacerlo así frente a un episodio de enfrentamiento entre sujetos - por secundario o intrascendente que sea - habría que adjudicarle el estatus de movimiento, aún sin que hayan logrado cierto nivel básico de

organicidad y permanencia. Pero, al mismo tiempo que se aporta un indicador que contribuye es acotar el fenómeno, se abre la puerta para que la idea misma de “movimiento” se confunda, o se disuelva, en las múltiples expresiones de inconformidad social que se viven en la sociedad capitalista desde que ésta se consolidó como formación social dominante. En este caso parecen diluirse los límites entre las expresiones tradicionales que adquirió la protesta social a partir del siglo XIX – pensemos en las primeras huelgas, en la formación de los sindicatos o en la conformación de agrupamientos políticos anarquistas o socialistas – y los llamados “nuevos movimientos sociales”. En ambos casos estaríamos ante la detonación de expresiones sociales que tienden a desbordar los límites del sistema y poner en jaque la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones. De esta forma, el adjetivo “nuevo” sólo se justificaría por una cuestión de temporalidad o por ciertas especificidades de las demandas que levantan quienes conforman la base de apoyo y el activismo de esos movimientos. A nuestro entender, el enfoque que se comenta, resigna en su definición, algunos factores importantes. Entre otros, se desdibuja la naturaleza social de los actores participantes, se le resta importancia al eje aglutinador que puede o no vincularse a cuestiones de índole laboral y no se valora un aspecto político sustancial al que ya se hizo referencia anteriormente: la ausencia de una manifiesta vocación de poder, entendiendo por esto al conjunto de acciones políticas expresamente orientadas a ocupar las instituciones públicas y las diversas instancias que conforman el aparato estatal.

Este tipo de interpretaciones admite otra lectura cuyo acento está puesto en cuestiones de orden cultural y en los referentes simbólicos que se van gestando en los grupos excluidos y clases populares durante el proceso mismo de conformación de los movimientos contestatarios. Si la variable escogida es de naturaleza *cultural*, la definición de acciones colectivas *antisistémicas* parece más ajustada, y estaría dando

cuenta de fenómenos sociales que aún sin proponerse el logro de objetivos políticos, desbordan los referentes normativos establecidos al crear un marco cultural que altera, modifica o impugna valores que pueden estar expresados de manera institucional – leyes, reglamentos o disposiciones jurídicas de diverso tipo – o bien no tienen sanción formal pero son parte del sentido común y de los comportamientos aceptados.

La ausencia de una intencionada vocación de poder en las nuevas expresiones colectivas es un factor – fundamental a nuestro juicio – que no debe convertirse en un argumento mediante el cual procure resolverse el origen y desenvolvimiento de los nuevos actores sociales a partir del marco objetivo que fijan “las condiciones dadas”. Este tipo de instrumental analítico tuvo amplia aceptación en los primeros estudios sobre movimientos sociales urbanos en América Latina. Era frecuente que las acciones colectivas que escapaban a los patrones tradicionales del comportamiento popular se asociaran al dispositivo conceptual que elaboró la corriente “marginalista” de la sociología. Estos autores, de inspiración marxista en su mayoría, impugnaron la validez del concepto que formuló el propio Marx acerca de la presencia de un excedente necesario de fuerza de trabajo al que denominó “ejército industrial de reserva”. Para los científicos sociales latinoamericanos que debatieron y pusieron en tela de juicio esta definición del marxismo clásico, las sociedades capitalistas periféricas no generan mano de obra excedente, lo que en realidad surge es una “masa marginal” excluida de las relaciones asalariadas de producción ^{11/}. Desde esta perspectiva los actos de protesta callejera, violencia urbana y, en general, las acciones protagonizadas por pobladores y colonos en relación a la carencia de bienes y servicios básicos, deben ser interpretadas como expresiones de grupos sociales que presentaban una situación de exclusión. Este universo de desprotección y limitaciones se potenciaba por el dato irrefutable de vivir en condiciones de pobreza extrema y ser, al mismo tiempo, un

contingente de mano de obra marginal con posibilidades nulas, o muy remotas, de ser incorporado al sector moderno de la economía y al mercado formal de trabajo.

Los estudios que se abordan desde un referente teórico de este tipo acuden a un atajo metodológico que permite arribar – a nuestro juicio de manera engañosa y errónea – a conclusiones aparentemente inequívocas. Sobre este aspecto, debe puntualizarse, que siempre es factible vincular los procesos sociales concretos – situados en un tiempo y espacio determinados – con las características estructurales de una formación social específica. Sin embargo, es frecuente que la delimitación del análisis a una relación causal de esta naturaleza sólo permita identificar elementos contextuales que no añaden demasiado a la comprensión del fenómeno que se estudia. La manipulación de conceptos “consagrados” en las ciencias sociales da la apariencia de solidez teórica pero puede encubrir aristas relevantes del proceso que es objeto de análisis o bien distorcionar los resultados de la investigación. Si cada una de las acciones colectivas es explicada como una manifestación de las contradicciones generadas por el capitalismo – referencia necesaria pero no suficiente – y todo se subsume al conflicto obrero-patronal se borran las características singulares que definen el perfil de esos movimientos sociales. Por este camino quedarían en una nebulosa – o sólo serían apreciados como simples trazos coyunturales – elementos que son de fuerte significación para llevar a cabo la tarea de identificar y valorar los comportamientos colectivos que están siendo analizados. Indicadores como los patrones culturales comunitarios, los referentes simbólicos más arraigados, la percepción de la política y de las instituciones o la noción de justicia, corren el riesgo de perderse en un proceso genérico desde el cual se procuraría dar cuenta del acontecer social de ciertos grupos específicos de la población.

Expresado el razonamiento anterior de manera más simple, puede afirmarse que no es posible explicar los nuevos movimientos sociales al margen de los factores objetivos condicionantes y de las particularidades de carácter estructural que son propias de cada formación social. Pero, también es necesario advertir, que la naturaleza de este tipo de acciones colectivas no puede ser “aprehendida” a través de un análisis exclusivamente centrado en las llamadas determinaciones estructurales.

Ecos de un debate inconcluso. Las coordenadas de un nuevo paradigma

Buena parte de las reflexiones teóricas que se han sistematizado con el propósito de elaborar un referente conceptual que haga plenamente comprensible la racionalidad que inspira las acciones colectivas que se expresan en los nuevos movimientos sociales, reconocen y se articulan en torno a algunas notas comunes. De manera particular, se identifica al proceso de reestructuración de las sociedades capitalistas como un factor que aceleró la disolución o el debilitamiento de las antiguas identidades culturales, sociales y políticas. De igual forma se pondera la fuerte incidencia de otras variables como la crisis de representatividad de las formas organizativas tradicionales; las profundas transformaciones que recorren las estructuras sociales; la mayor segmentación en la composición de los mercados de trabajo y las formas cambiantes de inserción de los individuos en las actividades productivas.

Pueden identificarse un conjunto de notas comunes que constituyen una plataforma de partida para la mayoría de estos autores. Cabe hacer la salvedad, que ni el marco conceptual desde el cual abordan el análisis de los nuevos fenómenos sociales es el mismo en todos los casos, ni todas las tendencias e indicadores que definen al capitalismo de la globalización tienen para ellos la misma significación y relevancia. Con el objeto de explicar el origen, la composición y la dinámica que forman el núcleo

de las acciones colectivas – y que son motivo de preocupación y estudio para los teóricos de los movimientos sociales – es necesario mencionar que éstos reconocen los condicionamientos que impone un contexto socioeconómico cuyas variables fundantes son, entre otras, las que se apuntan a continuación:

- Debilitamiento del trabajo asalariado y en general del empleo subordinado.
- Desplazamiento de la “centralidad obrera” en los conflictos y movimientos de protesta social.
- Incremento de la precarización ocupacional, de la pobreza y la marginalidad social.
- Pérdida de presencia política y social de los sindicatos y partidos tradicionales de raíz populista o marxista.
- Secundarización del papel del trabajo como “ordenador” de la vida social.
- Aumento de la heterogeneidad social; disgregación de los antiguos conglomerados sociales; emergencia de nuevos actores sociales y cambio en los comportamientos políticos esperables (desvanecimiento de ciertas lealtades y preferencias políticas y corporativas tradicionales).
- Centralidad de la sociedad civil como un espacio político relevante y como tema de reflexión teórica.
- Erosión de las referencias culturales y de los antiguos marcos normativos.

Estos datos de la realidad social, y otros que no se mencionan aquí, forman parte del horizonte temático acerca del cual se procuró elaborar un nuevo referente conceptual y perspectivas teóricas innovadoras. Frente al proceso de transformación de los roles ocupacionales y sociales y con el propósito de explicar la constitución de nuevos actores surgieron dos grandes paradigmas que procuran hacer comprensibles estos fenómenos. Uno de estos paradigmas es el enfoque que aborda las acciones colectivas como una *movilización de recursos*. La otra línea de análisis – con igual difusión y

similar jerarquía en el mundo de las ciencias sociales – sostiene que el activismo y el papel de los nuevos actores debe entenderse como un proceso de *construcción de identidades*.

Con respecto a la primera de las reflexiones mencionadas puede afirmarse que, en términos generales, entiende a las acciones sociales como un proceso de creación, consumo, intercambio y transferencia de recursos entre diversos grupos y sectores de una sociedad. La idea de recursos está concebida en un sentido amplio, se trata de cualquier bien o servicio reconocido como tal por las integrantes de uno o varios segmentos de la sociedad. Desde esta perspectiva los conflictos colectivos son entendidos como expresiones de lucha por el control de recursos que tienen una significación o un valor material común para los grupos que se confrontan por su posición. ^{12/} Bajo esta óptica se explica que la movilización social es un modo de asegurar el control y disponibilidad de los recursos para el logro de ciertos fines. Cada sector social evalúa y pondera la relación que se establece en la ecuación que integran las variables costos y beneficios y que se vinculan con las distintas opciones de acción que es factible llevar a cabo.

Para el segundo de los paradigmas referidos – el que se orienta al proceso de formación de identidades – los actores que dan vida a los movimientos sociales contemporáneos despliegan sus acciones con el fin de construir identidades propias; ampliar los espacios de intervención ciudadana en las cuestiones públicas y superar el ámbito acotado por la pura igualdad jurídica; avanzar en la definición de una nueva concepción de la relación sociedad de – Estado a partir de la cual se redefina el entorno valorativo y cultural y se gesten propuestas de transformación institucional.

Al inicio de este apartado se mencionaron algunas notas comunes en ambos enfoques. Es importante ampliar esa referencia identificando otros puntos de convergencia entre los dos paradigmas.^{13/} Ese territorio por el que caminan las nuevas teorías se abrió, en buena medida, a partir del cuestionamiento a las concepciones tradicionales con respecto al desarrollo de la sociedad moderna, y en particular, acerca de la interpretación de los fenómenos colectivos. En contraposición, las nuevas lecturas de los conflictos sociales rescatan aspectos menos ponderados en los enfoques tradicionales como la búsqueda de autonomía mediante la construcción de redes solidarias, el papel relevante de las demandas vinculadas a cuestiones cotidianas y a los referentes culturales. La preocupación por el estudio y la jerarquización de estos dos últimos como factores constitutivos de la identidad popular son otros aspectos relevantes de estas corrientes teóricas.

Para algunos autores la principal característica de ambas perspectivas conceptuales es que se trata de visiones del mundo social que aceptan un “radicalismo autolimitado”^{14/}. Es decir, los actores luchan por su autonomía y por el reconocimiento de la diferencia y de la pluralidad sin que se proponga, como parte de las demandas --al menos no de manera explícita – un punto de fractura revolucionaria con el entorno institucional y el marco jurídico vigente.

NOTAS

^{1/} Sobre los antecedentes más remotos de la corriente obrerista del marxismo, que sirvieron como fuente de consulta y de inspiración para los “consejistas” de la década de los sesentas y setentas puede verse:

Mattick, Paul, Antón Pannekoek, et al, *Los Consejos Obreros y la Cuestión Sindical*, Madrid, Castellote Editor, 1979.

Acerca de las diversas interpretaciones de la clase obrera como sujeto social y de las organizaciones que expresan los intereses de los trabajadores puede verse:

De la Garza, Enrique, *Un Paradigma para el Análisis de la Clase Obrera*, México, UAM – Iztapalapa, 1990.

^{2/} Dalton, Russell y Manfred Kuechler, (compiladores), *Los Nuevos Movimientos Sociales*, Valencia, Generalitat Valenciana, 1992.

Touraine, Alain, *Producción de la Sociedad*, México, IFAL-IIS-UNAM, 1995.

En el Prefacio a su libro el autor es enfático al señalar “... lo que hay que eliminar por completo (...) es que ciertas fuerzas sociales son portadoras de un sentido de la historia y por lo tanto, deben portarlo objetivamente. Por eso, poco a poco, dejé de hablar de clases sociales y sustituí el concepto por el de movimiento social, definido como la acción conflictiva de un actor dirigente o popular hacia el control

social de los modelos y los recursos de una sociedad, es decir, de su historicidad”. p. 17.

Tilly, Charles, “Los Movimientos Sociales Como Agrupaciones Históricamente Específicas de Actuaciones Políticas”, en *Sociológica Núm. 28*, México, UAM – Azcapotzalco, mayo-agosto 1995.

Melucci, Alberto, “El Conflicto y la Regla: Movimientos Sociales y Sistemas Políticos”, en *Sociológica Núm. 28*, *op. cit.*

De este mismo autor ver: “Las Teorías de los Movimientos Sociales”, en *Estudios Políticos Núm. 4-1*, Vol. 4-5, México, FCPyS-UNAM, 1986.

^{3/} Dalton, Russell y Manfred Kuechler, *op. cit.*

Offe, Claus, *Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales*, Madrid, Editorial Sistema, 1996.

Al referirse a la base social de estas nuevas expresiones colectivas Offe afirma que: “... en lo que respecta a los actores de los nuevos movimientos sociales, lo que más llama la atención es que en su autoidentificación no se refieren al código político establecido (izquierda/derecha; liberal/conservador; etc.) ni a los códigos socioeconómicos parcialmente correspondientes (tales como clase obrera/clase media; pobre/adinerado; población rural/urbana; etc.). Se codifica más bien el código del universo político en categorías provenientes de los planteamientos del movimiento como sexo, edad, lugar, etc...” p. 180.

^{4/} Calderón, Fernando, (compilador), *Los Movimientos Sociales Ante la Crisis*, Buenos Aires, UNU-CLACSO-UNAM, 1986.

“Nuevos Sujetos Sociales”, México, *Acta Sociológica Núm. 2*, FCPyS-UNAM, mayo-agosto 1990.

Zermeño, Sergio, *La Sociedad Derrotada*, México, Siglo XXI Editores, 1996.

Tironi, Eugenio, “Pobladores en Chile: Protesta y Organización”, en J. Schatan, D. Paas y A. Orsatti, (compiladores), *El Sector Informal en América Latina*, México, Fundación Naumann-CIDE, 1991.

^{5/} Eisenstadt, S.N., *Modernización. Movimientos de Protesta y Cambio Social*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1972.

Desde una concepción “dualista” de las sociedades latinoamericanas este autor sostiene, al referirse a los conflictos y protestas registrados a partir de 1930, que “... la más importante de estas características haya sido la dualidad estructural dentro de la sociedad, es decir, la coexistencia, bajo condiciones de cambio social continuo, de diferentes sectores sociales, en especial de uno tradicional desorganizado y otro moderno pero igualmente desintegrado y desequilibrado”. p. 149.

Parsons, Talcott, *El Sistema Social*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Es importante reconocer que este autor, fue uno de los primeros analistas sociales que dio a los valores un lugar preciso en el estudio de las acciones colectivas.

En la obra de Parsons son dos los aspectos que se establecen como básicos del sistema social:

- a. La orientación motivacional, o también llamada “expectativa estructurada”, compuesta de elementos para analizar problemas que tienen interés para el actor social. Esta orientación incluye, entre otras cosas, el conocimiento y la evaluación de lo que los actores sociales pueden obtener al emprender una acción determinada, y qué “costos” habrán de pagar al participar en ella.

- b. La orientación de valor, es la que otorga los criterios que aportan las soluciones satisfactorias a los problemas planteados en la orientación motivacional, incluidos los criterios morales, que son particularmente importantes. El valor, según Parsons, es un elemento de un sistema simbólico compartido que puede servir de criterio para la selección entre las alternativas de posibles orientaciones que los actores deberán afrontar, en una situación particular.

La orientación motivacional contribuye a formular los problemas que debe enfrentar cualquier actor social al participar en una acción concreta; la orientación de valor propone los criterios que deben ser considerados para solucionar los problemas por la orientación motivacional. Ambas orientaciones son momentos diferentes y complementarios en el proceso de la toma de decisiones.

^{6/} Vilas, Carlos, “Actores, Sujetos, Movimientos: ¿Dónde Quedaron las Clases?”, *Sociológica Núm. 28, op. cit.*

^{7/} Una posición de este tipo puede verse en: Laclau, Ernesto, “El Nuevo Progresismo”, Revista *El Caminante*, Núm. 1, Buenos Aires, mayo de 1995. En dicho artículo Laclau sostiene: “La clase obrera en el sentido tradicional está desapareciendo en todas partes. Basta pensar en lo que eran los cinturones rojos alrededor de las grandes ciudades francesas, base de una cultura proletaria (...) todo eso ya no existe más. En su lugar se instaló una terciarización salvaje de la economía con una proliferación de pequeños talleres de trabajo parcializado. Esta gente que aparece dispersa, poco tiene que ver con la clase obrera histórica”.

^{8/} Una crítica a la interpretación economicista de las relaciones sociales puede verse en: Habermas, Jürgen, *Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1989.

El autor reflexiona acerca de las nuevas formas de representación y afirma que es necesario pasar de una cultura de movilización a una dinámica de conquista social y sugiere la elaboración de una forma de representación comunicativa que sea capaz de articular normas de solidaridad, diferencias, consensos y pertenencias.

^{9/} Mandel, Ernest, *Sobre la Historia del Movimiento Obrero*, Barcelona, Fontamara, 1979.

^{10/} Melucci, Alberto, “*Las Teorías de los ...*” *op. cit.* El autor establece la distinción entre estos dos niveles al señalar: “... Se perfiló así, al interior de cada acción colectiva, una distinción entre *acción conflictiva*, que manifiesta la presencia de un

conflicto al interior de los límites del sistema considerado, y *movimiento social* que implica un conflicto que tiende a superar estos límites. Es necesario precisar que, para hablar de movimiento social deben verificarse ambas condiciones (conflicto y superación de los límites del sistema considerado)". p. 99

- ^{11/} Quizá la formulación más clara de esta interpretación es la que aparece en: Nun, José, "Superpoblación Relativa, Ejército Industrial de Reserva y Masa Marginal", Buenos Aires, *Revista Latinoamericana de Sociología* Núm. 2, Vol. V, 1969.

Dentro de esta misma corriente teórica, pero con algunos matices, puede verse a: Quijano, Anibal, *Polo Marginal y Mano de Obra Marginalizada*, Santiago de Chile, CEPAL, 1971.

- ^{12/} Melucci, Alberto, "Las Teorías de ...", *op. cit.*

- ^{13/} Treviño, Ana Helena, *Participación y Organización en los Movimientos Sociales. Movilización y Demanda Social Frente a los Bienes y Servicios Públicos en las Ciudades Medias de México y del Brasil*, (Tesis Doctoral), FLACSO – Sede Brasil, junio de 1996.

- ^{14/} Cohen, Jean, "Strategy or identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements", *Review of Social Research*, Vol. 52, Núm. 4, 1985, New School of Social Research, New York.

Citado en; Treviño, Ana H., *Participación y Organización en los ...*, *op. cit.*

- ^{15/} Touraine, Alain, “Los movimientos sociales”, en *¿Podremos Vivir Juntos?*, F.C.E., México, 1997.

Al referirse a la relación entre sujeto y movimiento social este autor apunta: “Como estamos acostumbrados a representarnos los movimientos sociales como movilizaciones al servicio de una gran causa, tenemos que insistir ahora en este objetivo de subjetivación ya que ésta supone que siempre se mantenga una cierta distancia con respecto a los objetivos sociales y políticos de la acción colectiva. Si nos encerramos en una ética de la responsabilidad, dejamos libre un espacio ilimitado, no controlado, a la guerra de los dioses, para adoptar el vocabulario de Max Weber, que fue uno de los primeros en exponer los riesgos contenidos en una racionalidad convertida en puramente instrumental, en la medida en que ésta libera la invocación irracional, no negociable, no argumentable, de unas convicciones y sus fundamentos metasociales. La idea de Sujeto, como la de movimiento social que está asociada a ella, procura, al contrario, restablecer un vínculo entre el mundo de los medios y el de los fines, entre la racionalidad instrumental y las creencias, entre el mercado y la comunidad. Si el mundo de los fines está separado del de los medios, como los derechos del hombre de las prácticas políticas, la idea de Sujeto queda protegida pero también encerrada en un mundo de principios, casi siempre aplastado por el poder, como lo fueron la idea de los derechos del hombre por la interpretación jacobina de la soberanía popular y el movimiento obrero revolucionario por las dictaduras posrevolucionarias. Cuando más concreta se hace la invocación del Sujeto (...) más desciende del imperio de los principios hacia el espacio público, el debate político y la acción colectiva. Pero ciertamente no cuando se identifica al Sujeto con un grupo de interés, una clase o una nación, lo que no puede llevar más que a

nuevas formas de poder comunitario absoluto, sino, al contrario, cuando se combinan, como lo hace la idea moderna de democracia, la protección de las libertades personales y la participación en las decisiones colectivas”. p. 105

- ^{16/} Con respecto a las distintas definiciones acuñadas por la sociología y en relación a los autores más representativos de cada corriente teórica, se sugiere consultar el minucioso artículo de: Tavera Fenollosa, Ligia, “Movimientos Sociales”, en Baca, Laura, et al (comps), *Léxico de la Política*, FCE–FLACSO–SEP–CONACYT–Fundación H. Böll, México, 2000.
- ^{17/} Melucci, Alberto, “Las teorías de los movimientos sociales”, en *Teoría de los Movimientos Sociales, Cuadernos de Ciencias Sociales No. 17*, FLACSO, San José de Costa Rica, 1988.
- ^{18/} Blumer, Herbert, “Social Movements”, en *New Outline of the Principles of Sociology*, editado por Alfred Lee, Barnes and Noble, Nueva York, 1951. Citado por: Tavera Fenollosa, Ligia, “Movimientos...” op. cit.
- ^{19/} Tarrow, Sydney, *El Poder en Movimiento. Los Movimientos Sociales, la Acción Colectiva y la Política*, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
- ^{20/} Tilly, Charles, “Los movimientos sociales como agrupaciones ...” op. cit.
- ^{21/} Touraine, Alain, “*Los movimientos ...*” op. cit.
- ^{22/} Melucci, Alberto, “El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas políticos”, en *Sociológica No. 28*, op. cit.

^{23/} Cohen, Jean, "Teoría de los movimientos sociales", en *Cuadernos de Ciencias Sociales No. 17*, ...op. cit.

^{24/} Eisinger, Peter, "The Conditions of Protest Behavior in American Cities", en *American Political Science Review*, 1973. Citado por Ligia Tavera Fenollosa, "Movimientos Sociales," op. cit.

^{25/} Touraine, Alain, *The Voice and the Eye*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

Offe, Claus, "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics", *Social Research* 52, 1985.

^{26/} Eckstein, Susan (coord.), "Poder y Protesta Popular en América Latina", en *Poder y Protesta Popular*, México, Siglo XXI Editores, 2001, pp 15-75. Acerca de la importancia de reconocer y estudiar las particularidades de cada movimiento social, la autora señala en su trabajo: "Aunque las injusticias arraigadas en las relaciones de clase y de mercado son las fuentes principales del conflicto contemporáneo en América Latina, en ocasiones la etnia y la raza han sido bases independientes de movilización en pro del cambio. Si bien la mayor parte de los movimientos de protesta raciales y étnicos están basados en quejas económicas, deberían considerarse analíticamente distintos cuando entrañan sólo segmentos racial o étnicamente definidos de las clases socioeconómicas y cuando se centran en cuestiones étnicas y raciales y no mera o necesariamente en cuestiones de clase". p.38.

^{27/} McClintock, Cynthia, “La Rebelión de Sendero Luminoso: Orígenes y Trayectoria” en Susan Eckstein, *Poder y ...*, op. cit.

^{28/} Morales, Evo, “Bolivia, el Poder del Pueblo”, Buenos Aires, *Página 12*, 4 de noviembre del 2003.

Con posterioridad a los hechos que se relatan. Evo Morales fue candidato a la presidencia de Bolivia logrando más del 54% de los votos emitidos en la jornada electoral del 18 de diciembre de 2005. Es presidente de la república desde el 22 de enero de 2006

^{29/} Almeyra, Guillermo, “Autonomía Indígena y Estado Democrático”, México, *La Jornada*, 23 de noviembre del 2003.

Con posterioridad a los hechos que se relatan, Evo Morales fue candidato a la presidencia de Bolivia logrando más del 54% de los votos emitidos. Es presidente de la república desde el 22 de enero de 2006.

^{30/} “Pueblos Indios Debaten en Busca de una Denominación Común”, México, *La Jornada*, 7 de diciembre del 2003.

^{31/} “Fundar la República de Qullasuyo, reto del Movimiento Indígena Pachacuti”, México, *La Jornada*, 17 de diciembre del 2003.

^{32/} Cohen, Jean, “Teoría de los ...” op. cit.

^{33/} Biffi, Pablo, “Juicio del Siglo en Ecuador: los indígenas contra Texaco”, Buenos Aires, *Clarín*, 23 de octubre del 2003.

^{34/} Marco Revelli, brillante pensador de la izquierda italiana, percibe en toda su magnitud las particularidades de la nueva insurgencia ciudadana que se expresa en asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de naturaleza diversa. No obstante, pierde la dimensión histórica y subestima el bagaje cultural que acumula y expresa cada proceso social. Al referirse a las nuevas racionalidades de hacer política, en especial a aquellas prácticas que superan el clásico modelo de la democracia representativa, afirma: “La escena no está vacía. Bajo indicio, invisible o apenas perceptible en una filigrana sobre la superficie compacta de las mercancías, una sutil pero punzante y difusa trama de átomos positivos está desde hace tiempo en acción. En forma confusa, fragmentada, polifónica – jamás lineal, frecuentemente secreta y reticular – ella sola expresa una necesidad tenaz de resistencia a la furia disolutiva del movimiento económico y del abstracto poder del dinero (...)”

“Contrariamente a la figura social que la había precedido en la larga biografía de la identidad rebelde – el militante en el siglo XX – este nuevo “actor” no se siente parte de un ejército (...). Es, sobre todo, en un sentido más propio, un “civil”. Su fuerza proviene de otra parte, no de la capacidad de emanar la sensación extraordinaria de poder que derivaba en gran medida de la relación con las energías telúricas del trabajo (...).”

“Por esto, no se asemeja a ninguna otra figura política que la ha antecedido (...). Todavía se puede agregar que ésta, por muchos aspectos inédita e irregular figura, a diferencia de su antecesor, no parece poseer ni siquiera una doctrina. Un saber orgánico y predecible, sobre el cual definir el propio ¿que hacer?”

Tomado de Revelli, Marco, "Cultura e Intersticio", *Oltre il Novecento*, Turín, Einaudi, 2001. Reproducido por www.reforma.com, México, 20 de diciembre de 2002.

CAPITULO IV

**Argentina Desamparada: debacle económica,
insurgencia social y crisis de representación
política**

Argentina Desamparada: debacle económica, insurgencia social y crisis de representación política

¿Qué se vayan todos?

El lenguaje coloquial suele ser más ilustrativo que los tecnicismos rebuscados con los que se procura, desde el poder, explicar, justificar o hacer comprensibles las peores decisiones de política económica. La continuidad de una estrategia de desarrollo que se obstinó en hacer descansar su gestión en los pilares que construyó la administración de Carlos Menem (1989-99) llevó al presidente Fernando de la Rúa al más bochornoso final de un mandatario desde el retorno a la democracia en 1983. Amarrar el valor del peso a una paridad fija de “uno por uno” con el dólar cuando la recesión y el creciente endeudamiento externo hacían imposible mantener dicha equivalencia, tuvo su remate en la decisión del ministro Domingo Cavallo de congelar las cuentas bancarias, pesificar los ahorros en dólares y limitar drásticamente los retiros en efectivo. Este verdadero despojo, que castigó duramente a importantes sectores de la clase media que habían adaptado su ritmo de vida a un país que regía sus transacciones en dólares, fue bautizado por el irritado humor popular como el “corralito” financiero. El decreto 1570/01 del 30 de noviembre de 2001, quedará impreso en la memoria de millones de argentinos como el instrumento legal que le permitió al gobierno restringir el retiro del efectivo depositado en cajas de ahorro y cuentas de cheque y bloquear las transacciones de divisas al exterior.

Las imágenes que grabaron para la historia los actos de violencia que se vivieron en las calles de Buenos Aires y en algunas localidades cercanas a la capital de la república, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, mostraron una doble confluencia

social, por un lado el hartazgo y la desilusión de amplios sectores de la clase media que habían apostado sus ahorros a la certidumbre del dólar y que veían como, de manera súbita, se volatilizaba el esfuerzo de varios años de guardar su patrimonio en una moneda confiable. El otro gran protagonista de los actos de saqueo, ataques a instituciones bancarias y oficinas públicas, edificios de empresas extranjeras y locales partidarios, era un vasto contingente de población desocupada, víctima del programa de convertibilidad del gobierno de Menem – ratificado por el presidente de la Rúa – que había perdido el trabajo en años recientes o que veía alejarse la posibilidad de ingresar al aparato productivo en un contexto de recesión económica y tasas de desempleo abierto superiores al 18 por ciento.

Las manifestaciones y saqueos de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 desbordaron la lógica negociadora de los partidos políticos tradicionales y superaron el cauteloso despliegue reivindicativo de las estructuras sindicales.^{1/} Las principales fuerzas políticas del país quedaron atrapadas en una lógica social para la cual no tuvieron respuesta. La Unión Cívica Radical (UCR) vivía, en esos momentos, una de las etapas más críticas de su historia. Este partido centenario asistió impotente a la caída de un mandatario surgido de sus propias filas cuando sus bases tradicionales de apoyo social - sectores medios, comerciantes, profesionales y medianos empresarios – desfilaban por las calles de Buenos Aires impugnando la política oficial y pidiendo la renuncia del presidente de la Rúa.^{2/}

El peronismo, principal fuerza opositora – destinada a ser la reserva política para el recambio institucional – vivía un proceso similar. Amplios sectores obreros y populares, la antigua y pujante fuerza de apoyo y movilización de los sindicatos, desbordaban con decisiones y consignas propias, los erráticos movimientos cupulares del Partido Justicialista (PJ) – brazo electoral del peronismo – y se sumaban a los grupos sociales

afectados por el corralito financiero. Esta virtual “acefalía política” en momentos de una intensa eclosión social propició el surgimiento de nuevos liderazgos naturales, estimuló la práctica de diversas formas de democracia directa, en particular las asambleas barriales y el sistema popular de canje de bienes y servicios conocido como “redes de trueque” y potenció, al mismo tiempo, el desencanto de la sociedad hacia las fuerzas políticas convencionales

El descrédito de la clase política y el repudio a los bancos y organismos financieros, se expresó en una consigna que retumbó en las calles de Buenos Aires y motivó la preocupación de los funcionarios públicos y legisladores de todos los partidos. *¡Que se vayan todos!* Fue el grito de repudio al mundo de las finanzas y de la política tradicional que surgió de esa vasta amalgama que formaron trabajadores desocupados, pobladores de barrios marginales y ahorristas acorralados de clase media. Miles de manifestantes caminaron bajo el sol infernal del verano austral para dejar constancia, frente al poder financiero y político, que el golpetear de cacerolas era la más ruidosa y efectiva muestra de rechazo de la sociedad hacia el modelo económico que terminó con el empleo de millones de argentinos y liquidó el patrimonio de los que, en alguna época, fueron los sectores medios con los niveles de vida más altos de Latinoamérica. En esos días, y con el mismo afán crítico hacia las políticas oficiales, se lanzó otro grito que sintetizó el ánimo rebelde de quienes marchaban codo a codo. *¡Piquete y cacerola la lucha es una sola!* Más que una consigna parecía el primer punto de una posible propuesta programática que abrió ciertas expectativas de convergencia entre grupos sociales tradicionalmente antagónicos: los trabajadores, identificados con las banderas históricas de igualdad y justicia del proyecto peronista y sectores medios, más cercanos al programa de respeto a las libertades individuales y valores ciudadanos que sustenta la Unión Cívica Radical.

La convergencia de “caceroleros” provenientes de sectores medios afectados por el corralito financiero y población desempleada o subocupada, motivó algunas reflexiones en el mundo de la academia y la política acerca de la constitución de un sujeto colectivo superador de viejos antagonismos sociales. De acuerdo a esta lectura, los actores sociales debieron experimentar durante la década de los noventa, situaciones y procesos que modificaron los referentes económicos e institucionales a partir de los cuales se establecieron los mecanismos de negociación y resolución de diferendos. La idea de “pueblo” – como amalgama de una heterogénea voluntad popular – parece transformarse en el espacio que otorga sentido a los grupos sociales que quedaron huérfanos de identidad. El concepto puede utilizarse con algunas salvedades, entendemos que quienes no encontraron respuestas ni en las reservas culturales que dejan las experiencias comunes ni en los referentes institucionales tradicionalmente aceptados como destinatarios de las demandas populares, procuran generar nuevos espacios desde los cuales formular la petición directa de sus requerimientos más sentidos. Sin embargo, pensamos que la nueva movilización social que se nutrió de las asambleas barriales, los cacerolazos, las redes de trueque y las acciones callejeras de los piqueteros expresan – de manera reelaborada y desde referentes discursivos y simbólicos distintos – *la impronta de anteriores prácticas sociales y dinámicas de lucha preexistentes*.^{3/} La vigorosa tradición sindical del movimiento obrero y el temprano ejercicio de los derechos ciudadanos de las clases medias, generaron un bagaje cultural de protesta y participación social que recorre, de diversas maneras, las acciones colectivas que marcaron los años noventa y pintaron de rojo el inicio del nuevo milenio.

¿Qué elementos sustantivos quedan de las violentas jornadas del 19 y 20 de diciembre y de la vergonzosa huida del presidente de la Rúa? Se nos ocurre una primera reflexión de carácter sociológico acerca de la erupción popular de esos días: ¿Qué sentimientos

pueden anidarse en la cabeza y en el corazón de quienes vieron caer su nivel de vida y perder su patrimonio costosamente logrado en unas pocas semanas? ¿Qué fenómenos sociales puede poner en marcha la debacle económica de los años 2001 y 2002 en una generación de trabajadores nietos de los inmigrantes que abandonaron sus países de origen en Europa para darle a sus descendientes un futuro mejor? ¿Cuánto tiempo estarán dispuestos a esperar para recuperar lo que perdieron, aquellos que aún conservan los referentes culturales y expectativas de vida de la clase media de la que fueron abruptamente expulsados? Y peor aún ¿qué esperanzas pueden tener los trabajadores que por nivel de calificación y experiencia laboral, edad y tiempo de inactividad saben que será sumamente difícil ingresar a un empleo asalariado, estable y bien remunerado?

En ocasiones, el acontecer social ofrece evidencias de los movimientos subterráneos que viven los pueblos y no siempre se hace una lectura adecuada y oportuna de los mismos o bien no se los incorpora al análisis con la jerarquía constitutiva que realmente tienen. El 14 de octubre de 2001 se llevó a cabo el proceso electoral destinado a la renovación parcial de la Cámara de Diputados y elegir a los integrantes del nuevo Senado. Esas elecciones se transformaron en un verdadero acto plebiscitario en contra de la política económica que, heredada del menemismo, se empeñó en sostener el presidente de la Rúa. ¿Qué ocurrió en la jornada electoral del 14 de octubre de 2001? ¿Cuál fue el factor realmente significativo en una elección de medio camino en la que no estaba en juego la titularidad del ejecutivo nacional? Es posible identificar algunos elementos sustantivos que contribuyen a explicar el devenir político de un gobierno que tuvo que afrontar, dos meses después, en las calles y no en las urnas, el hartazgo de una sociedad que no encontró más solución que pedir la renuncia de las máximas autoridades públicas del país. Entre otras variables del comportamiento social, presentes en las elecciones mencionadas, deben rescatarse las siguientes:

- La notable difusión de un tipo de manifestación electoral que reconocía antecedentes de otras épocas en el llamado “voto en blanco” y que ahora fue bautizado como “voto bronca”. Se trata de los votos nulos (deliberadamente mal emitidos) y en blanco (los ciudadanos no optan por ningún candidato o partido). Este tipo de expresión logró más votos que la coalición gobernante registrada como “Alianza” que agrupaba a la UCR y a una formación política de reciente constitución, el “Frente Para un País Solidario” (Frepasso). Es importante destacar también que la abstención – en un país donde el voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años – alcanzó la cifra histórica del 26.5 por ciento del padrón electoral ^{4/}
- El gobierno perdió apoyo con respecto a las elecciones de octubre de 1999 que le permitieron a la Alianza ganar la presidencia de la república, mientras que el Partido Justicialista aumentó su presencia al triunfar en la mayoría de las provincias, ganó en 17 sobre los 24 distritos y conservó la mayoría en ambas cámaras.
- Se redujo el espacio de algunas fuerzas políticas de inspiración conservadora como Acción por la República y los partidos con presencia sólo local. La única entidad que seguirá gobernada por un partido provincial es Neuquén, donde se confirma el arraigo social de una coalición de grupos locales que soldaron un acuerdo político hace más de 40 años.
- Se constituyó un espacio político heterogéneo diferenciado del ámbito que ocupan los partidos tradicionales. En este espacio confluyen la Alianza para una República de Iguales (ARI) que lidera la ex diputada Elisa Carrió y que impulsa un programa de centro – izquierda; la coalición Izquierda Unida y otros grupos de inspiración

socialista o populista que reunieron alrededor del 26 por ciento de los votos emitidos.

- La suma del “voto bronca”, de las abstenciones y de quienes apoyaron a partidos o coaliciones de izquierda conformaron una amplia corriente de opinión pública enfrentada al modelo económico y con ciertos componentes “anti-sistema” que tendrían una expresión descarnada en los enfrentamientos callejeros de diciembre. Aunque no se trata de conductas políticas idénticas o plenamente asimilables, podemos afirmar que la negativa de una franja importante del electorado a utilizar el recurso del voto positivo – optar por un partido o candidato de las fuerzas tradicionales – y preferir abstenerse o apoyar a grupos políticos contestatarios, constituye una de las más importantes expresiones de carácter masivo que abonará el terreno para la sublevación popular de diciembre, cuyo epicentro fue la ciudad de Buenos Aires y localidades vecinas pero que alcanzó manifestaciones también importantes, en diversas provincias de la república.

De la industrialización protegida a la apertura económica: cambio estructural y protesta social

Después del accidentado interregno que significó el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89) el régimen del presidente Carlos Menem retomó y potenció la estrategia económica de la última dictadura militar (1976-83). Se procuró, con esta decisión histórica, consolidar una formación económico-social con un aparato productivo segmentado y con una marcada dualización social. Dicho de otra forma, se trató de reafirmar la política iniciada en 1976 – en ese momento bajo condiciones institucionales de excepción – que apunta a sepultar el viejo capitalismo con vocación industrialista y disolver el antiguo modelo de convivencia y cohesión social. Este entramado

económico-social era el fruto de la sociedad salarial que se implantó con el desarrollo de un extendido proceso de sustitución de importaciones y la conformación de grandes núcleos urbanos.

El abandono de esta visión del crecimiento económico se operó, finalmente, desde una identidad política tradicional y con profundas raíces en los sectores populares como es el peronismo, el movimiento político desde el cual proyectó su carrera el presidente Menem. Como extraña paradoja, el sepulturero de la antigua estrategia de industrialización protegida resultó ser un dirigente surgido de las filas de una fuerza política que se gestó, durante los años cuarenta, como resultado de la consolidación de un activo proletariado urbano y de una dinámica burguesía industrial.

El gobierno menemista estableció tres ejes rectores de su programa económico: la eliminación del abultado déficit fiscal que heredó de la administración de Raúl Alfonsín; la desregulación de los mercados, incluido el mercado de trabajo y la acelerada privatización o disolución de las empresas públicas y organismos gubernamentales considerados “no prioritarios”⁵¹. En 1991 el ministro de economía Domingo Cavallo, puso en marcha el Plan de Convertibilidad que detonó una verdadera transformación de las reglas que normaban las actividades económicas, entre otras, se eliminó la flotación del peso y se fijó una paridad “uno por uno” con el dólar, se redujeron drásticamente las barreras arancelarias y aduaneras, se liberalizó el comercio exterior y se incrementó la presión tributaria. De manera brusca, se suprimieron los principales mecanismos públicos destinados a regular la economía con el fin de propiciar la libre movilidad de los factores productivos y lograr la plena vigencia de las leyes del mercado, además de fomentar, indiscriminadamente, el ingreso de capitales extranjeros. El rediseño de las instituciones gubernamentales incluyó un programa de reestructuración general del Estado que se acompañó de una pronunciada reducción

del gasto público. También se promovió la descentralización administrativa y el traslado de competencias de la instancia nacional a las provincias y municipios en rubros sustanciales como el financiamiento y manejo de los servicios educativos y de salud. Estas disposiciones afectaron negativamente la cobertura y calidad de esos servicios, administrados durante muchos años por el Estado nacional.

El proceso de descentralización fue una herramienta indispensable para reorientar las políticas sociales. Se abandonó el principio de universalidad por “incosteable y complejo” y se optó por la *focalización* de la ayuda social, centrada en la canalización de recursos financieros y apoyo alimentario para los grupos sociales más vulnerables. El sistema previsional –legítimo orgullo de las políticas sociales del peronismo – que había tenido sus principios rectores en un régimen de *solidaridad intergeneracional* basado en el aporte de empresas, trabajadores y Estado, pasó a depender de la capitalización individual mediante un sistema de aseguradoras privadas responsables del manejo de los fondos. El cambio de las políticas sociales castigó duramente el sistema de salud, en particular, se afectó de manera severa a los trabajadores a partir de la desregulación de las obras sociales, con la “libre elección” de los afiliados y la pretendida autogestión de los establecimientos públicos de salud.⁶⁷ Al mismo tiempo, se impulsó el establecimiento de un régimen de flexibilidad laboral que multiplicó la precariedad ocupacional, la promulgación de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24 013 de 1991) y la Ley de Fomento al Empleo (Ley 24 465) afectaron diversas modalidades contractuales y se abrió espacio a las relaciones laborales de carácter temporal bajo esquemas elásticos de vinculación obrero-patronal. Proliferaron los contratos por obra, a tiempo determinado y jornada parcial, por aprendizaje y trabajo para mujeres y jóvenes,⁷¹ entre otros, calificados por las corrientes sindicales críticas del gobierno como “contratos basura” por la pérdida de prestaciones y de estabilidad en el empleo.

La celeridad y el carácter drástico con que se aplicaron las disposiciones mencionadas, trajeron, entre otras consecuencias, una profunda transformación en las formas de intervención del Estado en la vida social.^{8/} Estos cambios golpearon tanto los aspectos jurídicos como las políticas públicas de resolución de cuestiones medulares como los programas ocupacionales, el apoyo a los grupos de más bajos ingresos y la misma relación entre el capital y el trabajo.

En el terreno ideológico, la ofensiva del gobierno menemista se presentó – al igual que en casi todas las experiencias de restauración conservadora del orden social - como la revalorización del individuo y de la empresa frente al Estado. La realidad demostró que lo que hicieron fue concentrar los poderes de decisión en un aparato estatal dominado por el gran capital financiero e industrial exportador, un Estado más pequeño, en términos institucionales, pero fuertemente centralizado en el dictado de las políticas nacionales y ajeno al control efectivo de la sociedad. De esta manera, se enaltece y fortalece la dominación de lo privado sobre lo público, de los intereses individuales frente a las preocupaciones de carácter general, de lo individual ante lo social y del capital sobre el trabajo.

Fin de época: el movimiento obrero bajo el gobierno de Menem

Hay datos que resultan irrefutables, a reserva de la perplejidad y el desconcierto que nos provoquen más tarde. Quienes recuerdan la campaña electoral de 1989 tienen presente la figura de un candidato de aspecto folclórico y gestos teatrales, que bajo una sola consigna convocante – *Síganme* –supo construir una imagen de mesías en un país que se derrumbaba por los efectos de la hiperinflación y los estallidos sociales que llevaron a los saqueos y enfrentamientos trágicos entre manifestantes y policías a principios de ese año. Quien prometió reactivar la economía y decretar el “salariazó” –

expresión publicitaria para referirse al posible incremento de sus ingresos que podrían esperar los trabajadores – se encargó de asumir la tarea histórica de demoler, ladrillo por ladrillo, el vasto andamiaje institucional que construyó el primer peronismo (1946-55) y dinamitar los puentes sobre los cuales el presidente Perón articuló una sólida relación con los trabajadores y el movimiento popular.

Carlos Menem, candidato del Partido Justicialista en 1989, logró el triunfo electoral con el decidido apoyo del movimiento sindical y de vastos sectores populares que acudieron a las urnas para darle su voto con la secreta esperanza de que se reactivara el aparato productivo, bajara el desempleo y se instrumentaran formas más equitativas de distribuir el ingreso.^{9/} Sin embargo, durante los primeros meses de gobierno, Menem había decidido – sin consultar a sus votantes ni a los sindicatos que le dieron su apoyo – que la prioridad de la nueva administración era controlar la inflación y reducir el déficit fiscal primero y promover, de manera inmediata, un proceso de profundas transformaciones del sistema económico y de las instituciones, abandonando el viejo capitalismo semi-autárquico e intervencionista, por una economía de libre mercado. En paralelo, se redujo la participación estatal en el ámbito de las actividades productivas pero se fortaleció la orientación de las políticas públicas a favor del sector financiero y de las grandes empresas privatizadas (petróleo, teléfonos, ferrocarriles, bancos y agua potable, entre otras).

El programa del gobierno menemista se desplegó sobre estructuras sindicales ya debilitadas por el proceso de desindustrialización que puso en marcha la dictadura militar que asumió la conducción del Estado en 1976. La caída relativa del empleo asalariado en el sector industrial redujo la base social de los sindicatos que habían constituido el núcleo organizativo del movimiento obrero en la etapa de mayor crecimiento del proletariado urbano. Agrupamientos gremiales como el de los obreros

textiles, metalúrgicos, automotrices y de la alimentación vieron mermada su membresía y disminuida su capacidad de convocatoria y movilización.^{10/} Por el contrario, en las áreas de comercio y servicios se incrementó la fuerza laboral ocupada y aumentó también la afiliación sindical.

La situación que se describe aparece reflejada en el cuadro en el cual se señalan los cambios en la membresía de un grupo de siete grandes agrupamientos sindicales en el período que comprende desde el año inmediatamente anterior al golpe militar de 1976 y un año después de restaurada la democracia política.

Afiliación Sindical 1975 – 1984

Sindicato	1975	1984
Alimentación	51 500	40 000
Comercio	310 800	450 000
Construcción	302 000	250 000
Mecánicos (SMATA)*	87 700	54 000
Metalúrgico	307 000	270 000
Textiles	152 000	68 000
Bancarios	122 000	155 000

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la Confederación General del Trabajo.

* El Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor (SMATA) agrupa a trabajadores de la industria automotriz y de autoparte.

El rumbo que tomó la administración del presidente Menem profundizó las diferencias entre las distintas corrientes del movimiento sindical, en particular aquellas más vinculadas al peronismo. El desconcierto que se apoderó de una franja importante de la dirigencia y la incapacidad de formular respuestas acordes al nuevo momento, de parte de los grupos más críticos, extendió la fractura al conjunto de las organizaciones obreras. Este proceso de reacomodamiento y búsqueda de espacios propios desde los cuales negociar con el gobierno o presionar con el objeto de bloquear las disposiciones

más duras produjo la conformación de varias agrupaciones gremiales. A grandes rasgos, el perfil político de las mismas era el siguiente: un sector que reivindica el nombre histórico de Confederación General del Trabajo (CGT) y cuyo Secretario General es, actualmente, Rodolfo Daer, y que apoyó y negoció desde posiciones subordinadas al gobierno de Menem; otra corriente se agrupó primero bajo el nombre de Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) que nace oficialmente en febrero de 1994 y que más tarde adoptaría también el nombre de “CGT”. Este nucleamiento opera bajo el liderazgo de Hugo Moyano, dirigente de los choferes de camiones, de Juan Manuel Palacios, de la Unión General del Transporte Automotor y de Saúl Ubaldini del sindicato de trabajadores cerveceros. Sostiene una línea de confrontación con la política económica del gobierno y se opone al cambio de la legislación laboral desde una concepción que procura preservar el programa “nacional – industrialista” del primer peronismo sin romper con el Partido Justicialista. Por último, se conforma una tercera organización sindical – la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) – que encabeza Víctor De Gennaro, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Este agrupamiento asume una posición claramente opositora y sustenta su programa en principios socialistas y social – cristianos. Tiene, sin embargo, una limitante estructural importante, la mayoría de los gremios que militan en sus filas representan a las actividades de servicios y a empleados del sector público: docentes de escuelas primarias y secundarias, personal de limpia y mantenimiento, trabajadores de las instituciones de salud, burócratas nacionales, provinciales y municipales, empleados administrativos y profesores universitarios.

El deterioro de los espacios de representación social del movimiento sindical se incrementó durante los años ochentas y se aceleró bajo el gobierno de Menem al profundizar el programa neoliberal de reformas estructurales. La erosión de la proyección política de la central obrera – la CGT bajo cuya sigla se monopolizó desde 1943, la negociación con las empresas y con el Estado – se refleja en la creciente

pérdida de influencia en las decisiones de políticas públicas y en la distribución de candidaturas de representación popular dentro del Partido Justicialista.^{11/} Se redujo la gravitación y el número de parlamentarios de origen gremial y se deterioró el prestigio de los dirigentes sindicales lo cual dificulta su perspectiva de influir en la formulación de las políticas nacionales. Aún en aquellos casos de líderes gremiales que sostuvieron una conducta crítica como Saúl Ubaldini, de procedencia peronista, o independientes de izquierda como el metalúrgico Alberto Piccinini, fracasaron en sus intentos de organizar alternativas políticas propias. El deterioro de la imagen de los líderes sindicales no obedece, exclusivamente, a la comisión de actos ilícitos o al mal manejo del patrimonio de los afiliados. Hay otros factores que agravaron la decadencia política de las conducciones gremiales, como la ausencia de una oportuna reformulación de sus estrategias de reclamo y negociación frente a los cambios operados en la sociedad argentina desde principio de los ochentas. La privatización de las grandes empresas públicas, la reducción de la ocupación en el sector industrial, el incremento de la subocupación y el desempleo, así como la generalización de mecanismos contractuales inspirados en los principios de la flexibilidad laboral, volvieron obsoletos los programas reivindicativos que fueron formulados en las épocas de pleno auge de la industrialización sustitutiva y con tasas de desempleo abierto de un dígito. Hasta los años setentas la desocupación llegaba, en los momentos de mayor recesión, al 5 o 6 por ciento, durante los años noventa el desempleo trepó a tasas que variaron entre el 15 y el 20 por ciento.

Pese a que en julio de 1994, la CGT y algunos grupos sindicales disidentes aceptaron suscribir el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social”, el gobierno decidió imponer, con el respaldo de las cámaras empresariales, las normas jurídicas que ampliaron el campo de la flexibilidad laboral. La CGT, por su parte, dio un acuerdo tácito a la promulgación de la nueva legislación. A través de la Ley 24 465 se

modificó el régimen de contratos de trabajo y se estipularon diversos mecanismos de desregulación de las relaciones obrero-patronales. Entre otras disposiciones deben destacarse las siguientes:

- La Ley no considera el período de prueba; el tiempo que puede durar este tipo de relación de trabajo lo fija la empresa o se incluye en el convenio colectivo que norma las condiciones laborales para cada establecimiento.
- El aguinaldo se puede pagar fraccionado, por ejemplo, en forma mensual manteniendo una relación de 8.30% del salario nominal.
- El otorgamiento de premios por productividad, presentismo y puntualidad podrían suspenderse, cancelarse o modificarse de acuerdo a las condiciones financieras de la empresa
- La indemnización por despido se reduce a medio salario por año de servicio. En la legislación anterior se pagaba un mes por cada año de trabajo.
- La duración de la jornada de labores puede modificarse de acuerdo a las necesidades de la empresa, extendiendo la jornada de trabajo hasta un máximo de 12 horas diarias.

También se modificaron otros aspectos sustantivos de las condiciones en que se contrata la fuerza laboral. Se cambió el régimen de accidentes de trabajo mediante una Ley de Riesgos del Trabajo que establecía la creación de un *seguro social privado* para responder a los accidentes laborales y enfermedades profesionales, en la misma Ley se estableció que todos los trabajadores del país tienen la obligación de afiliarse a este

régimen. En atención a una reiterada demanda patronal se protege a las empresas cancelando la vía judicial para atender los reclamos en caso de accidentes laborales.

En agosto de 1995 fue aprobada la nueva normatividad con el voto del PJ y de algunas fuerzas políticas provinciales. Puede afirmarse, que con este acto, el gobierno menemista logró implantar una significativa transformación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, reformando íntegramente el sistema previsional anterior. El citado “Acuerdo Marco” fue la plataforma política desde la cual amarró a la CGT y tejió los acuerdos que le permitieron obtener el voto favorable del Congreso. Como premio consuelo, los sindicatos pudieron lograr que se aceptara su participación en el negocio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Por su parte, el sindicalismo opositor a la política económica y a las reformas a la legislación laboral fue poco lo que pudo hacer. La CTA se colocó en el escenario gremial como la primera central en oponerse al gobierno. La mayoría de los sindicatos que militan en sus filas sufrieron las consecuencias de las privatizaciones y de la llamada modernización de las estructuras del Estado. El despido de miles de empleados públicos y la pérdida de prestaciones puso a la CTA en una situación de alto riesgo. También como resultado de estas políticas y para formular una estrategia defensiva ante el cierre de fuentes de trabajo, se conformó la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Bajo el liderazgo de un empleado público de la provincia de Jujuy, Carlos Santillán, esta agrupación cobró notoriedad en 1995 cuando llevó a cabo planes de lucha que generaron una severa crisis en esa provincia. Se trata de una central de menor tamaño en cuanto al número de sindicatos afiliados y sólo tiene presencia en algunas regiones del interior de la república. No obstante, adquirió ciertos anclajes en provincias donde las actividades primarias son aún relevantes y los gremios de

trabajadores rurales, cortadores de caña y jornaleros de la fruta despliegan un importante activismo reivindicativo.^{12/}

Las corrientes del sindicalismo opositor han formulado propuestas y aportado nuevos elementos de discusión que constituyen un punto de arranque para diseñar una estrategia obrera que supere las limitaciones de las políticas vinculadas al viejo acuerdo social. En primer lugar, parten del reconocimiento que el modelo de negociación que permitió articular la relación empresas – Estado –sindicatos que prevaleció entre 1943 y 1976 se encuentra agotado y reiterar viejas políticas sólo sirve para facilitar el avance del capital y llevar al movimiento obrero a la derrota.^{13/} En consecuencia, proponen como ejes de debate para la formulación de una nueva estrategia sindical algunos tópicos que consideramos medulares:

- Diseñar una política de acción gremial que permita enfrentar los resultados catastróficos del modelo neoliberal mediante la construcción de un polo social alternativo que aglutine a todos los grupos castigados por la apertura comercial, el repliegue del Estado, la desregulación de los mercados y el desmantelamiento de importantes fuentes de empleo.
- En congruencia con el punto anterior, plantean incorporar en los planes de lucha de las centrales obreras y de los gremios a otros movimientos sociales como desocupados, vecinos de barriadas pobres, mujeres, jubilados y pensionados.
- Impulsar la creación de centros de estudio de la realidad social y en particular, analizar y difundir las transformaciones operadas en el mundo del trabajo.

- Buscar una proyección política de los sindicatos que no suponga, necesariamente, el amarre con determinadas estrategias partidarias. En este sentido coexisten en el sindicalismo opositor dos visiones de lo que debe ser la vinculación de los gremios con las agrupaciones políticas, una sostiene una posición sindical “pura” y considera que lo más recomendable es alejarse de los partidos. Otra corriente afirma que las demandas obreras deben articularse con alguna de las expresiones políticas que ofrece el mercado de los partidos formalmente constituidos.

El colapso del acuerdo social que hizo posible el desarrollo de la economía argentina desde los años cuarenta agravó antiguos vicios de las estructuras sindicales. Con la crisis de la estrategia de industrialización protegida se potenciaron las limitaciones ideológicas del viejo sindicalismo y se hicieron más gráficas las carencias de sus prácticas reivindicativas. El movimiento obrero que apoyó la candidatura de Menem en 1989 y que reiteró su respaldo para la reelección de 1995, se encontró bajo condiciones económicas que ya no respondían a los parámetros de desarrollo “hacia adentro” bajo los cuales se promulgó una legislación laboral tutelar y se cristalizaron ciertas prácticas de negociación.

Desde mediados de los años ochenta y de manera vertiginosa a partir del gobierno de Menem, los sindicatos se encontraron con un nuevo paradigma productivo caracterizado por la aplicación de hecho y de derecho – al promulgarse la nueva legislación – de medidas desregulatorias del mercado de trabajo que potenciaron la difusión del empleo “atípico”, como las labores a domicilio, temporales, a tiempo parcial y a destajo. Todas estas formas ocupacionales caben en el mundo del trabajo precario donde la afiliación sindical es escasa o nula y se permite la negociación individual entre patrones y empleados. El tratamiento personalizado de las condiciones laborales y la resolución individualizada de los conflictos contribuyen a erosionar la trama solidaria

que ofrecen los convenios colectivos de trabajo. La aplicación de la flexibilidad laboral cumple, de esta forma, un papel “disciplinador” de la mano de obra y facilita la reducción de los llamados costos laborales.

Otro factor, fuertemente condicionante de las negociaciones obrero-patronales, es el contexto de altas tasas de desocupación que actúan como variable paralizante para las organizaciones de los trabajadores. Es realmente difícil organizarse y emprender acciones reivindicativas cuando peligran las fuentes de trabajo y obreros y empleados son amenazados por los despidos. Como referente histórico, cabe apuntar que la desocupación record de 1995, casi del 20 por ciento, tuvo un efecto paralizante en el ámbito sindical y fue demoledor de cualquier expectativa destinada a enfrentar, con el instrumento clásico de las luchas obreras, las huelgas, al programa económico del gobierno.

La perpetuación de las antiguas dirigencias gremiales formadas y surgidas durante los años sesenta y setenta, desprestigiados, en muchos casos, ante sus bases y repudiadas por la opinión pública, dificulta aún más la posibilidad de formular un modelo sindical que tenga respuestas adecuadas para los desafíos que entraña el nuevo sistema de acumulación y las formas institucionales que lo acompañan. Coincidimos con el juicio del investigador Arturo Fernández, el período 1989-1995 constituye la agonía del modelo sindical que se gestó durante la experiencia distributiva y tutelar que se implantó en los gobiernos peronistas.^{14/}

Con la llegada al gobierno de la Alianza que postuló la candidatura de Fernando de la Rúa, las principales corrientes del movimiento sindical conservaron sus estrategias básicas, aunque en un contexto político distinto. A diferencia del Partido Justicialista, el gobierno del presidente de la Rúa careció de puntos de apoyo en el movimiento obrero

y un primer acercamiento con la CTA, se frustró al ratificarse la política económica. De esta forma, a medida que se deterioraron las condiciones económicas se incrementó la conflictividad social que empieza a desbordar las estructuras orgánicas de los partidos y sindicatos. Sobre un terreno en el que se agudizan las disputas y los conflictos reivindicativos las organizaciones piqueteras adquieren un mayor protagonismo y ocupan un espacio cada vez más amplio. La misma dinámica de las protestas va prefigurando el escenario que estalla en las jornadas callejeras del 19 y 20 de diciembre de 2001.

¿Desocupados? ¿Lumpenes? ¿Marginales? La emergencia del movimiento piquetero

La estrategia de desarrollo que permitió consolidar las instituciones públicas latinoamericanas desde una perspectiva relativamente más incluyente en términos sociales y que dio lugar al establecimiento de un conjunto de normas de convivencia más democráticas, comenzó a derrumbarse a fines de los años setentas. Un doble efecto que conjugó el dramático cambio en las condiciones internacionales y la firme decisión de una franja considerable de las clases políticas y empresariales locales de implantar políticas de apertura comercial y desregulación de los mercados, zarandeó las estructuras estatales conocidas y alteró las reglas del juego que habían dado cierta certidumbre en relación al comportamiento de los actores sociales. Esta transición del modelo de industrialización semi-autárquica a la apertura comercial y la privatización de los bienes públicos de áreas sustantivas como los transportes, bancos, teléfonos, siderurgia y petróleo, produjo una alteración radical en la operación de los mercados de trabajo y generó una caída relativa del empleo convencional – en particular en el sector industrial – así como el crecimiento desmesurado de formas ocupacionales precarias, institucionalmente desprotegidas y pobremente remuneradas.

El fenómeno que se describe, bien definido por Robert Castel como la crisis de la sociedad salarial,^{15/} ha provocado la intensificación de antiguas formas de exclusión social y el surgimiento de nuevos elementos de vulnerabilidad y desigualdad. Este proceso, con fuerte anclaje en la crisis y degradación del mundo del trabajo, constituye una de las cuestiones más desafiantes del presente y del futuro de los países latinoamericanos.

Los aportes teóricos de Castel dan cuenta de las diversas formas que adquiere el deterioro de las condiciones sociales en la actual etapa de reestructuración de la economía capitalista a escala mundial. No obstante, resultaría insuficiente explicar las distintas expresiones de inconformidad popular y desobediencia civil a partir de un solo factor causal de orden material. El agravio económico – la pobreza, el desempleo, la desprotección de las instituciones públicas – constituye el referente general en el que actúan los actores sociales pero, siguiendo a Barrington Moore, sólo la percepción crítica de dichas desventajas por parte de los sujetos agraviados, crea las condiciones para que se produzcan fenómenos de desobediencia social. En palabras del propio autor: “Sin los fuertes sentimientos morales de indignación, los seres humanos no actuarían en contra del orden social. Y en este sentido, las convicciones morales se convierten en un elemento igual de necesario para cambiar el orden social, junto con las alteraciones en la estructura económica. La historia de todas las luchas políticas importantes refleja el choque de pasiones, convicciones y sistemas de creencias...”

La aparición de nuevos actores sociales y la generalización de ciertas acciones colectivas de protesta popular relativamente novedosas, constituye una fuerte tentación para sacar del baúl conceptual algunas herramientas que fueron moneda corriente para analizar fenómenos que podemos agrupar bajo el común denominador de “lo popular”.

La idea de marginales y excluidos parecen adecuadas por el tipo de sujeto social que ocupa las calles, corta el tránsito en puentes y carreteras; demanda comida y trabajo en las puertas de las oficinas públicas. No obstante, pensamos, siguiendo a Castel, que se está en presencia de una situación distinta y en muchos sentidos más grave, que aquella que se vivió hace treinta o cuarenta años, cuando se sistematizaron conceptos como el de “poblador marginal”, “excluidos sociales” y la misma idea de “vulnerabilidad” explicadas a partir de condiciones que se entendían, en muchas ocasiones, como adversidades económicas transitorias y determinadas por un ciclo productivo desfavorable pero posibles de revertir al ingresar en una nueva etapa de crecimiento. Hoy sabemos que las limitantes son de carácter estructural y que asistimos al aumento de las barreras que dificultan el acceso a un empleo estable, en un contexto de deterioro, individualización y fragmentación de las relaciones capital-trabajo, junto a la proliferación de los espacios extra-laborales y de instancias intermedias de socialización.

El desarrollo del asambleismo barrial que promueve la instalación de comedores populares, centros de salud, establecimientos educativos y que gestiona, de manera directa, el suministro de servicios básicos como la electricidad y el agua potable, constituye uno de los referentes más alentadores de la decisión popular de asumir, en sus propias manos, lo que niega o regatea el Estado y que mal expresan los partidos políticos al usarlos - desde una perspectiva instrumental - como base de apoyo electoral y grupos de agitación callejera.

Existen otras manifestaciones del fenómeno popular que se canalizan hacia ámbitos más cercanos a las cuestiones de orden cultural y de la expresión de conductas particulares. Franjas importantes de la juventud latinoamericana encuentran en la música, en la moda, en el manejo de ciertos giros del lenguaje y hasta en actitudes de

carácter gestual, una forma específica de expresar su repudio al estado de cosas vigente y de transgredir las normas, valores y convencionalismos impuestos por la cultura oficial. Tal vez la cara más negativa de estos intentos de apropiarse de espacios públicos, lo constituyen las hinchadas de fútbol que, en muchos países de Sudamérica, hacen de la identificación con una determinada divisa deportiva, la única fuente desde la cual construir una identidad que les pertenezca. A partir de la adhesión a ciertos colores futbolísticos, se canaliza, a través de la violencia, que se ejerce, en muchos casos, contra otros jóvenes con iguales carencias materiales, el profundo sentimiento de frustración que domina a quienes no encuentran, ni escuela ni trabajo, en una etapa clave de su formación como ciudadanos. Esta guerra, de “pobres contra pobres”, es una de las manifestaciones de los niveles de conciencia social más degradados y al mismo tiempo, la práctica de acciones casi delictivas por parte de quienes no encuentran - ni en las instituciones, ni en los partidos tradicionales – los referentes culturales, políticos o simbólicos que expresen sus intereses y aspiraciones.^{16/}

La formulación del concepto de “sujeto marginal” se vinculó en la literatura social europea a los grupos que han roto sus lazos con la comunidad de origen, es lo que algunos autores definen como un “desafiliado”, cuyas condiciones de vida se acercan más a la situación de desarraigo ya que no se corresponde, exactamente, con las condiciones de vida de la población identificada como pobre.

Estos últimos viven la precariedad de su estado como la consecuencia “natural” de la mala distribución del ingreso y la escasa cobertura de los sistemas de seguridad social. La marginalidad, en cambio, puede estar asociada a factores que no guardan relación directa con la ocupación o el nivel de ingreso como el grupo étnico de pertenencia, la religión que se profesa, el idioma y los usos y costumbres. La antropología latinoamericana puso énfasis en este tipo de variables para identificar y estudiar las

condiciones de vida de las comunidades indígenas, de los campesinos migrantes y de ciertos segmentos de la población urbana con escasos niveles de integración social.^{17/}

De igual forma, la idea de “exclusión” no necesariamente se vincula con la pobreza, los bajos ingresos o un escaso nivel educativo. Existen ciertos procedimientos *ritualizados*, señala Castel, que marcan la exclusión y suelen remitir a políticas y sanciones que se generan e instrumentan desde instancias oficiales y que suelen expresar la voluntad estatal de “alejar” y aislar a determinados individuos o grupos sociales. Algunas formas de exclusión se vinculan a cuestiones religiosas, étnicas o culturales y lleva a que ciertos grupos de población sean identificados como potencialmente peligrosos por su raza (negros o árabes en el caso de algunos países industrializados, indígenas en las naciones latinoamericanas), religión (ser musulmán o católico según la sociedad de que se trate), pertenecer a determinada minoría nacional o bien por ciertas “anomias” de la vida privada como es el caso de las comunidades homosexuales, colectivos juveniles que hacen uso de sustancias prohibidas, o de quienes practican la poligamia en países que son ajenos a ese tipo de estructura familiar.^{18/}

La exclusión adquiere diferentes formas y puede ser transitoria o definitiva, como el encarcelamiento o el destierro y supone siempre un acto de separación de una persona o de un grupo del resto de la sociedad. Con frecuencia esta decisión proviene de un acto de autoridad pública o al menos de un sector de la sociedad – el que detenta posiciones de poder – constituido como autoridad representante del conjunto de los intereses colectivos que pueden verse potencialmente amenazados.

Por el contrario, la marginalidad tiende a ser un acto que se genera a través de un proceso de *producción social* que se encuentra enraizado en la organización del trabajo, en la distribución de la riqueza y en el sistema de valores y estructuras políticas

dominantes. La literatura social latinoamericana terminó por asimilar ambos campos de definición, de tal suerte que los marginales eran al mismo tiempo grupos que podían ser caracterizados como excluidos, y se reconocían en ellos niveles constitutivos de diversa naturaleza, algunos de carácter socioeconómico, como ser pobre, vivir en zonas de viviendas precarias y carentes de servicios, es decir, en *habitat segregados espacialmente*, y ser desempleado o subocupado. Otras variables remitían a factores de orden moral y jurídico, como verse involucrado en conductas anti-sociales debido a la comisión de delitos de orden común y acciones de confrontación con las autoridades.

Con el fin de retomar el hilo conductor que inspira este trabajo, es necesario señalar, de manera expresa, que la masa de desempleados y subocupados que convergen, se organizan y manifiestan en las puebladas y movimientos piqueteros, no responde a las características de población marginal que se manejó, tradicionalmente, en el mundo académico y político. Tampoco se ajustan a ciertas definiciones y etiquetas que provienen de la prensa conservadora y de algunas corrientes puristas del marxismo, que ven en el protagonismo piquetero un indicio de “lumpenización” de la clase obrera. Entendemos que tampoco responden a estas definiciones los segmentos de clase media pauperizada y de trabajadores precarios, que han hecho del asambleismo barrial y de la autogestión vecinal, una forma de obtención de los servicios básicos que no se logran por la vía del reclamo institucional.

Tal como se expuso en los primeros capítulos de este estudio pensamos que la emergencia del movimiento piquetero como actor social relevante y la proliferación de las asambleas barriales como formas de participación privilegiada de los sectores populares, *son la expresión de un profundo proceso de reordenamiento del capitalismo argentino que modificó, sustancialmente, las relaciones entre los distintos actores sociales y de éstos con las instituciones públicas y los partidos políticos.* Estas mismas

políticas económicas, desplazaron hacia el desempleo y la precariedad laboral a millones de trabajadores y cancelaron las vías tradicionales de incorporación a las estructuras productivas, de vastos sectores de población que procuran ingresar al mundo del empleo en plena crisis de la antigua sociedad salarial. Las formas de acción colectiva, que constituyen el signo distintivo del movimiento piquetero, así como la mutación del discurso político y la aparición de nuevos referentes simbólicos, marcan un punto de ruptura con la centralidad sindical de otras épocas. Por otro lado, forman el núcleo de las expresiones más significativas de la *construcción de una subjetividad que se gestó a partir de la pérdida de las certezas materiales que ofreció la industrialización y el crecimiento de los espacios públicos propiciados por un Estado que fue, en muchos casos, administrador de bienes sociales y referente confiable para amplias capas de la población.*

Es necesario consignar otro aspecto relevante acerca de la naturaleza de la protesta social que se analiza. Entendemos que el movimiento de insurgencia de los desocupados y de las asambleas barriales *no constituye el repliegue o reorganización de los desplazados sobre ideologías tradicionales*, en la cual suelen buscar refugio, identidad y solidaridad algunas comunidades indígenas y campesinas del continente. Por lo tanto, es oportuno señalar que las organizaciones piqueteras no representan esa especie de “resurgimiento conservador desde abajo”, que suele registrarse en los procesos de disolución de algunos Estados nacionales (la ex URSS, la antigua Yugoslavia, entre otros) se trata, por el contenido de su mensaje, de una propuesta progresista que busca superar la triple crisis que afecta a los nuevos movimientos sociales. Esta crisis golpea en tres frentes principales: a. la urgencia de superar las limitaciones de sus programas, propuestas, ideas e imaginarios que corren el riesgo de volverse obsoletos ante la ofensiva generalizada del capital y de los grupos dominantes; b. la necesidad de replantear sus formas organizativas, debilitadas o

desarticuladas por la reestructuración económica y c. ofrecer alternativas a las dudas y el desconcierto que viven sus ideólogos y dirigentes aferrados, en muchos casos, a viejos paradigmas y referentes políticos desactualizados.

Los Pasos Previos: Fogoneros, puebladas y piquetes.

Cutral – Co, Plaza Huincul y General Mosconi

Francisco Urondo, poeta, ensayista y militante político asesinado en 1976, resumió en un texto que hizo época a fines de los sesenta, algunos de los momentos que marcaron un punto de inflexión en la lucha y derrocamiento de la dictadura del general Onganía en 1970. Paco Urondo reseña, en esa publicación, el surgimiento de un agrupamiento sindical combativo, que aún recordamos con el nombre de “CGT de los Argentinos”, y deja testimonio de las huelgas y puebladas de 1969 como el “cordobazo” y el “rosariozo” y del martilleo constante de las primeras acciones de las organizaciones guerrilleras. El título de ese libro – de prosa ágil y directa y sin más pretensiones que ser una especie de crónica novelada de las luchas del momento – es el mismo con el que encabezamos este apartado, *Los Pasos Previos*.^{19/}

A fines del siglo XIX y principios del XX, los primeros sindicatos anarquistas y socialistas formaban, durante las huelgas, *piquetes* de fábrica con el propósito de impedir el ingreso a los establecimientos en conflicto de los trabajadores que no acataban el paro o bloquear el acceso del personal jerárquico de las empresas. A fines del siglo XX y comienzo del XXI la palabra ha sufrido una atractiva mutación, ahora se utiliza para identificar a la población desempleada que corta el tránsito en rutas y puentes, que hace fogones en calles y plazas públicas y que se planta, de manera altiva y desafiante, frente a las puertas de las oficinas gubernamentales.

Esteban Rodríguez agrega en un magnífico ensayo titulado “Encapuchados. Taparse el rostro para tener un rostro” que: “(...) En boca del periodismo consensual la palabra será enseguida personalizada hasta estereotipar lo que pretende enunciarse con ella, hasta volverse peyorativa (...) Un piquetero entonces, será alguien desocupado, pero también alguien que se cubre el rostro, que es joven y desaliñado. Alguien del cual hay que tener cuidado, estar precavidos. El piquetero es alguien sospechoso, sea porque no se le ve la cara, o porque cuando se la puede ver, se vuelve sospechoso por la portación de esa cara”.^{20/}

Antes de iniciar el análisis del proceso social que nos ocupa es conveniente formular una advertencia. La mención de las organizaciones piqueteras que aparecen en todo este capítulo y que se vinculan a distintos lugares y momentos, obedece a tres criterios fijados de manera un tanto caprichosa. En primer lugar, se consideró a aquellas agrupaciones que surgieron al calor de las primeras confrontaciones en las provincias de Neuquén y Salta, de manera particular en las localidades de Cutral-Co, Plaza Huincul, en Neuquén y en General Mosconi y Tartagal, en el caso salteño. Un segundo factor que se tuvo en cuenta fue el nivel de protagonismo, arraigo y permanencia que alcanzaron las organizaciones de trabajadores desocupados. El tercer criterio fue identificar, en las localidades del Gran Buenos Aires, a las agrupaciones piqueteras con mayor implantación y poder de convocatoria, poniendo de relieve, de manera particular, el perfil laboral de sus bases sociales: trabajadores precarios de barriadas pobres y obreros desocupados o subempleados de largo plazo. Con el fin de dar cuenta de las corrientes más importantes del movimiento piquetero se obviaron las referencias a grupos menos consolidados que se constituyeron, en muchos casos, a partir de las fracturas que se produjeron en las organizaciones más representativas, o que obedecen al activismo implantado por algunas corrientes de la izquierda partidaria en las localidades con más altas tasas de desempleo.

La historia de los primeros acontecimientos con los que arranca el fenómeno de convergencia social que se popularizó más tarde con el nombre de movimiento piquetero, confirma esa especie de principio de aceptación universal según el cual la cadena de los procesos sociales se corta en el eslabón más débil. Las primeras puebladas y piquetes se produjeron en regiones mono-productoras cuya base económica fue profundamente afectada por las políticas de reordenamiento económico del gobierno menemista. Los grandes cortes de rutas y concentraciones populares de junio de 1996 y abril de 1997 – que dieron origen al surgimiento del movimiento piquetero – se llevaron a cabo en las localidades de Cutral – Co y Plaza Huinul, provincia de Neuquén, dos ciudades sacudidas por la cesantía laboral que provocó la privatización de la más importante empresa pública del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El surgimiento y gravitación que alcanzó YPF en la vida del país amerita una descripción rápida de lo que esta empresa representó para miles de trabajadores y para cientos de ciudades y pueblos del país. Cabe señalar, que fue creada durante los años veinte bajo el gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear (1922-28) y que en poco tiempo se transformó en una empresa tipo para el resto de los países de la región.

La presencia de YPF en la provincia de Neuquén – y podemos decir que, como regla general, en todas las regiones donde se instaló - estuvo caracterizada por un proceso de convivencia social y de despliegue territorial que excede la idea clásica de las denominadas economías de “enclave”. En los setenta años que se mantuvo como empresa pública – fue creada en 1922 y privatizada en 1992 – las actividades de extracción, refinamiento y comercialización del petróleo y sus derivados, incluyeron un sistema de contratación laboral de tipo tutelar que abarcó una significativa red de prestaciones sociales como viviendas, asistencia médica, escuelas pre-primarias,

instalaciones recreativas y deportivas así como tiendas de venta de alimentos y farmacias, estas últimas administradas por el sindicato pero con fuerte respaldo de la empresa. Una relación contractual de esta naturaleza permitió que el universo laboral se extendiera más allá de los espacios propiamente productivos y afectara, favorablemente, al conjunto de la vida social. YPF era, al mismo tiempo, la primera empresa petrolera verticalmente integrada y de propiedad estatal en América Latina y expresaba, como pocos organismos públicos de la época, los beneficios y oportunidades que ofrecía el Estado argentino en su fase de promoción de las políticas industriales. Aunque la administración de YPF sufrió modificaciones según los programas de gobierno que instrumentaron los numerosos presidentes que tuvo el país durante los setenta años que duró la compañía, las características que mencionamos se mantuvieron casi inalterables hasta septiembre de 1992.

Maristella Svampa y Sebastián Pereyra señalan, con acierto, que los trabajadores de YPF formaban un segmento ocupacional con condiciones laborales y sociales de “aristocracia obrera”, tanto en comparación con los empleados de otros entes y organismos públicos como en relación a buena parte de los trabajadores de empresas privadas.^{21/} Pertenecer o no a YPF establecía claras diferencias en las ciudades y regiones donde la empresa radicaba sus instalaciones. La asignación de viviendas para el personal jerárquico y las facilidades que la empresa otorgaba para construir, comprar o alquilar una casa para el resto del personal, generaba una doble segregación espacial, la de quienes pertenecían a YPF con respecto a trabajadores de otras empresas y dentro del mismo conglomerado que formaban los empleados de esta compañía, entre el personal jerárquico y técnicos calificados y los obreros de los pozos y plantas refinadoras. El llamado “Campamento Uno” en la localidad de Plaza Huincul y “Campamento Vespucio” en la provincia de Salta eran los asentamientos del personal directivo y de los técnicos. No muy lejos de allí, se encontraban los barrios obreros de

Cutral – Co en Neuquén y General Mosconi en la provincia de Salta. Un panorama similar ofrecían las localidades de Caleta Olivia y Cañadón Seco en la provincia de Santa Cruz, dos campamentos que alcanzaron su esplendor durante la década de los sesenta y setenta y que languidecen después de la venta de YPF en 1992.^{22/}

Es importante consignar que estas especificidades materiales del mundo laboral que generó YPF, hicieron posible el surgimiento de un tipo determinado de *subjetividad social y de difusión de un referente simbólico “nacional – industrialista”*. En la cúspide de este discurso se encontraba la idea rectora que asociaba la prosperidad económica y la misma defensa de la soberanía al control estratégico, por parte del Estado, de los recursos naturales. YPF era, en este sentido, no sólo un ejemplo de la presencia pública en una actividad clave sino el paradigma a partir del cual debían formularse las políticas de industrialización.

La dictadura que surgió del golpe militar de marzo de 1976 inició el proceso de desmantelamiento de YPF impulsando la apertura al capital privado de las tareas de exploración y explotación de los pozos. Fue también durante este período, que se hizo un manejo irresponsable de los recursos de la compañía agravando el déficit financiero y multiplicando el endeudamiento externo. Estas condiciones facilitaron la implantación de la política decididamente privatizta y antiestatal del gobierno de Menem que decidió liquidar la empresa desgajando primero áreas estratégicas de YPF – que fueron disueltas o subcontratadas a empresas particulares – y reordenando el factor laboral mediante la reducción del número de trabajadores contratados, para disponer, finalmente, su privatización. Con este fin se promulgaron, entre 1989 y 1993, cuatro decretos, el 1 055,1 212 y el 1 589 mediante los cuales se disponía la transferencia a compañías privadas, de amplias áreas de exploración y producción. Por último, en septiembre de 1992 el gobierno dictó una nueva Ley de Hidrocarburos – Ley 21 145 –

con la cual se cerró el ciclo histórico abierto setenta años atrás. Con este instrumento legal se transfirió a las provincias el dominio de los hidrocarburos y se declaró a YPF como una empresa sujeta a su total privatización. En la primera venta de acciones el grupo local Astra (industrial y financiero) quedó con el control de la compañía pero en 1999 el corporativo español Repsol se hizo cargo del paquete mayoritario y de la propiedad de la empresa. Con este paso la Argentina se convirtió en el único país de la región en abandonar completamente el carácter estatal de la extracción y explotación del petróleo.

La desaparición de YPF como ente público energético tuvo consecuencias sociales y económicas graves. Mediante una política de profundo reordenamiento de la plantilla laboral se logró reducir el número de trabajadores de manera drástica. A través de la aplicación sistemática de despidos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios – en muchos casos inducidos – se pasó de 51 mil empleados en 1990 a aproximadamente 4 mil 600 en 1997. La estimación de despidos que se contabilizaron en algunos estudios para el período 1990-97, clasificados por zonas, es la siguiente: en la región neuquina, 4 246; en la provincia de Salta 3 400; en Comodoro Rivadavia (Chubut) 4 402; en la cuenca austral 1 660; en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, 1 177. Esta brusca política de “reducción de los costos laborales” vía la disminución del personal ocupado, estuvo lejos de ser el resultado de un proceso acordado entre la empresa y los trabajadores. El gremio que agrupa a los empleados del sector – el Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE) – después de un primer momento de oposición al traspaso de YPF a capitales privados, negoció de manera complaciente con el gobierno de Menem y con los nuevos propietarios. La actitud claudicante del SUPE facilitó el derrumbe de los primeros amagues de resistencia obrera y aceleró el colapso de la vida laboral y comunitaria en aquellos municipios y localidades que

crecieron y vivieron su mayor época de auge bajo el amparo de la más grande empresa pública del Estado argentino.

Si se hace un repaso de los efectos de la privatización de YPF en algunas plazas petroleras, puede valorarse la magnitud del daño, que causó esta medida, en términos ocupacionales y económicos. Citando un estudio elaborado específicamente con este propósito, Svampa y Pereyra mencionan que en el corredor Cutral – Co – Plaza Huinul, una región escasamente diversificada y por lo tanto más dependiente de YPF, se perdieron alrededor del 80 por ciento de los empleos y en el caso de la localidad de General Mosconi y de Tartagal, la privatización y el repliegue de la empresa significó una caída del 70 por ciento de la actividad petrolera y la pérdida del 75 por ciento de los empleos. Debe destacarse que la reducción de la ocupación produjo una honda expansiva que llevó al desmantelamiento de las actividades de servicios y comerciales de importantes sectores de aquellas comunidades donde YPF había contribuido a consolidar el tejido social y productivo.^{23/}

¿Cómo afectó a los poderes locales el derrumbe económico y ocupacional de un ente que había sido pilar de las políticas públicas en materia energética? Recordemos que el surgimiento de un movimiento de resistencia al programa económico gubernamental y a la pérdida de fuentes de trabajo se produjo en dos localidades de la provincia de Neuquén. Es conveniente, entonces, incorporar algunas referencias a la particular conformación de las fuerzas políticas provinciales y su vinculación con las autoridades nacionales.

Constituida formalmente como provincia autónoma en 1955 – después de haber integrado la república con el carácter de Territorio Nacional – Neuquén se transformó durante los años sesenta y setenta en una región proveedora de hidrocarburos y de

hidroelectricidad para el resto del país. El surgimiento y consolidación del Estado provincial adquirió un marcado perfil interventor y distribucionista que se expresó en la creación de importantes instituciones locales responsables de atender la demanda de bienes y servicios básicos como vivienda, educación y salud. Hasta mediados de la década de los ochenta la fuerte expansión de las actividades vinculadas al Estado posibilitó la permanencia de las políticas económicas tutelares y la generación de empleos. Sin embargo, la crisis hiperinflacionaria de 1989 y la posterior aplicación del programa desregulador y “libre–empresarial” del presidente Menem, erosionaron las bases materiales de la prosperidad económica y de la tranquilidad social neuquina. Las puebladas y piquetes de Cutral – Co y Plaza Huincul abrieron el debate acerca de la viabilidad de las antiguas políticas de subsidios y pusieron en la agenda local la necesidad de formular una nueva estrategia de desarrollo para la provincia que embonara con las políticas que se impulsan desde el gobierno nacional.

El contexto económico que se describe, hizo posible que los poderes políticos locales buscaran estructuras partidarias propias desde las cuales competir electoralmente y controlar la administración de las instituciones públicas. En efecto, el “modelo neuquino” – como lo define Orietta Favaro – permitió que en 1961, precisamente en las localidades petroleras de Cutral –Co y Plaza Huincul un grupo de militantes peronistas acaudillados por los hermanos Felipe y Elías Sapag, constituyeron el *Movimiento Popular Neuquino (MPN)*. Este agrupamiento les posibilitaría superar la proscripción del peronismo – que en esos años no podía participar en elecciones con su verdadera identidad – y canalizar a su favor el voto de protesta o “voto en blanco”. Con el tiempo el MPN resultó ser una herramienta eficaz para obtener recursos del gobierno central y disputar espacios de representación popular a las expresiones partidarias del peronismo reconocidas como oficiales, en particular las que competían con el rótulo del Partido Justicialista.^{24/}

En las elecciones de 1963 triunfa el MPN y pone en marcha un plan de desarrollo que incluía el impulso a las obras públicas, fomento a la industria, apertura de nuevas vías de comunicación y promoción de las políticas sociales. Este tipo de programas de gobierno sería la tónica dominante de las administraciones futuras del MPN, ganador en varias ocasiones de las elecciones locales. El punto de inflexión aparece a mediados de los noventa con el estallido del sistema de acumulación nacional y con el inevitable rebote en la economía neuquina. Se acelera el deterioro de las condiciones materiales y se manifiestan los primeros síntomas claros de fragmentación y dispersión social. En el terreno propiamente político se producen desplazamientos y se modifican las antiguas alianzas. El MPN se polariza entre las posiciones de uno de los fundadores, Felipe Sapag, defensor de las propuestas históricas del Movimiento y más cercano a una visión desarrollista de la cuestión económica y la actitud asumida por el futuro gobernador Jorge Sobisch, propenso a acordar con el programa de reordenamiento productivo y dispuesto a aplicar mano dura contra las protestas sociales. Sobisch respalda la llamada *Reforma del Estado* que impulsa el presidente Menem y apoya la privatización de YPF, Hidronor – empresa productora de energía – y de Gas del Estado. El traspaso al capital privado de los entes públicos responsables de explotar los principales recursos sobre los que se asentó el desarrollo neuquino y los nuevos criterios de asignación de regalías, redujeron las fuentes de ingreso y pusieron en entredicho los principios del federalismo, elemento simbólico característico en la estrategia de legitimación del Estado provincial.

El MPN fue perdiendo su carácter de instancia *totalizadora* de la sociedad neuquina y se desdibujó su plataforma desde la cual se convocaba a los distintos sectores sociales y al resto de las instituciones democráticas – congreso local, agrupaciones de empresarios, partidos políticos y sindicatos – a sumarse a un proyecto colectivo

encarnado en la figura del creador del Movimiento, el dirigente Felipe Sapag. Los acontecimientos de junio de 1996 y abril de 1997 marcan un punto de ruptura con una determinada concepción del desarrollo económico y agotan, también, la vocación neopopulista del MPN. Al desaparecer el Estado como garante del crecimiento y del reparto equitativo del ingreso, se esfumaron las bases institucionales y materiales que hicieron posible treinta años de acciones distribucionistas en la provincia. De esta manera, el MPN inicia un proceso de redefinición de los contenidos de la intervención estatal y se coloca como tarea prioritaria la necesidad de articular nuevas estrategias productivas. También se plantea la urgencia de recrear espacios incluyentes que abran ámbitos de participación a los actores sociales que surgieron a la luz pública en las puebladas de Cutral – Co y Plaza Huincul. El propio MPN formuló una propuesta de recomendación económica alternativa que denominó *Neuquén 2020* en la que se propone cambiar el perfil, básicamente productor de energía, por una matriz de desarrollo sustentada en la explotación agro-forestal, en la generación de alimentos y en la promoción del turismo y la minería.^{25/}

La nueva etapa que se inició con una empresa petrolera privatizada – que para efectos legales e impositivos mantuvo la antigua sigla YPF – produjo, como se comentó, efectos graves de desarticulación del tejido social, disparó las tasas de desempleo abierto y cambió, radicalmente, el panorama laboral de la región. Hacia mediados de 2001 las condiciones ocupacionales de las zonas petroleras eran francamente catastróficas, en la provincia de Neuquén la disparidad entre la ciudad capital y las localidades donde tiene asiento YPF era abismal, mientras en la primera la tasa de desempleo alcanzó el 15.2 por ciento, en Cutral – Co y Plaza Huincul trepaba al 32.5. En la provincia de Salta la situación del mercado de trabajo era similar, en la ciudad capital la desocupación llegaba al 17 por ciento mientras que en las localidades de General Mosconi y en Tartagal era del 42.8 por ciento.

Como ya se apuntó la transferencia de YPF al capital privado aceleró la aplicación de disposiciones administrativas dirigidas a reducir la plantilla de personal contratado. A diferencia de otras experiencias privatizadoras, el gobierno de Menem no se preocupó por diseñar *políticas compensatorias* ni promovió la aplicación de estrategias de reconversión económica para las ciudades y zonas afectadas. Ante el vacío de iniciativas públicas que abrieran nuevas alternativas ocupacionales, los ex trabajadores optaron por utilizar los recursos que recibieron por concepto de indemnización para la compra de ciertos bienes como casas, automóviles y artículos para el hogar o bien decidieron instalar pequeñas empresas, en su mayoría de carácter comercial o de servicios (talleres de reparación de aparatos electrodomésticos, servicios de plomería y carpintería, mecánica automotriz). Estos microemprendimientos no duraron mucho tiempo, en un par de años eran pocos los que sobrevivían ya que en un mercado saturado, la mayor parte de ellos había bajado las cortinas.

La experiencia de los ex trabajadores de YPF ofrece, en esta materia – pérdida del trabajo en relación de dependencia e ingreso al mundo del autoempleo – un matiz propio que debe señalarse. Las microempresas que pusieron en marcha se vincularon a una promesa hecha por las autoridades en coordinación con los nuevos propietarios y con la aprobación cómplice del gremio del sector, el SUPE. De esta forma y como parte de un supuesto plan de reconversión productiva, YPF promovió la creación de empresas de servicios por parte de sus ex-empleados mediante la venta de sus equipos y maquinarias como parte del pago por indemnización. Estas microempresas tuvieron un estímulo inicial que parecía asegurar su permanencia y consolidación ya que iniciaron sus actividades con contratos de servicios por 18 y 24 meses. No obstante, a partir de 1993, la empresa comenzó a regatear la prórroga de esos contratos y decidió cancelar las concesiones con YPF. Los intentos de renovación de

nuevos contratos fueron bloqueados con exigencias difíciles de cumplir, la situación se volvió aún más compleja por el carácter obsoleto de los equipos vendidos por YPF. El final era previsible, en pocos años la mayoría de estos micro y medianos emprendimientos concluyeron su vida activa con más pena que gloria. Otro dato que debe apuntarse, ya que también contribuyó a la debacle de estos pequeños establecimientos de servicios, fue un factor de cultura laboral. La mayor parte de los recién iniciados en el mundo del trabajo por cuenta propia reprodujeron las prácticas y hábitos laborales adquiridos durante muchos años de haberse manejado con los referentes organizativos del trabajo en relación de dependencia. Svampa y Pereyra mencionan que en la zona de Cutral- Co y Plaza Huincul los microemprendimientos pesaron de 32 en 1993 a 22 en 2001, donde el gobierno de Neuquén, de manera coordinada con YPF, realizó una importante labor de rescate con un préstamo de 30 millones de dólares y con la promoción de una “unión transitoria de empresas”.^{26/} En otras regiones no corrieron con la misma suerte, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz de las 25 empresas que se crearon entre 1992 y 1993 quedaban en 1997 apenas siete establecimientos. En General Mosconi y Tartagal se generaron 30 emprendimientos cooperativos en 1992 y para 1996 sólo sobrevivían cinco micro empresas. La debacle de la experiencia microempresarial fue abonando el terreno sobre el cual se levantaría una demanda más contestaria y con una visión más amplia acerca del daño causado, la población comenzó a rechazar la idea de la panacea del autoempleo a partir de un *contradiscurso* de tono más cuestionador como es la demanda de una *reparación histórica* para las regiones afectadas por las políticas gubernamentales de apertura económica y reforma del Estado.

Junio de 1996 y abril de 1997: puebladas y piquetes en Cutral – Co y Plaza Huincul

El colapso de las economías regionales tuvo un doble efecto catastrófico, para muchos de los trabajadores de la zona significó la pérdida del empleo y de la única fuente de ingreso que le daba sustento al núcleo familiar, para otros sectores de la población – comerciantes, propietarios de talleres prestadores de servicios, empresas de la construcción y restaurantes – el súbito incremento de la desocupación fue como matar la gallina de los huevos de oro. Una vasta franja de la población, que constituía su clientela habitual, vio bruscamente mermada su capacidad de consumo. Cuando YPF dejó de ser la fuente de trabajo que posibilitó la configuración de un tejido social articulado a partir de la extensión de las relaciones salariales, el conjunto de las localidades afectadas perdió los referentes que habían posibilitado la vida comunitaria. Esto explica, en buena medida, porque al producirse el estallido de las protestas obreras, grupos importantes de la población se volcaron a las calles y acompañaron las veladas nocturnas - *los fogones* - y los cortes de ruta, lo que dio lugar a las puebladas, acciones colectivas de carácter *multisectorial* que expresan el malestar de ciudades y municipios agraviados por el deterioro de las condiciones económicas.

El panorama que se describe y las causas que detonaron el conflicto permiten comprender el carácter comunitario de las puebladas y cortes de ruta en las localidades de Cutral-Co y Plaza Huincul. El 20 de junio de 1996 inicia la primera interrupción masiva del tránsito en una importante carretera provincial, este hecho presenta algunos componentes particulares que lo diferencian de los actos de protesta que se llevaron a cabo contra la privatización de YPF en 1992. Es importante recordar que para mediados de los años noventa, la desestructuración económica de las localidades petroleras se había agravado, la mayoría de los emprendimientos productivos que surgieron como resultado de la conversión de los ex-empleados de YPF como

flamantes trabajadores por cuenta propia, estaban quebrados o apenas subsistían. En medio de la eclosión social los referentes políticos y sindicales perdieron presencia, en particular el SUPE abandonó el escenario en 1992 cuando los despidos hacían estragos entre sus antiguos afiliados. Fue la misma convocatoria al corte la que permitió reagrupar las fuerzas dispersas de los ex-trabajadores de YPF y sumar otros sectores de la población, sólo entonces la experiencia de disolución de antiguos vínculos sociales y la desarticulación económica fueron percibidos por los habitantes de las dos localidades como un fenómeno que excedía las cuestiones puramente sectoriales. La pueblada creó un espacio de encuentro colectivo en el cual se amalgamaron las demandas del conjunto de los sectores afectados y se generalizó cierta desconfianza hacia las instituciones y mecanismos tradicionales de mediación social.

El 20 de junio de 1996 se formuló un llamado a los habitantes de Cutral-Co y Plaza Huincul con el fin de realizar una marcha y bloquear la ruta nacional 22. La convocatoria nació de la “Comisión Multisectorial” que se constituyó para protestar por la decisión del gobernador Felipe Sapag, de cancelar la licitación de la empresa agroquímica “Fertineu”, que representaba una alternativa ocupacional para un sector de los trabajadores desplazados de YPF. La movilización logró el apoyo oportunista de la dirigencia política local, que procuraba golpear al gobernador Sapag y la solidaridad titubeante de los intendentes municipales que se vieron desbordados por la protesta.

La propia dinámica de la movilización hizo que los cortes crecieran más allá de lo que estaba previsto. Entre la ruta principal y caminos secundarios se formaron alrededor de 21 piquetes cuyo punto neurálgico era el corte que se estableció en la Torre Uno donde se dieron cita los representantes de agrupamientos políticos, organizaciones sociales y dirigentes de grupos económicos de la zona. En el resto de los piquetes la composición social era más homogénea, el activo que interrumpió el tránsito estaba formado por obreros desocupados y vecinos de barriadas pobres, por *los fogoneros*, que pasaron la

noche —con temperaturas bajo cero— junto a las fogatas, velando por el cumplimiento de impedir el paso de vehículos por los caminos cortados.^{27/}

El intento de establecer una dirección centralizada del movimiento se fue diluyendo a medida que los piquetes tomaban un perfil más asambleario. Pocos días después de iniciado el conflicto, el gobernador Sapag propuso tratar las demandas y recibir a los representantes del movimiento, al abrirse la posibilidad de diálogo los dirigentes piqueteros asumieron de manera directa la negociación con el gobierno provincial. Los jefes partidarios y los propios intendentes, cuyas oficinas se encontraban ocupadas, fueron desplazados por los representantes de cada uno de los piquetes, este reemplazo de los antiguos referentes políticos por una conducción surgida de los mismos piquetes se expresó, de manera transparente, el 25 de junio cuando mediante una decisión tomada en asamblea se dispuso sostener el corte pese a conocerse públicamente la decisión de reprimir el movimiento que había ordenado el gobernador y que sería ejecutada por la Gendarmería Nacional y la policía provincial. De esta forma, quien dijera ser representante de alguno de los frentes piqueteros que protagonizaron el movimiento debía ratificar su calidad de tal ante los pobladores congregados en los diversos puntos de corte. Cuando el delegado elegido hacía manifiesta alguna pertenencia o simpatía partidaria estaba también obligado a revalidar su representatividad y demostrar que su legitimidad nacía del mandato otorgado por los manifestantes reunidos en algunos de los más de 21 piquetes en que se estructuró la movilización.

Tanto las dirigencias políticas como los referentes sindicales que tibiamente trataron de acompañar el movimiento, fueron rebasados por la dinámica de los grupos piqueteros que repudiaron la presencia de funcionarios de menor jerarquía y demandaron la asistencia del gobernador en los puntos de corte. Más de 20 mil manifestantes se expresaron dispuestos a enfrentar a los efectivos de la Gendarmería y de la policía lo que obligó a las autoridades judiciales a suspender momentáneamente la orden de

desalojo y forzó la presencia del gobernador Sapag en el lugar de los hechos. Con el acuerdo del máximo funcionario público local se discutieron y aprobaron los términos que posibilitaron el levantamiento de los piquetes. En líneas generales los puntos acordados muestran un carácter reivindicativo de perfil regional, más que sectorial, con el propósito de reparar el daño causado en la zona por el “vaciamiento” de YPF. La cancelación de los cortes se produjo a partir de la instrumentación de acciones de tipo asistencial —que se aplicaron en forma inmediata— como distribuir recursos a las familias más pobres, fueran o no trabajadores despedidos de YPF, y a personas desocupadas sin discriminar en cuanto a los antecedentes laborales o empresas en las que habían trabajado. El paquete incluyó la suspensión de ejecuciones de deudas que afectaban al comercio y a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, pese a los resultados favorables, es importante señalar, que el mecanismo “asambleísta” y la aplicación de una táctica de lucha que descansa en la “acción directa”, constituyeron la fortaleza y debilidad del movimiento. La emergencia de nuevos liderazgos, que surgieran de la propia dinámica piquetera, se agotó al levantarse los cortes y retornar la gente a sus barrios, el desplazamiento de los actores institucionales intermedios fue transitorio y se produjo al amparo de la movilización social pero no logró establecer mecanismos más estables de debate y participación. Cabe destacar, que todo el proceso de negociación para suspender las medidas de fuerza y retirar los piquetes, se llevó a cabo en términos de máxima tensión con las autoridades y apoyándose en una dinámica asamblearia permanente. Al cancelar los cortes desapareció el instrumento de lucha que hubiese hecho posible el cumplimiento de todos los puntos acordados con el gobierno provincial.

Poco antes de que se cumpliera un año de los primeros cortes de ruta y en un contexto político distinto se generó una nueva pueblada con cortes de ruta y enfrentamientos con la policía. Un ingrediente de carácter cualitativo marcó la diferencia con los hechos de junio de 1996. En abril de 1997 los gremios de empleados públicos y docentes

afiliados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) le dieron al movimiento un perfil marcadamente opositor al gobierno provincial y a las autoridades nacionales.

En los primeros meses de 1997 un programa de lucha del sindicato docente de la provincia de Neuquén que protagonizó varias semanas de huelga, derivó en un corte de la ruta nacional 22. El día 9 de abril un importante grupo de maestros acompañados por una comisión de padres que eran solidarios con el paro de labores, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera mencionada. El piquete se convirtió rápidamente en una trinchera de cuestionamiento a las instancias gubernamentales de mediación y de impugnación de las formas partidarias de representación social. De esta manera, sólo resultaban confiables quienes participaban, de forma directa, en las actividades de bloqueo y movilización. No obstante, la convocatoria atrajo a un sector relativamente reducido de la población, compuesta principalmente por integrantes del gremio docente, empleados públicos provinciales y un contingente significativo de jóvenes desempleados o de escasos recursos, los cuales, al igual que en las jornadas de junio de 1996, se encargaron de preparar y permanecer junto a los fogones en los puntos de corte del tránsito. Debe recordarse que la convocatoria al corte se había formulado a partir de una demanda de carácter sindical.

La respuesta de las autoridades fue, en esta ocasión, mucho más dura. Sin abrir espacios de negociación se ordenó el desalojo de los piquetes, para lo cual un juez federal dispuso el traslado de efectivos de la Gendarmería y de la policía provincial al lugar de los cortes. El conflicto se desbordó y los pobladores de los barrios más pobres de Cutral-Co decidieron sumarse al movimiento y enfrentar la represión. El enfrentamiento entre más de 10 mil manifestantes y las fuerzas represivas fue cara a cara en las rutas y calles vecinales. En uno de esos choques muere Teresa Rodríguez, una vecina de un barrio humilde de la localidad, quien a partir de ese momento se transformará en un referente político y simbólico del conjunto del movimiento piquetero.

En días posteriores a la represión, el sindicato de docentes de Neuquén aceptó los términos del acuerdo propuesto por el gobernador y puso fin al conflicto. Sin embargo, la carretera siguió bloqueada y habitantes de barrios marginales y de manera especial, grupos de jóvenes con la cara cubierta y armados de palos y piedras, se encargaron de sostener la lucha que ya había sido negociada por el gremio docente. Se trataba de jóvenes desempleados, muchos de ellos sin trayectoria laboral, que fueron adquiriendo una identidad propia y una valiosa experiencia para negociar —desde posiciones de confrontación— con las instituciones públicas a partir de las jornadas pasadas junto a los fogones y de los enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas.^{28/}

En los días posteriores al levantamiento formal de la huelga, el conflicto de los maestros fue diluyéndose y la atención de las autoridades se orientó a desactivar los grupos de desocupados y de activistas juveniles que se despegaron de la convocatoria original para formular demandas propias. Fue necesario que durante los días 17 y 19 de abril se efectuaran numerosas asambleas para llegar a un arreglo —con las autoridades provinciales y nacionales— que permitiera disolver los piquetes y desbloquear la ruta. En esta segunda pueblada se presentaron algunos elementos novedosos con respecto al movimiento de junio de 1996. Los piqueteros exigieron que además del carácter revocable del mandato de los delegados elegidos en asamblea se estableciera la rotación de los mismos, de esta forma, la comisión designada para discutir con las autoridades, integrada por doce miembros, debía ser parcialmente renovada antes de llevar a cabo una nueva gestión con el objeto de impedir la firma de acuerdos a espaldas de las asambleas o la cooptación de los delegados por parte del gobierno.

Sin embargo, la práctica asamblearia ofreció también algunas aristas que mostraron limitaciones en este ejercicio de democracia directa y de funcionamiento horizontal. Un aspecto preocupante fue la negativa de los piqueteros a establecer algún tipo de instancia organizativa que le diera continuidad y representación al movimiento, la

desconfianza en los liderazgos convencionales —valiosa para afirmar un nuevo tipo de conducción— conspiró contra propuestas de esta naturaleza y con el tiempo contribuyó a debilitar el empuje inicial de la pueblada. Otro factor contraproducente fue la presencia de ciertos actores políticos —procedentes de instancias gubernamentales o de las fuerzas partidarias tradicionales— que se acercaron al lugar de los cortes y adquirieron un protagonismo excesivo con respecto a un conflicto en el que no habían tenido una participación directa. A estas variables se suma otro elemento relevante y tiene que ver con la composición social de las puebladas, en particular la movilización de abril de 1997. Poco después del levantamiento de los piquetes la empresa Repsol-YPF ofreció 500 planes sociales mediante los cuales se otorgó un apoyo en dinero a los jóvenes desempleados que tuvieron un papel destacado en el movimiento. Los “fogoneros” que habían constituido el núcleo más sólido en el mantenimiento de los piquetes, representaban al sector de la población con mayores carencias materiales y en los casos de Cutral-Co y Plaza Huincul estos grupos, pobres y sin trabajo, no lograron articular sus reclamos con los ex-obreros petroleros, herederos de una fuerte tradición laboral y con una concepción marcadamente vinculada al trabajo asalariado, la sindicalización y el cobijo de los sistemas de seguridad social.

General Mosconi y Tartagal. Crisis regional y nuevas experiencias de lucha popular en el norte salteño

El norte de Argentina sufrió durante los años noventa las consecuencias del desempleo masivo generado por los cierres o privatización de empresas públicas, el recorte de personal de los organismos gubernamentales provinciales y municipales, la cancelación de los antiguos ramales ferroviarios y el deterioro de la actividad comercial. Ya en septiembre de 1991 una muchedumbre integrada por trabajadores de YPF y pobladores de General Mosconi efectuaron el primer corte de ruta bajo la consigna

conjunta de “¡YPF no se regala ni se vende, se defiende!” A fines de 1993, en una de las provincias más pobres de la república, Santiago del Estero, se escribió otro importante antecedente del movimiento piquetero. Frente al recorte de la coparticipación federal, las autoridades locales decidieron reducir los salarios de los empleados provinciales en un 50 por ciento. La población rechazó la medida y salió a las calles para protestar por la disminución de sus ingresos. Las manifestaciones derivaron en graves enfrentamientos con la policía y las marchas culminaron con la destrucción y el incendio de los edificios de los poderes provinciales y municipales, además de saquear las viviendas de funcionarios públicos, dirigentes políticos y sindicales. Pese al carácter de crisis local y de explosión momentánea y aislada, el “santiagazo” constituye un antecedente significativo del movimiento de los trabajadores desocupados que cobraría fuerza a partir de 1996.

En la provincia de Salta el impacto de la privatización de YPF rompió, de manera traumática, con una rica historia de relaciones laborales sustentadas en los convenios colectivos de trabajo, la estabilidad en el empleo, una escala salarial relativamente alta y la protección de un amplio sistema de seguridad social para los trabajadores. Estas estructuras fueron duramente violentadas con la cesantía de los antiguos empleados de YPF y por el rebote que provocó el incremento del desempleo en las actividades comerciales y de servicios de las localidades de General Mosconi y Tartagal.^{29/} La antigua división entre personal jerárquico y obreros de planta que había caracterizado a los empleados de YPF se diluyó rápidamente, de igual forma se atenuaron las diferencias entre quienes habían sido empleados de la empresa estatal del petróleo y aquellos vecinos que trabajaban en el municipio, eran servidores públicos, pequeños comerciantes o percibían sus ingresos de algunos de los establecimientos privados de la zona. De esta manera el conflicto adquirió un perfil marcadamente comunitario, el colapso económico fue un fenómeno generalizado que golpeó a los diversos sectores sociales.

Es importante recordar que a principios de 1997 el alza de las luchas sociales en la mayoría de las provincias argentinas, con puebladas y confrontaciones callejeras, registraban ya un pronunciado cariz comunitario. Junto a los trabajadores desempleados, marchaban comerciantes, maestros, empleados públicos, pequeños productores, y algunos sectores de la dirigencia política críticos del programa económico. La sensación de desamparo social era un sentimiento generalizado y esto explica la amalgama *policlasista* de las manifestaciones, actos en lugares públicos y puebladas que se generalizaron a partir de ese año. Fue un proceso de revalorización, para todos los grupos participantes, de los lazos de pertenencia a determinado municipio, región o localidad que permitió elaborar nuevos referentes simbólicos, rescatar tradiciones populares y construir cierta épica lugareña asociada a la defensa del patrimonio público y de la autoafirmación de la dimensión comunitaria. En la mayoría de los conflictos que se registraron en ciudades del interior de la república se entremezcló, a veces de manera larvada y en ocasiones de manera explícita, el recuerdo y un sentimiento de pérdida por la pujanza y el bienestar económico de otras épocas. General Mosconi y Tartagal reclamaban, además de sus demandas específicas, el interés de sus vecinos por recuperar su calidad de localidades petroleras.

El 7 de mayo de 1997 un grupo de habitantes de estas dos ciudades decidieron en asamblea, plantear sus reclamos mediante un corte de ruta. El piquete, previsto originalmente por unas horas, se prolongó durante una semana en el transcurso de la cual se incorporaron otros grupos lo que le dio un cariz heterogéneo y multisectorial y permitió sostener el corte con el apoyo que mediante la entrega de alimentos le otorgó la comunidad.

Los piquetes se ampliaron a otras localidades situadas en la ruta nacional 34, como Aguaray, Salvador Mazza y Cornejo. La presencia en los cortes de trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios y algunos líderes comunitarios y políticos de la

zona, así como la mediación de la Iglesia, contribuyó a impedir que triunfara la posición intransigente del gobernador Juan Carlos Romero, abierto partidario de reprimir el movimiento. No obstante, y pese a que la estructuración de los piquetes permitió conservar el orden durante los cortes, las diferencias más serias surgieron cuando iniciaron las negociaciones con el gobierno provincial. Dentro de la comisión negociadora integrada por 20 delegados que representaban las localidades de Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, un sector de los piqueteros rechazó la primer propuesta. El día 14 de mayo las demandas —que a diferencia de Cutral-Co se orientaban más contra las empresas multinacionales que contra las autoridades— fueron objeto de una discusión intensa en las oficinas de la compañía Tec-Petrol que tampoco logró arribar a un acuerdo satisfactorio. La situación estaba en el límite de la represión y la Gendarmería Nacional —al igual que en Neuquén este antiguo cuerpo de guardia-fronteras ahora reciclado en policía móvil estaba a horas de iniciar el desalojo— había trasladado sus efectivos a lugares muy cercanos a los piquetes. Por fin, el 15 de mayo se suscribió un acta de acuerdo que permitió levantar el corte. Los representantes de las cuatro localidades que participaron en el movimiento y que firmaron el acuerdo constituyeron, unos meses después, la Coordinadora de Desocupados del Departamento General San Martín, entidad administrativa a la que pertenecen los municipios que protagonizaron el conflicto. El carácter comunitario de la lucha y la naturaleza de las demandas planteadas muestran el interés de una población agraviada, por recuperar parte de lo que fue su patrimonio económico y su bienestar material. El diario *Clarín* en su edición del 12 de mayo de 1997, reproducía las declaraciones del dirigente piquetero José “Pepino” Fernández, en las que se exponía este reclamo de reparación popular: “Estamos parados sobre el petróleo y en nuestras casas cocinamos con leña” (“Deciden mantener el corte de ruta”, *Clarín*, 12-V-97). El acuerdo suscrito por los delegados piqueteros y las autoridades provinciales es una muestra del espíritu comunitario que animó al movimiento y del interés de los

pobladores por obtener una reparación económica que se extiende más allá de los reclamos específicos de los trabajadores desocupados. El periódico *Clarín* del 15 de mayo de 1997 presentó en su nota “Los puntos del acuerdo” los principales aspectos del compromiso firmado por las autoridades y los dirigentes piqueteros. Los puntos mencionados por el diario son los siguientes:

- Fondo de desempleo de 220 pesos mensuales (equivalentes a dólares) para mil personas, por un año
- Tres mil puestos del Plan Trabajar por un año y mil de seis meses de duración con un pago de 220 pesos
- Pagar en diez días uno de los tres sueldos atrasados a los empleados municipales de Tartagal
- Crear un fondo provincial de inversión de 5 millones de dólares con las regalías obtenidas por hidrocarburos
- Se duplicará el presupuesto para los comedores escolares y se instalarán en las escuelas que no lo tengan
- Crear 1 400 puestos permanentes en empresas petroleras privadas
- Plazo de 10 años a los deudores del Banco Nación y ampliación del plazo para pagar cuotas vencidas del Banco Hipotecario
- No se descontarán días a los maestros que participaron en la protesta
- Se entregarán tierras fiscales a comunidades aborígenes
- Se otorgarán créditos y tierras fiscales a los sectores maderero y agropecuario
- Se invertirán 4 millones de pesos en la construcción de viviendas

La constitución de la Coordinadora de Desocupados que agrupa a diversas organizaciones de desempleados marca una diferencia sustantiva con la experiencia neuquina. El movimiento de trabajadores desempleados salteños y los referentes

organizativos surgidos durante la lucha no fueron cooptados por los subsidios que otorgaron las autoridades provinciales ni por el Plan Trabajar del gobierno nacional, tampoco se incorporaron a la recomposición institucional ni al juego de recambios políticos que ofrecieron los partidos tradicionales. El movimiento fue desarrollando nuevas instancias organizativas a partir de dos soportes principales: la historia laboral de los desempleados, que remite a las épocas de fuerte crecimiento del trabajo asalariado, y una práctica de lucha reivindicativa —los piquetes y cortes de rutas— que se extendió rápidamente por las regiones más castigadas del interior de la república.^{30/}

El surgimiento y la experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) en la localidad de General Mosconi merece una reflexión especial. Este agrupamiento surgió en abril de 1997 por iniciativa del dirigente piquetero Juan Nieva y aglutinó a trabajadores que provenían de una doble vertiente laboral, por un lado se encontraban los ex-empleados de YPF, con buenos niveles de calificación y una extensa y consolidada tradición obrera gestada en muchos años de trabajo en relación de dependencia. El otro contingente de la UTD lo formaron personas más jóvenes, con escasa o mala calificación, muchos de ellos en condiciones de precariedad ocupacional y con antecedentes laborales más débiles y mucho menos significativos. Algunos habían sido empleados de micro y pequeños establecimientos privados y de algún modo, eran beneficiarios indirectos del proceso de expansión de la industria petrolera y de la consolidación de núcleos urbanos en la provincia de Salta. Por el contrario, los ex-trabajadores de YPF eran hijos del período más significativo del auge de las inversiones en el sector industrial, de la defensa de los recursos naturales como bienes de propiedad pública y de la expansión del empleo en las actividades extractivas, en particular en las industrias mineras y del petróleo.

La UTD fue ganando espacios propios y reconocimiento social a medida que resolvía a su favor la confrontación con las instituciones locales y con organismos políticos provinciales. Esas instancias eran las responsables de gestionar las demandas

populares y de instrumentar programas asistenciales de carácter clientelar. El enfrentamiento incluyó también a las estructuras sindicales, en particular, la Unión Obrera de la Construcción cuando la UTD decidió presionar, mediante los cierres piqueteros de caminos y rutas, para que la mayoría de las 150 empresas que funcionan en la zona aceptaran elevar el pago de la hora de trabajo de los peones y albañiles de la industria de la construcción. Los dirigentes de la UTD ampliaron sus convocatorias y atendieron las solicitudes de grupos de la comunidad que no son trabajadores desocupados.^{31/} Fue así como recibieron a los vecinos que eran representantes barriales, a los comerciantes y pequeños empresarios. Ayudaron a diseñar y gestionar proyectos productivos, a obtener recursos materiales para arreglo y construcción de viviendas y reparación de calles, plazas públicas, escuelas, centros de salud y clubes para el desarrollo de actividades deportivas. La UTD comenzó a ocupar también, como ya se señaló, un espacio que tradicionalmente le pertenece a los sindicatos, el de las negociaciones salariales. Los cortes de ruta fueron una herramienta eficaz para intervenir en la fijación de condiciones salariales y de trabajo en actividades rurales, de la construcción y de la industria petrolera. De esta forma, la UTD se transformó en un actor político relevante en la zona, sus funciones de liderazgo y representación social se ampliaron y como lo caracteriza Martín Linares, se constituyó en un verdadero “poder popular local” apoyado y reconocido por los vecinos.^{32/}

Este perfil, más universal, más incluyente de lo “popular” —entendido como una plataforma común de reclamos para el conjunto de los grupos subalternos y desplazados, y no sólo para los desempleados— fue fortaleciéndose con el desarrollo de las movilizaciones posteriores a 1997. En diciembre de 1999, la UTD recibió el primer paquete de planes de empleo para ser administrados por la propia organización con lo que se evitó la intermediación de los municipios y de los representantes del gobierno provincial. La ayuda oficial consistía en 250 Planes Trabajar que fueron convirtiéndose —igual que los que se recibieron con posterioridad— en

emprendimientos productivos. Era el primer paso para “reinventarse” como trabajadores, de acuerdo a la acertada definición de Svampa y Pereyra, después de haber ingresado bruscamente al mundo del desempleo. Este esfuerzo por volver al ámbito del trabajo se apoyó en dos elementos que surgieron de la misma dinámica de lucha del movimiento piquetero: los cortes de los caminos de acceso a las instalaciones de las empresas con el objeto de forzar la entrega de materiales y herramientas, y la voluntad de la UTD para articular una vasta red de organizaciones solidarias mediante las cuales se procura poner en marcha canales alternativos de desarrollo para la región, que abran opciones de producción y empleo sin depender exclusivamente de las actividades petroleras. En este sentido, cabe resaltar, el éxito que significó la creación de las huertas comunitarias y de numerosas granjas y viveros que permiten atender las necesidades alimentarias de la población de bajos ingresos y crear las bases que posibiliten un futuro despegue de la industria vinculada al procesamiento y empaque de alimentos.

En mayo de 2000 se inicia el tercer gran corte de rutas en la zona del norte salteño, para ese momento los desocupados que responden a la UTD constituyen el principal contingente de lucha de la región. Los acontecimientos de mayo de 2000 ponen de manifiesto la convergencia de diversos intereses y fuerzas actuantes. El corte de la ruta nacional 34 fue una resolución que se adoptó en las localidades de Tartagal y Mosconi. A diferencia de las dos primeras movilizaciones, en esta ocasión las autoridades municipales apoyaron los piquetes con el propósito de negociar, desde posiciones de fuerza, mayores recursos del gobierno nacional para las localidades afectadas por la desaparición de YPF. Entre el 9 y el 12 de mayo se celebraron intensas negociaciones que no dieron resultado. En realidad eran dos los reclamos que no permitían sellar un acuerdo, un pedido de desprocesamiento de los piqueteros a los que se les había abierto causa penal y el aumento del número de Planes Trabajar asignados a la UTD. El sábado 12 el juez federal Miguel Medina ordenó a la Gendarmería Nacional iniciar el

desalojo del corte, en respuesta los manifestantes ocuparon las instalaciones de la empresa Refinor localizada en el camino de acceso a General Mosconi y amenazaron con hacer explotar los tanques de petróleo. En la madrugada de ese día 12 de mayo se inició el desalojo que derivó en duros enfrentamientos, después de despejar la carretera la policía comenzó a requisar las casas y ocupar los barrios. La población se reagrupó y una manifestación compuesta por más de 10 mil personas que venían desde la localidad vecina de Tartagal obligó a las fuerzas policiales a replegarse, finalmente el 13 de mayo se logró un acuerdo que permitió levantar el corte. Los objetivos alcanzados por la movilización se anunciaron en una asamblea que consolidó la posición de la UTD como principal referente popular y a su dirigente José “Pepino” Fernández, ex-obrero de YPF, como líder de esta agrupación. Las demandas más importantes del pliego petitorio se habían logrado: aumentar de 1 600 a 3 000 los subsidios considerando los Planes Trabajar (nacional) y los otorgados por el gobierno provincial así como la libertad de los 45 detenidos durante la represión de los piquetes. La movilización de mayo de 2000 mostró, más claramente que en las dos ocasiones anteriores, que la UTD era no sólo el principal eje aglutinados de la protesta social sino que, constituía también, el soporte a partir del cual se organizaba la comunidad frente al debilitamiento de las instituciones locales como los mismos municipios.^{33/}

A principios del mes de noviembre de 2000 se produjo un hecho realmente novedoso que marca un cambio de orden cualitativo en lo que respecta a la composición social de los piquetes del norte salteño. Un corte que se efectuó en la zona de Cuña Muerta contó con la inesperada colaboración de las comunidades aborígenes de la región, de las etnias mataco, wichi y churupí y de grupos de productores rurales afincados en poblados cercanos a General Mosconi. No obstante, el día 9 de noviembre, los trabajadores desocupados decidieron cambiar de lugar y volver a instalar los piquetes en Mosconi, el gobierno ordenó entonces desalojar a los manifestantes y durante los enfrentamientos con la policía es asesinado de un disparo en la cara Aníbal Verón,

empleado de la empresa de transportes Atahualpa. Su nombre, al igual que el de Teresa Rodríguez, se transformaría en poco tiempo en bandera, memoria y símbolo convocante del movimiento piquetero. El día 13 de noviembre finalizó el diálogo con la cancelación del corte y la aceptación de la propuesta oficial de atender los reclamos.

El 17 de junio de 2001 se produjo una nueva confrontación entre piqueteros y fuerzas policiales que dejó dos trabajadores muertos, después de varios días de tensión el gobierno nacional, a través del Ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, decidió apoyar los proyectos productivos y las obras comunitarias que lleva a cabo la UTD. Precisamente, los trabajadores desocupados que se nuclean en esta agrupación, lograron revertir los efectos de la represión policial y abrir espacios en los medios informativos nacionales mientras que, al mismo tiempo, recuperaban la iniciativa para impulsar el proyecto de reconversión productiva regional y aplicar el subsidio de los Planes Trabajar a los emprendimientos que habían puesto en marcha los propios trabajadores desempleados.

Pese al enorme reconocimiento popular que alcanzó, la UTD nunca aceptó presentar candidatos propios en las elecciones municipales, ni apoyar los propuestos por el Partido Justicialista, una fuerza históricamente hegemónica en la provincia de Salta. Esta actitud “apartidista” se manifiesta “hacia adentro” en un funcionamiento tolerante con las simpatías políticas que eventualmente expresen sus integrantes. En términos de alianzas la UTD volcó su preocupación en el logro de un programa conjunto de reivindicaciones con la Cámara de Comercio e Industria de General Mosconi, este organismo patronal sufrió una escisión a finales de 2001 de la cual surgió un agrupamiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) dedicadas principalmente a las actividades de servicios. La nueva asociación mostró una actitud más proclive a las alianzas y acompañó los cortes de ruta que la UTD realizó en los meses de enero y febrero de 2002. No obstante, la relación con las PyME no fue todo lo armoniosa que se esperaba, la presión que ejerce el movimiento piquetero para obtener las

herramientas y los materiales que se necesitan para continuar con las obras públicas que le fueron asignadas a la UTD, afecta también al segmento de las micro y pequeñas empresas, por lo que la demanda es percibida, en algunos casos, como una actitud extorsiva que perjudica el desarrollo de los establecimientos más pequeños.

Por otra parte, la relación de la UTD con el municipio presenta algunos componentes contradictorios. En diciembre de 2001 es designado un nuevo responsable comunal que procuró acercarse al movimiento de los desocupados y a los representantes de las PyME, con la UTD acordó la entrega de las herramientas y materiales necesarios para terminar las obras comunales —arreglos de calles y plazas; reparación de escuelas y hospitales; habilitación de espacios recreativos— con lo cual el movimiento piquetero lo reconoció como un interlocutor institucional válido y abandonó su interés en disputar, formalmente, el control político de la comuna.

Trabajadores desocupados y movimientos vecinales: la protesta social en el Gran Buenos Aires

Las localidades y municipios que rodean a la capital de la república fueron el orgulloso asiento geográfico del período más celebrado de la industrialización sustitutiva de importaciones en Argentina. La sola mención de ciudades como Avellaneda, Lanús, La Matanza, Quilmes, Ensenada o Berisso evocaban los prósperos años de surgimiento y multiplicación de chimeneas y a un mundo fabril que teñía toda la vida urbana de la época. El humor popular acuñó entonces la frase —dicha en tono de broma cuando alguien presumía un producto supuestamente importado— *Made in Avellaneda* en obvia alusión al origen nacional de un reloj, un juguete, un par de zapatos o una prenda de vestir. En el ámbito de la conformación de las identidades políticas, el cordón industrial del Gran Buenos Aires es, desde 1945, un baluarte del movimiento peronista y una valiosa reserva electoral del Partido Justicialista. También constituía, hasta hace

poco más de veinte años, un bastión de algunas organizaciones sindicales como las que agrupan a los obreros metalúrgicos, textiles, de la carne y alimentación, del vestido y la construcción.^{34/}

En forma lenta durante los años de la dictadura (1976-83) y con ambigüedades bajo los primeros gobiernos democráticos, el proceso de desindustrialización, que impulsó el gobierno de Menem, golpeó de manera profunda, al tejido productivo de esta zona y modificó radicalmente la composición de los mercados de trabajo. No fue, en este caso, el cierre súbito de una refinería de petróleo, la cancelación de un ramal ferroviario o la arbitraria cesantía de empleados del estado provincial, como ocurrió en las economías de enclave del interior de la república, lo que motivó la organización de los grupos sociales afectados por la pérdida de fuentes de empleo. El deterioro de los antiguos distritos industriales del Gran Buenos Aires es el resultado de un proceso que comenzó a manifestarse a fines de los setentas y que se profundizó con la política de reconversión productiva y reforma del Estado del gobierno menemista.^{35/}

En este contexto de desaparición de alternativas ocupacionales y con una configuración social que se alejaba de los patrones históricos impuestos por la multiplicación de las empresas y la expansión del trabajo asalariado, el movimiento de los desocupados y habitantes de barrios pobres adquirió ciertas particularidades que marcan diferencias significativas con las experiencias de Neuquén y del norte salteño.

La localidad de La Matanza con alrededor de un millón 500 mil habitantes, es una de las mayores concentraciones de pobreza urbana de toda la república, después de haber sido, como se señaló, uno de los distritos industriales más importantes del cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires. La fuerte implantación que alcanzaron la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se explica, en buena medida, por la presencia de un sustento social que se constituyó a partir de la confluencia de ex-trabajadores de la industria, con una valiosa experiencia como obreros fabriles pero en situación de desempleados de larga data, mujeres de

barrios humildes y con escasos antecedentes en el empleo formal, aunque con experiencias significativas en tareas comunitarias, trabajadores precarios en ocupaciones inestables y mal remuneradas y desempleados jóvenes con muy pocos o nulos antecedentes en el empleo formal y bajo nivel de calificación. Sobre esta base social, caracterizada por una vinculación muy deteriorada con el universo del trabajo, la FTV y la CCC, fincaron su crecimiento con un perfil reivindicativo que las acerca al tipo de intervención social que es propio de los movimientos populares urbanos. El abanico de reclamos incluye demandas específicamente laborales —apertura de nuevas fuentes de trabajo— que se entremezclan con peticiones que se refieren al ámbito *territorial* o local, entendiendo por esto el barrio o la comuna. Entre otros requerimientos, figuran la legalización de los terrenos ocupados de facto por la comunidad y de las viviendas que en ellos se construyeron, la instalación de servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje y la organización autogestiva con el fin de poner en marcha, bajo control vecinal, aquellas instituciones que tradicionalmente funcionaban como parte de las responsabilidades que le competían al Estado: hospitales y clínicas de zona, escuelas primarias, guarderías y comedores populares.

De las dos agrupaciones mencionadas la FTV tiene antecedentes más sólidos en el desarrollo de organizaciones barriales. Aunque surgió formalmente en 1998 por iniciativa de la CTA, quienes se sumaron a ella fueron numerosos grupos vecinales que habían llevado a cabo una importante labor de urbanización de terrenos fiscales y de creación de nuevos barrios en zonas que carecían de servicios y en las cuales el apoyo de los municipios era escaso o inexistente.^{36/}

La emergencia de estos movimientos de origen vecinal reconoce, en Argentina, algunos antecedentes valiosos de *autogestión popular*. En 1981 se inició la ocupación ilegal de terrenos en la zona sur del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, con estos hechos dio comienzo una nueva modalidad de producción del hábitat y de organización

social de los sectores populares. Estas ocupaciones ilegales de tierras se caracterizaron por ser masivas y por el interés de los protagonistas para llevar adelante las tareas de planificar el uso del suelo y el desarrollo futuro del barrio. A partir de criterios autogestionarios, cientos de familias se instalaban en los predios baldíos, trazaban los lotes y las calles con el fin de asignar un terreno a cada familia, dejar espacios libres para las áreas de uso colectivo, y construir la red eléctrica, las tuberías de agua potable, los centros de salud y guarderías. Si quisiéramos identificar el aspecto de mayor originalidad, en este tipo de experiencias, hay que apuntar el particular modo de vincularse con la ciudad que proponen estos nuevos asentamientos. Constituyen un intento de ser reconocidos por las autoridades municipales y, al mismo tiempo, asimilarse al resto del núcleo urbano mediante una política de autoorganización y de hechos consumados.^{37/}

Es importante señalar un rasgo sustantivo en este tipo de organización autogestiva. La mayoría de los grupos vecinales se construyeron sobre la idea de la autonomía respecto de la competencia político-partidaria. De esta forma los representantes de los vecinos se definían como “apartidarios” o “apolíticos”. Esta conducta favoreció la unidad organizativa de los barrios, al colocar la competencia política fuera de sus límites y acotar —puertas adentro— las diferencias entre vecinos. Se logró establecer así un límite visible entre las organizaciones sociales, surgidas de demandas específicas de la sociedad civil, y el andamiaje institucional sobre el cual se levanta el sistema político.

Las agrupaciones vecinales que surgieron durante los ochentas y que se extendieron en los últimos diez años —vinculándose desde mediados de los noventa al movimiento piquetero— muestran algunos cambios importantes con respecto a las experiencias que se acaban de mencionar. Se mantuvo cierto desdén y suspicacia hacia las dirigencias políticas tradicionales pero, al mismo tiempo se expresó, en algunos casos, un abierto interés por disputar electoralmente el control de las comunas. La seña de

identificación que exhiben las organizaciones vecinalistas sigue siendo el descreimiento común que sienten por las antiguas fuerzas políticas y todas coinciden en un aspecto común, que en el futuro, puede constituirse en un punto vulnerable: la heterogeneidad de los sectores de población que las conforman. Es posible reconocer, en su base social a trabajadores de la industria, burócratas y comerciantes, obreros desocupados, técnicos y pequeños empresarios, personas desempleadas y subocupadas, servidores públicos desplazados o grupos marginales cuyo objetivo principal es obtener un lugar donde vivir. La composición ideológica de las bases sociales del movimiento vecinalista es variada, en ciertos casos se encuentran expresiones cercanas a corrientes políticas históricas como el peronismo y la Unión Cívica Radical, en otros parecen responder a partidos de izquierda o vincularse a fuerzas conservadoras de confusa procedencia. No obstante, las agrupaciones vecinales efectúan sus convocatorias con carácter amplio, sin discriminar por posturas ideológicas o antecedentes partidarios. El objetivo político central es jerarquizar el rol municipal, lograr una mayor autonomía de las comunas y procurar que las elecciones en las que se vota para designar a los presidentes municipales y assembleístas, se efectúen de manera separada de las provinciales o federales. Estas banderas, así como la prédica machacona contra la corrupción y la inseguridad, constituyen, junto a la demanda de servicios básicos, el programa mínimo de la mayoría de estas organizaciones.^{38/}

El vecinalismo abre un espacio de lucha para el trabajador desempleado que ya no cuenta con un sindicato al cual llevar sus demandas y lograr que lo defienda, y para los trabajadores precarios, los ocupados por cuenta propia, los subempleados, los desplazados de las empresas estatales privatizadas y para aquellos que, aún teniendo una inserción laboral estable, no confían ni se sienten representados por las antiguas estructuras gremiales ni por las ofertas que provienen de los partidos políticos. Desde el Estado se hacen reiterados esfuerzos de cooptación. Durante la última dictadura que gobernó Argentina en el período 1976-83, se trató de armar lazos con la sociedad

luego de los primeros años de terror. Vecinos “reconocidos” de las comunidades eran elegidos para reemplazar a los militares que administraban los municipios. En 1983, con el reestablecimiento de la democracia, algunos decidieron presentarse a elecciones, con este fin crearon sus expresiones vecinales organizadas políticamente. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-99), se multiplicaron los programas sociales con el objetivo implícito de conquistar el apoyo de los representantes barriales para afianzar la clientela electoral del Partido Justicialista. En algunas localidades del conurbano bonaerense se logró fracturar y cooptar a las organizaciones vecinales. En otros casos el interés ciudadano se mantuvo fiel al acuerdo de “no compromiso” partidario. La experiencia de mayor confrontación entre la voluntad ciudadana por mantener la autonomía en la gestión de los asuntos locales y el interés estatal por cooptar las organizaciones barriales, se desarrolló en el amplio y populoso cordón urbano que une a las localidades más cercanas a la capital de la república con la ciudad de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires. La administración del entonces gobernador Eduardo Duhalde puso en marcha el plan “Barrios Bonaerenses”, un paquete de subsidios económicos y ayuda material para los pobladores de las zonas de más bajos ingresos.^{39/} Al mismo tiempo se impulsó la designación de mujeres como líderes barriales, esta política de promoción de dirigentes por manzana —las “manzaneras”, como se las conoció popularmente— procuraba desplazar a los representantes locales que, desde años atrás, se encargaban de gestionar ante las autoridades municipales, la entrega de insumos básicos para las familias más pobres. El núcleo a partir del cual suelen articular su discurso los movimientos vecinalistas es la exaltación de la figura “del buen vecino”. Por lo general, se trata del ciudadano atraído por los valores que encarnan una “cuidada y austera” administración de los recursos municipales y de la prestación adecuada de los servicios básicos que se esperan de un Estado mínimo. El éxito electoral que lograron algunos candidatos vecinalistas se explica, en buena medida, por ser receptores del voto popular que desea expresar su

rechazo a la política bajo sus formas conocidas. Se entiende que una manera de “despolitizar” el voto es apoyar a un candidato que se presenta como un “buen vecino”, que se hace cargo de la gestión cotidiana de los problemas de su entorno y que se muestra indiferente a la militancia partidaria.

Con palabras simples y sin rodeos, Alberto Groppi —uno de los numerosos jefes comunales surgidos del movimiento vecinalista— define los postulados que inspiran a las organizaciones municipales: “El vecinalismo no tiene una ideología a nivel macro. Es ideología simple, un espíritu de servicio permanente por la gente que a uno lo rodea”. Otro jefe municipal, Ricardo Ubieto, de la comuna de Tigre señala que “el corazón del problema está en que se ha roto la relación entre la gente y la política porque ésta ya no resuelve ninguna de las necesidades cotidianas de los sectores sociales... el vecinalismo es la soberanía del bache, de la luz eléctrica, ver como prestas mejores servicios y no meterte en los grandes problemas ya que no los vas a solucionar...”.^{40/}

El auge del “vecinalismo”, a mediados de los 80, coincidió con el surgimiento, y multiplicación de las redes solidarias. Un relevamiento, publicado en mayo del año 2000, que efectuaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que hay más de 100 mil organizaciones comunitarias en Argentina. Se trata de entidades de bien público, sin fines de lucro, que se forman con el único propósito de defender las demandas ciudadanas. En el capítulo de conclusiones del documento *Índice de Desarrollo de la Sociedad Civil de la Argentina*, se menciona que estas asociaciones, que nacen sin patrocinio estatal, duplican a las instituciones educativas y son hasta siete veces más numerosas que las de salud.^{41/}

En momentos en los que el costo social del programa económico menemista comenzaba a manifestarse de manera más dura para los sectores populares, surgió otro fenómeno de especial relevancia, fue la aparición de mercados en los que se

adquieren y venden diversos bienes y servicios mediante el sistema de trueque. Estos mercados iniciaron a mediados de los 90, impulsados por miles de trabajadores desempleados y subocupados como un mecanismo alternativo al sistema formal de comercio. En apariencia, el sistema de trueque no se diferencia de un pacto de compra-venta rutinario, ya que cada artículo tiene un valor en “créditos”. Pero estos billetes no son otra cosa que el valor del trabajo que cada persona aporta: no son intercambiables por dinero, tampoco reemplazan a la moneda corriente ni generan ningún interés. Carlos de Sanzo, uno de los fundadores de la Red Global del Trueque Solidario señala que: “... cualquier club de trueque está en condiciones de darle a un desocupado respuesta a cortísimo plazo: barrer o pintar o, quizá su esposa, atender a un enfermo o preparar comidas (...) el trueque funciona como interfase entre el mercado social y el mercado formal y opera en los intersticios de la economía: con las butacas que quedan vacías en el teatro, con las horas que quedan sin trabajar, con la mercadería que queda sin vender.”

“El primer club de trueque se fundó en 1994. Hoy son más de 800 y hay 90 mil familias cuyo sustento depende total o parcialmente del trueque (...) sumando casi 500 mil personas.” No obstante —y pese al enorme empuje inicial de este movimiento— hacia finales del 2002 la red de intercambios tendía a debilitarse seriamente como resultado de la confluencia negativa de varios factores que quedaron fuera de control. Entre otros, la multiplicación de centros de intercambio en los que no se aseguraba el suministro de los productos, la falsificación de los bonos o “créditos” y la reventa de los mismos así como la presencia de especuladores que buscaban adquirir productos a bajo precio sin contribuir con la generación de otro bien que fuese intercambiable. De todas maneras, bajo la forma de asociaciones vecinales o mediante este curioso sistema de mercados autogestivos, la sociedad civil busca recomponer lazos de solidaridad que se perdieron con el debilitamiento de las anteriores formas de representación popular. En aquellos espacios donde los sindicatos ya no llegan —el

incremento del desempleo, del trabajo precario y de la ocupación domiciliaria le restaron bases sociales— y donde los partidos tradicionales dejaron de actuar como grandes agregados de la voluntad “nacionalista-popular”, las demandas de la población se canalizan a través de instancias peculiares que genera la propia sociedad civil.^{42/}

El fenómeno de la organización barrial en localidades y municipios con marcadas condiciones de pobreza y desocupación, expresa uno de los más serios intentos de *remodelación del espacio* a partir de la voluntad popular condensada en un movimiento de base. Cabe recordar, que los antiguos distritos obreros del Gran Buenos Aires y zonas industriales de la capital fueron el espacio privilegiado de producción y sociabilidad de la clase trabajadora. Esta división “fordista” del territorio permitió consolidar un sujeto social relativamente homogéneo, que protagonizó jornadas históricas en el desarrollo del movimiento obrero argentino. Esta especie de continuidad territorial, identitaria y simbólica, resultó brutalmente sacudida por las políticas de modernización del capitalismo argentino, fue así como pasó de las estructuras urbanas, con centralidad en las fábricas, al desmembramiento geográfico y la disgregación social. La instalación de los asentamientos irregulares abrió paso a la construcción de un espacio físico en el que la debilidad de los vínculos laborales se suple con la recreación de nuevas redes de solidaridad —comedores populares, centros de salud comunitarios, escuelas y guarderías edificadas por los vecinos— con la gestación de nuevos referentes simbólicos y con la búsqueda de estructuras organizativas que faciliten la participación colectiva en la resolución de los problemas comunes.

La instalación de los asentamientos urbanos sobre terrenos fiscales ocupados de facto, es uno de los componentes de un proceso complejo de reorganización de los sectores populares a partir del territorio. Esta forma de organización social permite generar un espacio físico que escapa a la lógica tradicional que impone el fraccionamiento capitalista del suelo y contribuye, además, a difundir formas de

solidaridad mediante las cuales se preserva al barrio de las políticas públicas que fijan los criterios acerca de la ocupación y uso de la tierra en zonas urbanas.^{43/} La organización barrial posibilita también el desarrollo de proyectos productivos que, aún en su etapa artesanal, contribuyen a que el desocupado recupere su condición de trabajador y la mujer proyecte su presencia social más allá de la familia nuclear. Este anclaje que se logra por la vía del trabajo —aunque no se trate de un empleo convencional— es el paso que permite vincular a los desocupados con su propia historia como personas productivas y crear, desde la pobreza, formas de vida comunitaria más justas incluyendo aquellas esferas desatendidas por el Estado, como la salud y la educación, asumidas ahora como responsabilidad del conjunto de la sociedad.

El cambio en las relaciones de género es otra dimensión que surge del nuevo patrón de organización del espacio, la sustitución de antiguos roles asignados a la mujer por un papel más activo en las tareas comunitarias abre un campo fértil para facilitar la incorporación femenina en las labores barriales solidarias y en el sostenimiento de los piquetes que realizan los desocupados. Se estima que más del 50 por ciento del activo militante que despliega el movimiento piquetero está integrado por mujeres, la presencia femenina ha contribuido a modelar algunas actividades de la organización y vida cotidiana del movimiento. Es particularmente destacada su participación en los talleres y emprendimientos productivos, donde prevalece una relación de tipo horizontal que propicia el desarrollo igualitario de las mujeres y facilita su presencia en los debates que se llevan a cabo en las asambleas que deciden la línea de movilización que se pondrá en marcha. Si el ámbito tradicional de “disciplinamiento” de la mujer es el hogar, su participación en las asambleas barriales y en las marchas y cortes piqueteros abre nuevos espacios para asumir roles reservados a los hombres y romper con conductas y estereotipos preestablecidos. Como afirma Raúl Zibechi, los varones que perdieron su trabajo ya no tienen obligaciones con respecto al hogar hasta tanto no

logren reincorporarse al mercado laboral, la mujer, por el contrario, sigue al frente del núcleo familiar sin que esta responsabilidad se modifique por su condición de empleada o desocupada. La instalación de los talleres en las mismas viviendas tiende a potenciar el rol de la mujer como vínculo entre el espacio familiar y el barrio el que se reproduce, de hecho, como un ámbito continuo de mutua protección y autocontrolado por la comunidad.^{44/}

Se mencionó, al inicio de este apartado, que las dos organizaciones con mayor presencia en el que fue uno de los distritos industriales más importantes de conurbano bonaerense, La Matanza, eran la FTV, que dirige Luis D'Elía, vinculada a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CCC que lidera Juan Carlos Alderete. De estos dos agrupamientos es la FTV la que alcanzó una mayor implantación territorial ligada, como dijimos, a las luchas urbano-populares de principios de los años ochenta, para construir asentamientos en terrenos públicos ocupados por familias de bajos ingresos. La CCC, por su parte, se define a partir de un programa que responde más al de una instancia de carácter sindical que incluye organizaciones obreras de base, así como sindicatos de empresas y comisiones internas de fábrica. En la CCC convergen demandas propias de las agrupaciones de trabajadores en activo como de personas desocupadas, burócratas desplazados y habitantes de asentamientos irregulares. Es más numeroso el contingente de ex-obreros industriales que participan en las marchas y piquetes de la CCC y su figura más relevante en el interior de la república —en la provincia de Jujuy— es Carlos “Perro” Santillán, un ex-delegado de los empleados públicos de esa provincia.^{45/}

La confluencia de la FTV y la CCC en la realización de actos públicos, cortes de rutas y puentes, les permitió ampliar su capacidad de convocatoria y asegurar una participación masiva de trabajadores, vecinos de barrios populares y obreros desocupados. Esta mayor capacidad de movilización fue el argumento que dio lugar al reclamo de cierto liderazgo en el área del Gran Buenos Aires con respecto a las otras

agrupaciones piqueteras. De algún modo este mayor protagonismo se vio reflejado, al menos hasta mediados del año 2002, en que ambas organizaciones lograron ser las receptoras del número más alto de planes sociales asignados por el gobierno. Es difícil encontrar en el resto de las corrientes piqueteras esta doble representación que combina elementos laborales y territoriales —con marcada presencia en ciertas localidades y municipios— y una importante capacidad de movilización en el ámbito nacional. Las dos organizaciones han demostrado también una mejor disposición al diálogo con las autoridades, después de la caída del presidente de la Rúa la FTV y la CCC aceptaron formar parte de los Consejos Consultivos que estableció el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Estos organismos tenían el propósito de promover una administración multisectorial del subsidio que se otorga a través del Plan “Jefas y Jefes de Hogar”, este programa sustituyó a los planes “Trabajar” que se heredó del régimen menemista.^{46/} En concordancia con este proceso de negociaciones, las dos corrientes optaron por moderar los piquetes y actos de protesta con lo cual su relación con las autoridades nacionales —con Duhalde primero y con el presidente Kirchner después— se hizo menos beligerante.

La alianza FTV-CCC ofrece algunos matices que es conveniente puntualizar con el fin de conocer la perspectiva política que inspira a estas agrupaciones. La FTV, como ya se señaló, responde, en términos generales a los lineamientos reivindicativos de la CTA, una central sindical que fue reconocida oficialmente en mayo de 1997 y que se rige por un estatuto que le posibilita incorporar organizaciones sociales como la FTV, así como aceptar la participación de trabajadores desocupados que no pueden encuadrarse dentro de los principios y estructuras del sindicalismo tradicional.^{47/} La CCC, por el contrario, reconoce un eje externo de carácter político, el Partido Comunista Revolucionario (PCR), cuyas orientaciones generales de tipo insurreccional enmarcan los planes de movilización de la CCC. Al ser el PCR el referente político, la CCC asume como propia una línea de rechazo o distanciamiento de los procesos

electorales, no obstante, en 2001 participó en la constitución de una alianza político-nacional, el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) y promovió la consulta popular de apoyo a la instauración de un subsidio de ayuda a los desempleados que se efectuó en diciembre de ese año.

Lejos del enfoque insurreccional que inspira la política del PCR, la FTV enfatiza su condición de movimiento popular urbano y se maneja con una estrategia que combina acciones de confrontación con posiciones conciliadoras. La misma trayectoria de su principal figura pública, Luis D'Elía es una clara expresión de esta política en dos planos, D'Elía, de origen social-cristiano, es proclive a utilizar como camino de vinculación con la opinión pública, los canales políticos convencionales lo que genera ciertas ambigüedades en las que se yuxtaponen los límites políticos con las demandas específicas nacidas del movimiento vecinal y de los trabajadores desocupados. D'Elía se vinculó a diversas fuerzas políticas como el Partido Justicialista y a ciertas corrientes de centro-izquierda. En 1997 y 1999 ocupó cargos de elección popular al ser elegido en el municipio de La Matanza, como concejal por el Frente para un País Solidario (Frepasso) y en 1999 logró una diputación en la provincia de Buenos Aires como candidato del Frente para el Cambio. Esta trayectoria, que combina fuertes demandas sociales con formas riesgosas de participación electoral, y compromisos partidarios poco claros, desborda las coordenadas del movimiento piquetero y abre sensibles frentes de polémica con las demás agrupaciones de desocupados que convergen en las marchas y cortes de rutas.

La profundización de la crisis social y económica: debates y fracturas en el interior del movimiento piquetero

Las condiciones económicas generales del país durante los años 2000 y 2001 fueron deteriorándose rápidamente. El gobierno del presidente de la Rúa se negó a impulsar una política económica alternativa y ratificó, en grandes líneas, el programa heredado del régimen menemista. Esta decisión, trágica para su gobierno, no sirvió para remontar el cuadro de recesión que Argentina vivía desde 1998, las tasas de desempleo abierto se mantuvieron cercanas al 20 por ciento y se incrementó el deterioro de la capacidad de compra de los sectores de población que viven de un ingreso fijo. Las banderas de honestidad y lucha contra la corrupción, que sirvieron de pivote a la campaña presidencial del candidato de la Rúa en 1999, se derrumbaron cuando se hizo pública la denuncia de los sobornos que habrían recibido un grupo de legisladores para que aprobaran la reforma laboral. Este episodio, bastante escandaloso, llevó a la renuncia del vice-presidente Carlos Álvarez en octubre de 2000, lo que quebró la alianza que sostenía al gobierno y constituyó la antesala del abandono definitivo de cualquier intento de formular un programa económico alternativo. El fracaso de los dos primeros ministros de economía, José Luis Machinea y Ricardo López Murphi, y la llegada al gabinete de Domingo Cavallo —ex-funcionario de Menem y cerebro del plan que amarró el peso a una paridad fija de uno por uno con el dólar— marcaron el inicio de la debacle que llevó al corralito financiero y a los enfrentamientos callejeros y saqueos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En el marco de esta situación, marcadamente adversa a los sectores populares y sin expectativas de que el panorama se revirtiera en el mediano plazo, la conflictividad social alcanzó picos de continuidad y violencia que desbordaron la capacidad del gobierno para desactivar las huelgas y cortes de ruta que se repitieron en toda la república. Durante los años 2000 y 2001 se llevan a cabo nueve huelgas generales, la

primera, el 5 de mayo de 2000, es acompañada por numerosos cortes de ruta tanto en las provincias como en las localidades del Gran Buenos Aires. En los piquetes participan trabajadores desocupados, jubilados, estudiantes, obreros movilizados por sus sindicatos y vecinos de barrios pobres. En las huelgas posteriores se dieron cita los mismos protagonistas pero los piquetes en las rutas se combinaron con ataques a instituciones bancarias, oficinas públicas e intentos de saqueos a los supermercados, se impulsa además, el corte de las vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires con lo que se logra aislar a la capital de la república.

Los días 23 y 24 de noviembre de 2000 se efectúa un paro de actividades de 36 horas que logra un fuerte acatamiento, también en esta ocasión se interrumpe el tránsito en las rutas y puentes de acceso y se bloquean las vías férreas que conducen a la Capital Federal. En ciudades industriales como Rosario se repiten los intentos de saqueo a tiendas y supermercados. La tónica dominante en las huelgas y movilizaciones populares de estos años es la descentralización de los actos de protesta, apenas en dos ocasiones, de los nueve paros generales, hubo actos centrales con oradores designados por las organizaciones convocantes. La tendencia más difundida en las marchas callejeras fue la que expresó, de mejor manera, la composición diversa y heterogénea de las movilizaciones, aceptando distintas formas de canalizar el fastidio popular y multiplicando los espacios de protesta. La incorporación de sectores de clase media —en su mayoría empleados despedidos, ex-trabajadores de empresas públicas privatizadas, docentes mal remunerados y personal del área de la salud— fue acompañada en las siguientes huelgas por la presencia, cada vez más activa, de grupos de población no-sindicalizados, se hizo notoria la participación de comerciantes y pequeños empresarios así como el apoyo solidario de los organismos de derechos humanos.^{48/} La incorporación de estas expresiones de las capas medias, tradicional clientela electoral de un partido de centro como la Unión Cívica Radical —fuerza

política de la cual provenía el presidente de la Rúa— marca un punto de inflexión en la historia de las luchas sociales argentinas.

Otro aspecto de lo ocurrido en este atribulado año 2001, que debe destacarse, es la creación de nuevos vínculos de solidaridad entre sectores de la población que habían sido castigados con la pérdida del empleo, en algunos casos, o con el drástico deterioro de su nivel de vida, en otros. Se establecen así, lazos de solidaridad entre grupos sociales tradicionalmente enfrentados y aunque las condiciones coyunturales que alimentaron la consigna "*piquete y cacerola la lucha es una sola*" ya sufrieron modificaciones, las causas estructurales que llevaron a trabajadores y clases medias a compartir las calles y plazas permanecen y sus efectos son de largo aliento. La huelga general del 13 de diciembre de 2001 registró, además del cese de actividades, la participación de grupos empresariales que cerraron los comercios en las capitales provinciales y la marcha callejera de vecinos que acompañaron la protesta con apagones, cacerolazos, lanzamiento de petardos frente a los bancos y el sonar de las bocinas de los vehículos.

El rebote de la crisis sobre las fuerzas sociales impactó profundamente al movimiento de los trabajadores desocupados. Durante los años 2000 y 2001 se hicieron más notorias las divergencias en el interior de las agrupaciones piqueteras y se desgajaron nuevas organizaciones de los dos nucleamientos principales, la FTV y la CCC. En medio de fuertes polémicas se desprendió de la CCC el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (más tarde de Desocupados) que bajo su sigla –MIJD- y con el liderazgo de Raúl Castells agrupó a sectores con posiciones más intransigentes. Esta corriente se transformó rápidamente, en protagonista de actos de protesta y fuerte confrontación con la policía al bloquear las dependencias gubernamentales y efectuar plantones frente a los supermercados donde el reclamo por la entrega de alimentos fue una demanda permanente del MIJD. La FTV, por su parte, vivió el alejamiento del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) vinculado a las propuestas del Partido

Comunista y de la agrupación Barrios de Pie que se identifica con el programa nacionalista-popular del grupo político Patria Libre. No es casual que estas escisiones se produjeran en 2001, un año en el que se generalizaron las protestas sociales y la agudización de la crisis económica agotó la tolerancia de una sociedad que vio derrumbarse las expectativas que se generaron con el arribo de Fernando de la Rúa a la presidencia de la república en 1999. Fue en la coyuntura de más alta conflictividad social cuando se hicieron más ostensibles las diferencias acerca de la caracterización de la situación argentina. Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 abrieron un amplio debate sobre las condiciones políticas del país. Para algunas organizaciones piqueteras se había ingresado en una situación pre-revolucionaria, para otras corrientes del movimiento de trabajadores desocupados se trataba, en realidad, de una profundización de la crisis que afecta a la estrategia de modernización del capitalismo argentino bajo los postulados económicos del neoliberalismo. Estas caracterizaciones divergentes tendrían consecuencias importantes en la definición que se aplicaría al gobierno provisional de Eduardo Duhalde primero y al del presidente Néstor Kirchner después. Tanto la FTV como la CCC rechazaron el diagnóstico que establecía el carácter "revolucionario" de la crisis y optaron por impulsar la constitución de un amplio frente político-social que abriera espacios para disputar con los partidos tradicionales la búsqueda de una salida alternativa y progresista a la crisis. En particular la FTV, en alianza con la Central de Trabajadores Argentinos, se sumó a la propuesta de este organismo sindical para crear un Movimiento Político-Social, con un planteo programático que registra cierta similitud con el Partido de los Trabajadores que llevó al dirigente sindical Lula a la presidencia de Brasil. En una reunión efectuada en la ciudad de Mar de Plata en diciembre de 2002 con la participación de más de 10 mil representantes de todo el país, la CTA efectuó su VI Congreso Nacional. El fortalecimiento de la Central y la construcción de un Movimiento Político-Social fueron los principales ejes que se debatieron en ese Congreso en el que se puso de

manifiesto la composición heterogénea de este organismo de tercer nivel que agrupa a más de 860 mil afiliados entre los que se cuentan empleados públicos, docentes, gastronómicos, periodistas, empleados del poder judicial, aeronáuticos, trabajadores desocupados, jubilados, migrantes, movimientos barriales y organizaciones sociales y de derechos humanos. En el acto de inauguración, el Secretario General de la CTA, Víctor de Gennaro, adelantó los lineamientos de la propuesta central del Congreso y advirtió que *la central no se convertirá en un partido político*, sino que, por el contrario, mantendrá la autonomía con respecto a los partidos, las patronales y el Estado.^{49/} Los debates en la Comisión de Organización fueron particularmente difíciles, la FTV propuso que se la reconociera como la “única” expresión territorial de la CTA, pero chocó con el interés de las agrupaciones barriales del interior de la república que no integran la FTV y que reclamaron ser tratadas en condiciones de igualdad con la organización que dirige Luis D’Elía. El análisis de este tema dio lugar a un amplio debate que sólo pudo salvarse cuando se aprobó la resolución que reconocía en la FTV a la “expresión barrial” de la CTA, pero se le quitó la palabra “única”. En este mismo Congreso se aprobó la participación en los actos recordatorios del primer aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, pero el Secretario de Organización de la CTA, Edgardo Depetri advirtió que “...si bien el 19 y 20 son un hito importante, al que la CTA aportó y siente como propio, nuestra construcción no pasa por disputar fechas o escenarios. La lucha sigue, mañana mismo, en los comedores, en sostener el sistema de salud y los hospitales, en el debate de la sociedad argentina por buscar una salida a la crisis”, e insistió que el nuevo movimiento “no será un partido político y su identidad debe basarse sobre la clase trabajadora”.^{50/}

Víctor Mendibil, Secretario Gremial de la CTA y alto dirigente de la Federación Judicial Argentina, fue aún más explícito al definir el carácter de la propuesta aprobada en el VI Congreso, cuando se refirió a los objetivos de la estrategia votada sostuvo que: “La representatividad de los sectores de trabajadores precarizados, industriales, estatales,

judiciales y de tantas otras vertientes de trabajadores de todo el país marca que hay una decisión de protagonizar, organizarse y de generar un nuevo sindicalismo en la Argentina, participativo y democrático”, reiteró además que la “decisión de construir un movimiento político y social que promueva la unidad no es decidir una candidatura o el nombre de un partido, sino construir la unidad de nuestro pueblo, la unidad de los trabajadores para gobernar este país con un proyecto que ratifique la soberanía, la independencia, la seguridad social y que garantice comida y vida para todos los argentinos”.^{51/}

Las Asambleas Piqueteras: consensos y fracturas en el movimiento de los desocupados

Se había señalado que la dinámica del proceso social durante 2001 adquirió un ritmo vertiginoso y que esta profundización de los conflictos sociales tuvo un enorme impacto en las filas del movimiento de los trabajadores desocupados. Fue precisamente en ese año que se llevaron a cabo los dos primeros congresos piqueteros que reunieron a representantes de casi todas las agrupaciones del país. El primer encuentro se efectuó el 24 de julio de 2001 en la localidad de San Justo y fue convocado por la FTV y la CCC y otras organizaciones también surgidas en el municipio de La Matanza. El encuentro adoptó el nombre oficial de “Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados” con el claro propósito de incluir las demandas de los movimientos vecinales y de las agrupaciones que representan a los trabajadores desempleados. La asistencia fue numerosa y variada en cuanto al origen geográfico de los grupos presentes, había delegaciones de las provincias de Neuquén y Salta, cunas del movimiento piquetero, de la Coordinadora de Desocupados de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz y de la Unidad de Vecinos Organizados de Mar del Plata. Entre otras resoluciones, la asamblea decidió formar un centro coordinador

de fuerzas populares que se oponen a los programas de ajuste económico y movilizar a la ciudadanía contra el pago de la deuda.

El segundo congreso nacional piquetero se llevó a cabo el 4 de septiembre de este mismo año, también en la localidad de San Justo y logró sellar un conjunto de propuestas básicas que englobó a la mayoría de las organizaciones presentes, respetando sus diferencias y matices. Se aprobó un plan de lucha que considera las prácticas desarrolladas por las diversas corrientes del movimiento piquetero y vecinal. Hubo acuerdo para mantener los cortes de rutas y puentes, sostener los cabildos abiertos en los barrios pobres del conurbano y del interior de la república, otorgar apoyo a la marcha del Frente Nacional contra la Pobreza —promovida por la CTA— así como establecer cortes en los caminos de acceso a las empresas en las que se estaban desarrollando conflictos obrero-patronales. Esta segunda asamblea constituyó un importante intento de fijar una estrategia de lucha común en un movimiento dispar que cuenta, en el contexto nacional, con sectores organizados, con grupos de carácter principalmente regional, así como nucleamientos piqueteros vinculados a partidos de izquierda y numerosas asociaciones de vecinos que defienden su autonomía y carácter apartidario.^{52/}

Esta reunión nacional fue más cuidadosa con respecto a la representatividad de los delegados, se exigió que cada uno de ellos presentara un acta con la firma de 20 desempleados que lo avalaron como su representante. Otra novedad, la más relevante de esta segunda asamblea, es la designación de una conducción nacional piquetera, la cual quedó constituida por los dirigentes de las principales organizaciones: Luis D'Elía se incorporó por parte de la FTV, Juan Carlos Alderete como líder de los desocupados de la CCC, junto a ellos se integraron representantes del grupo Polo Obrero y del Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive". Cabe señalar, que hasta ese momento, las distintas corrientes habían coordinado numerosas acciones de protesta callejera pero

sin designar una dirección estable ni un referente orgánico único para todo el movimiento.

La irrupción del dirigente Roberto Martino del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) creó cierta confusión entre los asistentes y abrió un nuevo debate acerca de los métodos de lucha. El MTR propuso llevar a cabo un programa de cortes de rutas y caminos que interrumpiera el tránsito por tiempo indeterminado, especialmente en las zonas de ingreso a las fábricas. Hubo una votación y la propuesta quedó en minoría, como contrapartida la asamblea votó un plan de movilización que incluía las siguientes acciones:

- A partir del 5 de septiembre establecer cortes de 24 horas en todo el país para confluir en un paro nacional
- Continuar con las asambleas de trabajadores sindicalizados y desocupados hasta el 21 de ese mes en las capitales provinciales y municipios para debatir sobre la situación económica y social
- El día 20 de septiembre iniciar una nueva campaña de cortes de ruta por 36 horas para cerrar con una marcha de apoyo al Frente Nacional contra la Pobreza que culmine con una concentración en Plaza de Mayo

Por último, se decidió impulsar un llamado a una tercera asamblea nacional convocada inicialmente para el mes de octubre de ese año 2001. Los participantes propusieron que la convocatoria fuera más amplia, y que en lugar de ser exclusivamente de trabajadores desocupados y movimientos vecinales, procurara incluir también a las organizaciones sindicales combativas, en particular a la CGT disidente que dirige el líder del sindicato de choferes Hugo Moyano. El desarrollo de las dos primeras asambleas piqueteras coincidió con una diferenciación más marcada de las líneas internas en relación a algunos puntos que después de la caída del gobierno del

presidente de la Rúa se transformaron en temas medulares para las organizaciones de trabajadores desocupados.^{53/} Un aspecto que fue creciendo en importancia con el tiempo, era la actitud que debía adoptarse ante la ayuda gubernamental cuando la multiplicación de los subsidios puso en manos de los grupos piqueteros alimentos y otros artículos de primera necesidad y el dinero recibido de los planes “Trabajar” primero y “Jefas y Jefes de Hogar” después abrieron la discusión acerca del destino que debía darse a esos recursos. Para algunas organizaciones de desocupados era legítimo el destino individual que cada beneficiario quisiera darle a la ayuda monetaria asignada. Otras corrientes piqueteras sostenían, por el contrario, que la aceptación del subsidio sólo tenía legitimidad social y afirmaba la autonomía de las organizaciones si la ayuda se destinaba al desarrollo de microemprendimientos productivos. En el fondo de la discusión había una cuestión subyacente que remitía a un tema más profundo, se trataba, en realidad, de la naturaleza que debía tener la relación del movimiento de los trabajadores desocupados con el Estado y sus representantes institucionales. Las instancias multisectoriales que creó el gobierno provisional de Eduardo Duhalde durante 2002 y de manera más notoria, los espacios de participación que abrió el presidente Néstor Kirchner a partir de mayo de 2003, volvieron más sensible el tema, el tratamiento del mismo se hizo entonces más complejo y de alguna manera contribuyó a definir el perfil político de las distintas organizaciones.

El acelerado deterioro de las condiciones económicas en el período 2000-2002 contribuyó a exacerbar el activismo social que se reflejó en el incremento de los cortes de rutas y en el bloqueo de las vías de acceso a la capital de la república. También en este momento, se multiplica el surgimiento de agrupaciones piqueteras con un mayor nivel de definición política y con una actitud más intransigente frente al gobierno y en general, ante las instituciones públicas. No obstante, es necesario puntualizar, que no existen propuestas ni organizaciones lo suficientemente homogéneas como para pensar en expresiones “puras” o estereotipos a partir de los cuales intentar una

clasificación de los distintos agrupamientos. La definición de cada una de las corrientes piqueteras es el resultado de un cruce de diferentes dimensiones —sindical, política, barrial— así como por el tipo de actividad pública que llevan a cabo en relación al resto de las organizaciones sociales y con respecto al nivel de confrontación que despliegan frente a las representaciones estatales. Resulta difícil, por lo tanto, tomar como referencia un criterio único de clasificación a partir del cual puedan englobarse las organizaciones de trabajadores desocupados.^{54/} No obstante, es posible reconocer dentro del abanico piquetero tres alineamientos principales: uno que se constituye a partir de su vinculación con las formulaciones políticas de los sindicatos y centrales obreras que sostienen una actitud crítica frente al modelo económico; una segunda corriente que mantiene una estrecha relación con ciertas expresiones partidarias de la izquierda. Una tercer vertiente del movimiento piquetero, está compuesta por agrupaciones que se definen a partir de una labor organizativa y política fuertemente relacionada al universo barrial reivindicativo y al ámbito de las demandas de los desocupados. Este sector, relativamente minoritario, rescata como característica distintiva su autonomía política y el no alineamiento partidario.

La agudización de la crisis económica propició la multiplicación de organizaciones piqueteras. Ya habíamos mencionado el desprendimiento de dos corrientes internas de la FTV, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y la organización Barrios de Pie. Durante los años 2001 y 2002 surgieron otros grupos también vinculados a partidos de izquierda. Los de mayor presencia en las acciones de agitación callejera son el Polo Obrero, de reconocida identificación con los lineamientos políticos del Partido Obrero, de inspiración trotskista, la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), que orienta su acción de acuerdo a los postulados del Partido Revolucionario de la Liberación (escisión de la antigua corriente maoísta Vanguardia Comunista), la Federación de Trabajadores Combativos (FTC) ligada al Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, vinculado al Movimiento Socialista de los

Trabajadores (MST). Dentro del abanico de corrientes piqueteras se encuentran también las Coordinadoras de Trabajadores Desocupados (CTD) agrupadas en la Coordinadora Aníbal Verón. Algunas de las CTD asumen como propios los lineamientos políticos y las propuestas de movilización callejera del grupo “Quebracho”, los orígenes de esta organización parecen remontarse a segmentos de la militancia que se desprendió del peronismo revolucionario y de una agrupación política de centro-izquierda ya disuelta, el Partido Intransigente. Sus acciones agitativas en cortes y marchas, se caracterizan por una permanente confrontación con las fuerzas de seguridad y por el uso de recursos violentos —ocupación de locales comerciales, agresión con piedras a oficinas públicas y sede de empresas privadas— que los ha llevado a sostener agrios debates con el resto de las agrupaciones.^{55/}

En las localidades del sur del conurbano bonaerense logró una significativa implantación el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) su presencia es particularmente notoria en ciudades fuertemente golpeadas por los cierres de empresas y el crecimiento del desempleo y la pobreza. Los distritos de Lanús, San Martín, La Matanza, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela y La Plata constituyen, entre otras ciudades, la zona de mayor influencia del MTR. Bajo la conducción de Roberto Martino, este movimiento se autodefine como autónomo, en términos políticos y como un agrupamiento político y social de base territorial, en el aspecto organizativo. Su propuesta no se circunscribe a la defensa de las reivindicaciones de los desocupados, se propone ser también una instancia de participación de los trabajadores que se encuentran empleados y de las demandas de los vecinos de los barrios populares en los que promueven la realización de “cabildos” (asambleas resolutivas) en las que se plantean y procesan las demandas vecinales. El repudio a las formas institucionales del poder llevó a que —pese a sostener cierta postura autónoma y apartidaria— se levante un discurso y un horizonte simbólico de tipo “guevarista”, definido como un modelo de compromiso militante y de búsqueda de una sociedad más justa.

Otra organización autónoma de marcada presencia pública es el ya citado Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que se estructura entorno al polémico liderazgo de Raúl Castells, un ex-militante del MAS, que en 1993 comenzó a desarrollar una importante labor organizativa entre los jubilados que se manifestaban en la plaza que se ubica frente al Congreso Nacional. En 1996 esta organización se incorpora a la CCC y comienza a desarrollar una activa labor social utilizando para ello los recursos que provienen de los subsidios que asigna el gobierno. La instalación de numerosos comedores populares le otorgó presencia en asentamientos del conurbano bonaerense y en pocos años logró una influencia significativa en varias provincias de la república, al mismo tiempo que acentuaba su autonomía política y su interés de marcar rumbos propios generalizando la realización de actos públicos en las puertas de acceso de los grandes supermercados. El acuerdo con la CCC comenzó a deteriorarse cuando el MIJD cuestionó al principal referente político externo, el PCR, y decidió impugnar el acatamiento que la CCC hacía de las propuestas de lucha que eran elaboradas por ese partido de izquierda. En el año 2001 se desvinculó de la CCC y decidió no participar en ninguna de las dos asambleas piqueteras, el MIJD optó por afianzar un espacio propio estableciendo centros de jubilados y desocupados los que lograron registrarse como instituciones de bien público con la personería jurídica que los acredita como tales. Raúl Castells, máximo referente nacional de este movimiento, es el coordinador nacional de dichos centros.

De las organizaciones piqueteras que reconocen un referente político externo tal vez la experiencia del Polo Obrero resulte la más ilustrativa del cruce contradictorio de una lógica partidaria con la dinámica que proviene del movimiento social. Este agrupamiento surge en el año 2000 y a partir de 2001 vuelca buena parte de su activo político en las tareas de organización de los trabajadores desocupados, la resolución de tomar las banderas de los sectores desempleados se adoptó en el congreso del Partido Obrero que se llevó a cabo en diciembre de 2000. En esa reunión partidaria se

valoró positivamente la relevancia del movimiento piquetero como un esfuerzo de la clase obrera por reconstituirse como un sector social medular de las fuerzas populares. El otro tema de debate en el congreso fue el análisis de los subsidios públicos que se entregan a través de los planes sociales y que exigen una contraprestación de tipo laboral mediante la realización de tareas de carácter comunitario. Sobre esta cuestión, el Partido Obrero pasó del rechazo a los subsidios a la conveniencia de hacer un uso político de naturaleza táctica de los mismos, por lo que decidió incluir entre sus demandas el incremento del monto y el aumento de la cantidad de desocupados que tienen derecho a recibir los apoyos económicos que entrega el gobierno.

El Partido Obrero asistió a la primera asamblea piquetera en la que participaron los dirigentes territoriales José Villalba de La Matanza, Alicia Gutiérrez de Avellaneda y José Barraza de la localidad de Tartagal, provincia de Salta. Con el soporte que le brinda una estructura política nacional el Polo Obrero logró un importante desarrollo en varias provincias de la república en las que instaló más de 300 comedores populares. La marcada vinculación entre la organización de masas, que nuclea a los desocupados, y el agrupamiento partidario que fija las líneas políticas generales, explica que los principales dirigentes del Polo Obrero se hayan formado en la estructura política y sean, algunos de ellos, trabajadores ocupados.^{56/} Néstor Pitrola, principal referente de esta organización piquetera es un afiliado del sindicato de obreros gráficos. Esta dualidad entre la expresión social y las estructuras partidarias se manifiesta también en la estrategia política, mientras por un lado se sostiene una propuesta insurreccional —otro “argentínazo”— por el otro se decide participar en los procesos electorales, a pesar de la prédica en contra de las prácticas reformistas y del repudio a la institucionalidad burguesa.

El Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez participaron de las dos primeras Asambleas Nacionales de Piqueteros que, convocadas por la FTV y la CCC, se llevaron a cabo, como se mencionó anteriormente, el 24 de julio y 4 de septiembre de

2001. Poco después, las dos primeras agrupaciones se distanciaron de las organizaciones convocantes por diferencias políticas que se acentuaron a partir de diciembre de 2001, con el derrumbe del gobierno del presidente de la Rúa. En abril de 2002 el nuevo mandatario, Eduardo Duhalde, instaló los Consejos Consultivos en los que aceptaron participar la CCC y la FTV, esta decisión profundizó las diferencias entre las diversas corrientes piqueteras. Ya en diciembre de 2001 el acuerdo entre el MTR y el Polo Obrero se tradujo en una propuesta política que adquirió un importante espacio en el movimiento de los trabajadores desocupados, de común acuerdo ambas agrupaciones iniciaron la tarea de constituir el Bloque Piquetero Nacional (BPN) al que se sumaron el MTL, la FTC y la CUBa.

Por iniciativa del BPN se llamó para el 15 y 16 de febrero de 2002 a la “Primera Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados” a la que no concurrieron la CCC y la FTV pero a la que asistió el MIJD que dirige Raúl Castells. Con la convocatoria a los trabajadores “ocupados” se procura ampliar el arco de fuerzas sociales participantes y aunque la invitación se dirige a los sindicatos más combativos y a las comisiones internas de fábrica, representa un importante esfuerzo por vincular al mundo del desempleo con las expresiones del trabajo formal que también son afectados por el proceso de desindustrialización y degradación de las condiciones laborales. La Segunda Asamblea Nacional se llevó a cabo los días 22 y 23 de julio del mismo año y tuvo la asistencia de casi todas las corrientes piqueteras, en la Tercera Asamblea realizada los días 28 y 29 de septiembre, participaron también las organizaciones Barrios de Pie y la CTD Aníbal Verón. Sin embargo, en la Cuarta Asamblea del 5 y 6 de abril de 2003 surgieron disidencias internas por lo que la convocatoria se centralizó en el PO, el MTL, el MTR, la CUBa y la CTD. A principios de agosto de ese año se organizó la Quinta Asamblea que procuró mantener el principio de convocatoria ampliada para trabajadores ocupados y desempleados, el MIJD, ausente en las dos reuniones anteriores volvió a incorporarse y se sumaron corrientes

piqueteras de reciente creación como la Unión de Trabajadores en Lucha (UTL) y la Unión de Trabajadores Desocupados y Ocupados (UTDO).^{57/}

Los acontecimientos de diciembre de 2001 dieron lugar a un reagrupamiento de las organizaciones piqueteras que sostienen posiciones reivindicativas más intransigentes en el ámbito de las demandas sociales y que se encuentran más cercanas a las propuestas estratégicas de algunos partidos y grupos políticos de izquierda. La convergencia de estas corrientes del movimiento piquetero evidenció algunas diferencias de caracterización sobre la situación del país y acerca de un tema de orden coyuntural pero de fuerte determinación política: la posición que debía adoptarse con respecto al proceso electoral que se puso en marcha durante 2002 y que culminó con la elección presidencial del 27 de abril de 2003. En la raíz de esta nueva convergencia se encontraban los acuerdos y acciones conjuntas que desarrollaban el Polo Obrero y el MTR, estas dos corrientes, acompañadas por el MTL, la FTC y la CUBa impulsaron, como ya se mencionó, la creación del Bloque Piquetero Nacional (BPN). Desde el mismo momento de su aparición pública el BPN se transformó en un importante referente político para las organizaciones que no se identificaban con la FTV y la CCC. En las formulaciones reivindicativas y en las valoraciones políticas, el BPN sostuvo posiciones de confrontación con las autoridades, la discusión acerca de las bajas y actualización de los padrones de beneficiarios, el incremento del monto del subsidio que se otorga a través de los planes sociales así como la ampliación de dichos programas para favorecer a un mayor número de trabajadores desempleados, fueron los puntos medulares de su pliego de demandas. En el transcurso de 2002 se incorporaron algunos reclamos puntuales, en particular el apoyo a los obreros de empresas que se encontraban en conflicto, la entrega de alimentos por parte de los supermercados y una bandera de carácter más general referida al “no pago” de la deuda externa, en momentos en que el gobierno de Duhalde iniciaba un complicado

proceso de negociaciones con los acreedores externos que continuaría después su sucesor Néstor Kirchner.

El BPN se sostiene sobre un sistema inestable de alianzas y acuerdos programáticos puntuales que ha llevado al ingreso y salida de las agrupaciones que lo conformaron desde el mismo momento de su constitución y de otras corrientes que se sumaron posteriormente. La discusión acerca del método y las formas de llevar a cabo los reclamos se instaló como un tema de permanente fricción. Para algunos grupos es conveniente definir de manera anticipada, la duración de los cortes y avisar a la opinión pública si la interrupción del tránsito será total o parcial. Otras organizaciones sostienen que el tiempo que permanecerán los piquetes, así como el tipo de bloqueo que se efectuará, sólo puede definirse de acuerdo a la marcha de las negociaciones y a la respuesta que den las autoridades. El uso de palos —a modo de armas— y la decisión de cubrirse el rostro generó un áspero debate entre las distintas corrientes del movimiento. Si a la interrupción total del tránsito en rutas y puentes, se sumaban otras expresiones y actitudes, que aunque más simbólicas que reales, molestaban al público que pasaba por el lugar, se corría el riesgo de crear temor en sectores de clase media y personas ajenas a las movilizaciones. También se perdía terreno en la batalla mediática y se formaban juicios negativos en los espacios de difusión a través de los cuales se construye parte de la opinión que la sociedad tiene acerca de los conflictos y reclamos que protagonizan los desocupados.^{58/} Esta lectura de las tácticas de lucha no es compartida por las organizaciones que afirman que la decisión de portar bastones y taparse el rostro durante las marchas y cortes de ruta obedece a un legítimo principio de autodefensa. Esta perspectiva la sostienen las agrupaciones de desocupados que reconocen como referente político al grupo Quebracho cuya propuesta, de carácter insurreccional y de repudio a cualquier forma de participación institucional, asigna un papel central a la movilización y confrontación callejera. El tema de la seguridad y de los niveles de violencia que puede asumir el movimiento, cobró una dolorosa vigencia

el 26 de junio de 2002. Ese día se efectuó una marcha y corte del tránsito en el Puente Pueyrredón —uno de los caminos de acceso a la ciudad de Buenos Aires— convocado por la CTD Aníbal Verón y por el Bloque Piquetero. La movilización fue duramente reprimida y en un acto típico de cacería selectiva de militantes piqueteros, la policía aisló y asesinó en la estación ferroviaria de Avellaneda a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos jóvenes integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón de las localidades de Lanús y Guernica.

A mediados de 2002 el gobierno provisional de Eduardo Duhalde formalizó una convocatoria electoral anticipada para abril del 2003 con el fin de dar una salida constitucional a la crisis abierta con la debacle de la administración del presidente de la Rúa. El llamado a elecciones para elegir un nuevo presidente abrió otro campo de discusiones en las organizaciones piqueteras. La FTV por boca de su referente nacional más conocido, Luis D'Elía, expresó que este movimiento “prefiere la vida antes que la muerte y la muerte es Carlos Menem” y al referirse al resto de los candidatos señaló que “tenemos coincidencias con algunas de las propuestas de Kirchner, Elisa Carrió o Alfredo Bravo...” pero también puso énfasis en apuntar que “en general ningún candidato nos representa... las elecciones son una trampa, armadas de esta forma, sólo para favorecer a la vieja política y consolidar lo ya conocido”. Sin embargo, frente a la posibilidad de una segunda vuelta electoral —frustrada por el retiro de Menem— D'Elía manifestó su apoyo a Kirchner y se pronunció por un voto favorable a este candidato. La postura de la CCC fue diferente, su máximo dirigente, Juan C. Alderete, decidió mantenerse en una línea de denuncia del proceso electoral y no otorgar respaldo a ninguno de los candidatos. En el BPN se generó un principio de divisiones y resquebrajamiento, algunas organizaciones manifestaron su interés en participar en las elecciones —en particular las que reconocen referentes externos de carácter partidario— como el Polo Obrero, que responde al Partido Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación, que orienta su estrategia de acuerdo a los

lineamientos del Partido Comunista y el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive”, que encuadra sus demandas siguiendo los postulados del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).^{59/} Tanto el Partido Obrero como el Partido Comunista y el MST presentaron candidatos propios, el primero lo hizo con su propia lista de postulantes y los otros dos agrupamientos partidarios compartieron la planilla de la alianza Izquierda Unida. En desacuerdo con esta postura, las organizaciones piqueteras “antielectoristas” decidieron sostener la consigna “que se vayan todos” y llamaron a boicotear el proceso electoral, pegados a esta consigna quedaron el MTR, la CUBa, el FTC, la CTD Aníbal Verón y la agrupación Barrios de Pie. Dos importantes referentes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Jorge Jara y Andrés Fernández expresaron, en una entrevista concedida al diario *Página 12* que no están dispuestos a promover acuerdos con los partidos políticos ni con las estructuras sindicales formalmente constituídas. Como para despejar cualquier duda, Andrés Fernández sepulta toda posibilidad de alianzas cuando afirma “Nosotros somos un movimiento de trabajadores desocupados donde planteamos la autonomía y la independencia de todos los sectores sindicales, burócratas, con todas las instancias que están relacionadas con el gobierno y con los partidos políticos.”^{60/}

Al iniciarse los preparativos para las elecciones legislativas de octubre de 2005 se abrieron nuevamente los debates acerca de la posición que debe adoptar el movimiento piquetero frente a las coyunturas electorales. La mayoría de las organizaciones de desocupados —cercanas o críticas del gobierno de Kirchner— decidieron apoyar a los candidatos de los partidos que participan en las elecciones. En general, se abandonó la idea de registrar “candidatos piqueteros” y la FTV, por iniciativa de Luis D’Elía, busca un lugar en las planillas del peronismo, al igual que Jorge Ceballos de la agrupación Barrios de Pie y Emilio Pérsico del MTD Evita. Enfrentados con esta posición se encuentran las corrientes piqueteras más críticas del gobierno. La propuesta de estos grupos es unir a los partidos de izquierda, en esta

dirección se mueve el Polo Obrero, como expresión barrial del Partido Obrero y el MST “Teresa Vive” vinculado a la coalición Izquierda Unida. Sin embargo, señala Mariana García (*Clarín*, Buenos Aires, 12-IV-05) son muchos los obstáculos que debe afrontar este intento de consolidar un frente electoral de izquierda para octubre de 2005. El MTD Aníbal Verón y la CCC mantienen una postura abstencionista, mientras que Néstor Pitrola, del Polo Obrero, afirma según la fuente mencionada que “El piqueterismo no tiene hoy la estatura para convertirse en una opción de poder [...] Sería descabellado hablar hoy de una lista piquetera”. Dentro de las corrientes “duras” el MIJD de Raúl Castells decidió presentar sus propios candidatos —con lo que rompe con la posición de quienes prefieran apoyar las listas de los partidos de izquierda— y promueve, a través del Frente de Trabajadores y del Pueblo, a Nina Peloso para el cargo de senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

En los primeros meses de 2003, en vísperas de las elecciones del 27 de abril, el BPN era cruzado por el tema del voto, el tratamiento de esta cuestión agravó las diferencias aunque la salida y el ingreso de las organizaciones que lo integran nunca llevó a rupturas definitivas y pareció responder a un vaivén de idas y vueltas dictado por la profundidad de los acuerdos o discrepancias que se presentaban a lo largo de las discusiones. El único resquebrajamiento importante fue el que protagonizó, en abril de 2003, el FTC, lo que no debilitó al Bloque que mantuvo un discurso fuertemente politizado en el que se incorporaron algunos temas de carácter general como el repudio al Fondo Monetario Internacional y la petición del no pago de la deuda. Estas demandas se entrelazaban con otros reclamos permanentes como la apertura de fuentes de trabajo y la generación de empleos genuinos, el incremento de la ayuda económica a los desocupados, la distribución de alimentos y útiles escolares y la ampliación de los programas sociales. Las tácticas de movilización callejera del BPN también se diversificaron y se endurecieron, en febrero de 2003 fueron ocupadas durante varias horas, las casetas encargadas de cobrar el peaje que están instaladas

en la autopista La Plata-Buenos Aires. Los piqueteros permitieron el libre paso de automóviles y camiones por esta importante vía de acceso a la capital de la república. Este tipo de protestas agudizó el enfrentamiento con las empresas que tienen la concesión de las autopistas y puso más tensa la relación con las autoridades del área de seguridad pública. En un tono similar se decidió ingresar en la importante terminal ferroviaria de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, y bloquear las ventanillas de venta de boletos para que el público pueda hacer uso gratuito del servicio de trenes. Alberto Ibarra, dirigente del MTL, declaró que la ocupación de las casetas de peaje tuvo el propósito de exigir que el subsidio que se otorga a las empresas concesionarias se destinara a la reapertura de las fábricas cerradas y a la generación de puestos de trabajo genuino.^{61/} En otras ocasiones, el BPN acompañó las marchas de los vendedores ambulantes desalojados y caminó junto a los obreros despedidos de establecimientos en conflicto. En noviembre de 2003 el Bloque Piquetero, el MST “Teresa Vive” y el MIJD de Raúl Castells efectuaron la mayor movilización de desocupados bajo el gobierno de Kirchner que asumió el cargo el 25 de mayo de ese año. El propósito de la marcha por las calles céntricas de Buenos Aires fue protestar contra lo que llaman la “criminalización” de la protesta, a raíz de un anuncio del gobierno en el que se amenazaba con llevar a cabo un juicio penal contra los piqueteros que ocuparon las oficinas del Ministerio de Trabajo y retuvieron en sus instalaciones al propio ministro Carlos Tomada. Hasta la fecha fue la mayor protesta callejera de oposición al presidente Kirchner.

El movimiento piquetero registra otra vertiente de organizaciones de trabajadores desocupados que además de proclamar su autonomía política se identifican a partir de su inserción territorial. Bajo una misma nomenclatura, Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) se nuclean diversas agrupaciones que rescatan como principal elemento identitario y movilizador, la presencia barrial alcanzada en zonas urbanas particularmente golpeadas por el proceso de desindustrialización y el fuerte incremento

del desempleo. Los MTD lograron afianzarse circunscribiendo su actividad en ciertas localidades y renunciando al propósito de gestar instancias políticas externas que recrean, de algún modo, el antiguo esquema de relaciones subordinadas entre el “partido de vanguardia” y las llamadas “organizaciones de masas”, de acuerdo a la tradición marxista. Los MTD reconocen diversas corrientes internas y aunque compartan una misma nomenclatura no pueden ser estudiados como si se tratara de una matriz política homogénea. En las localidades de San Francisco Solano y Lanús, importantes centros urbanos del Gran Buenos Aires, prevalece una postura que enfatiza la autonomía y el apartidismo. La horizontalidad y el ejercicio de la democracia directa constituyen dos estandartes que definen la estrategia de movilización de estos MTD y su relación con las demás organizaciones sociales y partidarias. El programa reivindicativo y las principales demandas apuntan a la recomposición de la vida comunitaria y de los lazos sociales destruidos por el crecimiento de la pobreza y el desempleo. No se trata, desde este enfoque, de gestar estructuras organizativas aptas para la lucha inmediata por el poder, el objetivo es ganar espacios bajo formas autogestivas que actúen como formas de organización social alternativas y como contrapeso de las instituciones oficiales y de los circuitos controlados por el gran capital. Es posible identificar en una propuesta de esta naturaleza, cierta inspiración ideológica de algunas corrientes teóricas de la nueva izquierda que afirman la política del “antipoder” y que ponen en el centro de sus análisis la autonomía de las expresiones sociales y la secundarización de la lucha por el control de las instancias propiamente estatales. Los MTD que con matices y diferencias comparten una concepción de este tipo, tienen una fuerte implantación en los municipios y localidades ubicadas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, los casos más destacados son los de Lanús, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Guernica, Quilmes —y dentro de este municipio la localidad de San Francisco Solano— y Berisso. En el distrito de Almirante Brown se consolidó una posición más cercana a la visión “nacionalista-

popular” de la cuestión social y en Florencia Varela logró mayor difusión un enfoque de izquierda que se identifica con ciertos postulados generales de igualdad, integridad ética y compromiso social cuyo referente simbólico es el “guevarismo”.^{62/}

Un proceso similar al que se describe dio lugar al surgimiento de las Coordinadoras de Trabajadores Desocupados (CTD). Algunas notas comunes dieron bases para la confluencia de diversas organizaciones piqueteras en ámbitos de debate y coordinación, entre otros puntos se destacan, la defensa de un mismo formato —el piquete— como principal instrumento de lucha, la demanda de generación de puestos de trabajo genuino y el ejercicio de la democracia directa. Las CTD establecen acuerdos con las organizaciones integrantes del Bloque Piquetero y con los MTD para llevar adelante cortes de ruta y actos de protesta frente a las oficinas de las dependencias públicas. Además de los reclamos de carácter económico hay coincidencia en la decisión de no participar en los procesos electorales y sostener una posición de no alineamiento partidario. Salvo una corriente de las CTD, la vinculada al grupo Quebracho, el resto enfatiza el carácter autónomo y la necesidad de “construir poder” a partir de una visión *societal* de la política que busca sus soportes en los movimientos de base y en la organización de los asentamientos barriales y de los desocupados.

La Coordinadora Aníbal Verón, una de las agrupaciones de mayor protagonismo callejero, es un conglomerado de organizaciones piqueteras con diversos perfiles políticos. Dentro de ella conviven las dos corrientes que le dieron origen en 2001, la CTD que tiene como referente externo al grupo Quebracho y los MTD que reclaman su carácter autónomo. Las acciones conjuntas se acuerdan a partir de dos o tres puntos básicos como es la defensa de los cortes, como método de lucha, el repudio al modelo económico y a las opciones electorales y una difusa —y no siempre coincidente— reivindicación y práctica del funcionamiento horizontal. Las agrupaciones que integran esta Coordinadora sostienen una postura más intransigente que otros grupos —en

particular la FTV y la CCC— con respecto a la aplicación de los cortes. Para los MTD, identificados con esta línea, los piquetes deben bloquear totalmente el paso de vehículos y mantener la interrupción del tránsito el tiempo que se considere necesario, de acuerdo a los resultados que se obtengan de las negociaciones con las autoridades. Los matices que se señalan en relación al *formato* que debían adoptar las acciones callejeras no impidieron que se mantuvieran las demandas básicas del movimiento piquetero: creación de oportunidades de trabajo genuinas, ampliación de los planes sociales, ayuda alimentaria y entrega de paquetes con útiles escolares a los niños de barrios marginales. A estos reclamos se sumaron otras de carácter conyuntural como la que provocó una manifestación frente a las oficinas de la empresa Aguas Argentinas, después que esta compañía presionó al gobierno de Kirchner para lograr un aumento de las tarifas. El viernes 11 de febrero de 2005 las agrupaciones piqueteras Martín Fierro y el Movimiento Popular 20 de diciembre (MP-20) junto al Frente Barrial 19 de diciembre pidieron la reestatización de esa empresa, la demanda se enmarcó dentro de una propuesta política que excede las peticiones puramente sectoriales. Uno de los voceros de la marcha definió el carácter de la petición: “Nuestra protesta es en contra de las privatizaciones de los noventa, pedimos la reestatización de las empresas de servicios públicos y en este caso la de Aguas Argentinas, porque están extorsionando al gobierno y al pueblo para tener incremento de tarifas y seguir ganado plata”.^{63/}

Un mes después de estos acontecimientos, el 11 de marzo de 2005, algunas organizaciones piqueteras respondieron al llamado del presidente Kirchner para que no se adquirieran productos de las empresas petroleras Shell y Esso. Las corrientes más cercanas al gobierno movilizaron sus bases con el fin de manifestarse y bloquear el acceso a los puntos de venta de combustibles (estaciones de servicio). Encabezados por la FTV se sumaron al boicot la agrupación Barrios de Pie, que dirige Jorge Cevallos, el Frente Transversal de Edgardo Depetri y el MTD que responde al liderazgo de Emilio Pérsico. Luis D’Elía explicó el sentido de estos actos al declarar que: “No

vamos a permitir este golpe de mercado que intenta afectar la vida de los argentinos y sabotear la política del Gobierno [...] no se permitirá que la voracidad de ninguna corporación económica pueda torcer la voluntad mayoritaria del pueblo argentino de construir una sociedad más justa y solidaria”.^{64/} Por su parte, el Polo Obrero por boca del dirigente Néstor Pitrola, no dejó pasar la oportunidad para marcar su posición enfrentada al gobierno. Al referirse a las marchas contra Shell y Esso señaló: “Lo que han hecho es una payasada. Es hacer de bufón del Gobierno ir a protestar a Shell. Ellos deberían estar exigiendo junto a nosotros el aumento de los planes sociales y no responder a un poder que es impotente frente a los pulpos y las transnacionales”.^{65/}

Democracia y protesta social: de la fábrica a las calles

El seguimiento de los conflictos mediante un ejercicio de clasificación de la información que se obtiene de la consulta de algunos diarios de circulación nacional, permite —aún sin tratarse de un monitoreo exhaustivo— establecer tres etapas principales del proceso social argentino a partir del restablecimiento de la institucionalidad democrática en 1983. Durante ese año y hasta 1988 (gobierno del presidente Raúl Alfonsín) las protestas tienen un origen y un referente gremial muy claro, son los sindicatos industriales los promotores de las trece huelgas nacionales que paralizaron al país en esos años. Las demandas salariales y la oposición de la central obrera a los intentos de modificar la legislación laboral marcaron los conflictos de esta etapa. Una primera estimación efectuada a partir de fuentes periodísticas permite afirmar que casi el 80 por ciento de las protestas fueron promovidas y lideradas por los sindicatos del sector fabril.

En 1989 asume la presidencia de la república Carlos Menem y desde ese año y hasta 1994, más del 60 por ciento de las protestas son promovidas por organizaciones sindicales que —a diferencia del período anterior— no agrupan a los obreros

industriales, se trata, por el contrario, de gremios que representan a los trabajadores de servicios vinculados a organismos del Estado, burócratas de las dependencias nacionales o provinciales, maestros, empleados del sector salud y de las empresas públicas de teléfonos, agua, correo, ferrocarriles y electricidad. En estos años aparecen las primeras puebladas en provincias en las que se agudizó la crisis regional por el cierre de empresas, cancelación de ramales ferroviarios o decadencia de actividades agrícolas en distritos mono-productores. De algún modo la Marcha Federal que recorrió el territorio nacional en 1994 y que culminó con una concentración en Plaza de Mayo, respondió en buena medida, a la movilización de trabajadores y productores del campo del interior de la república.

En mayo de 1995 el presidente Menem fue reelegido para un segundo período de gobierno. Este dato marca un punto de inflexión en el desarrollo del movimiento social de la Argentina post-dictatorial. El triunfo de Menem fortaleció las posiciones que dentro del gobierno sostenían la necesidad de profundizar las políticas de privatizaciones, reducir el gasto público y continuar con la reforma del Estado. En la segunda mitad de los años noventa se registra un nuevo auge de las movilizaciones de carácter ciudadano, en particular las vinculadas a cuestiones de derechos humanos, y surge con enorme vigor, el movimiento de los trabajadores desocupados. La emergencia de este actor social que ocupa el escenario de las luchas reivindicativas al margen de las orientaciones sindicales, marca el inicio de un doble proceso de ruptura con los mecanismos y contenidos tradicionales que habían definido, hasta ese momento, los reclamos populares, históricamente vinculados al mundo del trabajo. Este momento de quiebre con las trayectorias anteriores se expresa —se hace visible a los ojos de la sociedad— en dos planos principales, uno es la adopción de los cortes de rutas como forma de manifestación dominante, el otro es la generación de un nuevo repertorio de demandas que combinan la búsqueda de una vuelta al universo del empleo y la

atención de las carencias que afectan al principal espacio de socialización de los desocupados: el barrio.

El debilitamiento de la centralidad sindical como elemento rector del movimiento social, propició una progresiva fragmentación de las organizaciones contestarias que se agudizó cuando algunas corrientes sindicales decidieron alejarse de la central obrera. Uno de los desprendimientos más significativos se produjo en 1996 cuando el gremio de los choferes de camiones, bajo la dirección de Hugo Moyano, optó por separarse de la CGT y promover un nuevo agrupamiento con posiciones más críticas al programa económico del gobierno. Otra ruptura de importancia se registró poco después, en mayo de 1997, cuando la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) logró el reconocimiento de las autoridades como organización sindical de tercer nivel, con lo que se transformó en un referente nacional para las organizaciones obreras de oposición. Estos reagrupamientos se produjeron en momentos en que la mayoría de los sindicatos industriales de filiación peronista decidieron negociar con el gobierno de Menem y aceptar el achicamiento del aparato estatal, la cesantía de miles de trabajadores y la venta al capital privado de buena parte del patrimonio público. Era el último capítulo de un cuidadoso proceso de desarticulación de las instituciones del Estado y de mal vender importantes bienes de un patrimonio costosamente logrado en los 50 años de historia argentina que se inició en la década de los treinta.

El eje geográfico de las luchas piqueteras fue trasladándose de las provincias que vivieron las inclemencias sociales que originó el brusco cierre de empresas y la decadencia de las economías regionales, a los distritos fabriles del Gran Buenos Aires. La mayoría de las nuevas organizaciones de desocupados surgieron en los antiguos municipios industriales que rodean la capital de la república, también en esta zona se concentró el mayor número de movilizaciones, cortes de ruta y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad a partir del año 2000.

Puede ilustrarse la dinámica de los conflictos que protagonizaron las agrupaciones piqueteras en el período 1997-2002 haciendo un seguimiento de los cortes y marchas a través de la prensa. Esta tarea es sumamente laboriosa ya que requiere una consulta sistemática de los principales periódicos de circulación nacional o de algunas revistas quincenales y semanarios políticos dedicados al análisis de las cuestiones nacionales. Como parte de las tareas de investigación que se realizaron para preparar este trabajo se consultaron los diarios *Clarín*, *Página 12* y *La Nación* que de manera desigual y con distinto rigor periodístico, tratan el tema de los piquetes y movilizaciones. Estos medios suelen discrepar también en la caracterización de los episodios que consignan en sus notas, lo que para unos es un “corte” de alguna vía de comunicación para los reporteros de otros diarios se trata de un hecho un tanto circunstancial derivado de incidentes que se producen entre grupos “violentos” de manifestantes y la policía. Por otro lado, la información recopilada por algunas instituciones públicas o académicas es valiosa pero insuficiente, faltan semanas o meses completos o sólo se focaliza la cobertura en el seguimiento de las marchas y piquetes en ciertas provincias o localidades y no se registra lo ocurrido en el resto del país. Después de revisar diversos archivos, fuentes periodísticas así como estudios y ensayos académicos, se optó por incluir en este capítulo un cuadro cuya fuente principal es la minuciosa investigación documental que llevó a cabo un equipo del diario *Clarín* en el año 2002, no obstante, como este informe cubría sólo el primer semestre de este año, se acudió a las notas de *Página 12* y del propio *Clarín* para completar el período julio-diciembre de 2002.^{66/} Cabe señalar, que el cuadro que se presenta no constituye un monitoreo exhaustivo de la lucha del movimiento de los trabajadores desocupados pero permite conocer la distribución geográfica y la frecuencia de las protestas callejeras, con lo que pueden inferirse ciertos comportamientos sociales, nivel de confrontación entre manifestantes y autoridades y el formato de lucha más difundido en el movimiento piquetero.

Por último, es conveniente puntualizar que las acciones colectivas del período que abarca desde 1996, con las puebladas y piquetes de Cutral-Co y Plaza Huincul, a la rebelión urbana que puso fin al gobierno del presidente de la Rúa en diciembre de 2001, muestran un conjunto de elementos novedosos si se comparan las movilizaciones de esta etapa con las luchas populares que se presentaron durante la dictadura (1976-83) y con la naturaleza de las protestas sociales que siguieron a la democratización del país en 1983. Es posible identificar al menos las siguientes cinco características que diferencian un momento del otro:

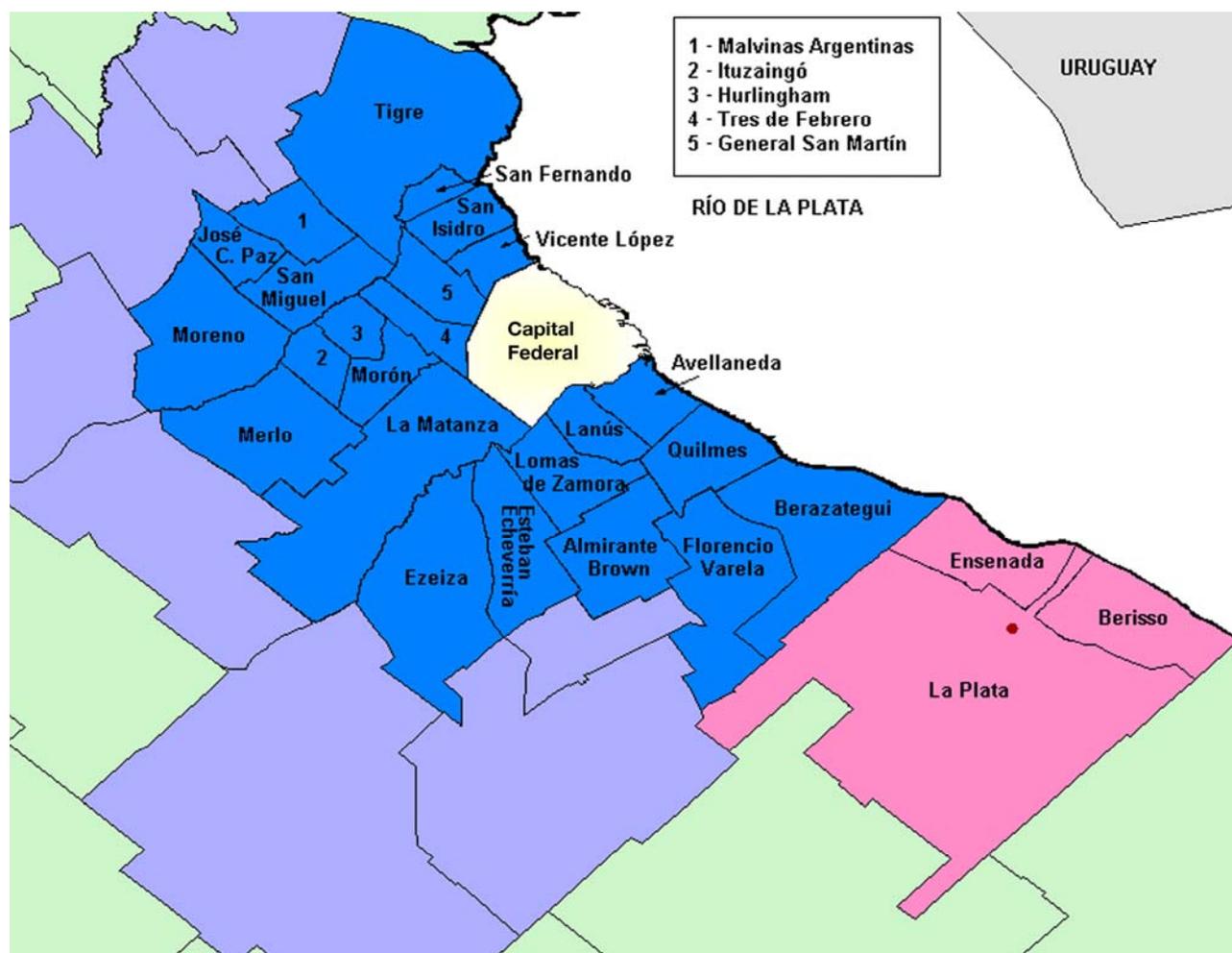
- a. Se incorporan nuevos temas y demandas en los programas que despliegan las organizaciones las que definen el tono de las acciones de protesta;
- b. Se multiplica el número y la diversidad de las agrupaciones sociales que participan en las movilizaciones;
- c. Aumentan las expresiones públicas de inconformidad y surgen nuevos formatos de confrontación social que exceden los límites clásicos de la huelga (cortes de rutas, puebladas, formas autónomas de gestión de los servicios básicos desconociendo la autoridad de los representantes gubernamentales);
- d. Desde 1996 (segundo período del gobierno de Menem 1995-1999) se registra un desplazamiento de las movilizaciones vinculadas al mundo del trabajo, que responden a la iniciativa y conducción de los sindicatos, a otro tipo de expresiones de la protesta social y agitación callejera que obedecen a la dinámica que imprimen las organizaciones de trabajadores desocupados;
- e. Puede detectarse, entre 1996 y 2001, un cambio geográfico de las acciones que protagonizan las organizaciones piqueteras. Si bien este proceso arranca con importantes luchas como cortes de ruta y enfrentamientos con las autoridades en el interior de la república —en particular en las provincias de Neuquén y Salta— en años posteriores el eje de las movilizaciones se traslada al conurbano bonaerense.^{67/}

Cortes de Rutas por Provincia 1997-2002

Provincia	1997-1998	1999-2000	2001-2002
Buenos Aires	32	201	1039
Capital Federal	20	109	469
Jujuy	50	80	460
Salta	4	43	198
Córdoba	23	15	159
Santa Fe	13	34	125
Chaco	2	28	119
Tucumán	7	71	118
Mendoza	2	10	97
Neuquén	17	62	92
Río Negro	1	23	91
Catamarca	0	8	89
Misiones	3	3	45
Entre Ríos	3	20	37
San Juan	1	9	34
La Rioja	3	1	29
Corrientes	1	22	27
Formosa	0	4	24
Chubut	5	8	23
Santa Cruz	3	6	15
Santiago del Estero	0	0	14
Tierra de Fuego	1	4	10
San Luis	0	2	9
La Pampa	0	3	4
Total	191	766	3327

Fuente: *Clarín*, 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2002. Segundo semestre de 2002, elaboración propia sobre datos de *Página 12* y *Clarín*.

Capital Federal y Localidades del Gran Buenos Aires



NOTAS

- ^{1/} Bonasso, Miguel, *El Palacio y la Calle*, Buenos Aires, Planeta, 2002.
- Cabe recordar que la crisis que se abre con la rebelión popular de diciembre dio lugar al paso accidentado de cinco presidentes en poco más de 15 días. Los titulares del ejecutivo nacional que accedieron al máximo cargo público a partir del 21 de diciembre fueron: Fernando de la Rúa (deja la presidencia el 21-XII-01) Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Camaño y Eduardo Luis Duhalde, éste último convoca a las elecciones que se efectuaron el 27 de abril de 2003.
- ^{2/} Bleichmar, Silvia, *Dolor País*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2002.
- Iñigo Carrera, Nicolás y Celia Cotarelo, “Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares”, en Seoane, José (Compilador) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-OSAL, 2004.
- ^{3/} Las jornadas de protesta popular que se desarrollaron durante el año 2001 y, en particular, en el mes de diciembre de ese año, abrieron un amplio debate sobre el peso de los “nuevos” y “viejos” actores sociales. El tema ha sido tratado de manera polémica por distintos autores, al respecto se recomienda la lectura de: Farinetti, Marina, “La conflictividad social después del movimiento obrero” en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 182, noviembre-diciembre 2002.
- Delamata, Gabriela, “De los estallidos provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas”, en *Nueva Sociedad*, op. cit.

Lobato, Mirta y Juan Suriano, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, FCE, 2003

Cheresky, Isidoro, "Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 179, mayo-junio 2002.

Este autor percibe en la emergencia popular las potencialidades que pueden dar lugar al surgimiento de liderazgos políticos renovados: "... se ha desplegado una escena ciudadana y vecinal que podría dar nuevas bases a la vida pública e incluso al surgimiento paulatino de nuevos liderazgos, [...] Pero la recomposición de la situación y en particular la recreación de un lazo de representación que asegure la productividad política de la sociedad movilizada, dependen de la emergencia de nuevas fuerzas políticas [...] Una renovación política venida exclusivamente o aún esencialmente desde abajo no parece estar a la orden del día". p. 128.

Otros autores ponen mayor énfasis en los elementos de ruptura entre las organizaciones piqueteras y la historia del movimiento obrero. Pablo Barbeta y Karina Bidaseca sostienen que: "... los escritos sobre los desocupados descansan sobre la concepción de la "carencia", "padecimiento" o ausencia de trabajo, fundada en la idea del trabajo como factor de integración de la sociedad capitalista, y por el otro lado, como síntoma de la fragmentación del mercado laboral..." "Pero ¿qué sucede cuando un grupo de trabajadores desocupados expresa "no queremos inclusión...?" "Este interrogante nos lleva a plantear desde otro lugar qué tipo de sujeto y de subjetividad se intenta crear..." "Dicha operación teórica requiere entonces una mirada que conciba al desocupado como un nuevo sujeto del cambio, un sujeto político", "Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre

de 2001. ¿Emergencia discursiva o nueva subjetividad?” en *Revista Argentina de Sociología*, Año 2, núm. 2, Buenos Aires, mayo-junio 2004.

- ^{4/} Godio, Julio, *Argentina: en la crisis está la solución*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pp. 57-68.

Una interpretación conservadora de los resultados electorales de esa fecha y de la nueva reorientación de los votantes apareció en el diario *La Nación*, Buenos Aires, el 28 de octubre de 2001, ver la nota de Grondona, Mariano, “Cómo y cuándo volverá el justicialismo”.

- ^{5/} “Se trata de un momento histórico para los sectores dominantes porque concretan avances impensables poco tiempo antes, logrando remover los escollos estructurales que impedían la consolidación del patrón de acumulación que habían puesto en marcha a partir de la dictadura militar. Si bien la superación de los factores estructurales se desencadena a partir de las contradicciones secundarias dentro del *establishment* económico, su resolución final trajo aparejada la transferencia a su órbita directa de acumulación de los activos sociales acumulados por varias generaciones de argentinos y un dramático replanteo de la relación entre el capital y el trabajo, que se expresará en los más diversos órdenes de la vida social, coronando de esta manera la “revancha clasista” que se puso en marcha con la dictadura militar basada en la obtención de cuasi rentas de privilegio”. De esta forma define Eduardo Basualdo las transformaciones del capitalismo argentino bajo el régimen de Menem en su excelente estudio; *Sistema Político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, UNQ-FLACSO-IDEA, 2002, p. 62.

De este mismo autor ver: *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa. Una aproximación a través de la*

reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros, Buenos Aires, UNQ-FLACSO-IDEP, 2000.

Acerca de las irregularidades y asignaciones fraudulentas cometidas durante el proceso administrativo de privatización de empresas públicas, consultar:

Verbitsky, Horacio, *Robo para la corona. Los frutos prohibidos del árbol de la corrupción*, Buenos Aires, Planeta, 1992.

^{6/} Fernández, Arturo, *Flexibilización Laboral y crisis del sindicalismo*, Buenos Aires, Espacio Editorial, 1998.

Senén González, Santiago y Fabián Bosoer, *El sindicalismo en tiempos de Menem*, Buenos Aires, Corregidor, 1999.

Bayón, Cristina y Gonzalo Saraví, "Vulnerabilidad social en la Argentina de los años noventa: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires", en Katzman, Rubén y Guillermo Wormald, (Coordinadores), *Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Cedro, Montevideo, 2002, pp. 68-91.

^{7/} Fernández, Arturo, *Flexibilización Laboral y...*, op. cit. pp. 75-132.

Senén González, Santiago y Fabián Bosoer, *El sindicalismo en...* op. cit. pp. 21-88.

^{8/} Basualdo, Eduardo, *Sistema Político y...* op. cit. pp. 58-85.

Bayón, Cristina y Gonzalo Saraví, “Vulnerabilidad social en la...” en Katzman, R. y G. Wormald, op. cit. “Los impactos de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo se tradujeron en una creciente precarización de los nuevos puestos de trabajo, generando un recambio de empleos estables por empleos temporarios [...] Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre inicios de 1996 y 1997, los contratos permanentes se redujeron del 94% al 82% del empleo total, mientras que el porcentaje de trabajadores con contratos de prueba se incrementó siete veces mientras que la cantidad de contratos por tiempo determinado se duplicó”. p. 77.

“La reforma previsional, inspirada con algunas variantes en el modelo chileno, fue aprobada en 1993. La misma transformó las bases filosóficas del sistema al pasar de un régimen de reparto basado en la solidaridad intergeneracional a otro de capitalización individual en manos de aseguradoras privadas...” p. 78.

González, Mariana, “Transformaciones de hecho y de derecho en las relaciones laborales en los 90” en Lindenboim, Javier y Claudia Danani (coordinadores), *Entre el trabajo y la política*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003.

Danani, Claudia, “Condiciones y prácticas sociopolíticas en las políticas sociales: las obras sociales, más allá de la libre afiliación”, en Lindenboim, Javier y Claudia Danani, *Entre el trabajo y ...* op. cit.

^{9/} Basualdo, Eduardo, *Sistema Político y modelo...* op. cit. pp. 52-84.

Acerca de la llamada “reforma del Estado” y en general, con respecto a las políticas públicas, coincidimos con Javier Lindenboim y Claudia Danani “... la nueva sociedad que ve la luz luego de treinta años de neoliberalismo criollo es

una sociedad cuyo Estado no es más pequeño, ni menos interventor, sino un Estado distinto, cuyas acciones y políticas son tan intensas como lo eran antes, pero portadoras de significados y orientaciones diferentes u opuestas en muchos casos". *Entre el trabajo y...* op. cit. p. 26.

Con un enfoque teórico similar puede verse el artículo de: Landi, Oscar, "Ese Estado, gris de ausencia", "Suplemento Zona", *Clarín*, Buenos Aires, 3 de junio de 2001. Al referirse al repliegue de las políticas públicas, Landi señala: "Si el Estado [...] es vivido como ausente en medio de una gran crisis social, entonces el desamparo, la sensación de vivir en un impiadoso desierto, erosiona aun más las identidades colectivas [...] La fragmentación social que se acentuó desde los 90 en adelante, agrega la imagen de un país invertebrado".

^{10/} Cieza, Daniel, *De la cultura del trabajo al malestar del desempleo*, La Plata, CREALC-CED-Universidad Nacional de La Plata, 2000, Capítulo V, "Poco laburo; fin del pleno empleo y calvario de los trabajadores" pp. 189-240.

Senén González, Santiago y Fabián Bosoer, *El sindicalismo en...* op. cit. pp. 131-164.

Godio, Julio, *Argentina: en la crisis está...* op. cit. pp. 109-115.

^{11/} Hasta mediados de los años setenta el movimiento sindical conservó la estructura y capacidad de representación y movilización social que había adquirido durante el proceso de industrialización sustitutiva y de "crecimiento hacia adentro" de la economía argentina. Sobre los cambios operados en el mundo del trabajo se

recomienda consultar, entre otros estudios; Abós, Alvaro, *La columna vertebral. Sindicatos y peronismo*, Buenos Aires, Legasa, 1984.

James, Daniel, *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.

Martuccelli, Danilo y Maristella Svampa, *La plaza vacía*, Buenos Aires, Editorial Losada, 1997.

Al analizar los efectos que el proceso de apertura económica y desindustrialización tuvo sobre los grupos sociales subalternos, los autores sostienen: "Respecto de los sectores populares se percibe la clara erosión del peronismo como estructura del sentir. En efecto, el peronismo deja de ser el principio de articulación entre una identidad obrera, un sentimiento nacional y una conciencia popular. Cada uno de estos elementos se debilita y se disocia de los otros: la identidad obrera, [...] entra en crisis con la transformación del mercado laboral y la precarización de las situaciones de vida. Ciertamente, el peronismo aún expresa de diferentes maneras un anhelo de dignidad personal [...] pero gradualmente deja de ser un mecanismo activo de comprensión de lo social. Pero, sobre todo, el peronismo no realiza más esa articulación tan singular que logró en el pasado entre las diversas dimensiones de la experiencia social y política. La conciencia popular que el peronismo impuso y al mismo tiempo sufrió, va desdibujándose en la medida en que aumenta la heterogeneidad social y que las divisiones ideológicas se debilitan [...] Las tradicionales divisiones simbólicas de la política argentina pierden gran parte de su eficacia y poder movilizador [...] La base prescriptiva de la vida política se transforma. Pero en el momento mismo en que las divisiones simbólicas se debilitan, el país entra en una fase de dualización social. [...] En medio de una profunda hostilidad política, el peronismo fue el

movimiento político y el movimiento social en el que se produjo la inserción de los trabajadores argentinos en la nación. En fin, en el pasado el peronismo significó la posibilidad de identificarse con una Nación que históricamente se había percibido como extraña; hoy, trata de dar cuenta de una identificación con una sociedad que comienza a sentirse como lejana”. pp. 420-421.

^{12/} Bidaseca, Karina y Daniela Mariotti, “Viejos y nuevos actores en la protesta rural en la Argentina”, en Giarracca, Norma y colaboradores, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001.

Alfaro, María Inés, “Los trabajadores citrícolas en Tucumán: las condiciones para la construcción de la protesta social”, en Giarracca, Norma, *La protesta social...* op. cit.

Grupo Estudios Rurales (Instituto Gino Germani-UBA), “El encuentro por la tierra, la vivienda, el hábitat y el desarrollo. Una plaza, muchos países”, en Giarracca, Norma, op. cit.

^{13/} “Las modalidades de la acción sindical tal como la hemos conocido hasta ahora fueron estrechamente dependientes de las características que revistió el proceso de la industrialización argentina [...] En un contexto institucional semejante, la presión reivindicativa de los sindicatos no entrañó el riesgo de desplazar a una determinada empresa [...] Cuando dicha presión culminó exitosamente, los mayores salarios a ser pagados por la empresa podían ser transferidos a los consumidores bajo la forma de precios más altos. [...] El hecho es que ese escenario se ha radicalmente transformado con la reducción de las tarifas aduaneras y la liberalización del comercio [...] ... el acceso a una oferta de bienes

importados amplía las opciones de los consumidores y se convierte en un mecanismo que disciplina la acción de los sindicatos y las empresas. La apertura comercial no tiene sólo consecuencias sobre las negociaciones salariales, también las normas que regulan las condiciones de empleo y de trabajo, y definen por lo tanto los costos laborales, están ahora expuestas a una comparación con las de los países con los que se hace más abierto el comercio. [...] Es posible afirmar, por lo tanto, que los sindicatos habrán de convivir desde ahora en más con un nivel de desempleo superior a la media histórica del 6%, lo cual, por cierto, pone límites nuevos a la movilización reivindicativa”.

Torre, Juan Carlos, “Las reformas de mercado y el sindicalismo en la encrucijada”, “Introducción” al libro de Santiago Senén González y Fabián Bosoer, *El Sindicalismo en...* op. cit., pp. 15-17.

^{14/} Fernández, Arturo, *Flexibilización Laboral y ...* op. cit., Capítulo V, pp. 157-182.

^{15/} Castel, Robert, “La lógica de la exclusión”, en Bustelo, Eduardo y Alberto Minujin (Editores), *Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes*, Bogotá, UNICEF-Santillana, 1998.

Al hacer referencia a la crisis de la sociedad salarial este autor afirma: “[...] la reestructuración de una sociedad en el sentido de su modernización conlleva la marginalización de ciertos grupos sociales [...] Actualmente, desde hace unos veinte años, las reestructuraciones industriales, la recomposición de las relaciones de trabajo, los redespiegues del aparato productivo para hacer frente a una competencia internacional exacerbada, etc., acarrearán efectos del mismo tipo. Más exactamente, se observa un doble movimiento. Por una parte, una “inestabilización”, a través del desempleo masivo y la precarización creciente de

las condiciones de trabajo, de grupos que habían estado completamente integrados. Por la otra, una dificultad creciente para entrar en las relaciones reglamentadas de trabajo y para sacar provecho de las formas de socialización que le estaban ligadas”. p. 133.

Moore, Barrington, *La Injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, UNAM, 1989, p. 443.

- ^{16/} Saraví, Gonzalo, “Entre la evasión y la exclusión social: jóvenes que no estudian ni trabajan”, en *Nueva Sociedad*, núm. 190, Caracas, marzo-abril 2004.
- En este estudio se analizan las condiciones laborales y educativas de los jóvenes argentinos en el período 1990-2000. Al referirse al tema el autor afirma “... uno de los grupos más vulnerables está constituido por los jóvenes que no participan en el sistema de educación formal ni en el mercado de trabajo. El atributo común que los ubica en una misma categoría es precisamente el permanecer al margen de algunas de las instituciones clave de socialización e integración social durante esa etapa de la vida. Tal condición de exclusión los coloca en una situación de indefinición cercana a la inexistencia social, por cuanto la sociedad contemporánea no logra asignarles un reconocimiento y/o estatus social particular: no son estudiantes, trabajadores, desocupados, ni amas de casa. Esta situación extrema de exclusión, en términos de desafiliación social, convierte a este grupo no sólo en manifestación evidente de la crisis por la que atraviesan los canales tradicionales de integración social, sino al mismo tiempo en una caja negra de la que poco sabemos, pero que fácilmente se asocia con diversos e incluso contrastantes prejuicios sociales: desde una prolongada adolescencia que se resiste a asumir responsabilidades adultas, hasta la estigmatización de este

grupo con actividades delictivas, consumo de drogas y otras prácticas socialmente sancionadas”. p. 70.

Reguillo Cruz, Rossana, *Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2000.

El análisis del proceso de generación de referentes simbólicos propios y de construcción de identidades es uno de los aspectos principales de este libro. Al respecto la autora escribe que: “En un contexto con fuertes tendencias homogeneizadoras y en una sociedad que ha ido suprimiendo ritos de pasaje y de iniciación, pero que exacerba la diferenciación y segmentación entre los grupos de edad, a través del sistema productivo y de las fuerzas del mercado, y de manera particular, a partir de una crisis en las “instituciones intermedias”, incapaces por distintos motivos de ofrecer certidumbres a los actores sociales, las culturas juveniles han encontrado en sus colectivos elementos que les permiten compensar este déficit simbólico, generando diversas estrategias de reconocimiento y afirmación, entre las que destaca el uso de objetos, marcas y lenguajes particulares”. pp. 99-100.

Girardo, Cristina, “Las organizaciones de la sociedad civil de y para jóvenes en el contexto de la globalización”, en Montero, Delia y Clara Inés Charry (compiladoras) *Globalización y sociedad civil en las Américas*, México, UAM-Juan Pablos, 2004.

Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas coordinado por Susana Torrado destaca que en Argentina hay más de 3 millones 300 mil adolescentes, de los cuales cerca del 40% no estudia ni trabaja. El documento

señala que: “En algunos casos las consecuencias de esta política son irreversibles y muchos de esos jóvenes ya no van a reinsertarse”.

“Argentina tiene alto porcentaje de jóvenes sin estudio ni trabajo”, en www.diariohoy.net, 8 de octubre de 2003.

^{17/} Filgueira, Carlos, “Bienestar y ciudadanía. Viejas y nuevas vulnerabilidades”, en Tokman, Víctor y Guillermo O’Donnell, *Pobreza y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1999.

Tenti Fanfani, Emilio, “Cuestiones de exclusión social y política”, en Minujin, Alberto (Editor), *Desigualdad y exclusión*, Buenos Aires, UNICEF-Losada, 1996.

Fleury, Sonia, “Ciudadanías, exclusión y democracia”, *Nueva Sociedad*, núm. 193, Caracas, septiembre-octubre 2004.

^{18/} Castel, Robert, “La lógica de la exclusión”, en Bustelo, Eduardo y Alberto Minujin (Editores), op. cit., pp. 126-137.

^{19/} Urondo, Francisco, *Los pasos previos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999.

^{20/} Rodríguez, Esteban, “Encapuchados, taparse el rostro para tener un rostro”, en Revista *Lote*, Venado Tuerto, Argentina, Año VI, núm. 62, septiembre 2002.

Gilly, Adolfo, “De piquetes y otros sujetos”, *La Jornada*, México, 19 de septiembre de 2004. El autor enfatiza el valor de la historia y las prácticas de la clase obrera en la constitución de los movimientos de trabajadores desocupados al señalar que

“... inventaron una nueva forma de lucha y le dieron el nombre que su historia les había legado: *piqueteros*”.

Masseti, Astor, *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*, Buenos Aires, Editorial de las Ciencias-FLACSO, 2004

^{21/} Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra, *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003. Ver la excelente descripción que hacen estos autores sobre el colapso del entramado social que se tejió alrededor de la empresa YPF, “El estallido del mundo ypefeano” pp. 102-108.

Sobre el proceso de creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ver “YPF” en la página www.agendadereflexion.com.ar

^{22/} Svampa, M. y S. Pereyra, op. cit. pp. 105-107.

^{23/} Favaro, Orietta, “La dinámica política y la conformación del poder en Neuquén”, en *Cuadernos del CISH*, núm. 5, La Plata, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, 1999, pp. 113-129.

Svampa, M. y S. Pereyra, op. cit. pp. 105-106.

^{24/} Favaro, Orietta, “La dinámica política y...” op. cit.
 ———, “Protesta social y representación en las provincias argentinas: Neuquén en la última década”, en Seoane, José, *Movimientos sociales y...* op. cit.

Petrucelli, Ariel, *Docentes y piqueteros. De la huelga de ATEN a la pueblada de Cutral-Có*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2005

^{25/} Favaro, Orietta, “La dinámica política y...” op. cit. pp. 125-129.

^{26/} Svampa, M. y S. Pereyra, op. cit. pp. 106-108.

^{27/} Favaro, Orietta, “Protesta social y representación en...” op. cit.

Svampa, M. y S. Pereyra, op. cit. pp. 101-123.

López Echagüe, Hernán, *La política está en otra parte*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2002, pp. 161-193.

“Una historia con olor a petróleo y desocupación”, *Clarín*, Buenos Aires, 22 de diciembre de 2003.

Lucita, Esteban, “Cortando rutas, abriendo nuevos senderos. Desocupados, ocupados, piqueteros, viejas y nuevas formas de lucha” en *Cuadernos del Sur*, núm. 32, Buenos Aires, noviembre 2001.

Isman, Raúl, “El movimiento de los piqueteros: o se corta la ruta o se corta la esperanza”, en Iriarte, Alicia (compiladora). *La Argentina fragmentada. Aspectos de la nueva cuestión social*, Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2003.

^{28/} González Bombal, Inés, (compiladora) *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argentina de la crisis*, Buenos Aires, CEDES, 2003, pp. 154-187.

Bielsa, Rafael y Miguel Bonasso, et. al, *Qué son las asambleas populares*, Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2002

Svampa, M. y S. Pereyra, op. cit., pp. 108-117.

López Echagüe, Hernán, *La política está...* op. cit., pp. 161-193.

^{29/} Barbeta, Pablo y Pablo Lapegna, “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño”, en Giarracca, Norma y colaboradores, op. cit.

Kohan, Aníbal, *A las calles*, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2002, pp. 29-43.

Svampa, Maristella, “Organizaciones de trabajadores desocupados: El modelo General Mosconi”, en González Bombal, Inés (compiladora) op. cit.

Piqueteros Mosconi. Cortando las rutas del petróleo, Buenos Aires, Ediciones Madres de la Plaza de Mayo-América Libre, 2006

Marabotto, Eva, “Las salidas del pago chico”, “Suplemento Zona”, *Clarín*, Buenos Aires, 26 de agosto de 2001. En el reportaje de Eva Marabotto se encuentra una detallada descripción de los efectos provocados por el cierre de empresas en la provincia norteña de Jujuy.

^{30/} Svampa, M., “Organizaciones de trabajadores...” op. cit.

Ferreyra, Pilar, “Señales en las rutas argentinas”, Suplemento “Zona”, *Clarín*, Buenos Aires, 24 de junio de 2001. La autora de la nota describe la naturaleza de los piquetes a partir de una pregunta: “¿Cuál es la lógica que recorre los cortes de ruta? A diferencia del método de la protesta sindical que suspende la producción a través de la huelga, el corte de ruta interrumpe el proceso logístico del sistema productivo: al cerrar el paso a los camiones que distribuyen mercaderías. Ahora es como si el lugar de la protesta, como si la fábrica se trasladara al barrio”.

^{31/} Svampa, M., “Organizaciones de trabajadores...” op. cit. pp. 58-69.

Kohan, Aníbal, *A las...*, op. cit., pp. 45-74.

^{32/} Linares, Martín, “Trabajar sin amos: De la utopía al acto”, *Excélsior*, México, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2003.

^{33/} Linares, Martín, “Trabajar sin amos: De la...” op. cit.

^{34/} Sobre el proceso de industrialización en los municipios del sur de la capital de la república puede consultarse, entre otros títulos —y como un verdadero referente histórico— el excelente estudio de caso de Mirta Lobato acerca del enorme impacto de la industria frigorífica como articuladora del conjunto de la vida social en la ciudad de Berisso; *La vida en las fábricas*, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2001.

^{35/} “Inquietante radiografía de la industria en el Gran La Plata”. En un estudio elaborado por la Universidad Nacional de La Plata se analiza el acelerado deterioro de los establecimientos industriales en la capital de la Provincia de

Buenos Aires y municipios vecinos de Ensenada y Berisso, *El Día*, La Plata, 23 de julio de 2003.

- ^{36/} Cross, Cecilia, “La Federación de Tierra y Vivienda de la CTA: el sindicalismo que busca representar a los desocupados”, en Battistini, Osvaldo (compilador), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004.

Sobre la trayectoria del principal dirigente de la FTV, Luis D’Elía, ver la nota del diario *Clarín* del 18 de marzo de 1986, “Alucinante fundación de una villa miseria en plena noche”, (Buenos Aires, 18-03-86). En las noticias de ese día se menciona que “alrededor de 400 familias asentadas en el barrio El Tambo, partido de La Matanza, desarmaron sus casillas y con sus pertenencias a cuestas se trasladaron hasta terrenos fiscales ubicados en Crovara y San Petersburgo. En pocas horas construyeron en ese lugar una nueva villa de emergencia”. D’Elía aparece en esta crónica mencionado como uno de los coordinadores en las tareas de instalación de este nuevo asentamiento. Acerca de la presencia de este dirigente en ese lugar la nota añade: “No estaba allí como un paracaidista: vivía entonces y todavía hoy sigue viviendo en el barrio El Tambo”.

- ^{37/} Merklen, Denis, “Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires”, en *Nueva Sociedad*, núm. 149, Caracas, mayo-junio, 1997.

Izaguirre, Inés y Zulema Aristizábal, *Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990.

^{38/} Candia, José Miguel, “América Latina: crisis del trabajo y nuevas formas de representación popular”, en Acevedo López, Guadalupe y Adrián Sotelo, *Reestructuración económica y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI Editores, 2004, pp. 350-356.

^{39/} Un análisis del impacto del Programa “Barrios Bonaerenses” así como la presentación de sus aspectos conceptuales y metodológicos puede consultarse en: *Programas de empleo transitorio. La experiencia de Barrios Bonaerenses*, La Plata, Proyecto ARG 97/037, PNUD, 1999.

^{40/} Candia, José Miguel, “América Latina: crisis del...” op. cit. p. 353.

^{41/} González Bombal, Inés, *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la...* op. cit. pp. 21-48.

^{42/} Candia, José Miguel, “América Latina: crisis del...” op. cit. pp. 354-356.

^{43/} Zibechi, Raúl, *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*, La Plata, Letra Libre, 2003, pp. 162-171.

Delfini, Marcelo y Valentina Picchetti, “De la fábrica al barrio y del barrio a las calles”, en Battistini, Osvaldo, *El trabajo frente...* op. cit. Para estos autores hay un cambio profundo en el papel que cumplen los espacios laboral y territorial. Con respecto al mundo del empleo afirman: “... el trabajo aparece como un lugar de paso, el ahora de una relación de dependencia ya no abre la posibilidad de construir un proyecto [...] a futuro [...] El espacio laboral es vivido como un espacio

de incertidumbre, de inseguridad que provoca un derrumbe subjetivo en la medida en que la posibilidad de una construcción de relaciones intersubjetivas estables dentro de ese ámbito se acota, dando lugar a la emergencia de otros espacios como ámbitos para el establecimiento de relaciones. Al contrario de lo que pasa con el trabajo, el anclaje en el barrio se convierte en una situación de permanencia. El espacio que, en el modelo sustitutivo, era vivido como lugar de tránsito, en la actualidad se procesa subjetivamente como encarnación de un proyecto [...] como punto de referencia desde donde empezar a pensar y construir uno”. pp. 272-273.

^{44/} Zibechi, Raúl, *Genealogía de la revuelta...* op. cit. Sobre la crisis de la familia nuclear y la pérdida de la centralidad productiva del varón consultar el apartado “La territorialización del movimiento” pp. 162-171.

Lucita, Esteban, “Cortando rutas, abriendo nuevos senderos...” en *Cuadernos del Sur*, núm. 32, op. cit., pp. 84-87.

“Mujeres al borde del camino”, Suplemento “Zona”, *Clarín* Buenos Aires, 24 de junio de 2001. Al referirse a la presencia de la mujer en los cortes de ruta la nota señala que: “... su papel no es solamente el de apoyo o sostén de la infraestructura sino que alcanza mucho mayor protagonismo. Con ellas van sus chicos y organizan la olla popular, enfrentan los contactos con la prensa, convierten el hecho excepcional en micro hazaña de todos los días”.

“Su presencia se sustenta en otros fenómenos [...] como el incremento de los hogares con jefatura femenina, por ser mujeres solas o porque el desempleo masculino las ha convertido en la fuente de ingresos principal de sus hogares.”

^{45/} Vales, Laura, “No quise ser más el ají picante de los medios” entrevista a Carlos Santillán, *Página 12*, Buenos Aires, 11 de febrero de 2004.

“La unidad debe pasar al marco revolucionario”, entrevista de Jorge Boccanera a Carlos Santillán en Revista *Lote*, núm. 63, Venado Tuerto, Argentina, octubre 2002.

Al referirse a la composición heterogénea del movimiento piquetero Santillán declara: “Son movimientos de base de jóvenes, mujeres y proletarios que han perdido el trabajo en la fábrica. Esos son los componentes de todos los piquetes. Hay que ver que al cercarse las posibilidades de la clase media, ésta también se va incorporando. Hemos visto como se ha empezado a organizar dentro de estos movimientos[...] los docentes desocupados, los profesionales desocupados”. p. 19.

^{46/} “Antecedentes”, *Clarín*, Buenos Aires, 18 de octubre de 2004. “La cantidad de beneficiarios del Plan “Jefas y Jefes de Hogar” se redujo desde su implementación en 2002, a hoy. Al principio eran dos millones. Ahora hay 400 mil personas menos [...] El Plan se implementa desde la órbita del Ministerio de Trabajo, mientras que otros planes se administran desde la cartera de Desarrollo Social...”

“El sinuoso camino de un proyecto que surgió de la peor crisis”, *Clarín*, op. cit.

“... la propuesta se enmarcaba en el derecho de inclusión social y, por tanto, tenía que abarcar a todos los desocupados. Pero esto nunca se cumplió [...] El ingrediente más novedoso del plan era la creación de los llamados Consejos Consultivos compuestos por representantes del Estado, las cámaras empresariales, las centrales obreras, los cultos y las ONG cada 25 mil habitantes, que debían ejercer el control...”

^{47/} Fernández, Arturo, *Flexibilización Laboral y...* op. cit., Capítulo IV. “Las prácticas socio-políticas del sindicalismo opositor”, pp. 131-156.

Svampa, M. y S. Pereyra, *Entre la ruta y el ...* op. cit., Parte I, “La configuración del espacio piquetero: grupos y alineamientos”, pp. 54-61.

Zibechi, Raúl, *Genealogía de la...* op. cit., “La CTA: una central de nuevo tipo”, pp. 75-78.

El autor caracteriza a la CTA como una central sindical atípica: “La CTA realiza un trabajo territorial, algo totalmente excepcional en el movimiento sindical en cualquier parte del mundo. En líneas generales, mantiene una actitud de firmeza, ha encarado luchas que revelan capacidad para crear nuevas formas de acción (como la Carpa Docente y los piqueteros) y promueve encuentros de reflexión y debate de ideas con otros movimientos e intelectuales críticos, buscando actualizar y renovar el pensamiento anticapitalista. Además, ha creado una organización juvenil y un sector de mujeres. En suma, la CTA es atípica como central sindical y tiene facetas realmente innovadoras...” pp. 75-76.

El propio Víctor de Gennaro definió en una entrevista el carácter de la CTA. Al preguntársele si el Ministerio de Trabajo cuestiona que la CTA represente a los desocupados, respondió: “... para nosotros la afiliación directa es fundamental, un elemento que hace al cambio, a la democratización. Para nosotros un trabajador estatal o privado es igual que un trabajador precario, desocupado o jubilado. Ese es nuestro mandato fundacional, si lo sacamos del estatuto deja de tener sentido nuestra central, porque hemos cambiado el concepto de clase”. Vales, Laura, “Buscan instalar el temor a la inflación”, *Página 12*, Buenos Aires, 11 de abril de 2005.

^{48/} Zibechi, Raúl, *Genealogía de la ...* op. cit. pp. 183-191.

Piva, Adrián, “La década perdida. Tendencias de la conflictividad obrera frente a la ofensiva del capital (1989-2001)”, en *Cuadernos del Sur*, núm. 32, op. cit.

Godio, Julio y Alberto Robles, “Observatorio del movimiento sindical argentino”, en Revista *Pistas*, núm. 3, Buenos Aires, febrero 2001, página web www.mundodeltrabajo.org.ar

^{49/} “Comienza el VI Congreso Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos”, www.cta.org.ar, 12 de diciembre de 2002.

“Una convocatoria para crear un movimiento”, *Página 12*, Buenos Aires, 15 de diciembre de 2002.

“La CTA aprobó la creación del Movimiento Político Sindical”, *Clarín*, Buenos Aires, 14 de diciembre de 2002.

“La CTA estrena su nuevo perfil”, *Clarín*, Buenos Aires, 16 de diciembre de 2002.

^{50/} “La CTA estrena su...” *Clarín*, op. cit.

^{51/} “La CTA aprobó la creación del ...”, *Clarín*, op. cit.

^{52/} “Termos, parrillas, familias y reclamos en el primer congreso piquetero”, *Clarín*, Buenos Aires, 25 de julio de 2001.

“Los piqueteros vuelven a la ruta mañana y pasado”, “Suplemento Radar”, *Página 12*, Buenos Aires, 5 de septiembre de 2001. La reportera Laura Vales reseña en su nota que: “... en su segundo congreso nacional, los piqueteros cerraron un acuerdo que englobó a todas las organizaciones de desocupados [...] La receta fue sumar propuestas; el resultado, que habrá un plan de lucha con un poco de todo: cortes de rutas [...] cabildos abiertos en el conurbano y en el interior, apoyo a la marcha del Frente Nacional Contra la Pobreza y, en algunos lugares, piquetes a la entrada de las fábricas”.

Schneider Mansilla, Iván y Rodrigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada histórica*, Buenos Aires, Astralib, 2003, pp. 112-123.

Kohan, Aníbal, *A las...* op, cit. Ver “La Asamblea Piquetera Nacional”, pp. 75-76 y el Apéndice, pp. 147-148.

Svampa, M. y S. Pereyra, *Entre la ruta y...* op. cit. Consultar el Anexo 2 con las resoluciones de las dos primeras asambleas nacionales de La Matanza, pp. 209-210.

^{53/} Es posible reconocer diversas propuestas de caracterización y clasificación del movimiento de los trabajadores desocupados, entre otras se recomienda consultar los enfoques que aparecen en: Mazzeo, Miguel, *Piqueteros. Notas para una tipología*, Buenos Aires, Manuel Suárez Editor, 2004, Capítulo 1: “Caracterización general del movimiento piquetero”, pp. 39-74.

Svampa, M. y S. Pereyra, *Entre la ruta y...* op. cit., Capítulo 2. Parte I, pp. 53-71.

Barbetta, Pablo y Karina Bidaseca, "Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Piquete y ..." op. cit. pp. 77-78.

Cafassi, Emilio, *Olla a presión*, Buenos Aires, Libros del Rojas, UBA, 2002, pp. 60-70.

^{54/} De las clasificaciones propuestas consideramos que la que se ofrece en el estudio de M. Svampa y S. Pereyra es la que más se acerca a la realidad del heterogéneo universo de las organizaciones de desocupados y ofrece mayores elementos para su análisis.

^{55/} Schneider M., Iván y Rodrigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada...* op. cit., Capítulo 7, "La izquierda no quiere perderse el juego", pp. 107-112 y Capítulo 5, "De Salta a Buenos Aires, un solo nombre: Aníbal Verón" pp. 77-89. Los autores ofrecen elementos acerca del origen del grupo "Quebracho" y sobre los incidentes protagonizados por esta agrupación.

En agosto de 2004 el autor tuvo oportunidad de entrevistar a algunos integrantes del grupo Quebracho en la ciudad de La Plata. Durante la charla negaron ser un "grupo de choque" y señalaron que los enfrentamientos con la policía son el resultado de su no aceptación de las reglas del juego que quieren imponer las autoridades.

^{56/} Schneider M., Iván y Rodrigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada...* op. cit., pp. 107-116.

Svampa, M. y S. Pereyra, *Entre la ruta y ...* op. cit., pp. 63-64.

Mazzeo, Miguel, *Piqueteros. Notas para...* op. cit. pp. 39-49.

^{57/} Schneider M., Iván y Rodrigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada...* op. cit., “Las Asambleas Piqueteras”, pp. 112-114.

^{58/} Con respecto a la confrontación de las organizaciones piqueteras con los sectores de la población que son afectados por los cortes de rutas, calles y puentes, ver las notas de diversos medios de prensa que a mediados de 2004 evaluaron el humor y la opinión de las clases medias sobre los bloqueos al tránsito de vehículos. Entre otras fuentes se pueden consultar: “Jaque a los piqueteros. El desafío de la convivencia social”, Suplemento “Zona”, *Clarín*, Buenos Aires, 8 de agosto de 2004.

“Los datos del piquete”, *Página 12*, Buenos Aires, 6 de diciembre de 2003. En esta nota se reproducen los resultados que arrojó una investigación sobre la visión que la clase media tiene sobre el fenómeno piquetero. En junio de 2001 el 56% de la gente veía en los piqueteros un reclamo legítimo, esa cifra cayó en noviembre de 2003 al 33% y el 62% cree que son manipulados por grupos políticos contra el 35% que tenía esa opinión en 2001.

“No queremos dividir la sociedad”, *Página 12*, Buenos Aires, 8 de julio de 2004. Los grupos piqueteros más cercanos al presidente Kirchner declararon que “Rechazamos los métodos violentos y la obstaculización del tránsito y el corte de ruta como forma sistemática de impulsar los justos reclamos populares”.

La excesiva exposición de algunos dirigentes piqueteros en los medios también contribuyó a fortalecer una opinión negativa de otros sectores sociales sobre el

movimiento de los desocupados: "... en 2004 los máximos protagonistas de la videopolítica no son los dirigentes de los partidos tradicionales. Inesperadamente, el desembarco más claro del show de la TV en el sistema de poder de los argentinos se da hoy de la mano de los más encumbrados dirigentes piqueteros". En "La tinellización del movimiento piquetero", *Página 12*, Buenos Aires, 10 de agosto de 2004.

En relación al enfrentamiento entre las diversas líneas de las organizaciones de desocupados y su relación con el gobierno de Kirchner, ver: Vales, Laura, "Como en Titanes en el ring", *Página 12*, Buenos Aires, 7 de noviembre de 2003.

"Sube la temperatura en la pelea entre piqueteros dialoguistas y duros", *Clarín*, Buenos Aires, 6 de noviembre de 2003.

El mal humor contra los cortes se ha incrementado por algunos incidentes entre manifestantes y automovilistas que quieren hacer uso de las calles que se encuentran bloqueadas por los piquetes. Ver la nota "Piqueteros atacan y le rompen el coche a un automovilista", *Clarín*, Buenos Aires, 17 de febrero de 2005.

^{59/} Schneider M., Iván y Rodrigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada...* op. cit. pp. 58-63; 107-112.

^{60/} Gilio, Esther, "Jorge Jara y Andrés Fernández, piqueteros del MTD, El poder se construye", en *Página 12*, Buenos Aires, 14 de octubre de 2002.

^{61/} "Los piqueteros levantaron las barreras del peaje", *Clarín*, Buenos Aires, 18 de febrero de 2003.

Alberto Ibarra del MTL reclamó que “los subsidios de 1.3 millones de pesos diarios que el Gobierno entrega a las concesionarias de peaje se destinen a la generación de puestos de trabajo genuinos y a la apertura de fábricas”.

Vales, Laura, “Nuevas tácticas de protesta. Del corte de ruta al piquete a las ganancias”, *Página 12*, Buenos Aires, 14 de junio de 2004.

En esta nota la reportera consigna que el dirigente José Villalba del Bloqueo Obrero Popular señaló que ya era necesario elevar sus niveles de confrontación. “Después de 8 años de lucha pensamos que estamos en otro escalón, que tenemos que adoptar la madurez de dar la pelea por el trabajo genuino y mejores condiciones de trabajo en unidad con la clase obrera”.

“Durante seis horas los piqueteros levantaron los peajes a la Capital”, *Clarín*, Buenos Aires, 24 de junio de 2004. Entre las 11 y las 17 horas integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que dirige Raúl Castells, ocuparon las casetas de las autopistas Panamericana, Ricchieri y Buenos Aires – La Plata y permitieron el paso gratis de automóviles y camiones.

“Constitución: por primera vez, impiden el bloqueo de boleterías” *Clarín*, Buenos Aires, 7 de septiembre de 2004.

Después de más de 100 episodios de toma de las boleterías en el servicio que tiene a su cargo la empresa Metropolitano, ex-Ferrocarril Roca, el gobierno de Kirchner dispuso un operativo policial para impedir el bloqueo de las boleterías.

^{62/} MTD de Solano y Colectivo Situaciones, *Más allá de los piqueteros*, Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano, 2002. “La potencia del piquete, es la hipótesis, radica en la capacidad del movimiento de subjetivarse como lo que excede su

carácter de excluidos, pobres y desocupados. Su singularidad nos habla de una dignidad de la insubordinación y del ejercicio de la resistencia como creación de sociabilidad”. p. 133.

Cafassi, Emilio, *Olla de presión*, op. cit., pp. 51-57.

Schneider M., Iván y Rodigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada...* op. cit., pp. 80-95.

Ferrara, Francisco, *Más allá del corte de rutas*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2003, pp. 95-130.

Zibechi, Raúl, *Genealogía de la...* op. cit., pp. 132-162.

^{63/} “Piqueteros reclamaron en la sede de Aguas que la empresa vuelva a manos del Estado”, *Clarín*, Buenos Aires, 11 de febrero de 2005.

^{64/} “Hoy habrá piquetes en las estaciones de todo el país”, *Clarín*, Buenos Aires, 11 de marzo de 2005.

^{65/} “Hoy habrá piquetes...”, *Clarín*, op. cit.

“Los piquetes en las estaciones dispararon el cruce de acusaciones”, *Página 12*, Buenos Aires, 14 de marzo de 2005.

^{66/} Young, Gerardo, Lucas Guagnini y Alberto Amato, “Piqueteros”, *Clarín*, Buenos Aires, 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2002.

- ^{67/} Schuster, Federico y Sebastián Pereyra, “La protesta social en la Argentina democrática: Balance y perspectivas de una forma de acción política” en Giarracca, Norma y colaboradores, *La protesta social...* op. cit. “Durante la década del noventa pueden observarse importantes transformaciones en la protesta social en la Argentina. Especialmente en lo que se refiere a la mutación de identidades clásicas asociadas a la movilización social como el sindicalismo [...]”. p. 41.
- “Nuevas categorías sociales, como los *piqueteros* o *fogoneros*, fueron inventadas para suplir los vínculos que antaño podían ser encontradas en la filiación laboral o sindical”. p. 56.

Capítulo V

De Vuelta al Trabajo: el Movimiento de Empresas Recuperadas

De Vuelta al Trabajo: el Movimiento de Empresas Recuperadas

Los acontecimientos de mediados del año 2001 en la sureña provincia de Neuquén tuvieron un doble efecto: embarullar la vida de un próspero empresario y establecer un referente emblemático para el movimiento de empresas recuperadas. Es posible que Luiggi Zanón jamás imaginara que el establecimiento industrial que lleva su nombre, quedara en la memoria social como una de las experiencias más relevantes y controvertidas del proceso de reapertura de empresas y autogestión obrera que se difundieron con enorme rapidez a partir de ese año.

Hasta octubre de 2001, Luiggi Zanón parecía haber cumplido, con sorprendente éxito, con todos los requisitos que el sentido común exigía de un promotor industrial surgido desde abajo. Inmigrante de origen italiano, emprendedor, austero y bien dispuesto para los negocios, Zanón reunía —en el imaginario colectivo y en la realidad del siempre complejo mundo del dinero— todos los atributos que definen el perfil adecuado de quien decide dejar su país de origen para construir un futuro mejor en tierras de ultramar. Su historia personal respondía, como un verdadero paradigma, al libreto que la sociedad argentina fue construyendo, con el paso de los años, para quienes llegaron ganados por el espíritu de progreso y el deseo de amasar fortuna. Sin embargo, la palabra “Zanón” tiene, desde el año 2001, fuertes connotaciones de conflicto social y un innegable olor a malos manejos y vaciamiento de empresas. ¿En qué contexto y dentro de qué dinámica social se inscribe el proceso de recuperación de establecimientos que operan bajo la responsabilidad total de sus obreros y empleados después de haber presentado quiebra o de haber quedado abandonados por la huída de sus propietarios?

Hay un elemento fuertemente constitutivo que debe jerarquizarse al analizar este fenómeno: la recuperación de empresas está directamente vinculada con el propósito

de los trabajadores que pierden su fuente de empleo, por preservar la fábrica como el espacio donde se generan y reproducen sus identidades laborales y sociales. Es por lo tanto, uno de los componentes más relevantes en este intento de rearticulación del mundo del trabajo por parte de sectores subalternos de la sociedad argentina. Se trata de una experiencia en la que coexisten las antiguas tradiciones laborales y sindicales con las nuevas experiencias y saberes de la autogestión, en algunos casos y de la cogestión y el control obrero de la producción, en otros. Conviven, de esta manera, en un escenario diverso, las prácticas convencionales del trabajo asalariado con formas asociativas de producción derivadas, en la mayoría de las experiencias, por la quiebra o el cierre de las empresas.

La rehabilitación de las fábricas cerradas o en proceso de suspender la producción y las capacidades potenciales de que esta dinámica propicie la recuperación de otros establecimientos y fomente la reconstrucción del aparato productivo, podría actuar como uno de los detonantes que posibiliten la formulación de políticas públicas destinadas a impulsar la construcción de un sistema de economía de mercado que pueda integrar un área de propiedad mixta.

El desarrollo de esta compleja dinámica de recuperación de empresas bajo un régimen de autogestión o de cogestión, ha generado cambios y nuevas formas de organización de la cultura del trabajo y de los saberes técnicos de obreros y empleados.

En algunas experiencias esta nueva cultura recupera las mejores tradiciones de la lucha sindical y en otras, hace valiosos aportes a la actualización de la organización del trabajo bajo formas asociativas. En ambas vertientes se establecen complejas y dinámicas relaciones entre el colectivo de obreros y empleados y las instituciones y órganos del Estado y con el conjunto de la economía en general. Al mismo tiempo, se abren vasos comunicantes con las fuerzas políticas, los grupos sociales que orienta la Iglesia católica, las asociaciones civiles y las universidades. En este sentido, son de particular relevancia los vínculos que han establecido algunas empresas recuperadas y

la Pastoral Social. Se trata de un nuevo espacio ideológico en el cual convergen las tradiciones laborales transmitidas de una generación a otra con los desafíos de las innovaciones administrativas y tecnológicas de los últimos 30 años. De esta forma, se generan nuevas prácticas sociotécnicas que ponen en marcha los trabajadores responsables de mantener abiertas las empresas recuperadas.^{1/}

Es importante enfatizar que la rehabilitación de las empresas cerradas o en vías de quiebra, se inició como respuesta a la crisis económica que hacia fines de la década de los noventa derrumbó el Programa de Convertibilidad del gobierno menemista que estaba vigente desde 1991. Fue entonces cuando ante la quiebra, disolución o abandono de las empresas por parte de sus dueños, los trabajadores decidieron autogestionar los establecimientos y mantenerlos produciendo. Después de cuatro años (1998-2002) de recesión ininterrumpida y con niveles de desempleo abierto cercanos al 20%, los obreros ocupados en el sector industrial y en algunas empresas de servicios, entendieron que la pérdida de la fuente de trabajo era la antesala de su marginación del mercado laboral, del alejamiento de los circuitos de la economía formal y de la degradación de su calidad de ciudadanos.

De acuerdo a la información que proporcionan las diversas fuentes consultadas para esta investigación, hay más de 100 fábricas recuperadas por sus trabajadores (ver la lista que aparece como anexo). La magnitud y extensión de esta práctica social dio lugar a la conformación de un verdadero movimiento. No obstante, es conveniente señalar, que las cifras que habitualmente se citan son un valor aproximado ya que hay discrepancias en cuanto a la clasificación de las empresas bajo control de los trabajadores. En algunas fuentes se menciona a los establecimientos como “recuperados”, en otros como “tomados” y en ciertos medios de prensa o estudios académicos se los caracteriza como “gestionados”.

El tema jurídico constituye uno de los espacios de mayor controversia dentro del movimiento de empresas recuperadas. Una demanda sustantiva de los trabajadores es

obtener la promulgación de una ley que norme la realidad jurídica del fenómeno de la ocupación de empresas por parte de su personal. El debate por la posesión y distribución del patrimonio constituye una pieza fundamental del diferendo, es necesario dirimir cuestiones preexistentes a la toma de las empresas, entre otros aspectos debe considerarse el endeudamiento heredado, la situación patrimonial actual y las formas jurídicas así como el diseño administrativo que se derivará a partir del marco legal que se sancione.^{2/}

El pliego de demandas incluye otros aspectos igualmente significativos para la consolidación del movimiento de empresas recuperadas y el desarrollo exitoso de sus acciones futuras. Entre otras reivindicaciones es preciso señalar las siguientes:

1. Modificar la Ley de Quiebras y formular un nuevo instrumento jurídico que reconozca al trabajo como un bien de carácter social, de tal manera que toda unidad productiva que cierra sus puertas o que entra en proceso de quiebra, pueda ser legalmente transferida a sus trabajadores si éstos reclaman el control de la misma.
2. Propiciar la creación de una sociedad de garantías recíprocas integrada por las empresas que forman el movimiento de establecimientos recuperados, mutuales, cooperativas, el Estado y los bancos oficiales.
3. Impulsar la creación de un Fondo Fiduciario que surja del aporte de las empresas recuperadas y del Estado para constituir capital de trabajo destinado a fortalecer a las empresas que comienzan a desarrollar sus actividades.
4. Establecer acuerdos de colaboración con las universidades e institutos de investigación a través de los cuales se logre el apoyo de especialistas que permitan establecer indicadores operativos de eficiencia acordes a las actividades productivas que desarrollan las empresas recuperadas.
5. Impulsar la constitución de redes de consumidores, usuarios y pequeños comerciantes con el fin de defender sus derechos y promover políticas que impulsen el

consumo de bienes de origen nacional, como una vía para garantizar la permanencia de las fuentes de trabajo y propiciar la generación de empleos.

La mayoría de las empresas recuperadas adoptaron la forma jurídica que norma el funcionamiento de las cooperativas. Algunos estudios estiman que alrededor del 93% están organizados bajo esta forma asociativa, 4.7% son sociedades de responsabilidad limitada y el 2.3% optó por un esquema organizativo particular que definen como “estatización con control obrero”, figura asociativa que no es considerada en la legislación vigente. La variedad de experiencias realizadas y, en algunos casos, las divergencias de orden político-ideológico, hacen que el debate persista sobre una realidad que aún no existe en los dispositivos legales y donde la promulgación de un nuevo marco jurídico es una asignatura pendiente. Los casos de empresas que siguen operando bajo control de sus empleados asociados como cooperativistas muestran diversas formas de vincularse con el mercado y con sus antiguos propietarios, algunas cooperativas establecieron acuerdos con los anteriores dueños bajo la figura de “alquiler de la empresa”, otros propietarios traspasaron el paquete accionario a los empleados o sólo entregan la gestión del establecimiento. Por último, se registran experiencias en las que se logra un acuerdo con los propietarios que posibilita la integración de los mismos en el nivel gerencial de la cooperativa junto con los trabajadores.

Del proceso que se describe se deriva un elemento de importancia medular en el fenómeno de recuperación de las empresas por parte de sus trabajadores, se trata de la particular relación que sostienen éstos con las representaciones sindicales formales. Hay un factor de conflicto en esta peculiar vinculación de dos sectores que integran el mundo del trabajo, muchos de los obreros de los establecimientos recuperados fueron, hasta hace pocos años, trabajadores sindicalizados, sin embargo, el proceso posterior de rehabilitación de las empresas los convirtió en socios cooperativistas. Esta situación generó una dualidad de expectativas, para algunos de los segmentos obreros

comprometidos en labores autogestionarias y asociativas, la antigua relación sindical sigue constituyendo el núcleo de su vinculación con los demás integrantes de la sociedad del trabajo. Por el contrario, algunas corrientes del movimiento de empresas recuperadas, prefieren estrechar lazos con otras cooperativas, mientras que una franja con posiciones críticas hacia las formas asociativas conocidas, no descartan el retorno de las empresas a sus antiguos propietarios o la expropiación de las mismas, dentro de un marco de relaciones laborales que aceptan una mayor presencia y capacidad de decisión de los trabajadores con respecto al funcionamiento de la empresa en la etapa anterior a la crisis.^{3/} Zanón y Bruckman Confecciones optaron por este planteo que se difundió con el nombre de “expropiación con control obrero”.

Desde este enfoque, promovido mayoritariamente por las corrientes troskistas y “consejistas” de la izquierda, se impugna la estrategia cooperativista y autogestionaria y se plantea, como alternativa, el control obrero de la producción dentro de una relación capital-trabajo que guarda cierta similitud con la que se registra en todas las empresas en manos del sector privado.

Un aspecto de particular relevancia en este difícil entramado de grupos de trabajadores protagonistas del movimiento de empresas recuperadas, es el tema de las incipientes relaciones entre los obreros y empleados de los establecimientos rehabilitados y el acceso a las obras sociales de los sindicatos que prestan servicios de atención médica a sus afiliados. Este tipo de vinculación procura reestablecer las relaciones orgánicas entre estos trabajadores y los sindicatos a los cuales pertenecieron hasta hace algunos años. La experiencia más lograda en esta materia es la que lleva a cabo la Unión Obrera Metalúrgica que permite el acceso a los servicios de salud a los trabajadores de las empresas recuperadas de este sector industrial. No obstante, son todavía serias las dificultades que tienen las organizaciones formales del movimiento obrero para adaptarse y responder a las necesidades que en materia de obras sociales, reclaman los obreros de los establecimientos autogestionados.^{4/}

El surgimiento y desarrollo del movimiento de empresas recuperadas ofrece un abanico relativamente amplio de experiencias de luchas reivindicativas y de organización de la producción a través de formas autogestivas. Como referentes emblemáticos se presentan en este capítulo los casos de Zanón, en la provincia de Neuquén, el de la empresa Sasetru, productora de alimentos, ubicada en la localidad de Sarandí, entre los municipios de Avellaneda y Lanús y la fábrica Brukman Confecciones en la ciudad de Buenos Aires.

Zanón: de empresa modelo al vaciamiento patronal

Cerámica Zanón S.A llegó a transformarse en pocos años en una empresa líder en su ramo. Hacia mediados de los años noventa exportaba a más de 30 países y cubría el 20% del mercado interno. Los archivos contables consultados por los propios trabajadores cuando la fábrica fue ocupada, demuestran que la facturación media anual superaba los 90 millones de dólares. La familia Zanón había sabido ganarse el favor y las simpatías de la clase política neuquina y de no pocos funcionarios nacionales. Por ese camino Cerámica Zanón disfrutaba de un trato preferencial que incluía la exención de impuestos, acceso a programas de promociones industriales y extracción de materias primas (tierras y arcillas especiales) en zonas que pertenecían a las comunidades mapuches, a precios inferiores a su valor real. Contra lo que pudiera pensarse, cada vez que el sindicato discutía una revisión del contrato colectivo o un ajuste de salarios, la actitud de la gerencia era negar los incrementos o mejoras argumentando una situación de insolvencia o de caída en las ventas. De esta forma, fue generalizándose en el cuerpo de delegados la percepción de que se estaba ante un proceso de “vaciamiento gradual” de la empresa como parte de una maniobra orquestada por parte de sus propietarios. Bajo estas condiciones de sospechas y reclamos mutuos y cuando la conformación de la comisión interna estaba constituida

por delegados democráticamente elegidos, la muerte accidental de un obrero durante el desarrollo de sus labores, actuó como detonante de un paro de actividades y jornada de protesta en julio del 2000.

Este hecho abrió una nueva etapa de conflictos en los que se condensaron dos reclamos principales: la revisión y adecuación del sistema de seguridad e higiene en el trabajo y el pago de los aguinaldos adeudados. La actitud de la gerencia fue deslindarse del problema convocando a un concurso de acreedores, ofreciendo “retiros voluntarios” y amenazando con despidos sin indemnización a quienes se declararan en huelga. En esta nueva etapa la lucha obrera debía responder a tres instancias principales de interlocución y conflicto: la gerencia encargada de la administración de la empresa, el Estado y la antigua dirigencia burocrática del sindicato que aún permanecía enquistada en la dirección del gremio y que apoyaba las medidas de “ajuste preventivo” dispuestas por la empresa. Mediante la redacción y firma de un pliego petitorio suscrito por todos los trabajadores de la planta, la comisión interna logró abrir y ocupar un espacio en las negociaciones que se efectuaban en el Ministerio de Trabajo entre los representantes patronales y la dirigencia oficial del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén. No obstante, este avance decisivo tuvo que enfrentar nuevas maniobras destinadas a impedir la presencia de la comisión interna en la revisión de los acuerdos obrero-patronales y afrontar amenazas de despido. Este conflicto culminó con el estallido de una huelga que duró 34 días y que se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo del 2001.^{5/}

En el tiempo en que se desarrolló la huelga, los trabajadores alcanzaron dos metas fundamentales que marcan un salto cualitativo: lograron “sacar el conflicto de la fábrica” y volverlo un asunto de interés general al plantear sus demandas también fuera del establecimiento. Al reclamar “puertas afuera” otros sectores de la sociedad neuquina comprometieron su solidaridad con la huelga, ésto permitió alcanzar un segundo objetivo de relevancia: tejer una amplia red de alianzas solidarias que incluyó al

Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén (MTD), a diversos gremios de los sectores industrial y de servicios, docentes y estudiantes de la universidad local y personal médico y paramédico de clínicas y hospitales. Con el conjunto de fuerzas aliadas se conformó un ámbito multisectorial, la Mesa Coordinadora del Alto Valle que jugó un papel crucial en el apoyo a la huelga de Zanón. Esta vinculación de los obreros de Zanón con el movimiento de los trabajadores desocupados en el marco de una coordinadora multisectorial, generó condiciones adecuadas para ampliar el debate y arribar a una nueva perspectiva de la cual se derivó la propuesta de estatización de la planta bajo control obrero. Esta petición se vinculó a la puesta en marcha de un plan local de obras públicas orientado a la creación de nuevos puestos de trabajo y a satisfacer la demanda de viviendas, escuelas y hospitales.

La patronal, por su parte, decidió apagar los hornos, detener la producción y acelerar el cierre de la planta. Resultó evidente que estaba en marcha un *lockout patronal*, por lo cual los obreros en huelga llevaron el problema ante la justicia donde se logró un pronunciamiento favorable. La gerencia desconoció el fallo y reclamó el desalojo de las instalaciones de la planta. En este momento los trabajadores ponen a producir la fábrica, después de sortear enormes obstáculos como reconectar el suministro de gas, encender los equipos y obtener a crédito la compra de materias primas. Esta nueva organización de la producción bajo la responsabilidad de los obreros siguió un esquema de funcionamiento sustentado en los principios que establecieron los propios trabajadores: toma de decisiones en asamblea, división en comisiones de trabajo e igualdad de salarios. Pese a la capacidad demostrada por obreros y empleados para hacer producir la planta los días 3 y 4 de octubre del 2002 la amenaza de desalojo se volvió más crítica, fue bloqueado el suministro de energía eléctrica y la fábrica quedó rodeada por unidades policiales y grupos de rompehuelgas pagados por la dirigencia del sindicato que había sido desplazada de la conducción. En respuesta a la agresión

patronal y como muestra de solidaridad con los obreros de Zanón, se movilizó el MTD neuquino y el resto de los integrantes de la Coordinadora del Alto Valle.^{6/}

Los trabajadores ceramistas, organizados de manera autogestiva, tienen plena conciencia de que el funcionamiento de la empresa no llega todavía a cubrir la capacidad potencial de producción de la planta de acuerdo a la maquinaria instalada. No obstante, han podido demostrar su capacidad de gestionar la fábrica prescindiendo del control de los antiguos gerentes, incorporar a los trabajadores despedidos y protagonizar una experiencia colectiva, vital para el movimiento de empresas recuperadas. Son uno de los puntales fundamentales de un proceso social más vasto cuyas proyecciones aún no pueden apreciarse en toda su dimensión.

El caso Sasetru: iniciativa obrera y apoyo vecinal

En la localidad de Sarandí, coincidiendo con el cruce de camino General Belgrano y Madariaga, sobre el límite entre los municipios de Avellaneda y Lanús, el enorme terreno de casi una docena de hectáreas donde hace 20 años funcionaba Sasetru, — uno de los gigantes alimentarios más grandes de América Latina— sólo muestra ahora basura, pastizales y ratas que caminan sobre los residuos. Donde antes estuvo la fábrica, aparece el esqueleto de un edificio ruinoso con las viejas máquinas herrumbradas aún en su lugar. Dos décadas antes, más de dos mil obreros trabajaban en el lugar y casi veinte mil más encontraban sustento en la cadena de transporte, distribución y comercialización que se estructuraba entorno a Sasetru. De aquel sitio salían aceites, harinas, cereales, pastas, conservas y toda una línea de productos que, como el trabajo de los obreros, se esfumó con el vaciamiento y el cierre de la empresa. La mayoría de los trabajadores ni siquiera cobró su indemnización y diversos grupos “mafiosos”, como el de los ex-banqueros Trozzo y capitales privados vinculados al Opus Dei, encontraron en el desastre una suculenta fuente de negocios. Alrededor de

lo que había sido Sasetru, decenas de plantas industriales quedaron vacías, muertas como toda esa antigua zona industrial.

Esa era la situación hasta las 10 de la mañana del 30 de enero de 2003, cuando casi 500 vecinos y ex trabajadores de Sasetru entraron en el predio al grito de “¡Piqueteros, carajo!”. La guardia de seguridad no ofreció resistencia. Así, en columna, marcharon desde el antiguo portón de ingreso hasta la planta abandonada, unos 150 metros más adelante.^{7/}

Casi enseguida se hizo la primera asamblea. En ella hablaron, entre otros líderes sociales, representantes de diversas organizaciones de desocupados. De inmediato se organizaron comisiones de prensa y difusión, de limpieza, de comida y de seguridad. Por la tarde, el “¡Piqueteros, carajo!” se multiplicó a la enésima, cuando llegó una columna de 300 manifestantes del MTD de Berazategui.

No tardaron mucho los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, junto con un grupo de elementos de la policía, en aparecer delante de la empresa. Los jefes policiales pretendían hacer una inspección y labrar un acta, pero el intento les fue impedido por los trabajadores, mientras se entregaba a la prensa copias de la nota, que ya se había hecho llegar al Municipio, mediante la cual se exigía que procediera a incautar las maquinarias de modo que los ocupantes comenzaran a producir.

En ese momento, los problemas más elementales estaban resueltos: provisión de agua y electricidad, acondicionamiento precario del lugar para sostener la ocupación y comida preparada por familias de Villa Corina, un barrio pobre vecino a la empresa. Al anochecer, con simples herramientas de mano, los obreros ya habían empezado a transformar el pastizal habitado por ratas en un sitio limpio, en un lugar de trabajo. Los pobladores de Villa Sapito —otra área marginal cercana a Sasetru— contribuían con pan, gaseosas y alimentos refrigerados, mientras más vecinos llegaban para informarse y empezaba el empadronamiento de ex-trabajadores de la fábrica.

Al mismo tiempo, se distribuían en el vecindario cinco mil ejemplares de la primera declaración de los ocupantes. Los comerciantes del barrio, que se instalaron cuando Sasetru funcionaba, y todos los vecinos, manifestaban ahora su respaldo activo a la toma. Estaba viva en la memoria colectiva la época de prosperidad que representó para obreros y vecinos, el auge de la empresa Sasetru como fuente de empleo y de ingresos directos para los trabajadores de la planta e indirectos para los vecinos y proveedores.

Es importante reiterar que la reapertura de las plantas que permanecen inactivas, constituye un aspecto sustantivo de la resistencia social, y ha pasado a ser patrimonio común del movimiento piquetero. Entre otras organizaciones el Polo Obrero, el Bloque Piquetero, el MIJD y Barrios de Pie han encabezado este reclamo, planteando frente a las autoridades que se reabran diferentes fábricas y pidiendo el auxilio del Estado a todas las empresas bajo gestión obrera, lo que concurrentemente con un plan de obras públicas permitiría absorber la mano de obra desocupada. Con la difusión de estas experiencias se incorporó al pliego de reclamos, el listado de establecimiento de cada zona que permanecen inactivos y que podrían volver a producir. Este reclamo constituye una vía de salida para centenares de miles de desocupados y crearía las condiciones propicias para fusionar a trabajadores ocupados y desempleados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo.

El movimiento piquetero no ha esperado la aprobación de las autoridades para llevar a la práctica este programa. La ocupación de Sasetru es indudablemente pionera en la materia. Hasta el 2002, la recuperación de empresas estuvo limitada a establecimientos que venían funcionando o que habían dejado de hacerlo hace muy poco tiempo, y fueron los trabajadores, que revestían como parte del plantel de la fábrica, quienes tomaron la iniciativa de volver a hacerla producir. El impulso, en el caso Sasetru, nace desde “afuera”. Ya no es obra de los directamente afectados,

quienes, ante la amenaza de quedar en la calle, toman la determinación de tomar la fábrica y ponerla nuevamente a funcionar. La experiencia que se analiza representa un salto cualitativo. En coyunturas de crisis, la acción de la clase obrera no se circunscribe a defender los puestos de trabajo existentes, sino que toma la iniciativa para generar nuevas opciones de empleo. No se subordina a la espera de que las políticas públicas creen los puestos de trabajo o algún sector empresarial los conceda, sino que toma en sus manos la tarea. En esto reside el enorme significado político de la recuperación de Sasetru, en la medida en que expresa la tendencia y disposición que anida en las agrupaciones piqueteras para reconstruir el aparato productivo, con su participación y sobre nuevas bases sociales.

La ocupación de Sasetru, por lo tanto, se inscribe en este proceso de maduración de la clase obrera, que tiene como exponentes al movimiento de trabajadores desocupados en general y, de manera particular, al movimiento de empresas autogestionadas.

La recuperación de la planta no fue “un golpe de mano” o una acción conspirativa, sino que expresa la voluntad de miles de desempleados que habitan en la zona, quienes en múltiples asambleas, reuniones y corrillos venían reclamando una acción de esa naturaleza. No existe ningún misterio. No hay que bucear en otra parte para explicar porqué Sasetru se ha constituido en una causa inmensamente popular en Avellaneda y, en especial, en las barridas cercanas a la planta.

Doce hectáreas y diez mil metros cuadrados cubiertos en condiciones materiales, de higiene y habitabilidad realmente pésimas: transformar esos basurales en un lugar de trabajo, en una atmósfera solidaria, de compañerismo, fue la primera enorme victoria de los ocupantes de Sasetru. Las máquinas, después de tantos años, estaban todavía en condiciones de producir, se requirió de algunas tareas de reacondicionamiento efectuadas por quienes habían sido trabajadores de la planta.

Por otra parte, no menos de la mitad de los obreros, llegaban a la fábrica desde puntos ubicados a 25 kilómetros o más, de modo que se debió echar mano a la solidaridad de

choferes, picaboletos y guardas, además de colectas, y la combinación de microbuses, tren y bicicleta. La organización, el ingenio y la voluntad superaron mil escollos para recuperar la fuente de trabajo.

Las guardias nocturnas, cubiertas básicamente por integrantes de agrupaciones piqueteras solidarias, fueron una escuela de convivencia aun en el peor de los escenarios: el del agotamiento físico y el posible ingreso de la policía.

La solidaridad piquetera estuvo presente en todos los momentos, desde las donaciones de herramientas y alimentos, hasta el asesoramiento técnico para la reparación de maquinarias, algunas obsoletas tras los avances técnicos de los últimos veinte años.

El 11 de febrero de 2003, entre la lluvia y el barro, más de 500 desocupados de la zona sur del Gran Buenos Aires hicieron del playón de la fábrica un escenario conmovedor de solidaridad con los ocupantes.

El 16 de marzo de ese mismo año llegó a la fábrica una inspección municipal coordinada por un ingeniero, quien se mostró sorprendido por la solvencia operativa de los trabajadores que integraban la Comisión Técnica de la empresa. Mientras tanto, la responsabilidad del trabajo se distribuía en cinco comisiones para dejar a punto las instalaciones y poner en marcha el proceso de producción. Esas comisiones tuvieron siempre un funcionamiento democrático, con amplios debates, de solidaridad y de lucha común por la defensa de las fuentes de empleo.

Así se pudo establecer que, en no más de 60 días, la fábrica estaría en condiciones de producir varias toneladas diarias de pastas secas, que podrían proveer a comedores escolares y comunitarios, y a hospitales de la zona.

Transcurrieron cincuenta y cinco días de intensa labor de restauración. El edificio, otrora derruido, había empezaba a convertirse en un lugar de trabajo habitable. Lo que antes era silencio y olvido ahora estaba poblado, lleno de vida, de trabajo.

En esos mismos días, mientras por un lado, el Concejo Deliberante del Municipio de Avellaneda aprobaba la expropiación; por otro, se hacía sentir la mano del grupo

empresarial Pérez Companc y del juez Eduardo Tubio, a cargo de la causa penal que este grupo económico había iniciado, para que a ese lugar volvieran la basura y las ratas.

El proyecto de expropiación que discutió y aprobó el Concejo Deliberante tenía profundas limitaciones.^{8/} La expropiación quedaba circunscripta a bienes muebles y a maquinarias, y aun en ese caso resultaba ambigua porque el municipio no se comprometía a co-financiar la operación de rescate. Ese aspecto clave de la cuestión se dejaba en manos del Estado provincial y de la Nación —que no querían involucrarse en el rescate de Sasetru—, y de los fondos que pudieran aportar los propios trabajadores, quienes, al final del proceso, deberían reponer todo el dinero que el Estado hubiera adelantado a los ex propietarios en concepto de indemnización por la quiebra de la empresa. En síntesis: los obreros echados sin indemnización, ahora tendrían que indemnizar ellos mismos a sus ex-patronos. En otras palabras, como en el caso de todas las expropiaciones aprobadas, el esfuerzo obrero iría a parar al bolsillo de la patronal que había vaciado el establecimiento. Se trata de una falacia completa, puesto que, aun en el contexto de la legislación vigente, Sasetru tenía una deuda multimillonaria por impuestos municipales impagos, acumulados durante años.

El corporativo Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Companc, es propietario de Molisur, una empresa satélite que en su momento compró la quiebra de Sasetru con el único propósito de impedir que se apropiara de ella algún grupo competidor; esto es, sin la menor intención de reabrir la, por lo que dejó la empresa abandonada, durante años. Sin embargo, desde el momento en que los trabajadores ocuparon la planta, se apuró a pagar sus impuestos atrasados y a promover una causa penal por “usurpación”; sobre todo, cuando supieron que los concejales se disponían a debatir la expropiación. Toda esta maniobra tenía el propósito de cerrarle el paso a los trabajadores, sin el menor interés de poner a producir la planta.

Entretanto, al tiempo que se preparaba una multitudinaria marcha hacia la sede del Concejo Deliberante de Avellaneda, en la última semana de marzo de 2003, continuaba el reacondicionamiento de la planta. Completados los trabajos preliminares, la asamblea votó un plan que preveía una segunda etapa de tareas, ya más ambiciosas, en todas las áreas. En materia de electricidad, el plan incluía el armado y colocación del tablero general de una de las líneas de producción, de bombas de agua, mantenimiento y puesta en funciones de compresores, limpieza de tableros y motores. En cuanto a la parte mecánica se comenzó con el armado de bombas de agua y cañerías de alimentación general de la planta, y el mantenimiento y prueba de las bombas de harina. También se comenzó con la limpieza de la parte superior del establecimiento y de los sótanos, los depósitos de laboratorio y el cuarto de compresores, en tanto continuaban las tareas de despeje de la entrada de vehículos, el arreglo de las cloacas y la limpieza exterior del predio.

En esos días, se tuvo una reunión con el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mariano West, y sus secretarios, a quienes se exigió respaldo económico al proyecto, sobre todo para la compra de una caldera, cuyas especificaciones técnicas les fueron presentadas. También se reclamó que la Cooperativa “Sasetru Gestión Obrera” fuera considerada proveedora privilegiada de la provincia. Paralelamente, se reclamaba al Municipio la provisión de maquinarias de mayor porte para acelerar la limpieza y el acondicionamiento del enorme parque que rodea la fábrica.

El jueves 10 de abril, el Senado de la provincia de Buenos Aires debía tratar la expropiación de Sasetru. Para ese día, las organizaciones piqueteras habían preparado una fuerte manifestación en la ciudad de La Plata, con el fin de presionar sobre los legisladores. A último momento, secretamente, el Senado decidió sesionar un día antes, el miércoles 9 y, con todo sigilo, postergar el tratamiento de la cuestión Sasetru. Ese mismo día, el gobernador Felipe Solá se había reunido con miembros del Bloque Piquetero Nacional, a quienes había pedido tiempo para evaluar la cuestión, lo cual

explicaba la actitud dilatoria del Senado. Pero al gobierno ya le resultaba imposible desconocer el asunto. Las agrupaciones piqueteras, una vez más, demostraban su enorme capacidad de movilización. En pocas horas, y en un horario inadecuado, se había improvisado una gran manifestación. Esa concentración, que se prolongó hasta la madrugada, constituyó una poderosa señal para los funcionarios: el Senado ya no podría volver a sesionar con normalidad mientras no tratara y aprobara la expropiación de Sasetru.

En este punto, conviene recordar que el valor de la maquinaria era próximo a cero, por su obsolescencia, que la colocaba en categoría de chatarra. Su valor estaba dado sólo por el hecho de que los obreros, con un esfuerzo gigantesco, estaban dispuestos a rehabilitarlas. En estas condiciones cualquier indemnización por la expropiación, sería como un premio al corporativo Pérez Companc por su papel de destructor de la producción. La firme posición de la Cooperativa permitió remover obstáculos de todo tipo y así se le dio forma final al proyecto de expropiación de inmuebles y maquinarias, y hasta se logró que fuera firmado por varios senadores del bloque del Partido Justicialista, mayoritario en la Cámara.

Finalmente, la presión obrera y popular, pudo más que todas las dilaciones y maniobras de patas cortas. Sobre tablas, unánimemente, el Senado provincial dio media sanción al proyecto expropiatorio de la empresa Sasetru.^{9/}

Esa victoria era resultado de la movilización comenzada en la misma madrugada en que 800 policías armados rodearon Sasetru. Fue el producto de la resistencia de los trabajadores que aguantaron a pie firme durante toda la jornada, de los diez mil manifestantes que rodearon la Legislatura platense una semana después, de la movilización del 9 de abril, cuando centenares de trabajadores, en un desfile incesante, que duró hasta la madrugada, llegaban desde todas partes para desbaratar la maniobra dilatoria del gobernador Felipe Solá y la Legislatura bonaerense.

Era resultado también del multitudinario acto del 1º de Mayo, cuando columnas piqueteras marcharon desde la empresa Brukman hasta la Plaza de Mayo, de la movilización del 14 de ese mismo mes en respuesta a una convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores, con Sasetru, Brukman y Transporte del Oeste a la cabeza; del acto en Avellaneda y de la jornada del 26 de junio en repudio a los crímenes de Santillán y Kosteki, asesinados en esa misma fecha de 2002.

Sin embargo, la expropiación dispuesta por el Senado bonaerense poco o nada tenía que ver con el proyecto presentado por los trabajadores, que disponía la entrega gratuita a la gestión obrera de los bienes expropiados, el auxilio estatal no reintegrable para poner a funcionar la fábrica y que “Sasetru Gestión Obrera” fuera declarada proveedora privilegiada del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La ley aprobada por el Senado suprimió todos esos puntos. El texto legal sólo declara de “utilidad pública y sujetos a expropiación” los tres lotes donde está asentada la fábrica de pastas secas, y la totalidad de las instalaciones y maquinarias que se encuentran dentro de ese sector. Pero la expropiación, como ocurrió con las decenas de leyes aprobadas en casos similares, es “a título oneroso”, de modo que la Cooperativa (ni siquiera el Estado) deberá hacerse cargo de la indemnización que se fije a sus “dueños”.

Aun así, la media sanción era un triunfo, porque forzaba la reapertura de la planta y el reingreso de los trabajadores. Se imponía el principio del poder de coerción, aplicado normalmente contra los trabajadores, para reincorporar de manera compulsiva a todos los obreros desalojados. Por eso el gobernador Solá amenazó con vetar la ley, aun en la versión recortada que habían aprobado los senadores.

El triunfo de Sasetru debe ser entendido apenas como un peldaño de una lucha estratégica que pone al rojo vivo la necesidad de una lucha común, de conjunto, a escala nacional por estas demandas.

Entre otras peticiones, los reclamos centrales de la Comisión Interna de Sasetru, y de una corriente del movimiento piquetero, eran la expropiación definitiva y sin pago de todas las fábricas que cierren o despidan a sus trabajadores, empezando por las ya recuperadas por la gestión obrera, además de solicitar:

- 1) Auxilio económico del Estado mediante subsidios no reintegrables, que permitan obtener a las gestiones obreras capital de trabajo y sueldos que no resulten inferiores a los de convenio;
- 2) Que todas las fábricas expropiadas y bajo gestión obrera se constituyan en proveedoras privilegiadas del Estado;
- 3) Nacionalización de la banca, que deberán integrar en su directorio a representantes de las fábricas bajo gestión de sus trabajadores, para orientar el crédito y colocar los recursos financieros del país al servicio de los emprendimientos que operan bajo la responsabilidad de los mismos obreros.

A comienzos de agosto de 2003, a cuatro meses del desalojo, sin haber dado tregua un solo día, la Cámara de Diputados bonaerense confirmó la media sanción del Senado y el proyecto de expropiación se transformó en ley.^{10/}

Los trabajadores de Sasetru tenían plena conciencia de que la etapa abierta con la recuperación de la planta sería aún más dura y requeriría una movilización todavía mayor que la desarrollada hasta ese momento.

Al igual que el resto de las fábricas recuperadas, se tropezó con la falta de recursos y con el ahogo financiero. Un primer cálculo de la Comisión Técnica indicaba que se necesitaban no menos de doscientos mil pesos para poner en marcha la planta, aunque faltaba evaluar los daños producidos por la acción de los grupos de choque enviados por la patronal y que habían depredado el establecimiento. Surgió entonces otro obstáculo, la empresa proveedora de las piezas robadas está radicada en el Brasil,

de modo que, en cualquier caso, quedaban notablemente retrasados los planes de reapertura, previstos en principio para no más de sesenta días.

Así comenzó la batalla vital de “Sasetru Gestión Obrera” por el financiamiento. Se sabía que el respaldo a las fábricas recuperadas había sido escaso, o no lo hubo. A la fábrica Minguillón se le acababan de otorgar setenta mil pesos después de siete meses de gestiones. A otras empresas, no más de 6, 8 ó 10 mil pesos. El destino de los siete millones de pesos que en el presupuesto de las provincias estaban destinados para las fábricas bajo gestión obrera, aún no se canalizaba a sus destinatarios.

Mientras tanto, los integrantes de la Cooperativa haciendo uso de herramientas precarias, de manejo manual, continuaban con las tareas de reacondicionamiento de la planta, sobre todo la limpieza del lugar. Al mismo tiempo, la patronal mandaba grupos de provocadores y sabotadores.

El jueves 13 de noviembre, en horas de la noche, Sasetru soportó un nuevo ataque después del desalojo del 25 de marzo. Ahora no fue la policía —simplemente, no podían hacerlo por ese medio ya fracasado— sino punteros barriales que trabajan para algunos partidos políticos y golpeadores a sueldo enviados por el municipio.

En una asamblea realizada el día 10, “entre gallos y media noche”, de manera ilegítima y en minoría, se había decidido destituir a los miembros de la dirección legal de la Cooperativa y reemplazarlos por personal enviado desde oficinas del gobierno.

Ese golpe pretendió rematarse con la ocupación física de la fábrica a través de grupos de civiles armados. Se trataba de una operación política del gobierno bonaerense, cuya finalidad no era otra que introducir una cuña en las fábricas ocupadas bajo gestión obrera. Lo mismo sucedía en Brukman y en Zanón. Esa escalada formaba parte de una ofensiva más general, orientada a dividir al movimiento piquetero mediante la cooptación de algunas de sus fracciones, para aislar a los sectores más combativos.

En Sasetru, la provocación fracasó rápidamente. La decidida movilización de los trabajadores de la Cooperativa, respaldada por otras organizaciones populares, y

agrupaciones piqueteras, unida al aislamiento de los promotores del asalto, hicieron que, apenas un día después, los obreros lograran retomar el control de establecimiento.

Frente a esta situación, los medios se apuraron a difundir la especie de una “lucha interna” entre piqueteros y el diario conservador *La Nación* tituló en su tapa: “Tiroteo entre desocupados”.^{11/} El rumor era un acto de provocación, ya que cinco Asambleas Nacionales de Trabajadores, en las que intervinieron más de 30 organizaciones piqueteras, eran el mejor testimonio de que las diferencias pueden coexistir en las agrupaciones de desocupados y tomar resoluciones comunes en un marco de lucha contra la patronal y el Estado. Cualquier conflicto interno en la planta se hubiera podido encausar sin necesidad de quebrar, o siquiera deteriorar, el trabajo en común. Si en Sasetru no se pudo seguir con esa práctica, fue simplemente porque no se trató de un conflicto interno: fue evidente que metieron sus manos la patronal, el Estado y las fuerzas de choque “gangsteriles” provistas por los punteros barriales.

El golpe contra los trabajadores pretendió desconocer los acuerdos tomados en la asamblea general y soberana de la fábrica. Cada vez que se convocó a esa asamblea, la fracción apoyada por la antigua patronal fue derrotada de manera aplastante.

La pretensión de reemplazar las decisiones de la asamblea de los 200 trabajadores de Sasetru por las resoluciones arbitrarias de *once* personas, que formaban parte de una supuesta “dirección legal” de la Cooperativa, constituía un golpe de muerte para la gestión obrera. De prosperar esa maniobra, la consolidación de una dirección ajena al control de los trabajadores crearía las condiciones ideales para la intervención de la fábrica por parte del Estado y de grupos económicos privados.

No se trataba, pues, de diferencias internas, sino de una provocación en la cual podía verse con toda claridad la mano de los propietarios y de algunos sectores del gobierno. Por eso resultaron infructuosos los esfuerzos de los obreros ocupantes de la planta

para firmar un acta que obligara a retirarse de allí a todas las personas extrañas a la fábrica y que sólo permanecieran los trabajadores de Sasetru.

Pero las expectativas de quienes promovieron el nuevo intento de desalojo se fueron disipando con el transcurrir de las horas, cuando se hizo indisimulable la orfandad de los organizadores de la provocación. Los grupos de choque no lograron concitar el menor respaldo por parte del vecindario y ni siquiera de la Comisión Interbarrial. Divorciado de cualquier apoyo popular, el asalto fue sostenido por elementos extraños a la fábrica e incluso al barrio, a quienes se incorporaron sectores de golpeadores desprendidos de algunos partidos políticos o protegidos desde el poder municipal.

La reapertura de Sasetru reviste un carácter estratégico para el movimiento piquetero, porque terminaría de demostrar, a los ojos de toda la sociedad, que el principal obstáculo para sacar adelante la producción es la gestión corrupta de los empresarios que propiciaron la quiebra fraudulenta de sus establecimientos.^{12/} Sasetru es una empresa que pertenece al ramo alimentario, en particular al relacionado con la elaboración de aceites y de harina. Este detalle no es menor, es un dato emblemático de la situación política ya que revela hasta qué punto la acción de los trabajadores está incursionando en los centros vitales de la economía. La puesta en marcha de una fábrica que ha permanecido cerrada casi por veinte años, enclavada en uno de los nervios centrales del aparato productivo, sería la mejor demostración de la superioridad de los métodos de organización y perspectivas sociales que encarna el movimiento de los trabajadores desocupados. La experiencia de Sasetru tiene los ribetes y alcances de un caso emblemático para las organizaciones piqueteras, y es bueno recordar que de este tipo de acciones se ha nutrido la historia de las clases subalternas al encontrarse en vísperas de alumbrar grandes transformaciones sociales.

La experiencia de Brukman Confecciones: la hora de las mujeres piqueteras

Esta planta textil creada por una familia de inmigrantes judíos —y cuyo accionista mayoritario es Jacobo Brukman— se encuentra ubicada en un populoso barrio de la ciudad de Buenos Aires y ocupa mayoritariamente fuerza laboral femenina. A diferencia de la experiencia que hicieron los obreros de Zanón, en Brukman no existía en la etapa previa al cierre, ningún antecedente significativo de autoorganización y confrontación con la patronal. Al iniciarse el conflicto, cuando había indicios claros del vaciamiento de la fábrica por parte de sus dueños, los trabajadores se vieron obligados a afrontar un doble desafío, consolidarse y fortalecerse como grupo y ocupar la empresa para ponerla a producir bajo su propio control. De manera similar a lo ocurrido en Zanón, el cierre de la fábrica fue precedido por conflictos salariales, la gerencia dispuso el cese de un grupo de obreras y de empleados por reclamar sus adeudos que incluían cinco meses de vacaciones, aportes patronales al sistema de seguridad social, aguinaldos y salarios familiares, entre otras demandas. A las peticiones económicas se sumaban casos de prepotencia, arbitrariedad y trato humillante para obligar a los trabajadores a sostener ritmos de producción impuestos unilateralmente por la gerencia.^{13/}

Como se ve, los antecedentes de malos manejos y decisiones arbitrarias eran abundantes, no obstante la súbita ausencia de los patrones que dejaron de concurrir a las oficinas de la empresa y el abandono de la fábrica sorprendió a las obreras el 18 de diciembre de 2001, en vísperas de la rebelión popular que derrumbó al gobierno del presidente de la Rúa. Los representantes legales de los propietarios tampoco asistieron a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo para los días 21 y 26 de diciembre. Motivados por los actos de protestas de los días 19 y 20 de ese mes, los trabajadores y empleadas decidieron trasladar el conflicto a las calles y en repetidas ocasiones cortaron el tránsito en la avenida Jujuy del populoso barrio del Once. Estos

actos en la vía pública contaron con el creciente apoyo de vecinos, comerciantes, agrupaciones estudiantiles, organismos de trabajadores desocupados, obreros de empresas recuperadas o en conflicto y asambleas vecinales surgidas en las jornadas de los días 19 y 20 de diciembre. Poco después de un mes de ocupada la fábrica, las trabajadoras de Brukman efectuaron la primera venta de existencias para invertir esos recursos en el reinicio de la producción bajo control autogestivo. Sin embargo, cuando la situación parecía consolidarse el día 16 de marzo de 2002 se produjo el primer intento de desalojo por parte de la policía que fue impedido por la movilización solidaria de los mismos sectores que habían apoyado la ocupación de la fábrica. La ofensiva jurídica-patronal se repitió en dos nuevas oportunidades en las que se intentó desalojar la planta haciendo uso de la fuerza pública y acusando a las trabajadoras y empleados de sustraer mercancías y dañar las maquinarias.

Desde el principio del conflicto, y en particular a partir de la ocupación de la fábrica, las obreras de Brukman —pese a su escasa experiencia y baja participación en cuestiones sindicales— adoptaron la asamblea como mecanismo de funcionamiento colectivo y toma de decisiones por mayoría. Un aspecto relevante de estos primeros pasos como organización autogestiva, es la constitución de coordinadoras y redes solidarias que conformaron un verdadero tejido de contención y apoyo. Este entramado solidario detuvo las maniobras patronales destinadas a desalojar la empresa y fincar responsabilidades penales a las trabajadoras que ocuparon la planta y pusieron a andar las maquinarias.

Durante el año 2002 se sucedieron numerosos encuentros de coordinación entre estas experiencias, inicialmente dispersas, los que permitieron acordar acciones conjuntas. Es importante consignar el Encuentro de Fábricas Ocupadas, que se llevó a cabo a las puertas de la empresa Brukman el 23 de abril de 2002. Además de haber sido el primero de ese carácter y magnitud se aprobó por amplia mayoría la edición de un periódico, como herramienta de difusión “hacia afuera” de las actividades del

movimiento y también como espacio de encuentro, conocimiento mutuo y coordinación de las acciones de protesta. En esta iniciativa no sólo participaron representantes de Zanón y Brukman, se sumaron los delegados democráticamente elegidos del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, el MTD de esta misma provincia y el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Otro hito importante en el desarrollo de esta experiencia de construcción de redes solidarias fue el Encuentro de Fábricas Ocupadas y Empresas en Lucha que también se realizó en las puertas de Brukman el 7 de septiembre de 2002, de este acto nació una consigna común que se transformó en una idea-fuerza: “Si nos tocan a unos, nos tocan a todos” con la cual se expresaba que el hostigamiento o represión sobre una de las empresas autogestionadas equivalía a agredir a todo el movimiento de fábricas recuperadas.^{14/}

Ocho meses de campamento callejero, de una resistencia ejemplar respaldada en todo momento por amplios sectores del movimiento popular, particularmente por las organizaciones piqueteras, posibilitaron que las demandas se condensaran en un reclamo central: exigir, en todo momento, la expropiación de la fábrica y su puesta en marcha bajo gestión obrera.^{15/}

La expropiación finalmente fue votada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aun con algunos retrocesos respecto de otras expropiaciones precedentes. Por ejemplo, en el caso de Brukman, la ley expropiatoria introduce una cláusula que obliga al ingreso compulsivo de los trabajadores que no apoyaron la toma de la fábrica. Ese artículo —el 8º— otorga al Estado el poder de contratación del personal. Incluso la cooperativa deja de ser tal y queda sometida a la permanente injerencia de los inspectores designados por el gobierno.

Las trabajadoras, al reingresar en la planta, encontraron tierra arrasada: las máquinas estaban destruidas, las piezas más importantes y caras de la computadora de diseño habían sido robadas. Las calderas, el sistema eléctrico, las tuberías de aire comprimido, fueron intencionalmente dañadas. Esa era la obra de agentes enviados

por Jacobo Brukman, de su familia y de los empleados que permanecieron ajenos al movimiento que habían entrado con protección policial, mientras los trabajadores se encontraban desalojados. Igual que en Sasetru, algunos grupos protegidos por la patronal habían saqueado la fábrica que no supieron ni quisieron mantener en funcionamiento.

Como ya mencionamos, el 18 de diciembre de 2001, en vísperas del estallido social de los días 19 y 20, se ocupó Brukman. Esa planta estaba abandonada por sus propietarios desde hacía casi tres meses y durante ese tiempo no se habían pagado salarios, ni servicios, ni a los proveedores. Como se afirmó en una nota periodística, la empresa les había arrojado a los trabajadores las llaves de la fábrica por la cabeza.

En poco tiempo, las trabajadoras —tal como se señaló, el personal está constituido mayoritariamente por mujeres— lograron restaurar los servicios, recomponer en buena parte la cadena de distribución y poner la fábrica a producir aún en condiciones precarias.

Poco después, cuando la devaluación del peso dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde, hizo que el rubro textil fuera uno de los que parecían tener posibilidades de “reactivación”, reaparecieron los Brukman y denunciaron a sus obreros por “robo y usurpación”. Fue en ese momento, el 16 de marzo de 2002, cuando la planta sufrió el primer ataque represivo. La orden de desalojo fue dispuesta para el sábado 16 a primera hora de la mañana, cuando en la fábrica sólo quedaba una guardia. Policías de civil empujaron y golpearon a las trabajadoras y a los vecinos que se habían acercado a ofrecer una primera solidaridad. La maniobra patronal tuvo de su lado la complicidad de los inspectores del gobierno y jueces que intervienen en la causa. Éstos, como acostumbran a hacer con los cortes piqueteros, transforman con prontitud la lucha popular en “causas penales” y actúan como asaltantes nocturnos el respaldo judicial y el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Pero las cosas no salieron como esperaban los antiguos propietarios, a una hora del allanamiento, con las trabajadoras aferradas a las verjas, Brukman ya estaba rodeada por vecinos e integrantes de las asambleas populares más próximas, las que provenían de los barrios de San Cristóbal, San Telmo, Congreso y Parque Lezama. Desde los balcones de enfrente, un coro de aplausos y cacerolazos acompañaban la acción obrera. Cuando llegaron los medios de prensa, fueron debidamente expuestos e identificados ante la opinión pública los represores de civil que habían golpeado a las trabajadoras.^{16/}

Al mediodía, ya eran centenares los manifestantes que rodeaban Brukman. El juez había ordenado mantener una guardia policial para impedir el reingreso de los trabajadores, pero ya estaba claro que eso no podía conseguirse con un pequeño grupo de agentes: haría falta una unidad antimotines completa. Primero se fueron los agentes de civil, abrumados al ser identificados por los medios. Después, cuando se hizo evidente que sobrevendría una batalla campal, la policía toda se retiró del lugar. Cuando obreras y obreros reingresaron en la fábrica, el grito se hizo atronador: “Brukman es de los trabajadores...”

El domingo 17, al anochecer, casi cuatro mil manifestantes que habían intervenido en la Asamblea Nacional de “Asambleas Vecinales”, marcharon hasta la fábrica desde Parque Centenario. De esta forma, reprimir a Brukman exigía hacer frente a varias organizaciones barriales y de desempleados movilizados. Al gobierno, por lo menos en ese momento, no le daban los espacios políticos para ordenar el asalto a la planta. Poco después, la empresa hizo una propuesta que era casi una provocación. El asunto fue en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, con la presencia del síndico, el administrador judicial, la dirigencia del Sindicato de Obreros de la Industrial del Vestido y Afines (Soiva) y delegados de la fábrica.

En principio, los empresarios se negaban a reconocer la deuda salarial en “negro” — horas de trabajo no declaradas oficialmente— de modo que los ingresos de los

trabajadores se verían reducidos a no más de 90 pesos por quincena (unos 30 dólares). Y aún ese salario raquítico lo irían pagando con fondos procedentes de la venta del stock, de modo que los pagos ni siquiera quedaban asegurados. Se debe subrayar, en este punto, la conducta del Ministerio de Trabajo y del Poder Judicial, que no propusieron modificar una propuesta que constituía, lisa y llanamente, la confesión de un delito, de un fraude laboral que admitía los pagos en “negro” y, por lo tanto, la evasión previsional y la estafa contra los fondos públicos.

Por otra parte, la patronal no aseguraba la continuidad laboral de los 120 trabajadores. Más aún: el abogado de la empresa afirmó que la rentabilidad de la firma resultaba incompatible con esa cantidad de obreras y empleados, de modo que buena parte de ellos causarían baja.

En sentido estricto, antes que una propuesta se trataba de un ultimátum, puesto que, si los delegados no aceptaban firmar ese “acuerdo”, los Brukman —dueños del paquete accionario mayoritario— relanzarían la causa penal para desalojar la planta por la fuerza.

Poco después, una asamblea de fábrica ratificó el rechazo al ultimátum y la continuidad de la ocupación, además de reiterar las demandas de los trabajadores:

- Pago de la deuda salarial y de los sueldos caídos durante los últimos meses.
- Estabilidad para todo el personal, asegurándose la totalidad de los puestos de trabajo.
- Reapertura de la fábrica, respetándose el salario completo de los trabajadores.
- Veedores obreros para controlar la producción y la administración de la planta.

En julio de 2002 comenzó a debatirse, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, el proyecto de ley presentado por parlamentarios de izquierda. Algunos diputados de la Comisión consideraron poco “realista” la estatización con un Estado en plena crisis financiera. La bancada de la izquierda respondió que esa situación no

había impedido, por ejemplo, que corporativos empresariales en situación de quiebra recibieran cuantiosos fondos públicos, como ocurrió con los bancos, cuyas deudas se “estatizaron” sin que ninguno de estos legisladores pusiera reparos.^{17/} Ahora se trataba de invertir la fórmula: en vez de rescatar a las empresas y confiscar a los trabajadores, había que rescatar a los trabajadores y confiscar a los responsables de la catástrofe.

Antes de definir una posición ante la ley, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslizaban la posibilidad de que, Ley de Quiebras mediante, los trabajadores, en cuanto acreedores de Brukman, asumieran la plena conducción de la planta; es decir, deberían hacerse cargo de las deudas de la empresa. El Estado, en su calidad de “garante” de la operación, tendría la facultad de vender la fábrica en caso de que tales deudas no se cancelaran. Resultaba una solución atractiva para los Brukman, quienes se verían, de esta manera, libres de un pasivo de más de 10 millones de pesos, y también para los acreedores, respaldados por el reaseguro del gobierno. Se trataba de una “estatización” opuesta a los intereses de los trabajadores. Además, con el ofrecimiento de créditos blandos, los trabajadores deberían asumir una nueva deuda. Al proyecto de los legisladores de una de las vertientes de la izquierda, también se le contrapuso otra alternativa que tomaba por base el esquema presentado por el partido Afirmación para una República de Iguales (ARI) e Izquierda Unidad en el caso de Ghelco, fábrica también ocupada por sus obreros. Esa iniciativa proponía declarar al predio y a los equipos de la empresa sujetos a expropiación, para luego ser cedidos en comodato (préstamo) a una cooperativa de los trabajadores.

La expropiación, en esos términos, significaba que los propietarios de la fábrica —o sus acreedores— serían resarcidos por el Estado con un monto que difícilmente hubieran recibido mediante concurso o posterior quiebra, en cuyo caso se habría subastado cada bien por separado a precio de remate. Este mecanismo expropiatorio propuesto para la empresa Ghelco, se parecía a un “salvataje” de la patronal quebrada a cargo del Estado, aunque el gobierno, como en el caso de Brukman, fuera uno de los

acreedores principales de la convocatoria por las enormes deudas impositivas y previsionales de estas firmas.

Las propuestas opositoras al proyecto de los diputados de izquierda pretendían sostenerse en el antecedente de algunas declaraciones de expropiación producidas en la Legislatura bonaerense. Sin embargo, se encontraban muy por detrás de aquéllas, las cuales, por lo menos, permitían a la cooperativa —mediante una donación— acceder a los bienes expropiados. En cambio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sólo pretendía prestarlos y sin contemplar la cesión gratuita del establecimiento, ya que a cambio del comodato los trabajadores deberían pagar al Estado un canon o alquiler por el uso de las instalaciones. Así, la “expropiación” terminaría solventada por los propios trabajadores.

Algunos representantes del bloque de diputados de la izquierda de diversas procedencias partidarias propuso entonces cuatro puntos principales:

1. La expropiación no debe constituir un salvataje para los empresarios vaciadores. Los recursos estatales no deben dedicarse a financiar negociados, sino a subsidiar la futura gestión obrera.
2. La expropiación debe hacerse efectiva a los 30 días de sancionada la ley.
3. Los trabajadores no pueden ni deben asumir las deudas de los patrones. Los vaciadores deben responder por sus deudas con sus bienes y patrimonio personal.
4. El Estado debe hacer de Brukman un proveedor privilegiado para toda su demanda social de materiales textiles (indumentaria e insumos escolares y hospitalarios), de modo de asegurar un destino a la producción de la fábrica bajo gestión obrera.

A todo esto, a mediados de julio de 2002, en una declaración firmada por su delegado Yuri Fernández, los trabajadores de Brukman daban a conocer una declaración que,

entre otras cosas, decía: “Frente al abandono total de la patronal, los trabajadores de Brukman llevamos siete meses de lucha en este conflicto y seis meses de producción, durante los cuales pasamos por innumerables obstáculos de toda índole, desde los problemas sociales, económicos y políticos, las luchas internas y, por otro lado, la lucha contra la burocracia sindical y la patronal. ...no aceptamos a la patronal en la fábrica porque ya no la necesitamos... Por tanto, los trabajadores de Brukman seguiremos luchando por la estatización de la fábrica bajo control obrero como única alternativa viable, demostrada a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires...”^{18/}

Por otro lado, en cuanto a las actividades de las trabajadoras y empleados es importante destacar la participación de Brukman en la marcha del banderazo (20 de junio), —día de la bandera—convocada por la CTA y la CCC. También el 22 y 23 de junio se asistió a la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, donde los siete meses de lucha de Brukman fueron tomados como ejemplo para toda la clase trabajadora del país. Los obreros de Brukman llevaron cuatro propuestas que fueron votadas y aprobadas en la resolución de esa Asamblea:

1. Apoyo y solidaridad a la lucha de Brukman. Por la estatización bajo control obrero.
2. Apoyo al festival del 20 de julio, pro fondo de huelga para la producción.
3. Marcha a la Casa de Gobierno, reclamando la estatización y un subsidio para mantener y diversificar la producción, a nivel nacional con cortes de ruta, puentes y avenidas. Con fecha a designar.
4. En defensa de la fuente de trabajo. Ni un desocupado más. Toda fábrica que despida o cierre debe ser ocupada, tomada y puesta a producir por sus trabajadores.

El 3 de octubre, toda la fábrica se movilizó a la Legislatura. Esa marcha coincidió con una jornada de lucha aprobada por la Asamblea Nacional de Trabajadores, que horas

antes había empezado a cortar los accesos a la Capital Federal en reclamo por la libertad de los piqueteros detenidos en la provincia de Jujuy y que terminó precisamente, en la Legislatura para respaldar a las fábricas ocupadas, en especial en defensa de los proyectos de expropiación de Brukman y Grissinópolis.

Allí, los trabajadores de Brukman entregaron a diputados de la Comisión de Desarrollo Económico un petitorio que exigía:

- a. La expropiación sin pago, inmediata y definitiva de inmuebles, maquinaria y marcas de Brukman Confecciones, para que los trabajadores continúen con la producción bajo gestión obrera.
- b. Que el Estado garantice los salarios, como mínimo los de convenio.
- c. Otorgue subsidios no reintegrables por 150 mil pesos, para ampliar y diversificar la producción e incorporar más trabajadores, actualmente desocupados, mediante la creación de una escuela de oficios.
- d. Que el Estado compre la producción en función de las necesidades de hospitales, escuelas y otras instituciones, así como de la población carenciada, que requieran indumentaria que la empresa pudiera producir.
- e. En estas condiciones las trabajadoras y empleados de Brukman estaban dispuestos a discutir la forma legal con la cual organizarse, pero admitiendo que los trabajadores decidieran en su asamblea soberana quienes forman parte de la fábrica bajo gestión obrera.

Por su parte, también la Asamblea Nacional de Trabajadores colocaba entre sus objetivos centrales de lucha el reclamo de expropiación y gestión obrera de Brukman, Sasetru, Zanón y las demás fábricas ocupadas, junto con el de libertad a los piqueteros presos en la provincia de Salta.

Defender Brukman, dijo la Asamblea, significaba ante todo, defender los cuatro puntos presentados por los trabajadores en su momento: expropiación de la empresa, garantía

salarial, subsidio estatal y declaratoria de proveedor privilegiado de la Ciudad en favor de Brukman. Las banderas de Brukman estuvieron presentes en la Plaza de Mayo piquetera colmada en los actos del día del trabajo y volverían a estar en la jornada de lucha dispuesta para defender las fábricas ocupadas. De todo esto se extraía una deducción elemental: la recuperación de Brukman y de Sasetru, y la defensa de Zanón, entre tantas otras, exigía una pelea de conjunto, nacional, coordinada. Ese plan de lucha debía tener, en el caso de Brukman, un primer objetivo: la expulsión de la policía y la devolución de las instalaciones a sus operarios.

A fines de mayo de 2003, un proyecto de ley plagado de limitaciones —sólo concedía a los obreros la ocupación temporaria del inmueble— consiguió despacho de minoría en la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura y pasó a la Comisión de Presupuesto. El intendente Aníbal Ibarra, con el apoyo del centrozquierdista Frente Porteño, se oponía a la expropiación parcial de Brukman y buscaba una opción de menor confrontación con la patronal.^{19/}

En este punto, conviene recordar que, en principio, ese grupo empresarial estaba formado por tres empresas: Brukman Construcciones, Brukman Hermanos (fábrica de electrodomésticos) y Confecciones Brukman Saic. Las dos primeras ya habían quebrado, con deudas superiores a los tres millones de dólares. Sus acreedores principales eran la Afip-DGI, el Banco Nación y el propio Gobierno de la Ciudad. El grupo no figuraba inscripto en el organismo recaudador de fondos —el Anses— de modo que no había depositado los descuentos jubilatorios hechos a sus empleados.

Entretanto, después de 50 días del desalojo, la patronal todavía no lograba retomar las instalaciones porque los trabajadores se lo impedían, instalados frente a la planta y rodeados por una enorme solidaridad popular.

No obstante, el lunes 9 de junio, la patronal, con la complicidad del juez y de la policía, consiguió meter en la fábrica a cinco rompehuelgas, a modo de avanzada para que los Brukman pudieran, por fin, tomar el control de la planta. Pero a la salida chocaron con

un fuerte piquete de trabajadores. Se produjo de inmediato una batalla campal con la policía, con varios obreros detenidos y otros heridos por la represión.

El miércoles 11, más de veinte mil piqueteros que marchaban desde el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo convocados por la Asamblea Nacional de Trabajadores, desviaron su camino en Miserere para llegar a Brukman, cuyos trabajadores se incorporaron a la movilización. Luego de esa marcha y de la creciente agitación en Brukman, el gobierno organizó una comisión con el fin de que actuara como intermediaria “entre obreros rebeldes y funcionarios”. Dicha comisión estuvo presidida por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, abogado defensor de presos políticos, e integrada por representantes del ministro del Interior, por el ex-funcionario Gustavo Beliz, y gente del equipo del jefe del gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, junto con un “mediador informal”, el escritor y periodista Miguel Bonasso, quien luego sería elegido diputado en las listas del oficialismo.

Los representantes del gobierno propusieron buscarle al asunto una salida judicial, que habría consistido en precipitar la quiebra de la empresa. Los funcionarios afirmaban que existían pruebas para demostrar el carácter fraudulento del concurso, el cual, en consecuencia, estaría viciado de nulidad. La táctica oficial consistía en reclamar una nueva administración judicial para aquellos meses de transición y, en ese ámbito, pedir para el día 4 de agosto, fecha de convocatoria de la junta de acreedores, la declaración de quiebra de la empresa.

Esa propuesta representaba una solución parcial del conflicto. En primer lugar planteado, a mediados de junio, el 4 de agosto era una eternidad para los trabajadores que resistían en un campamento callejero, sin salario, literalmente desprotegidos en las inmediaciones de la fábrica. Pero, incluso, aún el 4 de agosto era una fecha incierta, porque bien podía haber nuevas postergaciones. Los trabajadores recordaban que la convocatoria original disponía que la junta de acreedores sesionara en abril y, desde

entonces, el juez no había hecho más que postergarla, según el interés de los propietarios de la empresa.

Además, tampoco podía tenerse garantía alguna sobre las resoluciones de la junta de acreedores. Resultaba difícil depositar confianza en una instancia judicial de esas características, un campo tradicional de maniobras y chanchullos entre la patronal y los acreedores. Es sabido cómo se abultan deudas y hasta se fabrican acreedores si hace falta para justificar una quiebra en los términos más convenientes para las gerencias.

Por otra parte, contra lo que decían los funcionarios, no había necesidad alguna de aguardar la quiebra para proceder a la expropiación. Las leyes de expropiación, tanto la nacional como la de la provincia de Buenos Aires y la específica de la Ciudad, otorgan facultades al Estado para expropiar bienes, muebles o inmuebles (por ejemplo, las maquinarias), cualquiera sea la condición jurídica de su propietario. La empresa sujeta a expropiación puede estar en quiebra, en concurso o en perfecta posesión legal de sus bienes, libre de hipotecas o gravámenes sobre ellos. Grissinópolis estaba en concurso cuando la Legislatura porteña la expropió y lo mismo sucedía con La Baskonia en el ámbito de la Legislatura bonaerense. En aquellos días, el Senado provincial había dado media sanción al proyecto de expropiación de Sasetru, cuya propietaria, la firma Molisur, no estaba en quiebra y ni siquiera en concurso.

Todas estas observaciones fueron debatidas en una reunión de los trabajadores de Brukman con una delegación de agrupaciones piqueteras solidarias. Los trabajadores se comprometieron a tomar contacto con otras organizaciones de desocupados con el objeto de buscar un acuerdo con todos los integrantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores y decidir un plan de lucha conjunto.

En esa coyuntura surgieron algunas divergencias políticas entre los participantes del movimiento que pusieron el proceso de recuperación de la empresa al borde de la ruptura.

A fines de junio se organizó un llamado “Encuentro de Brukman”, con el propósito de oponerse a la Asamblea Nacional de Trabajadores, cuando, desde el primer momento, esta Asamblea había sido un bastión en defensa de los obreros de Brukman. No obstante, abandonar ese respaldo, darle la espalda, no era grave desde el punto de vista del aislamiento que podía producir respecto de la lucha en sí misma, puesto que la Asamblea había ratificado su compromiso de apoyar a los obreros de Brukman. La gravedad del asunto estaba dada por la eventual posibilidad de aislar a Brukman del principal centro de reagrupamiento obrero del país. Para poner las cosas en términos más precisos: después de las grandes crisis, la desocupación masiva es la herramienta a la que recurren las empresas y los gobiernos, la experiencia internacional enseña que en su etapa de reestructuración, el capitalismo busca debilitar la fuerza de trabajo y concentrar los recursos productivos. En esto radica la importancia histórica del movimiento piquetero, porque apunta a cuestionar a la gran usina generadora de esa destrucción al organizar a los desocupados en cuanto parte del movimiento obrero y al tratar de unir sus demandas con las de los trabajadores ocupados.

Representantes del gobierno visitaban a diario a la tienda de campaña instalada frente a la fábrica —la llamada “carpa del aguante”— con el fin de presionar a los trabajadores con el propósito de que no tomaran medida de lucha alguna ya que estaban a punto de proceder a la expropiación, aunque seguían diciendo que para eso era condición necesaria que, previamente, se declarara la quiebra de la empresa. Los trabajadores ya sabían que ése era un requisito falso: no hacía falta ninguna declaración judicial de quiebra, sino una decisión política que sólo se tomaría si ellos redoblaban la movilización callejera.

Por otro lado, la jueza Ballerini, a cargo del concurso preventivo de los Brukman, trató de enredar aun más el manejo del expediente con el fin de proteger a la patronal vaciadora y concedió a los Brukman una extensión del plazo por veinte días hábiles,

para que presentaran otra propuesta económica con el fin de recuperar la planta, aun cuando reconocía el incumplimiento de las exigencias de la ley por parte de aquellos.

En respuesta a esta maniobra, el miércoles 20 de agosto de 2003, los trabajadores hicieron un “escrache” (acto de repudio callejero) a la jueza Ballerini en los juzgados comerciales de la calle Marcelo T. De Alvear 1840. La abogada, en principio, se negó a recibir a los trabajadores, pero éstos le hicieron saber que no se irían de allí sin hablar con ella, mientras se desarrollaba un acto entre bombos, cacerolas y la férrea vigilancia de la policía federal. Por último, se le pudo presentar a la jueza una nota donde se manifestaba la oposición de los obreros a la nueva prórroga, la abogada no contestó, sólo leyó su propia resolución del 14 de agosto, donde decía que la prórroga concedida había sido la última.

Por último, el jueves 30 de octubre de 2003, la Legislatura, bajo presión de una concentración masiva de trabajadores, aprobó la expropiación parcial de Brukman y su entrega a un comité constituido por sus trabajadores.^{20/} La ley se aprobaba después de un año y medio de dilaciones y trampas para que la familia Brukman pudiera recuperar la fábrica que había abandonado en 2001.

La ley “consensuada” establece la cesión temporaria del edificio de la calle Jujuy y una expropiación que apenas cubre el cuarenta por ciento del valor de la maquinaria. Terminado el plazo de dos años, la cooperativa deberá comprar el inmueble y las máquinas, último recurso para que el esfuerzo de los obreros se vuelva contra ellos mismos y en favor de la patronal vaciadora.

Los legisladores de los partidos de izquierda denunciaron esa maniobra y exigieron la derogación de esa cláusula por considerarla nula, incluso desde el punto de vista del derecho, en cuanto establece el principio sorprendente de obligar a una cooperativa a incorporar miembros independientemente de la voluntad de quienes la integran. La fuerza de esa denuncia y el respaldo ruidoso que concitó en los trabajadores presentes, estuvo a punto de poner en crisis el “consenso” fraudulento.

De inmediato, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, sancionó un decreto reglamentario de la ley de expropiación de Brukman, referido sólo al artículo 8º que habilita el ingreso de quienes siendo trabajadores de la planta, no participaron en la ocupación de la fábrica.

Por ese decreto se crea el Registro de Trabajadores de la “Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre”, con “todos los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia (en Brukman)”. La autoridad de aplicación de ese registro es la Dirección General de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad, de modo que la cooperativa de Brukman queda subordinada a una dependencia del gobierno. Después de haber rechazado, de manera reiterada, la estatización por “trasnochada”, “arcaica” e “inviabile”, las autoridades optaron por una fórmula administrativa que les permita participar en la cooperativa en calidad de “veedores”.

Ese mismo decreto demoraba la entrega de la fábrica a los trabajadores, y una cosa y la otra estaban vinculadas: las dilaciones apuntaban a facilitar el ingreso de los obreros y empleados que no participaron de la ocupación de la fábrica y al mismo tiempo trataban de convertir a Brukman en un establecimiento bajo el régimen de Pequeña y Mediana Empresa (Pyme).

Hacia mediados del año 2005, los trabajadores comenzaron una nueva etapa de sus movilizaciones, ahora contra el decreto del intendente Ibarra y por la completa soberanía de la asamblea de fábrica para tomar cualquier decisión referida a la cooperativa.

Organización Autogestiva o Control Obrero de la Producción: El debate en el movimiento de empresas recuperadas

Casi desde los inicios del movimiento de toma de fábricas y empresas cerradas o declaradas en quiebra, por parte de sus propios trabajadores, se generó un debate, que aún persiste, acerca de las formas asociativas más viables para lograr el éxito del proceso autogestivo. Para todos quedaba claro que poner a producir las fábricas bajo la responsabilidad de sus propios trabajadores constituía una de las expresiones más significativas de la resistencia social. También resultaba evidente que la ocupación de los establecimientos no se correspondía con una etapa de ascenso de las luchas obreras ni de un mandato nacido de la vieja utopía socialista que parecía ya olvidada. *La toma de las empresas había surgido de una necesidad primaria y de un fuerte impulso defensivo: salvaguardar el funcionamiento de las fuentes de empleo.* Este movimiento, que reconocía antecedentes desde 1996, pero que como tal floreció al calor de la rebelión social que estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001, trajo aparejada una polémica que envolvió rápidamente a sus protagonistas: ¿Y ahora que sigue? ¿Cooperativas, expropiación o devolución de las empresas a sus antiguos dueños con participación de los trabajadores? Expresada de manera más simple: autogestión o control obrero de la producción.^{21/}

Los trabajadores de las empresas ocupadas están agrupados en dos instancias organizativas principales: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento de Fábricas Recuperadas (MFR) surgido de una ruptura con el MNER a comienzos del año 2003. Existen otros agrupamientos que pese a tener un nivel de implantación menor han alcanzado una presencia significativa en algunas localidades y municipios. En la ciudad de La Plata la mayoría de las empresas recuperadas se nuclea en la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas

Reconvertidas (Fencooter). Esta Federación promueve la conformación de cooperativas y defiende la expropiación de las empresas en quiebra con cargo a las deudas salariales de los trabajadores. Aunque la Fencooter existía antes de la generalización de las ocupaciones fabriles su membresía creció a partir del año 2001. Con una posición crítica del cooperativismo y una línea política cercana a la izquierda insurreccional se encuentra la Comisión Nacional de Empresas Recuperadas y en Lucha. Esta organización promueve el modelo de estatización bajo control obrero y la expropiación de las fábricas sin indemnizar a los patrones. Rechazan la forma jurídica de la cooperativa por entender que esta figura asociativa representa una puerta falsa para el movimiento piquetero, al alejar a los trabajadores de la lucha política y confundirlos con los espejismos de la competencia económica.^{22/}

Pese a las diferencias de criterios políticos que se mencionarán más adelante, el MNER y el MFR protagonizaron importantes acciones coordinadas que lograron la promulgación de la Ley 5708 en la provincia de Buenos Aires, mediante este instrumento jurídico se faculta al gobierno a expropiar los bienes inmuebles y otorgarlos a los trabajadores bajo el régimen de comodato y en casos especiales en calidad de donación.

Aún con acuerdos importantes subsisten diferencias de fondo entre estos dos agrupamientos y otras experiencias de fábricas ocupadas en cuanto a las formas organizativas que deben adoptar las empresas recuperadas. La propuesta “autogestionaria” y de asociación de tipo cooperativa es sostenida por la mayoría de las empresas que fueron ocupadas y son conducidas por sus trabajadores. El MNER es una de las organizaciones que afirma que los obreros responsables de las ocupaciones de los establecimientos deben transformarse en “nuevos patrones”. Desde esta perspectiva, el funcionamiento de las cooperativas en el marco de una economía de mercado no es obstáculo para lograr una operación rentable por parte de las empresas autogestionadas. Este tipo de propuestas reconoce antecedentes muy antiguos en las

corrientes de la llamada “izquierda reformista”, en los partidos social-demócratas y en algunas experiencias del “mutualismo obrero” europeo. De acuerdo a esta corriente del pensamiento socialista, los trabajadores tienen la capacidad de promover la instauración de una red de empresas autogestionadas, estos establecimientos darían pie a la formación de una economía solidaria que estaría en condiciones de consolidarse gradualmente, a la sombra del mercado. Ese progreso, lento y por etapas, culminaría en algún momento, con la reducción del mercado capitalista a ciertas esferas específicas de la producción frente a círculos más amplios constituidos por actividades que responden a formas organizativas autogestionarias. La sustitución de los antiguos patrones por una dirección obrera colectiva debe garantizar una gestión eficiente de las empresas y la conformación de redes solidarias de intercambio de bienes y servicios. Esta tendencia, que resulta mayoritaria en el MNER y en el MFR buscó acuerdos básicos con el gobierno del presidente Néstor Kirchner quien se hizo cargo del poder ejecutivo el 25 de mayo de 2003. La cercanía de ambas agrupaciones con el nuevo gobierno profundizó las diferencias con los grupos de izquierda que impulsan el “control obrero” de las fábricas bajo un régimen de expropiación de las mismas o bien después que los establecimientos hayan sido recuperados por sus antiguos patrones.

Para el MNER y el MFR la reforma a la Ley de Quiebras es un paso fundamental para acceder al pleno control de las empresas ocupadas.^{23/} Una vez decretada la quiebra se otorga a los trabajadores el manejo de la fábrica por un plazo de dos años con opción a compra cuando se haya cumplido ese plazo. Algo similar se propone con la conformación de un “fondo fiduciario” cuyos recursos tendrán como contrapartida un reaseguro a cargo de las empresas autogestionarias, serán los propios trabajadores quienes ofrecerán las garantías que se necesitan para asegurar la devolución de la deuda. Se trata, de alguna manera, de un préstamo que se sujeta al desempeño de la gestión obrera al frente de los establecimientos ocupados.

Las propuestas cooperativistas y autogestionarias suelen ser impulsadas también por algunos sectores de la izquierda que entienden a los procesos sociales como un movimiento constante de “acumulación o construcción de poder” en un marco, más general, definido por una cambiante correlación de fuerzas entre el “campo popular” y las clases y sectores sociales dominantes. La tradición marxista europea que se inspiró en el pensamiento del dirigente comunista italiano Antonio Gramsci y, más recientemente, en los aportes del teórico francés Michel Foucault, dio sustento a la propuesta que sostiene una estrategia “gradualista” de construcción de espacios de poder alternativo en los distintos resquicios de la sociedad capitalista. Más que en un asalto al Estado se piensa en un despliegue de fuerzas contrapuestas en el contexto de un conflicto de “guerra de posiciones” o lo que es lo mismo, procurar la ocupación de las trincheras enemigas como parte de un proceso que debe culminar en un punto de acumulación de poder que posibilite la ruptura con el orden estatal dominante.

Esta tesis es duramente criticada por las corrientes más ortodoxas de la izquierda que retoman los principios emanados de la experiencia soviética de 1917 sobre la naturaleza y el papel del Estado y afirman la necesidad de entender, a esa máxima institución pública, como el punto más alto de condensación y centralización del poder de las clases dominantes. Desde este discurso, se cuestiona cualquier intento de agregación social que busque, por la vía autogestionaria, producir los bienes y servicios que antes se generaban bajo la tutela de un patrón o que intente construir redes solidarias de trueque o comercialización de productos.^{24/} Este razonamiento queda atrapado en una lógica de naturaleza “insurreccional” cuya única alternativa parece ser la de reeditar las jornadas de protesta social de los días 19 y 20 de diciembre del 2001. Por este camino, un nuevo “argentínazo” abrirá las puertas para la conquista de la gran utopía revolucionaria: el asalto a la Casa Rosada y la instauración del socialismo.

Desde nuestra perspectiva, entendemos que lo más relevante es que, al margen de las diferencias y similitudes entre las múltiples experiencias de empresas ocupadas por

sus trabajadores, *puede destacarse el hecho de que se logró difundir un principio autoorganizativo de carácter democrático que se sustenta en la discusión y decisiones tomadas en asambleas*. En la mayoría de los casos, después de haber recuperado las fábricas, se iniciaron fuertes debates acerca de la opción de producir bajo el sistema de “cooperativa-autogestionaria” o mediante la forma “estatización bajo control obrero”, tal como mencionamos en los párrafos precedentes. Pero, al margen de estas discrepancias, pensamos que el aspecto más sustantivo de estas experiencias, es que sus protagonistas identifican un “antes” y un “después”, es así como queda en la memoria colectiva, el registro conciente de un cambio profundo en aspectos tan vitales para su vida cotidiana como es la percepción de haber establecido una nueva relación con los otros compañeros, con el mismo proceso de organizar y efectuar el trabajo y con la empresa, como el lugar que además de permitir obtener un ingreso, posibilita la generación de nuevos lazos de solidaridad. La relación con el “afuera” cobra una dimensión distinta, es a partir del conocimiento y la posterior convergencia y movilización solidaria con otras experiencias hermanas de fábricas recuperadas, y con aquellos sectores populares en los que se descubre, paso a paso, una forma novedosa de comunidad en proceso de gestación, como puede iniciarse la búsqueda de alternativas sociales frente a los efectos devastadores de las políticas económicas neoliberales.

NOTAS

^{1/} Godio, Julio, *La recuperación de empresas por los trabajadores en Argentina*, Buenos Aires, Instituto Mundo del Trabajo, www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas, marzo 2004

Rebón, Julián, *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2004

Martínez, Enrique, “Recuperar el trabajo común” Buenos Aires, *Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)*, www.inti.gov.ar; Suplemento publicado por el diario *Página 12*, noviembre 2004

Al referirse a las ocupaciones fabriles el autor señala “Sin un adecuado marco legal; con permisos precarios de los jueces; con la permanente amenaza latente del remate de los bienes; sin capital de trabajo ni patrimonio propio o ajeno para poner en valor máquinas que han estado paradas por meses o años; con debilidades tecnológicas [...]; aún así, grupos de hombres y mujeres se han aferrado a su identidad, sus saberes y su historia común, para construir una esperanza y pensar en hacer una vida mejor para ellos y sus familias”.

“Yo recupero, nosotros recuperamos...”, Buenos Aires, *Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)*, www.inti.gov.ar, (Nota Editorial), (Consulta; febrero de 2005).

^{2/} Magnani, Esteban, *El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2003; pp. 73-115

Fajn, Gabriel, *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2003; pp. 99-110

Parte del amplio debate sobre los aspectos legales que rodean a las empresas recuperadas puede consultarse en la página www.lavaca.org con respecto a la cooperativa que administra el Hotel Bauen: “Juicio al Bauen. El cazador cazado” y “Levantaron la clausura al Bauen” (Consulta del 14 de mayo de 2006)

^{3/} Almeyra, Guillermo, “Las fábricas *recuperadas* y la autogestión”, *La Jornada*, México, 7 y 14 de diciembre de 2003. Del mismo autor ver “Las fábricas *ocupadas* y la autogestión”, en el mismo diario con fecha 21 de diciembre de 2003

Hauser, Irina, “Las empresas recuperadas quieren una ley marco”, en *Página 12*, Buenos Aires, 11 de noviembre de 2003. La reportera menciona que la petición del MNER dirigida a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es la promulgación de una “ley especial de propiedades fallidas” para que las fábricas sean automáticamente expropiadas por el Estado

^{4/} “La CGT quiere que las obras sociales también atiendan a los desocupados”, *Clarín*, Buenos Aires, 4 de agosto de 2004. La nota menciona que “... el triunvirato que conduce la central sindical propuso que las obras sociales atiendan también a quienes perdieron su empleo. Claro que para eso pretenden fondos del Estado”

Palomino, Héctor, “Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal en Argentina”, en Enrique de la Garza (compilador), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Clacso-Colección Grupos de Trabajo, 2005

Este autor apunta acerca de la respuesta de los sindicatos a la ocupación de empresas por sus trabajadores: “... los sindicatos reaccionan con conductas y respuestas aprendidas históricamente ante un contexto inédito: ante problemas nuevos, proponen soluciones tradicionales”; p. 41

Con motivo de los festejos del tercer aniversario del gobierno de Kirchner hubo un acuerdo político entre los sindicatos y las organizaciones de desocupados más cercanas a las posiciones del presidente. Ver *Clarín*, “Piqueteros y gremios: esta vez reinó la paz”, Buenos Aires, 26 de mayo de 2006

^{5/} Linares, Martín, “Trabajar sin amos: de la...” *op. cit.*

Magnani, Esteban, *El cambio silencioso. Empresas y ...*, *op. cit.*, 4. Los casos “Zanón”; pp. 132-159

Meyer, Adriana, “Es posible vivir sin el patrón”, *Página 12*, Buenos Aires, 21 de septiembre de 2004

“Obreros de Zanón instalaron una carpa frente al Congreso”, *Página 12*, Buenos Aires, 19 de noviembre de 2004

^{6/} Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas*, Buenos Aires, Ediciones Rumbos, 2004; pp. 223-228

Meyer, Adriana, "Ya producimos sin peligro de quiebra", *Página 12*, Buenos Aires, 8 de diciembre de 2003

Ortiz, Osvaldo, "Inquietud por la quiebra de Zanón", *Clarín*, Buenos Aires, 14 de agosto de 2005

Brat, Elio, "17 mil firmas para no perder Zanón", *Página 12*, Buenos Aires, 2 de mayo de 2006

^{7/} Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas, op. cit.*; pp. 160-164

Sin Patrón, Buenos Aires, La Vaca Editora, 2004; pp. 124-125

^{8/} Magnani, Esteban, *El cambio silencioso... op. cit.*; pp. 99-110

Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas, op. cit.*; pp. 164-167

^{9/} Heller, Pablo, *Fábricas... op. cit.*; pp. 172-175

Fajn, Gabriel, *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social... op. cit.*; pp. 55-72

^{10/} *Sin Patrón, op. cit.*; pp. 124-125

Heller, Pablo, *Fábricas... op. cit.*, "Sasetru es de los trabajadores y al que no le gusta..."; pp. 177-182

^{11/} *La Nación*, “Tiroteo entre desocupados”, Buenos Aires, 14 de noviembre de 2003

^{12/} La reapertura de Sasetru después de muchos años de inactividad constituye un doble triunfo para el movimiento de trabajadores desocupados. Por un lado la rehabilitación de equipos, instalaciones y maquinarias que estaban abandonadas y en desuso. Al mismo tiempo permitió consolidar al movimiento de empresas autogestionadas al lograrse el reconocimiento de “Sasetru Gestión Obrera” como cooperativa responsable de la operación y administración de la empresa.

^{13/} Viglieca, Olga, “Triunfo de las obreras sin patrón, la expropiación de la fábrica Brukman”, Suplemento “Triple Jornada”, *La Jornada*, México, 1 de diciembre de 2003

Vales, Laura, “Nuestra lucha no fue en vano”, *Página 12*, Buenos Aires, 31 de octubre de 2003

Linares, Martín, “Trabajar sin amos:...” *op. cit*

^{14/} Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas, op. cit.*; pp. 188-196

Rebón, Julián e Ignacio Saavedra, *Empresas recuperadas, la autogestión de los trabajadores*, Buenos Aires, Claves para Todos, 2006

^{15/} Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas, op. cit.*; pp. 210-212

Fajn, Gabriel, (coordinador), *Protesta social, autogestión,...* op. cit., Capítulo V, “Las estrategias legales”; pp. 99-110

^{16/} Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas*, op. cit.; pp. 189-190

^{17/} Heller, Pablo, op. cit.; pp. 193-194

Magnani, Esteban, *El cambio silencioso*, op. cit.; pp. 169-200

^{18/} Heller, Pablo, op. cit.; p. 193 y p. 299, “Proyecto de Ley de Estatización bajo control de los trabajadores de Brukman Confecciones”

^{19/} En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron dos posiciones principales acerca del futuro de la empresa Brukman: el bloque de legisladores de izquierda apoyaba lo resuelto en la asamblea que los trabajadores de la fábrica habían aprobado por mayoría: expropiación bajo control obrero. Por otro lado el “Frente Porteño”, la coalición política que apoyaba al intendente Aníbal Ibarra, presentó un proyecto mediante el cual procuraba acordar una solución menos conflictiva y proponía la negociación de un pago indemnizatorio a los antiguos propietarios.

^{20/} Heller, Pablo, op. cit.; pp. 210-212

Sin patrón, op. cit.; pp. 42-55

^{21/} Fajn, Gabriel, *Fábricas recuperadas: la organización en cuestión*, Buenos Aires, www.iisg.nl/labouragain/documents/fajn.pdf (Consulta; noviembre de 2004)

Saavedra, Laura, "Entre la desocupación y la recuperación autogestiva de empresas: la configuración del espacio de las fábricas recuperadas", en Mallimaci, Fortunato y Agustín Salvia, *Los nuevos rostros de la marginalidad*, Buenos Aires, UBA-Editorial Biblos, 2005

^{22/} Rebón, Julián, *Desobedeciendo al...*, *op. cit.*; pp. 143-156

----- e Ignacio Saavedra, *Empresas recuperadas, la autogestión...*, *op.cit.*

Palomino, Héctor, "Los sindicatos y los movimientos sociales..." *op. cit.*; pp. 27-37

Bialakowsky, Alberto, *et al*, "Nuevas formas de autogestión de los trabajadores en empresas recuperadas", en Bialakowsky Alberto, Raquel Partida, *et al*, en *Trabajo y Capitalismo entre siglos en Latinoamérica*, México, Universidad de Guadalajara, 2005, pp. 218-222

^{23/} Hauser, Irina, "Las empresas recuperadas quieren una...", *op. cit*

Magnani, Esteban, *El cambio...*, *op. cit.*; pp. 88-110

Fajn, Gabriel, *Protesta social, autogestión y...*, *op. cit.*, Capítulo V, "Las estrategias legales"; pp. 99-110

^{24/} Una visión crítica desde la perspectiva de la izquierda troskista sobre el debate acerca del “cooperativismo” versus la propuesta de “expropiación con control obrero” puede consultarse en “Autogestión y movimiento de empresas recuperadas” y “Construyendo poder pero... ¿para quién?”, en Heller, Pablo, *op. cit.*; pp. 43-98

Una aproximación menos ideologizada de este debate se encuentra en:

Godio, Julio, *La recuperación de empresas por...*, *op. cit.*

Bialakowsky, Alberto, *et al*, “Nuevas formas de autogestión de los...”, *op. cit.*

Saavedra, Laura, “Entre la desocupación y la recuperación autogestiva...”, *op. cit.*; Modelos organizacionales: encuentros y desencuentros; pp. 180-185

Capítulo VI

Vivir en el Límite. El Movimiento Piquetero entre la Resistencia Social y la Recomposición del Mundo del Trabajo

Vivir en el Límite. El Movimiento Piquetero entre la Resistencia Social y la Recomposición del Mundo del Trabajo

“Es dable pues afirmar con orgullo, que los piqueteros surgen como indios de la sociedad industrial, rebelándose frente a la pasividad de los trabajadores ocupados. El movimiento autónomo en su diversidad tiende a reivindicar a los excluidos como sujeto social diferenciado de la esclavitud salarial, porque considera que la crítica y la rebeldía deben extenderse al modelo productivista y a los contenidos del trabajo.

El rebelde del siglo XXI no desea ser proletario. La condición obrera actual, al no conllevar idea de progreso, representa más una tortura, ejercicios de humillación, que razón de dignidad. La crítica del modelo va mucho más allá del que la izquierda haya despreciado durante décadas a los campesinos, desocupados y pueblos indígenas en nombre del desarrollo de las fuerzas productivas”

Raúl Arancibia

Autonomía política de los movimientos sociales y defensa del horizontalismo

www.lafogata.org (Consulta; octubre 2005)

De la fábrica al barrio, del barrio a la calle y de la calle... ¿de regreso al trabajo? El derrotero del movimiento de los trabajadores desocupados no es ni tan lineal —como deliberadamente se expresa en el inicio de este capítulo— ni el resultado de una lógica fácilmente previsible en la cual el fenómeno causa-efecto puede adivinarse con relativa sencillez. Hemos explicado, a lo largo de este estudio, que la conformación y emergencia pública de las organizaciones piqueteras es casi un producto natural de las transformaciones, degradación y rupturas que se produjeron en el mundo del trabajo en los últimos treinta años. Las políticas neoliberales aplicadas durante la década de los noventa fueron el cierre catastrófico de este proceso. Estos profundos cambios estructurales produjeron cierta descentralización de la protesta social y de la confrontación con el Estado, hacia los ámbitos locales: el barrio; las ollas populares; las organizaciones y clubes vecinales; las asociaciones civiles; las agrupaciones solidarias creadas para sostener los servicios básicos de salud y educación primaria cuando el

aparato estatal, responsable de ofrecer gratuitamente esos servicios, abandonó esas funciones y desprotegió a vastos sectores populares de bajos ingresos.^{1/}

Expresado en otros términos, es necesario entender las lógicas de la movilización colectiva en un contexto de persistente y grave deterioro del mundo del trabajo. La lucha de las organizaciones que nuclean a la población desempleada, subocupada, familias en situación de pobreza extrema y grupos con una inserción débil e inestable en el mercado laboral, reconoce tres frentes principales de reclamo y confrontación: a. la supervivencia material asociada al logro de alimentos, vivienda y servicios básicos de salud y educación. b. el reconocimiento, por parte de los organismos públicos, como instancias que cuentan con la legitimidad suficiente para ser admitidos como interlocutores válidos y demandar ante el Estado los apoyos materiales que consideran justos; y c. por último, el constante reclamo de acceder a los dispositivos públicos que les permita superar una permanente situación de inseguridad social y desprotección.

Habíamos hecho referencia a dos lecturas posibles del fenómeno piquetero, se identificó un enfoque que pone el acento en la “novedad” de este emergente social y se reconoció otra perspectiva que enfatiza el peso de las tradiciones y saberes de las clases populares, en particular las que provienen de la práctica sindical. Quienes entienden a este movimiento desde la primer lectura, ponen el acento en la “inscripción territorial” de los MTD y en la escasa gravitación del universo propiamente laboral: la empresa, el sindicato y la huelga como método de lucha.^{2/} Por el contrario, desde el segundo relato la irrupción del movimiento piquetero sería tributario de una larga y valiosa historia de conflictos gremiales con fuerte centralidad de la relación capital-trabajo. Tal como se expresó en los capítulos precedentes de esta investigación, entendemos que aún en los casos donde las condiciones de precariedad laboral y desocupación son más graves, *los MTD son, de algún modo, continuadores de un proceso de rebeldía urbana que, pese al deterioro del empleo industrial, tuvo hasta hace pocos años un fuerte protagonismo sindical.*

Los MTD surgen, desde nuestra perspectiva, como resultado del entrelazamiento de una demanda que nace por la pérdida de fuentes de empleo y que va articulándose con reclamos más amplios que incluyen mejoras en el *hábitat* (viviendas, escuelas, agua potable, luz eléctrica, etc.). Esta articulación se hace más evidente cuando el “piquete” como método privilegiado de lucha migra del interior de la república —en particular de las provincias de Neuquén y Salta— a las localidades vecinas de la Capital Federal, el llamado Gran Buenos Aires. Algunos autores sostienen, de manera errónea, que al producirse esta migración geográfica los MTD ya no apuntan a resolver directamente cuestiones de empleo, el aspecto ocupacional pasaría a ubicarse entonces en un papel relativamente secundario frente al interés principal de gestionar programas de ayuda social y lograr el reconocimiento, por parte de las autoridades, como legítimos interlocutores de los organismos públicos responsables de canalizar los apoyos a las familias de bajos ingresos. Según esta lectura, al gestarse la protesta a partir de un anclaje principalmente territorial —el barrio; la villa miseria— las organizaciones piqueteras del Gran Buenos Aires alcanzaron relevancia nacional estableciendo un lazo con la temática ocupacional que había sido el detonante de los primeros conflictos y cortes de rutas en el interior de la república. De esta manera se *apropiaron* de una técnica de protesta —el corte del tránsito y la instalación de barricadas— y de alguna forma, también hicieron suya la demanda piquetera de “trabajo genuino” con el fin de utilizarlo como instrumento de presión y obtener subsidios económicos y ayuda material por parte del gobierno. Para quienes entienden al movimiento de los trabajadores desocupados desde esta perspectiva, los piqueteros son, en cierta medida, herederos directos de las organizaciones barriales y vecinales que a mediados de los ochentas iniciaron el proceso de ocupación de terrenos fiscales y la construcción autogestiva de nuevos asentamientos habitacionales.

Subyacen en esta interpretación al menos dos errores de percepción del fenómeno que deben puntualizarse. Se pierde de vista que la gestación y emergencia pública del

movimiento piquetero es principalmente el resultado —con las particularidades regionales que ya se analizaron— del proceso de desindustrialización, del aumento del desempleo y de la expansión de la precariedad laboral que sufrió la sociedad argentina. Su entrelazamiento con los reclamos que apuntan a otro tipo de demandas como las de vivienda, salud, agua potable, etc, no modifica la raíz estructural del fenómeno. El otro aspecto interpretativo, también equivocado, es pretender disolver la naturaleza y dinámica de los MTD en la práctica reivindicativa que, con anterioridad al surgimiento de las organizaciones piqueteras, desarrollaban los agrupamientos vecinales. La base social de este tipo de asociaciones estaba formada por familias de bajos ingresos —trabajadores precarios y temporales pero no necesariamente desocupados— y con carencias materiales serias, pero el factor aglutinante y movilizador no era el empleo o las cuestiones propiamente ocupacionales, sino la necesidad de regularizar la tenencia de los terrenos ocupados y el logro de los apoyos municipales necesarios para consolidar los nuevos asentamientos barriales.^{3/} La delimitación de los terrenos, el otorgamiento de los títulos de propiedad y la distribución de material para edificar las viviendas ocupó un lugar central.

El Movimiento Piquetero en la encrucijada: del auge de las protestas callejeras a las nuevas formas de interlocución con el Estado

La emergencia de los movimientos de trabajadores desocupados constituye, sin duda, una de las experiencias más complejas y novedosas de ese verdadero laboratorio social en el que se transformó la Argentina desde que a fines de los setentas, se abandonó la estrategia económica de industrialización protegida. En un principio, las organizaciones piqueteras se moldearon al calor de una relación fuertemente conflictiva con el gobierno de Carlos Menem, en efecto, durante los años 1996-1999 los choques callejeros con la policía y la permanente confrontación con las autoridades fueron

constantes. Con la llegada al gobierno del presidente Fernando de la Rúa (diciembre de 1999) las organizaciones de desocupados ingresaron en un acelerado proceso de “autonomía” perfilando en apenas dos años, 1999-2001, un movimiento social con propuestas y presencia propia en el escenario político del país.

El triunfo electoral del candidato peronista Néstor Kirchner en abril de 2003 abrió un nuevo ciclo para el movimiento piquetero. Las enormes expectativas que se generaron con la victoria de Kirchner y la amplia aceptación que logró su gobierno, hicieron que las organizaciones de desocupados perdieran parte del espacio ganado en los cinco años previos, vieran socavada su legitimidad y, en particular, se deterioraran sus vínculos con vastas franjas de la sociedad que había mirado con simpatía la lucha de quienes defendían con determinación sus fuentes de empleo.^{4/}

Bajo los gobiernos de Menem, de la Rúa, Duhalde (mandatario provisional entre 2002-2003) y Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, la política oficial sufrió algunas modificaciones, aunque en general, se orientó por un principio utilitario que consistió en una combinatoria de maniobras de negociación, represión o cooptación. De esta manera, bajo los mandatos de Duhalde y principalmente de Kirchner, la estrategia de contención se llevó a cabo, ampliando la distribución de prestaciones y fortaleciendo el amarre de compromisos políticos mediante la entrega de paquetes de alimentos y la distribución de recursos económicos a través del programa “Jefas y Jefes de Hogar”, heredero del plan “Trabajar” que se diseñó y puso en marcha durante el gobierno de Menem.

No obstante, pese a las políticas de contención, el movimiento de los trabajadores desocupados alcanzó un importante reconocimiento social y el ascenso de sus luchas tuvo picos sobresalientes entre 1999 y 2001, precisamente en los meses de julio y septiembre de 2001 se efectuaron dos asambleas nacionales que reunieron a casi la totalidad de las representaciones de los MTD. Ante el conjunto de la población y del mismo Estado, quedó claro entonces que el nuevo actor social que había ganado las

calles expresaba demandas pragmáticas también sentidas por otros sectores de la sociedad —en un estilo cercano al de los movimientos sociales urbanos— y era, al mismo tiempo, portador de prácticas disruptivas, similares a las que se descubren en los movimientos sociales antagónicos, en este caso la impugnación al modelo económico neoliberal.

Los sucesos de los años 2001 y 2002 fueron de especial relevancia para las organizaciones de los desocupados y para el movimiento social en general. Se multiplicaron las asambleas barriales, las redes de trueque, grupos de ahorristas provenientes de sectores medios, cooperativas de cartoneros y recolectores de basura, empresas recuperadas y gestionadas por sus propios trabajadores y un amplio abanico de agrupaciones piqueteras en distintas ciudades y provincias del país. No es equivocado afirmar que el carácter urbano de la rebelión social impuso un nuevo perfil al paisaje político latinoamericano dominado en buena parte del continente por las protestas y luchas de los movimientos indígenas y campesinos. México, Ecuador, Bolivia y regiones importantes de Brasil, eran el escenario de conflictos y enfrentamientos, en ocasiones violentos, de pobladores rurales con las autoridades locales y fuerzas de seguridad.

Los movimientos de protesta que ocuparon el escenario político aparecieron ante los ojos de otros actores sociales como portadores de un embrión de nueva institucionalidad. Con este hecho se colocó en el centro del debate político a las organizaciones piqueteras, cuya capacidad de movilización y el fuerte impacto que alcanzaron sobre la vida cotidiana, generaron una amplia expectativa acerca de la posibilidad de construir canales alternativos de representación popular a través de instancias que superaran las limitaciones de las antiguas estructuras y fueran, por lo tanto, una expresión más genuina de las demandas sociales al obviar las mediaciones de los sindicatos y de los partidos políticos tradicionales.^{5/}

Durante el año 2002 naufragó un intento del gobierno del presidente Eduardo Duhalde de desmovilizar a las agrupaciones de trabajadores desocupados mediante el uso de la fuerza. A fines del mes de junio de ese año se produjeron duros enfrentamientos en el Puente Pueyrredón que culminaron con la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El fracaso de la opción policial tuvo un doble efecto, en el terreno político aceleró el llamado a elecciones presidenciales para abril del 2003 y en el ámbito de los programas sociales se multiplicaron las entregas de paquetes con alimentos y de subsidios económicos en efectivo.

En ese mismo año los MTD lograron incorporar, o establecer un mejor nivel de entendimiento y coordinación, con organizaciones que expresaban a sectores de clase media golpeados por las políticas financieras —víctimas del “corralito” que bloqueó sus ahorros a fines de noviembre de 2001— y con los obreros de las empresas recuperadas. Esta ampliación de las bases de apoyo del movimiento de protesta y una actitud más concertadora del gobierno y de las instituciones públicas fortaleció la idea, en una franja importante del movimiento social, de que el régimen, además de debilitarse, había entrado en una etapa agónica y que era inminente la repetición de las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta lectura de la situación coyuntural se plasmó en la declaratoria de la Tercera Asamblea Nacional Piquetera que se celebró en septiembre de 2002. En dicho documento se caracterizó al gobierno de Eduardo Duhalde como un régimen “acabado”. Esta idea del “fin del sistema” y cierta retórica triunfalista dominante en ese momento, se vinculaba a la notable capacidad de movilización del movimiento piquetero y encontraba su justificación teórica en el diagnóstico que buena parte de las agrupaciones de izquierda realizaba del proceso abierto con la caída del presidente de la Rúa, al que definían como revolucionario o “pre-revolucionario”. A partir de este relato se afirmaba que la sociedad argentina estaba en la víspera de un nuevo levantamiento insurreccional,

dicha rebelión concluiría con las tareas políticas revolucionarias que habían quedado inconclusas en diciembre de 2001.

Al mismo tiempo que se discutía la caracterización del momento político y se esperaba el derrumbe de las instituciones, el gobierno multiplicó la cobertura de los planes sociales. La ampliación de la ayuda propició la aparición de numerosos agrupamientos barriales y de trabajadores desocupados que eran escasamente representativos pero que se sintieron con iguales derechos que los MTD de mayor desarrollo e implantación social, para gestionar subsidios ante los organismos públicos. Este fue el primer escalón para que el “espacio piquetero” se expandiera de manera desordenada y se potenciaran los factores de fragmentación organizacional que durante 2003 se plasmó en el crecimiento de grupos y siglas desprendidas, en muchos casos, de las primeras organizaciones de desocupados.^{6/}

Con la convocatoria a elecciones presidenciales se hizo más notorio que los actores sociales que habían protagonizado los momentos más álgidos de lucha en el período 2001-2002, no fueron capaces de dotar de contenidos precisos al reclamo de establecer una nueva institucionalidad. Algo similar ocurrió con las consignas más duras de la revuelta de diciembre de 2001, ni el “Que se vayan todos” ni el llamado “por un nuevo argentinazo” adquirieron el sentido esperado cuando fue el grito con el cual una amplia mayoría de la sociedad repudió a la vieja clase política y a los dueños del dinero.

El llamado a elecciones a fines del 2002 y cierto fastidio de las clases medias frente a las manifestaciones y cortes de vialidades generó un nuevo estado de ánimo en sectores que habían sido solidarios con el movimiento piquetero. A pesar del descrédito de los partidos políticos tradicionales, el inicio de las campañas generó expectativas por la instauración de un nuevo gobierno, en las elecciones del 27 de abril de 2003 el ausentismo fue escaso y las propias bases de las corrientes piqueteras que habían sostenido a ultranza la consigna de “que se vayan todos” y que llamaron a votar en

“blanco”, a anular o no emitir el voto, terminaron apoyando la opción menos conservadora, en este caso la del candidato Néstor Kirchner. Para algunos autores el proceso electoral del 2003 y la fragmentación del movimiento piquetero en un amplio arco de siglas y pequeñas agrupaciones, señala el fin de un ciclo de alta conflictividad social que denominaron los “tiempos extraordinarios”, caracterizados por el notable protagonismo que alcanzaron los MTD en los dos años anteriores.^{7/}

El movimiento piquetero y el gobierno de Kirchner: entre la negociación y la cooptación política

Desde su campaña por la presidencia de la república, el entonces candidato del Partido Justicialista propuso replantear la relación entre el Estado y el movimiento de los trabajadores desocupados, prometió entonces, que a partir del 25 de mayo del 2003 — fecha en que asumió el cargo de presidente— la orientación de las políticas públicas tendrían el propósito de ampliar los canales de negociación con las organizaciones piqueteras y promover la generación de nuevos empleos.

Desde 1996 y hasta el año 2002 la actitud oficial había procurado “disciplinar” las protestas, con este fin se acudió a la judicialización y en algunos casos a la represión, de los cortes de carreteras y puentes. En otras coyunturas se optó por la desactivación del conflicto siguiendo la vía de la ampliación de los planes de ayuda y asignación de subsidios. Durante el período mencionado, los gobiernos sucesivos (Menem; de la Rúa; Duhalde) intentaron deslegitimar a las agrupaciones de trabajadores desocupados asociándolas a un proceso de violencia urbana supuestamente destinado a generar una situación de desórdenes callejeros en todas las provincias.^{8/}

El ascenso de Kirchner a la presidencia coincidió con un momento de consolidación del movimiento piquetero, en buena medida como resultado de los acuerdos logrados por las distintas organizaciones durante las jornadas de lucha del 2002. No obstante, la

convocatoria a elecciones potenció algunas tensiones latentes que apuntaban a la fragmentación de las organizaciones y marcaban más nítidamente la heterogeneidad de opiniones acerca de la actitud que los MTD debían adoptar frente al proceso electoral y ante las ofertas programáticas de los diversos candidatos. El presidente Kirchner optó por la apertura de los canales institucionales de negociación con el fin de neutralizar a las agrupaciones más beligerantes y estrechar, al mismo tiempo, su relación política con el bloque de organizaciones piqueteras más propensas al diálogo. Las medidas de seguridad, específicamente dirigidas a salvaguardar el orden público, se reservaron con el fin de controlar los accesos a las ciudades y áreas céntricas estratégicas —puentes, oficinas gubernamentales y zonas de intensa actividad comercial— fue en esos puntos neurálgicos donde se concentró a las fuerzas policiales en los casos de marchas piqueteras y cierre de calles.

La política del gobierno de Kirchner procura responder a las fuertes expectativas que su triunfo despertó en amplios sectores populares, con este propósito fortaleció la posición de las agrupaciones piqueteras que sostienen referentes ideológicos cercanos al nacionalismo popular, la tradicional matriz programática y simbólica del peronismo. Dentro del conjunto de organizaciones de desocupados coexisten aquellas que sostienen posiciones marcadamente contestarias y de perfil anti-capitalista, con otras de inspiración populista y tributarias de la cultura y de la liturgia que nació con el peronismo. Los casos del grupo Barrios de Pie, que orienta Jorge Ceballos, la FTV que dirige Luis D'Elía y por momentos, la CCC han sido objeto de un tratamiento preferencial por parte de las autoridades y recibieron los beneficios de los nuevos programas sociales como el “Plan Arraigo” mediante el cual se lleva a cabo la construcción de viviendas para las familias de trabajadores desempleados.^{9/} En paralelo, el gobierno de Kirchner, a través del Ministerio de Desarrollo Social, incrementó la distribución de subsidios para la creación de emprendimientos productivos, con lo que se atiende una demanda central de las agrupaciones que

hicieron de las propuestas autogestivas el centro de sus reclamos. Las experiencias de la UTD del municipio General Mosconi en la provincia de Salta, del Movimiento “Teresa Rodríguez” y de los MTD de diversas localidades del Gran Buenos Aires, se benefician con estos apoyos y les permite conformar una línea coordinada de demandas destinadas a ampliar proyectos preexistentes o poner en marcha otros nuevos.

La disyuntiva política de los movimientos de trabajadores desocupados

No cabe duda que la actitud conciliadora del presidente Kirchner con las organizaciones de desocupados y, en general, con los sindicatos y otros agrupamientos de base popular abre un espacio de reflexión y ajuste de las estrategias políticas. En principio, es importante consignar que desde comienzos de 2004 el gobierno decidió reorientar los programas asistenciales y reducir la entrega de dinero a través de los Planes Jefas y Jefes de Hogar (PJH) con el objeto de sustituir los subsidios al desempleo por apoyos a microemprendimientos productivos y de servicios. En fechas más recientes, los programas de asistencia ha sido reformulados hacia esquemas de reciprocidad: el Estado asigna un subsidio y el desempleado que lo recibe debe comprometerse a participar en cursos de formación para el trabajo que le permitan adquirir una ocupación o actualizar los conocimientos y habilidades que ya posee. Durante el año 2004 los PJH estaban estabilizados en 2 millones de beneficiarios, de este monto sólo entre el 8% y el 10% eran distribuidos por las propias organizaciones piqueteras, mientras que el 90% restante llegan a través de los gobiernos provinciales y de los municipios. Este mecanismo asegura un innegable control político del gobierno sobre la asignación de las partidas presupuestales.^{10/}

Una de las dificultades más serias que debe afrontar la distribución de recursos de los PJH es que el dinero debe pasar por las manos de intendentes municipales con escasa capacidad de negociación con las organizaciones piqueteras, entre otras razones

porque los partidos políticos —en particular el Partido Justicialista— operan como maquinarias electorales y establecen con sus bases sociales relaciones de tipo “clientelar” dentro de un mecanismo de “toma y daca” o de lealtades recíprocas. De esta forma, los desempleados que son beneficiados por el PJH reciben los subsidios de los representantes partidarios barriales —los “punteros”— pero no manifiestan una identificación plena, ni se sienten totalmente expresados, por los partidos políticos o por las autoridades municipales.^{11/} Es escaso el porcentaje de beneficiarios de estos planes (el 25% aproximadamente) que realizan contraprestaciones laborales (el acuerdo establece que deben ser 4 horas diarias), en actividades como reparación de calles y veredas, construcción de viviendas, escuelas y comedores escolares y mantenimiento de espacios públicos, entre otras.

Otro elemento relevante es el desfase entre la capacidad de organización y movilización de las agrupaciones de trabajadores desocupados y los beneficiados por el PJH, son más los miembros de los MTD que los desempleados que reciben el subsidio. Para las fechas citadas, principios del 2004, el padrón del PJH sumaba algo más de 160 mil beneficiados y los integrantes de los movimientos piqueteros superaban los 370 mil miembros. En capítulos anteriores hemos definido el perfil político de las organizaciones de desocupados, es útil retomar ahora esa clasificación que, aunque tiene los riesgos propios de toda generalización, ayuda a precisar la relación que sostienen con el gobierno del presidente Kirchner. En términos casi coloquiales es posible hablar de “dialoguistas”, “moderados” y “duros”. Los primeros se agrupan en la organización Barrios de Pie, Movimiento “Evita”, Federación Tierra y Vivienda (FTV) y el Frente Nacional Transversal y Popular. La FTV cuenta con una fuerte implantación territorial, moviliza a más de 200 mil desempleados y administra 75 mil subsidios del PJH, Luis D’Elía —su máximo exponente público— proviene de las filas del social-cristianismo y sostiene una fluida relación con el presidente Kirchner. Actualmente ocupa el cargo de Subsecretario de Tierras para el Hábitat Social.

Este conjunto de agrupaciones, que hemos identificado como *dialoguistas*, se sumó al “Frente para la Victoria” en las elecciones legislativas del 23 de octubre del 2005. Esta coalición, que representó los intereses políticos del gobierno de Kirchner, permitió que 27 dirigentes piqueteros accedieran a cargos de elección popular, entre otros, Edgardo Depetri del Frente Nacional Transversal y Popular.^{12/}

En el segundo grupo de organizaciones piqueteras que se mencionaron —los *moderados*— es posible identificar a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que reconoce un referente político externo en la izquierda maoísta. Su base social son trabajadores desocupados de origen peronista y el líder visible —ya mencionado en capítulos anteriores— es Juan C. Alderete. La CCC se mantiene a distancia del gobierno de Kirchner y promueve movilizaciones y cortes parciales de rutas y calles céntricas. Afilia a poco más de 120 mil desempleados y administra 42 mil subsidios de los PJH. El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) “Aníbal Verón” cuenta con presencia en distintas localidades y municipios del país y aunque su dirigente más reconocido es Juan Cruz Daffunchio, el MTD es en realidad un conglomerado heterogéneo en el que coexisten simpatizantes de la izquierda “guevarista” y militantes cristianos de base. Bajo la definición genérica de “izquierda” se desarrolla una estrategia reivindicativa y contestataria, aunque no se exprese en un proyecto socialista claramente definido. Al igual que la CCC mantiene una actitud crítica hacia el gobierno pero ha moderado sus movilizaciones y cortes de carreteras y puentes. Su capacidad de convocatoria es algo menor, se calcula que bajo la sigla “MTD” se afilian poco más de 40 mil desempleados y controla cerca de 5 mil planes PJH.

Por último, la corriente piquetera que nuclea a las organizaciones *duras* está integrada por el Polo Obrero (PO), frente social del Partido Obrero, de procedencia trotskista y cuyo dirigente más reconocido es Néstor Pitrola. El PO promueve el segundo “argentino” que potencie las fuerzas populares que ganaron las calles en diciembre de 2001 y que marche hacia una gran insurrección social cuyo momento culminante

será el asalto al poder. Esta organización piquetera afilia a casi 30 mil desempleados y administra 20 mil planes PJH. El otro agrupamiento de amplio reconocimiento público por su actitud beligerante es el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD). Su líder Raúl Castells, suele promover movilizaciones violentas y trata de ganar espacio sosteniendo una estrategia de permanente confrontación con las autoridades y la policía. El MIJD tiene una base de casi 60 mil afiliados y controla 9 mil subsidios PJH.

Las tres grandes vertientes del movimiento piquetero que hemos señalado están extendidas en la mayoría de las provincias del país, no obstante, a partir del año 2002 el epicentro de sus actividades se ubica principalmente en los municipios del Gran Buenos Aires y en la propia capital de la república. Los MTD se articulan a partir de las bases territoriales —los barrios donde radican familias de bajos ingresos— pero concentran su metodología operativa en los cortes de ruta y concentraciones masivas cercanas a los lugares donde se localiza el poder político.

Si se analiza al movimiento de los desocupados desde una perspectiva puramente cuantitativa puede afirmarse que las organizaciones piqueteras expresan a una minoría activa de los trabajadores desempleados. Pese a tener una alta capacidad de movilización y de incidencia en el desarrollo de las actividades cotidianas su potencial “revolucionario” es relativamente bajo, su debilidad se encuentra en dos aspectos sustantivos: a pesar de coincidir en algunas demandas centrales —en particular el reclamo por la generación de nuevos empleos— el movimiento está atravesado por profundas diferencias políticas, a veces impuestas por fuerzas partidarias que se “montan” en las protestas de las agrupaciones piqueteras. El otro flanco débil de los MTD es la ausencia de una propuesta programática que resulte atractiva e incluyente para los casi 9 millones de trabajadores ocupados y para sectores de la sociedad que son víctimas colaterales de las política neoliberales.

La sociedad argentina muestra un humor cambiante hacia las organizaciones piqueteras, de las simpatías y apoyos expresados durante las jornadas de diciembre de 2001 a la exigencia, marcadamente extendida a partir del 2003, de que abandonen sus tácticas de cortes de puentes, carreteras y calles céntricas. Aunque la mayoría de la sociedad reconoce la legitimidad de las demandas no han podido establecerse “vasos comunicantes” que permitan salvar las diferencias y potenciar los cuestionamientos al modelo económico.^{13/} Esta permanente ambivalencia del conjunto de la sociedad frente a las organizaciones de desocupados remite a un factor de carácter estructural que frena el proceso de comprensión y convergencia necesario para sellar alianzas políticas: los integrantes del movimiento piquetero son hijos de la debacle de la antigua “sociedad salarial” que se construyó al amparo de la industrialización protegida, la expansión del mercado interno y el crecimiento de las instituciones y empresas públicas. Esa sociedad, que constituyó un resguardo confiable para la mayoría de la población, pudo funcionar con bajas tasas de desempleo y niveles de vida decorosos para los trabajadores. El proceso de desarticulación de las políticas industrializadoras a mediados de la década de los setentas del siglo pasado, cierra el ciclo de crecimiento de la sociedad salarial y abrió paso a la generalización del desempleo, la expansión del trabajo por cuenta propia, la precariedad ocupacional y la pérdida de los apoyos que el Estado otorgaba en materia de seguridad social. Quienes lograron acceder a un puesto de trabajo se sienten amenazados por la presión que ejercen los desempleados sobre el mercado laboral, se entabla así una disputa entre la población que se encuentra ocupada y quienes salen a las calles a reclamar lo que por derecho les corresponde: tener un empleo estable y ganarse la vida dignamente.

Como hijos de la anterior sociedad del trabajo los piqueteros ganan legitimidad frente al resto de los sectores sociales que reconocen como válidas sus demandas. Pero como protagonistas de prácticas “disruptivas” que alteran el quehacer cotidiano, pierden el apoyo de quienes ven en esas movilizaciones, una potencial amenaza para las

ventajas materiales y estabilidad económica que lograron en un contexto en el cual, la defensa del empleo y del nivel de vida, es cada vez más difícil de sostener.

Las bases sociales del movimiento piquetero están compuestas por familias pobres, pero no pertenecen al mundo tradicional de la marginalidad estructural —como ocurre en Bolivia, Perú, Paraguay y ciertas regiones de Brasil— sino al universo de una sociedad salarial que fue desarticulándose en los últimos 25 años. Esto explica porqué las organizaciones de trabajadores desocupados son tan persistentes y dinámicas. Hay vínculos históricos que las unen a la tradición sindical y a las organizaciones, clubes y mutuales barriales. La mayoría de los activistas de las agrupaciones de desocupados son personas alfabetizadas y se conserva en la memoria colectiva el recuerdo de su época de trabajadores asalariados. No obstante, esa tradición asociada al mundo de la producción se confronta con la aparición de prácticas asistenciales, con cierta apatía social y desapego por el valor del trabajo como factor estructurante de la vida social.

La relación del movimiento piquetero con el espacio de la política constituye un horizonte cargado de oportunidades y desafíos, pero sobre todo de incertidumbres. Hay lecturas que enfatizan los riesgos que encierra la subordinación del movimiento social a la dinámica que imponen las fuerzas políticas formalmente constituidas. La pérdida de autonomía y la cooptación clientelar de las organizaciones de base son los peligros que se señalan con mayor frecuencia. La distribución de subsidios —en dinero efectivo o como alimentos, materiales para el arreglo o construcción de viviendas, etc— refuerza, según esta interpretación, las prácticas asistenciales, relaciones de conveniencia mutua con las autoridades y el voto como prenda de cambio en la búsqueda de nuevos apoyos materiales. El papel de los llamados “punteros”, dirigentes locales que representan los intereses electorales de los partidos políticos, se acrecienta y opaca el rol de los líderes sociales.^{14/} De esta manera, la relación con las estructuras políticas sería el “abrazo del oso” para los movimientos sociales, el paso previo a la

desaparición de la *horizontalidad* y la aceptación de la *línea* que se elabora y baja desde aparatos partidarios externos al movimiento social.

Esta vinculación de las organizaciones de trabajadores desocupados con las fuerzas políticas y con las instituciones públicas adquirió particular relevancia —en el debate y en la práctica— a partir de mayo de 2003 con el ascenso del presidente Kirchner. La apertura de esta nueva etapa, con un gobierno más propenso al diálogo, dibujó más claramente los límites entre las diferentes matrices ideológicas y las concepciones a partir de las cuales se define al sujeto político. Para las agrupaciones piqueteras que reconocen a determinados partidos de izquierda como referentes políticos, —los que definimos como “duros”— el gobierno de Kirchner es solo la continuidad de programas ya conocidos sobre los cuales no deben generarse expectativas que pudieran desmovilizar a las organizaciones de desocupados. Mantener el nivel de confrontación y amarrar las demandas tradicionales a otras como el no pago de la deuda externa y la expropiación, sin indemnización, de las empresa autogestionadas, constituyen los elementos que ayudarán a perfilar al nuevo sujeto revolucionario y su vanguardia política.

Dentro de la vertiente “moderada” se decidió privilegiar el implante territorial y sin renunciar a la movilización, se plantea fortalecer la problemática barrial, impulsar las tareas comunitarias y autogestivas para atender necesidades básicas y generar espacios que funcionen bajo un régimen de “administración popular”.

El cambio más notable se produjo en la corriente que forman las agrupaciones piqueteras “dialoguistas”. La nueva coyuntura fortaleció las posiciones cercanas al imaginario “nacional-popular”, soporte ideológico del peronismo y robusteció la idea de reconstruir la capacidad de gestión del Estado vinculando la experiencia del presidente Kirchner con la de otros gobiernos vecinos del perfil político cercano como el de Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela. La participación de estas organizaciones piqueteras en el “Frente para la Victoria” que expresó las

posiciones del gobierno en las elecciones legislativas de octubre de 2005, profundizó las diferencias políticas con las otras dos vertientes de los MTD.

Al margen de las fracturas que abrió la discusión sobre el gobierno de Kirchner, el movimiento de los trabajadores desocupados se encuentra frente a un horizonte cargado de interrogantes. Podemos identificar al menos cinco dimensiones que requieren ser resueltas antes de que la segmentación del movimiento debilite a las organizaciones de desocupados y se profundicen las diferencias acerca de la relación que debe mantenerse con el Estado y con el resto de los sectores sociales. Entre otros dilemas y tensiones pueden enumerarse los siguientes:

1. La formulación de una plataforma programática que exceda los dos temas que han constituido el núcleo duro de las demandas piqueteras: la generación de empleo y el aumento de los subsidios para las personas sin trabajo. El primer reclamo tiene un carácter más universal en un contexto de cierre de empresas y fuerte expulsión de mano de obra. La segunda petición es más acotada y nace del espacio social que ocupan los desocupados, familias en situación de pobreza y trabajadores que integran el vasto mundo del empleo precario, desprotegido y mal remunerado. Hasta el momento los puntos de confluencia entre estos dos universos —el del mercado formal de trabajo y el de los desocupados que nutren las bases sociales del movimiento piquetero— son frágiles y escasos. La actitud de los sindicatos es, por lo general, esquiva y procuran no pagar el costo político que representa el repudio de buena parte de la sociedad a los cortes de puentes y caminos o al bloqueo de calles céntricas. Con algunas salvedades, la CTA, en particular, que tiene en la FTV a su expresión barrial y piquetera, ha sido la única organización sindical de las tres centrales obreras existentes hasta hace algunos meses, que ha acompañado a las agrupaciones de desocupados en actos públicos y mediante la suscripción de petitorios. De esta forma, el movimiento piquetero se encuentra ante la disyuntiva de seguir siendo una buena herramienta para la expresión de *demandas sectoriales* pero incapaz de generar espacios y reclamos

más *incluyentes y universales*. Los efectos de la aplicación sistemática del programa económico neoliberal golpea al conjunto de la sociedad, pero no de la misma manera. Amplios sectores medios, pauperizados por la caída de los salarios y la pérdida de prestaciones, se sienten solidarios con el reclamo de más y mejores empleos que levantan los grupos piqueteros, pero se aterrorizan cuando ven que son invadidos espacios urbanos que constituyen su *hábitat natural*. La presencia y el despliegue callejero de organizaciones que, con frecuencia, antagonizan su relación con franjas importantes de la clase media, siembra resquemores y aleja a los potenciales aliados.^{15/} Como si parte de un mundo marginal, conocido pero distante, al mismo tiempo, irrumpiera en territorios donde el comercio, las oficinas públicas y puntos de encuentro social se vieran obligados, bruscamente, a modificar su dinámica cotidiana. La convergencia esperanzadora entre asambleas vecinales y agrupaciones piqueteras, que tantas expectativas generó entre diciembre de 2001 y el año 2002, fue debilitándose a medida que algunos de los factores que movilizaron a los sectores medios, desaparecieron del escenario político. La crisis financiera del 2001 se diluyó paulatinamente y el gobierno atendió las peticiones de millones de ahorristas atrapados en el llamado “corralito bancario”. Otro elemento que actuó como factor disolvente tuvo un carácter más específicamente político, numerosos partidos y grupos de izquierda quisieron instrumentar las asambleas barriales como punta de lanza en su lucha contra el Estado. La manipulación de las resoluciones tomadas en reuniones públicas con el fin de arrancar propuestas antigubernamentales de naturaleza insurreccional, generó discordias artificiales y profundizó diferencias acerca de temas que debieron actuar como fuerzas motoras de la unidad del campo popular. Por el contrario, se potenciaron los elementos que alejaron a los actores y la respuesta frente a cuestiones como la imposibilidad de pagar créditos adquiridos en la etapa de la paridad “uno por uno”, la pesificación de los ahorros en dólares, el apoyo a los trabajadores que ocuparon las fábricas cerradas o en proceso de quiebra, tomaron caminos divergentes e impidieron

la conformación de una voluntad unitaria capaz de darle cuerpo y forma a la consigna “piquete y cacerola la lucha es una sola”.

2. La relación del movimiento de los trabajadores desocupados con el Estado y las instituciones públicas en general —en particular con las instancias provinciales y municipales— es otro punto de tensión que pesa sobre la estrategia del movimiento piquetero. Durante la etapa 1996-2002 (gobiernos de Menem, de la Rúa y Duhalde) la línea dominante era de abierta confrontación con las autoridades, no obstante, el reclamo por mayores subsidios, reparto de alimentos y pedido de soluciones a problemas barriales específicos, hacía del Estado un interlocutor obligado para las organizaciones de desocupados. El debate acerca de la naturaleza de la relación que debían sostener el movimiento social y las instituciones públicas se agudizó con la llegada al gobierno del presidente Kirchner. Desde el inicio de su mandato, Kirchner mostró una actitud más conciliadora con las organizaciones piqueteras y propició un abierto acercamiento con algunas de ellas. Esta mayor sensibilidad de las autoridades que asumieron sus funciones en mayo del 2003 para tratar las cuestiones sociales, profundizó las diferencias políticas en los distintos MTD. En algunas localidades se impuso la propuesta “dura”, el gobierno de Kirchner no era más que la continuidad de las anteriores políticas y no correspondía negociar treguas o formalizar acuerdos. En otros municipios y provincias prevaleció la idea de que con el nuevo gobierno se abría una etapa de atención de las demandas sociales que justificaba la desactivación parcial de los cortes de rutas y puentes y la aceptación de las propuestas de diálogo que formulaban las autoridades. Como ya señalamos, el fin de los “tiempos de auge” del movimiento piquetero —“extraordinarios” para algunos autores— creó espacios para el fortalecimiento y mayor protagonismo de las organizaciones de desocupados más cercanas al horizonte ideológico del nacionalismo-popular. Este crecimiento, en el espacio público, de los grupos afines a esta corriente se plasmó en la unificación de seis agrupaciones piqueteras durante el desarrollo de un acto que se celebró el 27 de

abril del 2006 y al que asistió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el gobernador bonaerense Felipe Solá. El acuerdo lo suscribieron las organizaciones Barrios de Pie, Agrupación “Martín Fierro”, Frente Barrial 19 de Diciembre, Agrupación “Envar El Kadri”, Corriente Patria Libre y el Partido Comunista – Congreso Extraordinario. Como resultado de la reunión se constituyó el Movimiento Libres del Sur, que se incorporará a la coalición electoral oficialista “Frente para la Victoria”. Se trata, de hecho, de la mutación de grupos de desocupados en una instancia de naturaleza más específicamente política con el fin de respaldar al gobierno.^{16/}

Hay otro dato por demás relevante de esta confluencia entre la política del presidente Kirchner y una de las corrientes del movimiento piquetero. El 21 de febrero de 2006 Luis D’Elía, máximo exponente público de la FTV, fue designado titular de la recientemente creada Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, una dependencia del Ministerio de Planificación. De esta forma, el gobierno amarra su alianza con un amplio segmento del MTD y pone en manos del dirigente D’Elía los programas habitacionales que deben resolver las solicitudes de más de un millón de familias de bajos ingresos que requieren regularizar las propiedades de sus terrenos en barrios pobres y villas de emergencia.^{17/}

Bajo el liderazgo de Emilio Pérsico, líder piquetero que ocupa un cargo público en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Movimiento “Evita” ha decidido transformarse en un instrumento de movilización popular en favor del gobierno de Kirchner. Este viraje hacia posturas políticas cada vez más cercanas a las del presidente, marca el tránsito de un movimiento piquetero a un agrupamiento cuyo accionar tiene un perfil más político que social y lo subordina a los programas asistenciales del gobierno.

3. Las tensiones dentro del movimiento de los trabajadores desocupados se exacerbaban, como ya se señaló, a partir de mayo de 2003. La terquedad en las agrupaciones piqueteras que reconocen como referentes políticos externos a grupos de

izquierda, en sostener una propuesta que tiene como principal soporte la inminencia de un gran estallido social —otro “argentinazo”— ha entrampado a esas organizaciones en una lógica unidimensional. Desde esta perspectiva, todo el proceso de acción y construcción del “nuevo poder popular” se gesta a partir de la movilización y confrontación con las autoridades y las instituciones públicas. Sin proponérselo, se transforman en la “otra cara de la moneda” de las agrupaciones de desocupados que, desde un imaginario político más cercano al horizonte ideológico nacional-popular, heredado del peronismo, se mueven ahora con ciertas ventajas, en las cercanías del poder.

Frente a un panorama de divisiones y creciente segmentación de los MTD es necesario diseñar instancias de coordinación política que abran espacios novedosos de convergencia que vuelvan a aglutinar al movimiento social y al mismo tiempo, mitiguen la fragmentación de las agrupaciones piqueteras.

4. Existe otro ámbito de debate y confrontación dentro del movimiento social —en particular de quienes decidieron rescatar sus fuentes de empleo— que se vincula a los sistemas de gestión bajo los cuales deben ponerse en marcha las empresas recuperadas y los proyectos productivos que nacen como emprendimientos derivados de la propia voluntad de las agrupaciones de desempleados. La decisión de crear fuentes de trabajo como iniciativa de los mismos obreros desocupados, es un paso fundamental hacia la ruptura de los lazos que atan a los MTD con las instituciones públicas y con las prebendas de los programas sociales. Esta relación tiene un componente perverso al que ya se hizo referencia: la generación de un amplio tejido de intermediaciones, algunas de naturaleza institucional (autoridades municipales) y otras de carácter informal (los punteros de los partidos políticos). Ambos factores contribuyen al establecimiento de un círculo vicioso de relaciones clientelares con el Estado.

En el capítulo anterior se señaló que existen dos propuestas a partir de las cuales debe llevarse a cabo la gestión de las empresas recuperadas: las asociaciones de tipo

cooperativo y la expropiación de las fábricas con control obrero de la producción. Este debate en el interior de las agrupaciones piqueteras y, de manera particular, dentro del movimiento de empresas recuperadas, debe ser tratado como una diferencia de carácter secundario, que sirva para consolidar la capacidad autogestiva de las organizaciones de desocupados y abra espacios de reflexión en busca de nuevas formas solidarias de producción. El riesgo, latente en el tratamiento de estas divergencias, es que se haga de las diferencias de enfoque sobre cuestiones operativas, una discusión de naturaleza ideológica y que por esa puerta falsa se cuelen el sectarismo político y el debilitamiento organizativo del movimiento de los trabajadores desocupados.

5. La irrupción de las agrupaciones piqueteras coincidió con un momento de fuertes y generalizadas interpelaciones a las dirigencias partidarias y de parálisis de los aparatos sindicales, estas condiciones colocaron a los MTD en el liderazgo de la protesta popular y como un referente obligado para el resto de los sectores sociales. Llevados más por la situación de derrumbe económico y de crisis de representación política que por decisión propia, las conducciones del movimiento social se transformaron en lo que Antonio Gramsci define como *intelectuales orgánicos* del campo popular. En este caso, son líderes que surgieron de la degradación de la sociedad salarial y del aumento explosivo del desempleo y la precariedad ocupacional. Con sus ideas, propuestas políticas y acciones de movilización callejera, contribuyen a organizar y otorgar orientación y sentido a las experiencias prácticas de los trabajadores desocupados que responden al llamado de las agrupaciones piqueteras.

Existe un factor que diferencia a ese segmento de dirigentes de sus propias bases sociales, en su mayoría se trata de líderes que simpatizan o se encuentran vinculados a partidos y organizaciones políticas de izquierda que sostienen posiciones “duras” frente al gobierno. Este dato constituye también un techo político, al estar ligados a fuerzas de izquierda que son relativamente marginales del resto de la sociedad

argentina, se dificulta la posibilidad de construir un nuevo horizonte simbólico y cultural que resulte incluyente y atractivo para los trabajadores ocupados y capas medias y suelen propiciar —sin buscarlo deliberadamente— las condiciones que generan el aislamiento del movimiento piquetero.

¿Estarán marcando los tiempos actuales el fin de la potencia creativa del movimiento de los trabajadores desocupados? ¿Habrán topado con una suerte de barrera imaginaria que puso límites estructurales al *horizontalismo como mecanismo para la toma de decisiones y al piquete como táctica de lucha*? Hay varias lecturas del fenómeno que es posible identificar con tres interpretaciones principales:

1. Para algunas corrientes de la izquierda el movimiento de los trabajadores desocupados constituye el embrión del nuevo sujeto revolucionario, su futuro y el final exitoso de su lucha, se ligan estrechamente a una perspectiva de tipo insurreccional y de contenido socialista. El nuevo “argentinazo”, ahora si victorioso y definitivo, cierra un ciclo histórico y cumple con el proyecto emancipador de liquidar las formas capitalistas de organización social.

2. Dentro del movimiento piquetero existe otro discurso que nace del mundo del cuestionamiento de la política y de la afirmación del “anti-poder”. Desde esta visión, se exalta la autonomía de los sujetos sociales y se entiende que las grandezas y potencialidades del movimiento de los desocupados radican en el fortalecimiento de su independencia y el repudio a los dispositivos institucionales de la democracia representativa. La consolidación y el desarrollo de las experiencias autogestionarias — desde la obtención de los servicios básicos en el barrio hasta la rehabilitación de las empresas recuperadas— constituye el núcleo a partir del cual se gesta un proceso de transformación social que pasa por la construcción de pequeños espacios de poder popular y no por el asalto al aparato del Estado. Esta corriente se alimenta en algunas de las formulaciones teóricas que sistematizó John Holloway en *Cambiar el mundo sin tomar el poder*.^{18/}

3. Existe otra perspectiva de interpretación teórica y política que sostiene la relevancia del movimiento piquetero como eje articulador de un bloque “contra-hegemónico” desde el cual se pueda impugnar la estrategia neoliberal. De acuerdo a este relato el movimiento de los trabajadores desocupados y en general, las nuevas expresiones de la protesta social —incluidas aquellas que no guardan una relación causal directa con el mundo del trabajo— deben ser entendidas como genuinas expresiones sectoriales de grupos sociales afectados por las transformaciones estructurales del capitalismo de los últimos treinta años. Sus demandas y planteos reivindicativos están cargados de particularidades que deben ser respetadas, pero su lucha tiene que articularse al conjunto de sectores explotados y, en este sentido, es necesario apuntarlo, la relación con el mundo del empleo formal, con las capas medias y con las estructuras sindicales, es todavía una asignatura pendiente. El movimiento piquetero logrará trascender en la medida en que su lucha genere algo más que simpatías y apoyos coyunturales en el resto de los grupos sociales. Diciembre de 2001 fue un momento cumbre de las capacidades que encierra una amalgama de fuerzas populares dispuestas a ocupar las calles e interpelar al Estado y al gran capital, aunque el espontaneísmo callejero también mostró sus debilidades y limitaciones, en este sentido, es posible afirmar que el saldo organizativo de esas jornadas fue raquítico en comparación con la magnitud de la rebelión social de esos días.

¿Se empantanó el movimiento de los trabajadores desocupados?, ¿Transitará, como la mayoría de los procesos sociales, de la euforia a la desilusión? ¿O estamos ante un impase transitorio que no agotó su dinamismo, sus potencialidades de movilización callejera y su capacidad innovadora? Nos inclinamos por esta última pregunta, sostenemos que es la segunda hipótesis la que nos puede conducir a encontrar respuesta para cada una de las tres dimensiones que se expusieron en capítulos anteriores: formular un programa con propuestas e ideas-fuerza que pueda responder a la crisis de la sociedad salarial y a la ofensiva generalizada de los grupos más

concentrados de la clase dominante; ajustar las formas organizativas a las cambiantes situaciones que se generan como resultado de la confrontación con el Estado y con sectores económicos y políticos conservadores que reclaman represión y mano dura y, por último, ofrecer alternativas al desconcierto que viven las dirigencias políticas y sociales aferradas, en muchos casos, a viejos paradigmas y referentes simbólicos que responden a una cultura política construida por otros actores sociales y para un país que ya no existe. Sobre estas tres dimensiones de la crisis tendrán que elaborar sus propuestas los movimientos de trabajadores desocupados para que el futuro no sea sólo un territorio poblado de incertidumbres, o parte de un relato cargado de utopías, tan atractivas como inalcanzables. Debe ser pensado también, como un objetivo esperanzador para millones de pobres y desempleados cuyo logro sea el resultado del triunfo de una voluntad colectiva y no de los contratiempos y coyunturas, siempre cambiantes, de variables económicas lejanas e incomprensibles para el hombre de a pié.

NOTAS

1/ Rossi, Federico M., “Las asambleas vecinales y populares en la Argentina: las particularidades organizativas de la acción colectiva contenciosa”, *Sociológica*, Año 20, Número 57, México, UAM-Azcapotzalco, enero-abril 2005

Di Marco, Graciela y Héctor Palomino, (compiladores), *Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina*, Buenos Aires, Jorge Baudino Ediciones-UNSAM, 2004

González Bombal, Inés (compiladora), *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argentina de la crisis*, Buenos Aires, CEDES, 2003

Di Marco, Graciela, Héctor Palomino, *et al*, *Movimientos sociales en la Argentina. Asambleas: La politización de la sociedad civil*, Buenos Aires, Jorge Baudino Ediciones-UNSAM, 2003

Hintze, Susana, (editora), *Trueque y economía solidaria*, Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento-Prometeo Libros, 2003; pp. 163-178

2/ La inscripción territorial como espacio de gestación de los nuevos movimientos sociales —incluidas las organizaciones de trabajadores desocupados— puede verse en: Merklen, Denis, *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (1983-2003)*, Buenos Aires, Editorial Gorla, 2005; “El nuevo repertorio de la acción colectiva: una movilización de base territorial”; pp. 43-72

Isman, Raúl, *Los piquetes de La Matanza*, Buenos Aires, Ediciones Nuevos Tiempos, 2004

Delamata, Gabriela, (compiladora), *Ciudadanía y territorio*, Buenos Aires, Espacio Editorial, 2005, pp. 105-155

Desde una perspectiva similar se expresa Adolfo Gilly, al referirse a una nueva masa de desposeídos y desplazados escribe: “Es una población que se apropia de la nueva realidad del desempleo, la desprotección, la precariedad y el hambre; una de cuya mezcla insólita entre lo heredado, lo perdido y lo vivido salen, no la pasividad [...] sino nuevas formas de autoactividad y organización *cuya sede principal es hoy el territorio y no la producción*: comités vecinales en El Alto de La Paz, *piqueteros* y organismos comunitarios en Argentina [...]; “Populismo radical: un sujeto político no identificado”, *La Jornada*, México, 1 de junio de 2004

^{3/} Almeyra, Guillermo, *La protesta social en la Argentina (1990-2004)*, Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2004, Capítulo 4. “La lenta construcción de los sujetos”; pp. 91-108

Bergel, Pablo, “Nuevas formas asociativas: asambleas vecinales y movimientos de trabajadores desocupados”, en González Bombal, Inés, *Nuevos movimientos... op. cit.*; pp. 81-110

^{4/} Grimson, Alejandro, “Piquetes en la ciénaga. Los bloqueos políticos de los cortes de ruta”, Revista *El Rodaballo*, Buenos Aires, Año X, Número 15, invierno 2004

“... de enero a diciembre de 2002 fue el período en el que más se protestó durante los últimos cinco años. En total, hubo 16 mil 965 manifestaciones de descontento [...] lo que da un promedio de casi 47 reclamos por día entre Ushuaia y La Quiaca”, *Clarín*, Buenos Aires, 11 de noviembre de 2003

Adamovsky, Ezequiel, “El movimiento asambleario en la Argentina: Balance de una experiencia”, Revista *El Rodaballo*, *op. cit.*

^{5/} Svampa, Maristella, “Relaciones peligrosas. Sobre clases medias, gobierno peronista y movimientos piqueteros”, Revista *El Rodaballo*, *op. cit.*

Godio, Julio, “Los movimientos piqueteros ante una seria disyuntiva política”, *Instituto Mundo del Trabajo*, www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas (Consulta; diciembre 2003)

^{6/} Svampa, Maristella, “Relaciones peligrosas. Sobre...” *op. cit.*

Clarín, “El gobierno jugó fuerte para respaldar a un sector piquetero”, Buenos Aires, 22 de junio de 2004

Clarín, “Entre la dispersión y el abstencionismo, los piqueteros siguen lejos de los votos”, Buenos Aires, 2 de octubre de 2005

^{7/} En el artículo citado Maristella Svampa define el período de auge del movimiento social como “tiempos extraordinarios” para diferenciarlo de la etapa de fragmentación y relativo declive de las organizaciones piqueteras que se inicia con la llegada de Kirchner al gobierno. Algunas notas de periódicos confirman

este momento de inflexión que tiene como punto de referencia las negociaciones y apertura de espacios que promueve el gobierno para dialogar con las organizaciones sociales. Ver “El rol de los líderes en la era K” y “El plan del gobierno para controlar a los piqueteros”, *Clarín*, Buenos Aires, 2 de noviembre de 2003

^{8/} Vales, Laura, “Acto contra la judicialización de la protesta social”, *Página 12*, Buenos Aires, 4 de noviembre de 2003

CELS, *El Estado frente a la protesta social 1996-2002*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003

Piqué, Martín, “Miles en contra de la criminalización”, *Página 12*, Buenos Aires, 5 de noviembre de 2003

^{9/} Svampa, Maristella, “Relaciones peligrosas. Sobre clases...”, *op. cit.*

Grimson, Alejandro, “Piquetes en la ciénaga...”, *op. cit.*

Fernández Moores, Lucio, “La caída del voto bronca les pegó...” *Clarín*, *op. cit.*

Jorquera, Miguel, “Los piqueteros K sean unidos”, *Página 12*, Buenos Aires, 28 de abril de 2006

Godio, Julio, “Posibles itinerarios socio-políticos...”, *Instituto Mundo del... op. cit.*

^{10/} Indagación del autor a partir de fuentes diversas: *Clarín* (varias fechas); *Página 12* (varias fechas); *Instituto Mundo del Trabajo* (consultas a la página www.mundodeltrabajo.org.ar)

Es necesario puntualizar que los datos que se citan son solo estimativos. La información se encuentra dispersa y con frecuencia el origen de la misma proviene de cálculos hechos por equipos que trabajan para los mismos medios o provienen de estudios de campo impulsados por instituciones académicas

^{11/} Auyero, Javier, *Clientelismo político. Las caras ocultas*, Buenos Aires, Claves para todos, 2004

----- *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*, Buenos Aires, Cuadernos Argentinos Manantial, 2001; Capítulo 5; pp. 165-196

Torres, Pablo, *Votos, chapas y fideos. Clientelismo político y ayuda social*, La Plata, Ediciones La Campana, 2002

^{12/} Piqué, Martín, “Los piqueteros electos”, *Página 12*, Buenos Aires, 30 de octubre de 2005

Lara, Rodolfo, “Un piquetero, jefe del bloque K en la provincia”, *Clarín*, Buenos Aires, 3 de diciembre de 2005. La nota del reportero se refiere a la designación del dirigente Fernando Navarro del MTD-Evita como jefe de la presidencia del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense.

En la Ciudad de Buenos Aires el intendente Jorge Telerman nombró como Coordinador del Área de Políticas Sociales Urbanas a Angel Borello, dirigente

piquetero del barrio de La Boca. Ver “Telerman sumó a un piquetero al Gabinete”, *Clarín*, Buenos Aires, 14 de junio de 2006

Jorquera, Miguel, “Los piqueteros K sean unidos”, *Página 12*, *op. cit.*

^{13/} Grimson, Alejandro, “Piquetes en la ciénaga. Los...” *op. cit.*

Svampa, Maristella, “Relaciones peligrosas...” *op. cit.* La autora describe el inicio del declive político de los MTD, al referirse al clima social creado en el año 2003, con el llamado a elecciones, apunta: “Pese al descrédito de los partidos tradicionales, una suerte de saturación frente a los cortes y manifestaciones callejeras, comenzó a reducir peligrosamente, una vez más, el umbral de tolerancia hacia las protestas sociales. El estado de la opinión pública, volátil pero siempre atento a la ecuación promesa/resultado, estaba cambiando”. p. 5

^{14/} Sidicaro, Ricardo, “El clientelismo es parte del sistema político”, *Página 12*, Buenos Aires, 18 de octubre de 2005

Clarín, “El largo brazo de intendentes y dirigentes piqueteros”, Buenos Aires, 11 de octubre de 2004

Javier Auyero plantea otro enfoque acerca del problema del clientelismo y sostiene que muchas de las críticas tienen el propósito de desviar la atención y justificar la reducción de los recursos destinados a los programas sociales. A nuestro entender esta lectura subestima la capacidad de cooptación del Estado y sobrevalora la autonomía de los sujetos sociales. Ver “Buscan cuestionar los planes”, *Página 12*, Buenos Aires, 13 de septiembre de 2005

^{15/} *Clarín*, “Suplemento Zona”, “Jaque a los piqueteros. El desafío de...” *op. cit.*

Página 12, “Los datos del piquete”, *op. cit.*

Algunos sectores de la dirigencia política perciben a los MTD como un riesgo para las instituciones que le dan sustento a la democracia representativa. Entre otras expresiones de esta interpretación del fenómeno piquetero ver: Neri, Aldo, “El piqueterismo no enriquece la democracia”, *Clarín*, Buenos Aires, 22 de junio de 2006. Este ex-ministro y legislador de la Unión Cívica Radical afirma: “[...] Cuando en los comienzos de esta gestión, el piqueterismo era todavía espontáneo, el gobierno mantuvo una conducta equilibrada, incluso resistiendo la impaciencia de sectores de opinión [...] Aparece ahora un gobierno que pide con débil autoridad, cordura a estas expresiones populares”.

^{16/} González, Cecilia, “Los piqueteros ¿listos para gobernar?”, Suplemento “Masiosare”, *La Jornada*, México, 19 de enero de 2003

Clarín, “Moyano, un eje en la estrategia contra los piqueteros duros”, Buenos Aires, 10 de diciembre de 2003

Diario *Hoy*, “Kirchner se reunió con piqueteros afines al gobierno”, La Plata, 5 de agosto de 2004

Piqué, Martín, “Los piqueteros electos”, *Página 12*, *op. cit.*

Jorquera, Miguel, “Los piqueteros K sean unidos”, *Página 12*, *op. cit.*

^{17/} Bleta, Atilio, “Crearon por decreto el organismo estatal que dirigirá el piquetero D’Elía”, *Clarín*, Buenos Aires, 18 de febrero de 2006. La nota se refiere a la creación de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social cuya titularidad fue asignada al dirigente de la FTV, Luis D’Elía

Otra incorporación relevante fue la de Emilio Pérsico, dirigente del MTD-Evita, designado vice-jefe del Gabinete del Gobernador Felipe Solá, *Clarín*, *op. cit.*

^{18/} Holloway, John, *Cambiar el mundo sin tomar el poder*, *op. cit.*; Capítulo 9; pp. 225-252

En una conferencia impartida en la ciudad de Bilbao, España, este autor expuso de manera didáctica algunas de sus ideas centrales. Al referirse a la construcción del poder desde espacios moleculares explica: “... debemos pensar en el capitalismo como una grieta en el tejido de la dominación capitalista; debemos pensar en el capitalismo como en un tejido y la negación, el rechazo, consiste en una grieta en el tejido de la dominación. Eso quiere decir, que la única forma de concebir la revolución es como intersticial, una revolución que se da en diferentes lugares, huecos del capitalismo”. Holloway, John, *¿Que es la revolución?*, Buenos Aires, www.lavaca.org/seccion/actualidad (Consulta; 17 de mayo de 2006)

“Enfocar las rebeldías en el Estado o en la conquista del poder estatal sería aceptar sus estructuras, adentrarse en su lógica de poder [...] Esto es, debilitar el movimiento, no fortalecerlo. El intento de cambiar el mundo a través del Estado es simplemente el intento de adaptar las fisuras creadas por la rebeldía a las

estructuras capitalistas, un intento de vaciar la rebeldía en moldes hechos para la reconciliación. El Estado [...] no es la forma adecuada para organizar la lucha contra el capitalismo". Holloway, John, "Poder y antipoder", en Albertani, Claudio (coordinador), *Imperio y movimientos sociales en la edad global*, México, Universidad de la Ciudad de México, 2004, p. 250

ANEXO I

República Argentina Mapa político-En colores las Provincias de Neuquén y Salta



ANEXO II

**Organizaciones de Trabajadores Desocupados
(Nombres y Siglas)**

Agrupación “Martín Fierro”
Agrupación “Envar El Kadri”
Movimiento Barrios de Pie
Corriente Clasista y Combativa (CCC)
Corriente “Patria Libre” (Patria Libre)
Coordinadora de Trabajadores Desocupados “Aníbal Verón” (CTD-Aníbal Verón)*
Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa)
Frente de Desocupados Unidos (FDU)
Frente Barrial “19 de Diciembre”
Frente de Desocupados “Eva Perón”
Frente de Trabajadores Combativos (FTC)
Federación Tierra y Vivienda (FTV)
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)
Movimiento Sin Trabajo La Matanza (MST-La Matanza)**
Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” (MST-Teresa Vive)
Movimiento de Trabajadores Desocupados “Aníbal Verón” (MTD-Aníbal Verón)***
Movimiento de Trabajadores Desocupados “Evita” (MTD-Evita)
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Itzaingó (MTD de Itzaingó)
Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Boca (MTD-La Boca)
Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Florida (MTD-La Florida)
Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza (MTD-La Matanza)
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Mataderos (MTD-Mataderos)
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Moreno (MTD-Moreno)
Movimiento de Trabajadores Desocupados “Resistir y Vencer” (MTD-Resistir y Vencer)

Movimiento Territorial de Liberación (MTL)

Movimiento “Teresa Rodríguez” (MTR)

Movimiento de Unidad Popular (MUP)

Polo Obrero (PO)

Unión de Trabajadores Desocupados (UTD)

Unión de Trabajadores Desocupados y Ocupados (UTDO)

Unión de Trabajadores en Lucha (UTL)

Fuente: Elaboración propia a partir de información citada en periódicos, revistas, estudios académicos y libros de diversos autores

* Bajo la sigla “CTD” se incluyen diversas agrupaciones piqueteras de distintas localidades que se presentan con un nombre común

** La sigla MST suele ser utilizada por distintas organizaciones de desocupados que por lo general, agregan el nombre del municipio o localidad

*** Incluye a los MTD de diversas provincias, municipios, barrios y localidades, no siempre coincidentes en sus propuestas pese a identificarse con la misma sigla

ANEXO III

Empresas Recuperadas (2001-2004)
Nombre, Actividad y Localización Geográfica

Aurora Grundig, electrónica, Ushuaia, Tierra del Fuego
Brukman Confecciones, industria del vestido, Capital Federal
Zanón, cerámica, provincia de Neuquén
Sasetru, alimentación, Avellaneda, provincia de Buenos Aires
25 de Mayo, silos para cereales y máquinas hidráulicas, Quilmes, provincia de Buenos Aires
Adabor, metalúrgica, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires
Cooperativa Textil de Trabajo Limitada (ex-Hilandería de Berisso), producción de gasa sanitaria, Berisso, provincia de Buenos Aires
Cooperativa 26 de Septiembre, desarrollo de sistemas, auditoría de programas, capacitación en informática, Capital Federal
Cooperativa 19 de Diciembre (ex ISACO), metalúrgica, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires
El Trabajo Obrero, almacenamiento de productos líquidos, Capital Federal
La Nueva San Remo, textil, Lanús Este, provincia de Buenos Aires
Cooperativa 11 de Noviembre (ex Pen Control), frigorífico ovino, San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires
Alimentaria Gualeguay (ex Romagnolo), pastas, Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos
Artes Gráficas El Sol (ex Valero), industria gráfica, Capital Federal
Bar Kanter, restaurante, Rosario, provincia de Santa Fe
Calzados La Unión, Villa Cañás, provincia de Santa Fe
Bimetal, fábrica de llantas, Rosario, provincia de Santa Fe
Clínica La Portuguesa (ex Clínica Portuguesa), servicios de salud, Capital Federal
Cooperativa Bauen (ex Hotel Bauen), hotelería y gastronomía, Capital Federal

Cañareense (ex La Helvética), acoplados para camiones, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe

Crometal (ex Acrow), metalúrgica, Berazategui, provincia de Buenos Aires

Cooperativa de Pescadores Sur, procesamiento de carne de pescado, Rosario, provincia de Santa Fe

Cooperativa de Pescadores Zárate, procesamiento de carne de pescados, Zárate, provincia de Buenos Aires

Medrano (ex Sanatorio Evangelista), servicios de salud, Capital Federal

Cooperpac (ex Mas envases), talleres gráficos, Capital Federal

Cooperativa de Trabajadores Avícolas, frigorífico avícola, San Lorenzo, provincia de Buenos Aires

Herramientas La Unión, metalúrgica, Rosario, provincia de Santa Fe

Metalúrgica Las Varillas (ex Zanello), maquinarias agrícolas, Las Varillas, provincia de Córdoba

Unión Papelera Platense (ex-Papelera San Jorge), venta de papel al mayoreo, La Plata, provincia de Buenos Aires

Monte Castro, productos lácteos, Capital Federal

Cooperativa Diógenes Taborda, textil, Capital Federal

Cooperativa Fénix, metalúrgica, Lanús, provincia de Buenos Aires

Ferrovial Laguna Paiva, reparación de vagones ferroviarios de carga, Laguna Paiva, provincia de Santa Fe

Indecar Roldán, fábrica de camiones cisterna, Ruta 9 y Ruta A12, provincia de Santa Fe

Instituto Comunicaciones, educación, Capital Federal

J.J. Gómez (ex Fricader), lanas, General Roca, provincia de Río Negro

La Esperanza, lácteos, La Playosa, provincia de Córdoba

Obrera Gráfica Campichuelo, gráfica, Capital Federal

Obreros del Cuero, curtiembre, Lanús Este, provincia de Buenos Aires
Patricios (ex Conforti), gráfica, Capital Federal
Química del Sur, química, Berazategui, provincia de Buenos Aires
San Francisco Javier, molino de arroz, San Javier, provincia de Buenos Aires
Cooperpel Envases, envases industriales, Capital Federal
Cotravesa, autopartes, balancines, Quilmes, provincia de Buenos Aires
Artes Gráficas Chilavert, gráfica, Capital Federal
Delta Rivera, alimenticia, Ruta 22 km 48, provincia de Buenos Aires
Galaxia, extractores de aire, toalleros, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires
General Mosconi, rehabilitación de cilindros de GLP, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires
La Esperanza (ex Grisinópolis), panadería, Capital Federal
Efa, alimenticia, Quilmes, provincia de Buenos Aires
El Aguante (ex Panificación Cinco S:A.), alimenticia, Carapachay, provincia de Buenos Aires
El Diario, periodismo, gráfica, Villamaría, provincia de Córdoba
El esfuerzo y la confianza, carga y descarga, Quilmes, provincia de Buenos Aires
El Petróleo, transporte de pasajeros, provincia de Neuquén
Fader, compresores, Ródano, provincia de Santa Fe
Forja San Martín, metalurgia (autopartes), Villa Bonich, San Martín, provincia de Buenos Aires
Fundifer, fundición de hierro, Quilmes, provincia de Buenos Aires
Gráfico, gráfica, San Martín, provincia de Buenos Aires
IMPA, metalúrgica, Capital Federal
La Láctea, leche fresca, derivados, quesos, Diego de Alvear, provincia de Santa Fe
La Patagonia (ex Zanella Mar), alimenticia, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
La Vasquita, láctea, Marcos Paz, provincia de Buenos Aires

Mecber, autopartes, Berazategui, provincia de Buenos Aires
Metal Varela, metalúrgica, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires
Cooperativa de Trabajo Clínica del Niño (ex-Clínica del Niño), servicios de salud, La Plata, provincia de Buenos Aires
Mil Hojas, pastas frescas, Rosario, provincia de Santa Fe
Polimec, autopartes y plásticos metalmecánicos, Quilmes, provincia de Buenos Aires
Santa Elena (ex Vizental), frigorífico, Santa Helena, provincia de Entre Ríos
Unidos por el Calzado, calzado, San Martín, provincia de Buenos Aires
Vitrofin, vidrio, Cañada de Gómez, provincia de San Fe
Taximetristas 25 de Mayo, servicio de transporte, La Plata, provincia de Buenos Aires
Viniplast, telas plásticas para tapicería, Capital Federal
Vinil Plast, plástico, Quilmes, provincia de Buenos Aires
Cantera SIMES, Victoria, provincia de Entre Ríos
Cooperativa de Trabajo Obrero de Tolosa (ex-Frigorífico El Tolosano), producción de carne y embutidos, Tolosa, provincia de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los diarios *Clarín* y *Página 12* (varias fechas) y de la lista del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Faltan algunos establecimientos que quedaron bajo control obrero durante el segundo semestre de 2004 y 2005

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Abós, Alvaro, *La columna vertebral. Sindicatos y peronismo*, Buenos Aires, Legasa, 1984

Acevedo López, Guadalupe y Adrián Sotelo, *Reestructuración económica y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI Editores, 2004

Acta Sociológica, “Nuevos Sujetos Sociales”, México, Num. 2, FCPyS-UNAM, mayo-agosto 1990

Adamovsky, Ezequiel, “El movimiento asambleario en la Argentina: Balance de una experiencia”, Revista *El Rodaballo*, Buenos Aires, Año X, Num. 15, Invierno 2004

Aglietta, Michel, *Regulación y Crisis del Capitalismo*, México, Siglo XXI Editores, 1982
Ajuste y Deuda Social. Un Enfoque Estructural, Santiago de Chile, OIT-PREALC, 1988

Albertani, Claudio, (coordinador), *Imperio y movimientos sociales en la edad global*, México, Universidad de la Ciudad de México, 2004

Alfaro, María Inés, “Los trabajadores citrícolas en Tucumán: las condiciones para la protesta social”, en Giarracca, Norma, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001

Almeyra, Guillermo, “Autonomía Indígena y Estado Democrático”, México, *La Jornada*, 23 de noviembre de 2003

-----, "Las fábricas *recuperadas* y la autogestión, México, *La Jornada*, 7 y 14 de diciembre de 2003

-----, "Las fábricas *ocupadas* y la autogestión", México, *La Jornada*, 21 de diciembre de 2003

-----, *La protesta social en la Argentina (1990-2004)*, Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2004

Amato, Alberto, et al, "Piqueteros", *Clarín*, Buenos Aires, 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2002

Amir, Samin, *Postfordismo*, Oxford: Blackwell, 1994

Aoyama, Yuko y Manuel Castells, "Hacia la Sociedad de la Información. Estructura del Empleo en los países del G-7 de 1920 a 1990", Ginebra, OIT, *Revista Internacional del Trabajo*, Num. 1, Vol. 113, 1994

Aristizábal, Zulema e Inés Izaguirre, *Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990

Auyero, Javier, *Clientelismo político. Las caras ocultas*, Buenos Aires, Claves para Todos, 2004

-----, *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*, Buenos Aires, Cuadernos Argentinos Manantial, 2001

-----, "Buscan cuestionar los planes", *Página 12*, Buenos Aires, 13 de septiembre de 2005

Baca, Laura, et. al., (comps.) *Léxico de la Política*, México, FCE-FLACSO-SEP-CONACYT-Fundación H. Bill, 2000

Barbetta, Pablo y Karina Bidaseca, "Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Emergencia discursiva o nueva subjetividad?" en *Revista Argentina de Sociología*, Año 2, Num. 2, Buenos Aires, mayo-junio 2004

----- Bidaseca, Karina, "Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001, *op. cit.*

Barbetta, Pablo y Pablo Lapegna, "Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño", en Giarracca, Norma y colaboradores, *op. cit.*

Basualdo, Eduardo, *Sistema Político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, UNQ-FLACSO-IDEF, 2002

-----*Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros*, Buenos Aires, UNQ-FLACSO-IDEF, 2000

Battistini, Osvaldo (compilador), *El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los proceso de construcción identitaria de los trabajadores*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004

Bayón, Cristina, et al, "Vulnerabilidad social en la Argentina de los años noventa: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires", en Katzman, Rubén y Guillermo Wormald, (Coordinadores), *Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Cedro, Montevideo, 2002

Bergel, Pablo, "Nuevas formas asociativas: asambleas vecinales y movimientos de trabajadores desocupados", en González Bombal, Inés, *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argentina de la crisis*, Buenos Aires, CEDES, 2003

Bialakowsky, Alberto, Raquel Partida, et al, *Trabajo y Capitalismo entre siglos en Latinoamérica*, México, Universidad de Guadalajara, 2005.

Bidaseca, Karina y Daniela Mariotti, "Viejos y nuevos actores en la protesta rural en la Argentina", en Giarracca, Norma y colaboradores, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001

Bielsa, Rafael, et.al, *Qué son las asambleas populares*, Buenos Aires, Peña Lillo-Ediciones Continente, 2002

Biffi, Pablo, "Juicio del Siglo en Ecuador: los indígenas contra Texaco", *Clarín*, Buenos Aires, 23 de octubre de 2003

Bleichmar, Silvia, *Dolor País*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2002

Bleta, Atilio, "Crearon por decreto el organismo estatal que dirigirá el piquetero D'Elia", *Clarín*, Buenos Aires, 18 de febrero de 2006

Blumer, Herbert, "Social Movements", en *New Outline of the Principies of Sociology*, editado por Alfred Lee, Nueva York, Barnes and Noble, 1951

Boccanera, Jorge, "La unidad debe pasar al marco revolucionario" entrevista a Carlos Santillán, Revista *Lote*, Num. 63, Venado Tuerto, Argentina, octubre 2002

Bonasso, Miguel, *El Palacio y la Calle*, Buenos Aires, Planeta, 2002

Borzeix, Anni, "La Sociología del Trabajo y el Lenguaje", México, ALSTRA, *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, Año 2, Num. 4, 1996

Bosoer, Fabián, et al, *El sindicalismo en tiempos de Menem*, Buenos Aires, Editorial Corregidor, 1999

Boyer, Robert, *La Flexibilización del Trabajo en Europa*, Madrid, Ministerio del Trabajo, 1989

Braverman, Harry, *Trabajo y Capital Monopolista*, México, Nuestro Tiempo, 1974

Bustelo, Eduardo y Alberto Minujín (Editores), *Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes*, Bogotá, UNICEF-Santillana, 1998

Cafassi, Emilio, *Olla a presión*, Buenos Aires, Libros del Rojas, UBA, 2002

Calderón, Fernando (compilador), *Los Movimientos Sociales ante la Crisis*, Buenos Aires, UNU-CLACSO-UNAM, 1986

Campillo, Marcia y Enrique de la Garza, “¿Hacia donde va el Trabajo Humano?”, Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 157, septiembre-octubre 1998

Candia, José Miguel, “América Latina hacia el Siglo XXI: Globalización económica y reforma laboral”, en *Estudios Latinoamericanos*, Año VI, Num. 11, México, CELA-UNAM, enero-junio 1999

----- “América Latina: crisis del trabajo y nuevas formas de representación popular”, en Acevedo López, Guadalupe y Adrián Sotelo, *Reestructuración económica y desarrollo en...*, op.cit

Canto, Manuel, et al, (comp.), *Reforma del Estado y Políticas Sociales*, México, UAM-Xochimilco, 1994

Cardarelli, Graciela y Mónica Rosenfeld, *Las Participaciones de la Pobreza. Programas y Proyectos Sociales*, Buenos Aires, Paidós, 1998

Castel, Robert, “Trabajo y utilidad para el mundo”, Ginebra, OIT, *Revista Internacional del Trabajo*, Num. 6, Vol. 115, 1996

----- “La lógica de la exclusión”, en Bustelo, Eduardo y Alberto Minujin (Editores), *Todos entran. Propuesta para...*, op. cit.

Castells, Manuel y Yuko Aoyama, “Hacia la Sociedad de la Información. Estructura...”, Ginebra, OIT, *Revista...* op. cit.

Cavarozzi, Marcelo, "América Latina Contemporánea: Erosión del Estado y devaluación de la Política", en Canto, Manuel y Pedro Moreno (comp.), *Reforma del Estado y Políticas Sociales*, México, UAM-Xochimilco, 1994

Cieza, Daniel (compilador), *La encrucijada del desempleo ante el Tercer Milenio*, La Plata, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 1999

----- De la cultura del trabajo al malestar del desempleo, La Plata, CREALC-CED-Universidad Nacional de La Plata, 2000

Clarín, Buenos Aires (diario; varias fechas)

Cohen, Jean, "Strategy or identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements", *Review of Social Research*, New York, New School of Social Research, Vol. 52, Num. 4, 1985

----- "Teoría de los movimientos sociales", en *Cuadernos de Ciencias Sociales*, Num. 17, San José de Costa Rica, FLACSO, 1988

Conti, Rodrigo A., et al, *Piqueteros. Una mirada histórica*, Buenos Aires, Astralib, 2003

Cotarelo, Celia, et al, "Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares", en Seoane, José (compilador), *Movimientos Sociales y conflicto en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-OSAL, 2004

Cross, Cecilia, “La Federación de Tierra y Vivienda de la CTA: el sindicalismo que busca representar a los desocupados”, en Battistini, Osvaldo (compilador), *El trabajo frente al espejo...*, op. cit.

Charry, Clara Inés, et al, (comp.), *Globalización y sociedad civil en las Américas*, México, UAM-Juan Pablos, 2004

Cheresky, Isidoro, “Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto”, Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 179, mayo-junio 2002

Dalton, Russell y Manfred Kuechler (compiladores), *Los Nuevos Movimientos Sociales*, Valencia, Generalitat Valenciana, 1992

Danani, Claudia, “Condiciones y prácticas sociopolíticas en las políticas sociales; las obras sociales, más allá de la libre afiliación”, en Lindenboim, Javier y Claudia Danani, *Entre el trabajo y la política*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003

De la Garza, Enrique, et al, “¿Hacia dónde va el Trabajo Humano?”, Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 157, op. cit.

----- *Un paradigma para el análisis de la clase obrera*, México, UAM-Iztapalapa, 1990

----- *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO – Colección Grupos de Trabajo, 2005

Delamata, Gabriela, "De los estallidos provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas", Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 182, noviembre-diciembre 2002

----- (compiladora), *Ciudadanía y Territorio*, Buenos Aires, Espacio Editorial, 2005
 Delfini, Marcelo y Valentina Picchetti, "De la fábrica al barrio y del barrio a las calles", en Battistini, Osvaldo, *El trabajo frente...* op. cit.

Di Marco, Graciela, Héctor Palomino, et al, *Movimientos sociales en la Argentina. Asambleas: La politización de la sociedad civil*, Buenos Aires, Jorge Baudino Ediciones-UNSAM, 2003

Eckstein, Susan (coord.), "Poder y Protesta Popular en América Latina", en *Poder y Protesta Popular*, México, Siglo XXI Editores, 2001

Eisenstadt, S.N., *Modernización. Movimientos de protesta y cambio social*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1972

Eisinger, Peter, "The Conditions of Protest Behavior in American Cities", en *American Political Science Review*, 1973; citado por Ligia Tavera Fenollosa, "Movimientos Sociales", en Baca, Laura, et al, (comps.), *Léxico de la Política*, op. cit.

El Día, La Plata, (periódico; varias fechas)

Fajn, Gabriel, *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social autogestión y rupturas en la subjetividad*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2003

Farinetti, Marina, "La conflictividad social después del movimiento obrero", Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 182, op. cit.

Favaro, Orietta, "La dinámica política y la conformación del poder en Neuquén", en *Cuadernos del CISH*, Num. 5, La Plata, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, 1999

----- "Protesta social y representación en las provincias argentinas: Neuquén en la última década", en Seoane, José (compilador), *Movimientos sociales...* op. cit.

Fernández Moores, Lucio, "La caída del voto bronca les pegó duro a los piqueteros", *Clarín*, Buenos Aires, 29 de abril de 2003

Fernández, Arturo, *Flexibilización Laboral y crisis del sindicalismo*, Buenos Aires, Espacio Editorial, 1998

Ferrara, Francisco, *Más allá del corte de rutas*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2003

Ferreyra, Pilar, "Señales en las rutas argentinas", Suplemento "Zona", *Clarín*, Buenos Aires, 24 de junio de 2001

Filgueira, Carlos, "Bienestar y ciudadanía. Viejas y nuevas vulnerabilidades", en Tokman, Víctor y Guillermo O'Donnell, *Pobreza y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1999

Fleury, Sonia, "Ciudadanías, exclusión y democracia", Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 193, septiembre-octubre 2004

Forrester, Viviane, *El horror económico*, México, FCE, 1997

Giarracca, Norma y colaboradores, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001

Gilio, Esther, "Jorge Jara y Andrés Fernández, piqueteros del MTD. El poder se construye", *Página 12*, Buenos Aires, 14 de octubre de 2002

Gilly, Adolfo, "De piquetes y otros sujetos", *La Jornada*, México, 19 de septiembre de 2004

----- "Populismo radical: un sujeto político no identificado", *La Jornada*, México, 1 de junio de 2004

Girardo, Cristina, "Las organizaciones de la sociedad civil de y para jóvenes en el contexto de la globalización", en Montero, Delia y Clara Inés Charry (comp.) *Globalización y sociedad civil en...* op. cit.

Godio, Julio, *Argentina: en la crisis está la solución*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002

----- y Alberto Robles, "Observatorio del movimiento sindical argentino", en Revista *Pistas*, Instituto Mundo del Trabajo, Num. 3, Buenos Aires, (Consulta; febrero 2001); página web www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas

----- *La recuperación de empresas por los trabajadores en Argentina*, Buenos Aires, Instituto Mundo del Trabajo, www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas, (Consulta; marzo 2004)

----- *Los movimientos piqueteros ante una seria disyuntiva política*, Instituto Mundo del Trabajo, Buenos Aires, www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas (Consulta; diciembre 2003)

----- *Posibles itinerarios socio-políticos de los dirigentes piqueteros*, Instituto Mundo del Trabajo, Buenos Aires, www.mundodeltrabajo.org.ar/Pistas, (Consulta; septiembre 2003)

González Bombal, Inés (compiladora), *Nuevos movimientos sociales y ONGs en la Argentina de la crisis*, Buenos Aires, CEDES, 2003

González, Cecilia, “Los piqueteros ¿listos para gobernar?”, Suplemento “Masiosare”, *La Jornada*, México, 19 de enero de 2003

González, Mariana, “Transformaciones de hecho y de derecho en las relaciones laborales en los 90s”, en Lindenboim, Javier y Claudia Danani (coordinadores), *Entre el trabajo...*, op. cit.

Gorz, André, *Adios al proletariado*, Barcelona, El Viejo Topo, 1982

----- *Misérias del presente. Riqueza de lo posible*, Buenos Aires, Paidós, 1998

Grimson, Alejandro, "Piquetes en la ciénaga. Los bloqueos políticos de los cortes de ruta", Revista *El Rodaballo...*, op.cit

Grondona, Mariano, "Cómo y cuándo volverá el justicialismo", *La Nación*, Buenos Aires, 28 de octubre de 2001

Grupo Estudios Rurales (Instituto Gino Germani-UBA), "El encuentro por la tierra, la vivienda, el hábitat y el desarrollo. Una plaza, muchos países", en Giarracca, Norma, *La protesta social en...*, op. cit.

Guagnini, Lucas, et al, "Piqueteros", *Clarín*, Buenos Aires, op. cit.

Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon Press, 1984

----- *Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío*, Buenos Aires, Amorrortu, 1989

Handy, Charles, *El Futuro del Trabajo Humano*, Buenos Aires, Editorial Ariel, 1987

Hardt, Michael y Antonio Negri, *Labor of Dionysus*, Minnessota, University of Minnessota Press, 1994

Hauser, Irina, "Las empresas recuperadas quieren una ley marco", *Página 12*, Buenos Aires, 11 de noviembre de 2003

Heller, Pablo, *Fábricas ocupadas*, Buenos Aires, Ediciones Rumbos, 2004

Hintze, Susana, (editora), *Trueque y economía solidaria*, Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento-Prometeo Libros, 2003

Holloway, John, *Cambiar el mundo sin tomar el poder*, Buenos Aires, Colección Herramienta-UAP, 2002

----- ¿Qué es la revolución?, Buenos Aires, www.lavaca.org/seccion/actulidad
(Consulta; 17 de mayo de 2006)

Hoy, La Plata, (diario; varias fechas)

Hyman, Robert y W. Streeck, (editores), *New Technology and Industrial Relations*, Oxford Basic Blackwell, 1988

Iñigo Carrera, Nicolás y Celia Cotarelo, “Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso...” op. cit.

Iriarte, Alicia, (compiladora), *La Argentina fragmentada. Aspectos de la nueva cuestión social*, Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2003

Isman, Raul, “El movimiento de los piqueteros: o se corta la ruta o se corta la esperanza”, en Iriarte, Alicia (compiladora), *La Argentina fragmentada...* op. cit.

Izaguirre, Inés y Zulema Aristizábal, *Las tomas de tierras en la zona sur...*, op. cit.

James, Daniel, *Resistencia e Integración*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999

Jorquera, Miguel, "Los piqueteros K sean unidos", *Página 12*, Buenos Aires, 28 de abril de 2006

Jurgens, U., "Shaping the Future of Work", Londres, *British Journal of Industrial Relations*, Num. 33, Vol. 4, diciembre de 1995

Katz, H. C. y Charles Sabel, "Industrial Relations and Industrial Adjustment in the Car Industry", *Industrial Relations* 24-2, 1985

Katzman, Rubén y Guillermo Wormald, (coordinadores), *Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina*, Montevideo, Cedro, 2002

Kliksberg, Bernardo, "Repensando el Estado para el Desarrollo Social. Más allá de dogmas y convencionalismos", en *Gestión y Política Pública*, Num. 2, Vol. VII, México, CIDE, 1998

Kohan, Aníbal, *A las calles*, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2002

Kuechler, Manfred, et al, (compiladores). *Los Nuevos Movimientos Sociales*, op. cit.

La Nación, Buenos Aires, (diario; diversas fechas)

Laclau, Ernesto, "El nuevo progresismo", en Revista *El Caminante*, Num. 1, Buenos Aires, mayo 1995

Landi, Oscar, "Ese Estado, gris de ausencia", Suplemento "Zona", *Clarín*, Buenos Aires, 3 de junio de 2001

Lapegna, Pablo, et al, "Cuando la protesta toma forma: los cortes de ..." en Giarracca, Norma, *La protesta social en la...*, op. cit.

Lara, Rodolfo, "Un piquetero, jefe del bloque K en la provincia", *Clarín*, Buenos Aires, 3 de diciembre de 2005

Laurell, Cristina (coordinadora), *Estado y políticas sociales en el neoliberalismo*, México, Fundación F. Ebert, 1993

----- y Luisa Mussot, "El Empleo y los nuevos modelos de relaciones laborales y del Seguro Social", en Daniel Cieza (comp.), *La encrucijada del desempleo ante...* op. cit.

Linares, Martín, "Trabajar sin amos: De la utopía al acto", *Excélsior*, México, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2003

Lindenboim, Javier (compilador), *El Desafío del Empleo a finales del Siglo XX*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, Cuadernos del CEPED, Num. 2, 1999

Lipietz, Alain, "Acumulación, crisis y salidas a la crisis: Algunas reflexiones metodológicas en torno a la noción de regulación", en *Estudios Sociológicos*, Vol. 4, Num. 11, México, El Colegio de México, mayo-agosto, 1986

Lobato, Mirta y Juan Suriano, *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, F.C.E., 2003

----- *La vida en las fábricas*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2001

López Echagüe, Hernán, *La política está en otra parte*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2002

Lozano, Claudio, “Mercado de trabajo y política económica. Perspectivas”, en Lindenboim, Javier (compilador), *El Desafío del Empleo a finales del Siglo XX...*, op. cit.

Lucita, Esteban, “Cortando rutas, abriendo nuevos senderos. Desocupados, ocupados, piqueteros, viejas y nuevas formas de lucha”, en *Cuadernos del Sur*, Num. 32, Buenos Aires, noviembre 2001

Magnani, Esteban, *El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2003

Mallet, Sergio, *La nueva clase obrera*, Madrid, Tecnos, 1972

Mallimaci, Fortunato y Agustín Salvia, *Los nuevos rostros de la marginalidad*, Buenos Aires, UBA-Editorial Biblos, 2005

Mandel, Ernest, *Sobre la historia del movimiento obrero*, Barcelona, Fontamara, 1979

Mariotti, Daniela, et al, “Viejos y nuevos actores en la protesta rural...”, en Giarracca, Norma, op. cit.

Martínez, Enrique, "Recuperar el trabajo común", Buenos Aires, *Instituto Nacional de Tecnología Industrial* (INTI), www.inti.gov.ar, (Consulta; noviembre de 2004)

Martucelli, Danilo y Maristella Svampa, *La plaza vacía*, Buenos Aires, Editorial Losada, 1997

Masseti, Astor, *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*, Buenos Aires, Editorial de las Ciencias-FLACSO, 2004

Mattick, Paul, et al, *Los consejos obreros y la cuestión sindical*, Madrid, Castellote Editor, 1979

Mazzeo, Miguel, *Piqueteros. Notas para una tipología*, Buenos Aires, Manuel Suárez Editor, 2004

McClintock, Cynthia, "La rebelión de Sendero Luminoso: Orígenes y trayectoria", en Susan Eckstein, *Poder y Protesta Popular*, México, Siglo XXI Editores, 2001

Meda, Dominique, "El valor trabajo visto en perspectiva", Ginebra, OIT, *Revista Internacional del Trabajo*, Num. 6, Vol. 115, 1996

Melucci, Alberto, "El conflicto y la regla: Movimientos sociales y sistemas políticos", en *Sociológica*, Num. 28, México, UAM-Azcapotzalco, mayo-agosto 1995

----- "Las teorías de los movimientos sociales", *Revista Estudios Políticos*, Num. 4-1, Vol. 4-5, México, FCPyS- UNAM, 1986

Merklen, Denis, "Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires", en *Nueva Sociedad*, Num. 149, Caracas, mayo-junio 1997

Meyer, Adriana, "Es posible vivir sin patrón", *Página 12*, Buenos Aires, 21 de septiembre de 2004

----- "Ya producimos sin peligro de quiebra", *Página 12*, Buenos Aires, 8 de diciembre de 2003

Minujin, Alberto, et al, *Todos entran. Propuesta para sociedades...*, op. cit.

Montero, Delia, et al, (compiladoras), *Globalización y sociedad civil en...*, op. cit.

Montoya, Silvia, "Mercado de trabajo y política económica. Perspectivas" en Lindenboim, Javier (comp.), *El Desafío del empleo a finales...* op. cit.

Moore, Barrington, *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, México, UNAM, 1989

Morales, Evo, "Bolivia, el poder del pueblo", Buenos Aires, *Página 12*, 4 de noviembre de 2003

MTD de Solano y Colectivo Situaciones, *Más allá de los piqueteros*, Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano, 2002

Mussot, Luisa, et al, "El empleo y los nuevos modelos de relaciones laborales ...", en Daniel Cieza (comp.), *La encrucijada del desempleo...*, op. cit.

Negri, Antonio, et al, *Labor of Dionysus*, Minnessota, University of Minnessota Press, 1994

Neri, Aldo, "El piqueterismo no enriquece la democracia", *Clarín*, Buenos Aires, 22 de junio de 2006

Nun, José, "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal", Buenos Aires, *Revista Latinoamericana de Sociología*, Num. 2, Vol. V, 1969; (también puede consultarse en Nun, José, *Marginalidad y Exclusión Social*, Buenos Aires, F.C.E., 2001)

O'Donnell, Guillermo y Víctor Tokman, *Pobreza y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Paidós, 1999

Offe, Clauss, *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, México, Conaculta-Alianza Editorial, 1990

----- *Disorganised Capitalism*, Cambridge: Polity Press, 1985

Ominami, Carlos y Carlos Pérez, (compiladores), *La tercera revolución tecnológica*, Buenos Aires, Paidós, 1987

Organización Internacional del Trabajo, (OIT), *El Empleo en el Mundo; Tendencias Mundiales del Empleo; OIT Informa* (diversos años)

Orsatti, Alvaro, et al, (compiladores), *El sector informal en América Latina*, México, Fundación Naumann-CIDE, 1991

Ortiz, Osvaldo, "Inquietud por la quiebra de Zanón", *Clarín*, Buenos Aires, 14 de agosto de 2005

Página 12, Buenos Aires, (diario; varias fechas)

Palomino, Héctor, "Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal en Argentina", en Enrique de la Garza (compilador), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina...*, op.cit.

----- y Graciela Di Marco (compiladores), *Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina*, Buenos Aires, Jorge Baudino Ediciones-UNSAM, 2003

Pannekoek, Antón, et al, *Los consejos obreros y la cuestión...*, op. cit.

Parsons, Talcott, *El Sistema Social*, Madrid, Alianza Editorial, 1988

Peñalva, Susana, et al, (compiladores), *Desempleo estructural, pobreza y precariedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996

Pereyra, Sebastián y Maristella Svampa, *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003

Pérez, Carlos y Carlos Ominami, (compiladores), *La tercera revolución...*, op. cit.

Petruccelli, Ariel, *Docentes y piqueteros. De la huelga de ATEN a la pueblada de Cutral-Có*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2005

Picchetti, Valentina, et al, "De la fábrica al barrio y del barrio..." en Battistini, Osvaldo, *El trabajo frente...*, op. cit.

Piqué, Martín, "Miles en contra de la criminalización", *Página 12*, Buenos Aires, 5 de noviembre de 2003

Piqueteros Mosconi. Cortando las rutas del petróleo, Buenos Aires, Ediciones Madres de la Plaza de Mayo-América Libre, 2006

Piva, Adrián, "La década perdida. Tendencias de la conflictividad obrera frente a la ofensiva del capital (1989-2001)", en *Cuadernos del Sur*, Num. 32, op. cit.

Portella de Castro, Silvia, et al, (coordinadores), *Sindicalismo y globalización. La dolorosa inserción en un mundo incierto*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1998

Programa de empleo transitorio. La experiencia de Barrios Bonaerenses, La Plata, Proyecto ARG 97/037, PNUD, 1999

Quijano, Aníbal, *Polo marginal y mano de obra marginalizada*, Santiago de Chile, CEPAL, 1971

Rebón, Julián, *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2004

----- e Ignacio Saavedra, *Empresas recuperadas, la autogestión de los trabajadores*, Buenos Aires, Claves para Todos, 2006

Reguillo Cruz, Rossana, *Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2000

Revelli, Marco, "Cultura e intersticio", *Oltre il Novecento*, Turín, Einaudi, 2001; www.reforma.com, (Consulta; diciembre de 2002)

Rifkin, Jeremy, *El fin del trabajo*, México, Paidós, 1996

Robles, Alberto, et al, "Observatorio del movimiento sindical argentino", op. cit.

Rodríguez, Esteban, "Encapuchados, taparse el rostro para tener un rostro", en Revista *Lote*, Venado Tuerto, Argentina, Num 62, Año VI, septiembre 2002

Rofman, Alejandro, et al, (compiladores), *Desempleo estructural, pobreza y precariedad, ...*, op. cit.

Rosenfeld, Mónica, et al, *Las participaciones de la pobreza. Programas...*, op. cit.

Rossi, Federico M., "Las asambleas vecinales y populares en la Argentina: las particularidades organizativas de la acción colectiva contenciosa", *Sociológica*, Num. 57, Año XX, México, UAM-Azcapotzalco, enero-abril, 2005

Saavedra, Laura, "Entre la desocupación y la recuperación autogestiva...", op. cit. en *Los nuevos rostros de la marginalidad*, op. cit.

Sabel, Charles, "Historical Alternativas to Mass Productions", Cambridge U. Press, *Past and Present*, Num. 108, 1985

----- y H. C. Katz, "Industrial relations and industrial...", op. cit.

Salama, Pierre, "Pobreza, empleo e inflación en América Latina", Caracas, *Nueva Sociedad*, Num. 156, julio-agosto 1998

Salvia, Agustín y Fortunato Mallimaci, *Los nuevos rostros de la...*, op. cit.

Santillán, Carlos, "La unidad debe pasar al marco revolucionario", reportaje de Jorge Boccanera en Revista *Lote*, Num. 63, Venado Tuerto, Argentina, octubre 2002

Saraví, Gonzalo y Cristina Bayón, "Vulnerabilidad social en la..." en Katzman, Rubén y G. Wormald, op. cit.

Schatan, Jacobo, et al, (compiladores), *El sector informal en América Latina*, op. cit.

Schneider Mansilla, Iván y Rodrigo A. Conti, *Piqueteros. Una mirada histórica*, op. cit.

Schuster, Federico y Sebastián Pereyra, "La protesta social en la Argentina democrática: Balance y perspectivas de una forma de acción política", en Giarracca, Norma, *La protesta social...*, op. cit.

Senén González, Santiago y Fabián Bosoer, *El sindicalismo en tiempos...*, op. cit.

Seoane, José (compilador), *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-OSAL, 2004

Sidicaro, Ricardo, "El clientelismo es parte del sistema político", *Página 12*, Buenos Aires, 18 de octubre de 2005

Sin Patrón, Buenos Aires, La Vaca Editora, 2004

Sotelo, Adrián y Guadalupe Acevedo, *Reestructuración económica y desarrollo...*, op. cit.

Streeck, W., et al, (editores), *New technology and industrial relations*, Oxford Basic Blackwell, 1988

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra, *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, op. cit.

----- y Danilo Martuccelli, *La plaza vacía*, op. cit.

----- "Relaciones peligrosas. Sobre clases medias, gobierno peronista y movimientos piqueteros", en Revista *El Rodaballo*, op. cit.

----- "Organizaciones de trabajadores desocupados: El modelo General Mosconi", en González Bombal, Inés (comp.), op. cit.

Tarrow, Sidney, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza Editorial, 1997

Tavera Fenollosa, Ligia, "Movimientos sociales", en Baca, Laura, et al, (comps.), *Léxico de la Política*, op. cit.

Tenti Fanfani, Emilio, "Cuestiones de exclusión social y política", en Minujin, Alberto (Editor), *Desigualdad y exclusión*, Buenos Aires, UNICEF-Losada, 1996

Tilly, Charles, "Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas", en *Sociológica*, Num. 28, op. cit.

Tironi, Eugenio, "Pobladores en Chile: protesta y organización", en J. Schatan, et al, (compiladores), *El Sector Informal en...*, op. cit.

Tokman, Víctor, "Panorama del empleo en América Latina" en Lindenboim, Javier (comp.), *El desafío del empleo...*, op. cit.

----- y Guillermo O'Donnell, *Pobreza y desigualdad en...*, op. cit.

Torrado, Susana, "Argentina tiene alto porcentaje de jóvenes sin estudio ni trabajo", La Plata, diario *Hoy*, www.diariohoy.net, 8 de octubre de 2003

Torre, Juan Carlos, "Las reformas de mercado y el sindicalismo en la encrucijada", "Introducción", en Senén González, Santiago y Fabián Bosoer, *El sindicalismo en...*, op. cit.

Torres, Pablo, *Votos, chapas y fideos. Clientelismo político y ayuda social*, La Plata, Ediciones La Campana, 2002

Touraine, Alain, *Producción de la Sociedad*, México, IFAL-IIS-UNAM, 1995

----- *¿Podremos vivir juntos?*, México, F.C.E., 1997

Treviño, Ana Helena, *Participación y organización en los movimientos sociales. Movilización y demanda social frente a los bienes y servicios públicos en las ciudades medias de México y del Brasil*, (Tesis Doctoral), FLACSO-Sede Brasil, junio de 1996

Urondo, Francisco, *Los pasos previos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999

Vales, Laura, *Página 12*, Buenos Aires, 31 de octubre de 2003; 4 de noviembre de 2003; 7 de noviembre de 2003; 11 de febrero de 2004; 14 de junio de 2004

Viglicca, Olga, "Triunfo de las obreras sin patrón, la expropiación de la fábrica Brukman", Suplemento "Triple Jornada", *La Jornada*, México, 1 de diciembre de 2003

Vilas, Carlos (comp.), *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, México, Conaculta, 1995

----- "Deterioro laboral y exclusión social: La otra cara del crecimiento", en Cieza, Daniel, (comp.), *La encrucijada del desempleo ante...*, op. cit.

----- "Actores, sujetos, movimientos: ¿Donde quedaron las clases?", en *Sociológica*, Num. 28, op. cit.

Wachendorfer, Achim, et al, (coordinadores), *Sindicalismo y globalización. La dolorosa inserción en un mundo incierto*, op. cit.

Young, Gerardo, et al, "Piqueteros", *Clarín*, op. cit.

Zibechi, Raúl, *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*, La Plata, Letra Libre, 2003